C O R T E S**DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 200

celebrada el martes, 24 de noviembre de 1981

ORDEN DEL DIA (continuación):**Dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982 («Boletín Oficial de las Cortes Generales», número 213, Serie A).****(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 201, de 25 de noviembre de 1981.)****SUMARIO***Se reanuda la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.**Presupuestos Generales del Estado para 1982 (continuación)**Se prosigue el orden del día.**El señor Presidente ruega a los señores diputados que han de hacer uso de la palabra, que se ajusten al tiempo de cada intervención, que será de quince minutos.*

Página

Sección veinte 11803 .*El señor Silva Cienfuegos-Jovellanos defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. A continuación, el señor Montserrat i Solé, defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. En turno en contra de las enmiendas, usa de la palabra el señor Martín Oviedo. Seguidamente interviene el señor Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné).**En turno de rectificación, intervienen de nuevo los señores Silva Cienfuegos-Jovellanos y*

Montserrat i Solé. A continuación usa de la palabra, nuevamente, el señor Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné).

Sometida a votación, fue rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista por 15 votos favorables, 155 negativos y 101 abstenciones.

Fueron rechazadas las enmiendas de los Grupos Socialista del Congreso y Socialistas Vascos, por 118 votos favorables y 155 negativos.

En explicación de voto, intervienen el señor Silva Cienfuegos-Jovellanos y el señor Montserrat i Solé. A continuación lo hace de nuevo el señor Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné).

Página

Sección veintiuna 11817

El señor Colino Salamanca defiende las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialistas Vascos. En turno en contra, interviene el señor De la Torre Prados. A continuación usa de la palabra el señor Ministro de Agricultura y Pesca (Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin). En turno de rectificación, usan de nuevo de la palabra el señor Colino Salamanca y el señor Ministro de Agricultura y Pesca (Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin).

Sometidas a votación, fueron rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialista Vasco, por 119 votos favorables, 164 negativos y cinco abstenciones.

Página

Sección veintidós 11830

El señor Montserrat i Solé defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. En turno en contra, usa de la palabra el señor Egea Ibáñez. En turno de rectificación, intervienen de nuevo el señor Montserrat i Solé y el señor Egea Ibáñez.

Sometida a votación, fue rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, por 119 votos favorables, 166 negativos y cuatro abstenciones.

En explicación de voto, usa de la palabra el señor Barón Crespo.

Página

Sección veinticuatro 11837

El señor Bofill Abeilhe defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor Riera i Mercader defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. En contra de las enmiendas, usa de la palabra el señor Yebra Martul-Ortega. En turno de rectificación, intervienen de nuevo el señor Bofill Abeilhe y el señor Riera i Mercader. A continuación lo hace el señor Ministro de Cultura (Cavero Lataillade). Seguidamente intervienen el señor Bofill Abeilhe y el señor Riera i Mercader.

Sometidas a votación, fueron rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialistas del Congreso y Comunista, por 127 votos favorables, 156 negativos y cuatro abstenciones.

Página

Sección veinticinco 11849

El señor Montserrat i Solé defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. En turno en contra, usa de la palabra el señor Figuerola Cerdán.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, por 26 votos favorables, 163 negativos y 98 abstenciones.

A continuación fue rechazada, asimismo, la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto a la sección treinta y dos, por 23 votos favorables, 162 negativos y 102 abstenciones.

Página

Sección treinta y tres 11852

El señor Arredonda Crecente defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. A continuación, el señor Gasoliba Bohm defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana. Seguidamente, el señor Montserrat i Solé defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. A continuación interviene el señor Elorriaga Zarandona, en defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Seguidamente interviene el señor Bandrés Molet, que defiende la enmienda del Grupo Mixto. En turno en contra

de las enmiendas que han sido defendidas, usa de la palabra el señor Bravo de Laguna Bermúdez. De nuevo usan de la palabra los señores Arredonda Crecente, Gasoliba i Bohm, Montserrat i Solé, Elorriaga Zarandona, Banderés Molet y Bravo de Laguna Bermúdez.

Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Andalucista, Minoría Catalana, Comunista, Vasco (PNV) y Mixto, por 40 votos favorables, 156 negativos y 106 abstenciones.

Para explicación de voto, intervienen los señores Guerra González, Gasoliba i Bohm, Rodríguez Alcaide y Arredonda Crecente. Para alusiones usan de la palabra el señor González Márquez y el señor Ministro de Hacienda (García Añoveros).

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

Página

Sección treinta y cuatro 11877

El señor Tamames Gómez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Almunia Amann defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. El señor Fernández Inganzo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. En contra de las enmiendas defendidas, interviene el señor Garí Mir. En turno de rectificación, intervienen de nuevo los señores Tamames Gómez, Almunia Amann, Fernández Inganzo y Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné). Nuevamente intervienen el señor Tamames Gómez, el señor Almunia Amann, el señor Fernández Inganzo y el señor Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné).

Sometidas a votación, fueron rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista del Congreso y Comunista, por 121 votos favorables, 169 negativos y cinco abstenciones.

Página

Presupuesto-resumen de la Seguridad Social 11900

El señor De Vicente Martín defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. A continuación defiende la enmienda

del Grupo Parlamentario Comunista el señor Bono Martínez (don Emérito). Seguidamente interviene el señor Elorriaga Zarandona, quien defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor Presidente levantó la sesión, informando a la Cámara que el Pleno se reunirá mañana, a las once, rogando puntualidad.

Se suspende la sesión.

Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Se reanuda la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1982. (Continuación).

El señor PRESIDENTE: Proseguimos el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1982, y lo reanudamos con la tramitación de las enmiendas que impugnan globalmente las secciones el estado del gasto.

Ruego a los intervinientes que se ajusten a los tiempos. En este trámite, el tiempo de cada intervención es de quince minutos. La Presidencia colocará estrictamente el reloj. Tengan presente que la luz amarilla se enciende cuando falta un minuto y medio; la luz roja, cuando ha concluido el tiempo, y el encendido de la luz roja implica el primer aviso de la Presidencia a los efectos reglamentarios, puesto que tras un segundo aviso, la Presidencia puede retirar la palabra. Ruego a todos que se ajusten a los tiempos, puesto que nos queda mucho debate de la Ley.

Sección 20, Ministerio de Industria y Energía. Sección 20
Enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialistas Vascos.

Tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Señor Presidente, señoras y señores diputados, la economía española y la economía de todos los países desarrollados y en vías de desarrollo se debate en los últimos años en el interior de una profunda crisis industrial. Crisis industrial cuya naturaleza viene definida por la concurrencia básicamente de dos grandes causas: la primera, radi-

cante en una crisis de abastecimiento o de modificación de precios de la energía, una crisis que algunos denominan crisis ecológica, en la medida en que, en última instancia, implica la incapacidad de los recursos naturales para resistir la presión de la civilización industrial.

En segundo lugar, una crisis no menos profunda de cambio tecnológico, de modificación del qué y del cómo de la producción industrial, crisis que también podemos definir como la de la transición de una economía basada en el petróleo y otra futura que utilizará la energía solar, la transición entre un medio de transporte clásico, como es el automóvil, y otro mucho más potente como son las telecomunicaciones, entre una industria electromecánica y otra electrónica, entre la química y la bioquímica, etcétera. Crisis de cambio tecnológico y crisis de modificación del aprovisionamiento energético en cuanto a posibilidades y recursos de este aprovisionamiento que están imponiendo en todos los aparatos industriales de los países desarrollados una profunda modificación en el qué y en el cómo de la producción. Es decir, que obliga a producir bienes distintos y a producirlos de manera distinta,

La consecuencia es, como digo, una necesaria reorganización de los recursos en el sector industrial. Pues bien, si esta es la situación, habría que decir que la respuesta que nuestro país ha recibido, el impacto de este conjunto de causas cuya trama conjunta denominamos crisis industrial, ha sido tardía, ha sido parcial y ha sido insuficiente. Ha sido tardía porque hasta hace poco más de un año no se ha puesto en marcha el mecanismo de ajuste en relación con los sectores en crisis; llega, por tanto, con cinco años de retraso. Ha sido parcial porque hasta ahora ese ajuste se ha limitado a un ajuste negativo, es decir, al de los sectores en crisis pero sin integrar también una política progresiva industrial, una política de avance hacia nuevos sectores de desarrollo industrial. Y ha sido insuficiente porque, incluso en esa parcialidad del ajuste negativo sobre sectores en crisis, no está claro que se vaya a resolver con una verdadera reestructuración industrial, sino que probablemente, si las cosas siguen como hasta ahora, se agote en una reestructuración en los aspectos de saneamiento financiero, en el ajuste de plantillas, etcétera.

Efectivamente, el ajuste negativo de la crisis industrial se está haciendo a través de cuatro o cinco mecanismos: de un ajuste de empleo, reduc-

ción de las plantillas; de un ajuste de costes, minoración de la parte proporcional del coste salarial y del coste financiero en la estructura de costes de las empresas y de los sectores; de un ajuste de capacidades, adecuación de la capacidad de producción de las empresas a la nueva situación de la demanda; de un ajuste de dimensión, búsqueda a través de procesos de integración y fusión de nuevas dimensiones empresariales donde puedan localizarse las economías de escala.

Sucede que este ajuste negativo de la crisis ha implicado, desde el momento en que empezó a hacerse de manera salvaje en el año 1975, de manera no organizada la amortización entre 1975 y 1980 de aproximadamente medio millón de puestos de trabajo. Una encuesta de opinión del INEM de 1979 entre empresarios de 17 sectores daba como consecuencia que, en conjunto, estos empresarios consideraban que existía un exceso de plantilla en esos sectores, que suponía en ese año aproximadamente 150,000 puestos de trabajo.

Pues bien, el balance de situación que pueda hacerse de la reestructuración de los sectores en crisis hasta este momento, tanto de los planes ya acordados como de los que estén en marcha de negociación o los que estén en proyecto, implicará una pérdida de puestos de trabajo que en cada uno de los sectores probablemente signifique el doble de lo que comportaban aquellas previsiones de los empresarios.

Lo que quiero significar es que el ajuste negativo de la crisis industrial está siendo extraordinariamente costoso en términos de empleo, y lo que es más grave, o tan grave por lo menos, será si se sigue haciendo como se está haciendo hasta ahora extraordinariamente costoso en términos de estrategia industrial. En términos de empleo, porque ese ajuste será difícil de soportar si no aparecen puestos de trabajo alternativos en nuevos sectores; y en términos de estrategia industrial, porque si se limita la reconversión al aparato industrial existente quedaremos fuera del perfil industrial del futuro porque la crisis industrial significa la crisis de ese aparato industrial existente y expresa en última instancia esa crisis industrial cuyo eje de la dinámica industrial se está desplazando hacia otros sectores distintos de los que configuran el actual aparato industrial en nuestro país.

Si esa es la situación, cabría preguntarse qué es lo que se puede hacer desde el Estado. Porque es-

tamos discutiendo una Ley de Presupuestos, en última instancia, el instrumental operativo de intervención que desde el Estado se puede poner en marcha en relación con el sector industrial. Cabría hacer tres cosas. La primera, no hacer nada, confiar en que el mercado resolverá las cosas y permitirá orientar las inversiones y la dinámica empresarial hacia aquellos sectores que configurarán ese perfil industrial.

Esta es una hipótesis absolutamente idealista, de idealismo de mercado, porque lo cierto es que esos sectores están ocupados minoritariamente por empresas transcaccionales frente a las que es muy difícil luchar desde una iniciativa empresarial naciente y, por otra parte, porque el «gap» tecnológico que sufre nuestro país, consecuencia de que entre 1960 y 1970 ha sido el país donde se ha invertido menos en investigación, entre un 0,2 y un 0,3 por ciento del producto interior bruto, es imposible que sea remontado con la simple iniciativa privada sin una cobertura importante del sector público.

La segunda tentación sería intentar hacerlo todo; es decir, una iniciativa pública poderosa que penetre en toda la actividad del sector industrial y que llene el vacío que en estos momentos existe. Habría que decir que ésta sería también una posición idealista en la medida en que no hay todavía un sector público suficientemente eficiente como para que podamos confiar en él la salida positiva de la crisis industrial.

Y la tercera posibilidad es hacer algo que yo definiría como la de proporcionar coberturas y entablar colaboraciones entre el sector público y el sector privado para dinamizar y poner en marcha nuevos sectores industriales, con el correctivo dispositivo de controles respecto de esas ayudas que se dirijan hacia el sector privado de la economía.

La tipología de acciones que quepa aplicar, obviamente no puede conducir a un nuevo proteccionismo; si estamos hablando de los sectores de futuro se supone que estamos hablando de sectores que pueden caminar por sí mismo, que no van a necesitar una cobertura perdurable y rigurosa que les proteja de los embates de la coyuntura económica, sino sencillamente determinadas ayudas de iniciación que les permitan despegar en el nacimiento hacia la creación de los nuevos sectores industriales y, fundamentalmente, actuando sobre aquellas mayores dificultades que en estos momentos existen, que son la dificultad

de financiación y la dificultad de innovación tecnológica.

La dificultad de financiación, porque el sistema financiero en nuestro país no está pensado por sí mismo, no entra en su lógica el prestar dinero con garantía de proyecto, el aventurar recursos en penetraciones industriales hacia sectores donde hay unas economías de incertidumbre muy grandes, y será impensable que se produzca esa apuesta del sector privado financiero si no existe una cobertura del Estado hacia sectores donde hay unas incertidumbres muy grandes.

En cuanto a tecnología, porque, como decía antes, este «gap» tecnológico no puede ser remontado por la propia iniciativa privada sin apoyo del Estado. Este tipo de acciones son las que se proponen en la primera parte de nuestra enmienda, que es la que se refiere al desarrollo de sectores de futuro, donde se propone una partida de 5.000 millones de pesetas para financiar a través de subvenciones correspondientes a las empresas con destino a inmovilizados materiales, programas de investigación y desarrollo, innovación tecnológica en planes de desarrollo de nuevos sectores industriales y se conecta con la enmienda, a la que acabo de dar lectura, al artículo 14 del proyecto, que propone que se fije en 15.000 millones de pesetas el límite máximo contra el que el Tesoro responderá con los avalaes que concedan en 1982 las sociedades de crédito en garantía de financiación de planes de desarrollo de nuevos sectores industriales. En definitiva, proporcionar financiación, es decir, garantía de financiación desde el Estado y proporcionar apoyo tecnológico a través de subvenciones directas a las empresas que permitan poner en marcha, coordinadamente con la Administración, programas de innovación tecnológica y apoyar básicamente a través de estos dispositivos esa entrada del aparato industrial español en nuevos sectores.

El objetivo, en definitiva, de estas enmiendas, complementadas con otro tipo de acciones que no requieren tener reflejo en los presupuestos, sería formular desde el sector público programas de desarrollo de nuevos sectores industriales en cuyo marco se avala la financiación de proyectos, se otorga una subvención para programas de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que proporcione el desarrollo de instituciones como, por ejemplo, el Cedeti, y se coordine el plan con una política de compras por parte del

Estado, que es el principal cliente de muchos de los denominados sectores de futuro, y que tiene, en general, una demanda adicional y todo eso permita que se integre en este planteamiento, iniciativa del sector público empresarial, a través de la participación de empresas de dicho sector público.

El señor Presidente del Gobierno habló en su discurso inaugural al referirse a reconversión industrial de apostar por el futuro, pero las apuestas de verdad no se hacen con palabras, se hacen con dinero. El asunto es grave, porque si no se hace de verdad, con dinero y con imaginación, esa apuesta industrial por el futuro, habría que decir que España no tendrá futuro como nación industrial.

El resto de la enmienda, que sumariamente voy a explicar, propone la adición de otras partidas, de las cuales la primera es un incremento de mil millones de pesetas en la subvención la hulla coquizable. En estos momentos hay dos precios para el carbón: un precio para la hulla con destino térmico, para ser quemada en las centrales térmicas, y otro precio para la hulla que, a través de la transformación en coque, será quemada en las siderúrgicas.

El primero tiene un precio superior al segundo, que es un precio de referencia. Como la tentación de los productores mineros sería la de orientar sus ventas hacia aquella demanda que le proporciona un mayor precio, lógicamente, todos los productores mineros estarían tentados de vender el carbón a las centrales térmicas. Como, no obstante, esto no es concordante con la estrategia que es necesaria en el sector energético, es decir, una estrategia de menor dependencia del aprovisionamiento más difícil que es el carbón siderúrgico, lo que se hace es que la Administración prima la diferencia entre el carbón térmico y el carbón siderúrgico.

Así se viene haciendo en estos años. Lo que ocurre es que en este Presupuesto de 1982 respecto del de 1981, se produce una minoración no compensada totalmente por el incremento del precio de referencia, que permite la fijación del precio del carbón siderúrgico. Esto traerá como consecuencia que muchas de las empresas productoras del carbón ya tienen comprometidos sus contratos de aprovisionamiento con la siderurgia, y estas empresas privadas y públicas habrán de incurrir en pérdidas, porque la compensación es insuficiente para encontrar el nivel de referencia entre el carbón térmico y el carbón siderúrgico, y

lo que también tiene gravedad es que se estará incumpliendo, si no se acepta esta enmienda, el reciente plan de reconversión de Hunosa, que puede garantizar la supervivencia de la empresa y la minoración de las pérdidas que han venido siendo endémicas hasta ahora.

Otra partida que figura en nuestra enmienda es un incremento de 1.500 millones de pesetas de subvención al Centro de Estudios de la Energía para la realización de planes de calefacción solar en edificios oficiales e instalaciones de energía eólica, y finalmente una partida de 1.000 millones de pesetas para incremento de las inversiones del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa. Este presupuesto de inversiones, en los Presupuestos que se nos ofrecen, alcanza únicamente la ridícula cifra de 499 millones de pesetas. Nosotros consideramos que este apoyo especial a las pequeñas y medianas empresas está sobradamente justificado, porque, por su agilidad y flexibilidad y su desburocratización, así como por su capacidad de adaptación, están en mejores condiciones si se les proporciona cobertura financiera, tecnológica y de servicios, para resistir el proceso de cambio e incluso para impulsar el cambio mismo, sin olvidar que las PYME constituyen en estos momentos la trama más densa del tejido industrial, porque un 77 por ciento se sitúa en empresas de menos de 500 trabajadores y un 62 por ciento, en empresas de menos de 200 trabajadores, añadiendo que, pese a la espectacularidad de ciertos episodios, las empresas entre 500 y 5.000 trabajadores únicamente representan el 18 por ciento del empleo del sector industrial.

En definitiva, a través de esos cuatro dispositivos heterogéneos, de los que debo poner énfasis especial en el primero, que tienen relación con la enmienda al artículo 14 de la Ley de Presupuestos del Estado, se incidirá, si se acepta, en la extensión del tejido industrial español hacia nuevos sectores en dirección a los que se ha trasladado la dinámica del desarrollo industrial.

Lo que refleja esta enmienda es una apuesta real y cifrada por el futuro, y concluyo solicitando a SS. SS. que hagan suya esta apuesta y que voten favorablemente nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONSERRAT I SOLE: Señor Presidente, señoras y señores diputados, nuestra en-

mienda a la totalidad de la sección 20 contempla, por un lado, la insuficiencia de recursos con que cuenta el Ministerio de Industria y Energía para afrontar el conjunto de sus tareas, pero fundamentalmente tiene que ver con el aspecto cualitativo de la política industrial que se realiza con estos recursos que consideramos escasos.

Nosotros creemos que en estos momentos, la crisis económica del país exige una serie de medidas de política asistencial que pasan fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo y que están contempladas en gran parte en los presupuestos del Ministerio de Trabajo, pero hay un elemento fundamental, el de la política activa en cuanto a la crisis, que tiene que articularse en gran parte a través del Ministerio de Industria y Energía, y esto es lo que nosotros encontramos a faltar en la actuación de Ministerio tal como viene reflejada en los presupuestos. No existe, a nuestro entender, un plan de reestructuración del sector industrial español que contemple no solamente los necesarios ajustes de los sectores en dificultades, sino también las políticas activas con respecto a los sectores que gozan de una cierta expansión, los sectores que deben apoyarse de cara a que la política de reconversión y de industrialización tienda, como mínimo, a mantener el empleo industrial en nuestro país.

Esta necesidad de disponer de un plan de reindustrialización nosotros lo hemos mantenido ya antes de que apareciera publicado el real decreto-ley de reconversión industrial presentando una proposición no de ley sobre política de reindustrialización; incluso antes en el propio debate de los Presupuestos para 1981, manifestamos nosotros ya la grave situación en que se encuentra el sector industrial español con el grave peligro de transformar nuestra economía industrial en un inmenso mercado de la chapuza, en una situación en la que lo provisional, lo marginal, lo paralegal se transforme en la tónica de la actuación en el sector industrial, lo cual, necesariamente, tiene consecuencias en otros campos de la actividad, en el campo incluso de la propia actitud política de la población ante la democracia. Nosotros creemos que afrontar todos estos problemas exige la existencia de una política de reindustrialización.

Con ello no queremos referirnos a una política arbitrista en el sentido que podría ser hoy en día una política de sectores preferentes en la política

tradicional de sectores de interés preferente, sino la necesidad de articular nuestro futuro.

En el debate inicial de este mismo Presupuesto en una de las intervenciones del portavoz del partido del Gobierno, e incluso de alguno de los Ministros, se dijo que el futuro se hace, no se ve. Nosotros, efectivamente, compartimos esta visión. Creemos que el futuro se hace y que en política industrial es absolutamente imprescindible construir ese futuro a través de una política sólida, clara, neta y definitiva, no estrictamente a través de una política de reconversión industrial que tal como está enfocada además puede tender a transformar nuestra tabla de «input-output» industrial en un queso de Gruyère, en lugar de ser un conjunto de sectores interrelacionados y articulados.

Es evidente que éste es un tema complejo, pero hay que partir de una serie de perspectivas que creemos que no están incorporadas en los planteamientos que hace el Ministerio.

Uno de ellos es partir de la base de que no existen sectores que deban cerrarse, sino que hay técnicas obsoletas y que un país de la importancia industrial del nuestro no puede permitirse la desaparición de un solo sector industrial importante. Hay que modernizar, hay que transformar, hay que reconvertir, efectivamente, pero no podemos prescindir de ninguna de las piezas importantes de los sectores que configuran nuestra actividad industrial.

Hay que tener en cuenta el Mercado Común Europeo para hacer una política realista de adaptación positiva a la situación de la nueva dirección internacional del trabajo que va, en gran parte, orientada al Mercado Común Europeo. Esta política de adaptación no puede ser simplemente una política pasiva de seguimiento de toda una serie de decisiones que pueda adoptar en un momento determinado la Comunidad y que están entendidas en el contexto de la Comunidad. Es decir, que nosotros tenemos que tener presente el Plan de Avignon, debemos tener presente el conjunto de la política industrial de la Comunidad, pero esto no nos tiene que hacer simples sujetos pasivos de esta política industrial.

Tenemos que desarrollar también una política que, al lado de los temas sectoriales, tenga en cuenta los temas regionales y comarcales; que tenga en cuenta los problemas distintos que se crean en la industria, según el grado de implantación que tengan en una región o en otra; tenemos que tener en cuenta los problemas distintos de las

grandes empresas, de las pequeñas y medianas empresas que también configuran políticas industriales diferentes; y tener presente que una gran parte de nuestra política industrial debe orientarse hacia las empresas del tamaño medio y pequeño, en una manera distinta a lo que puede deducirse del real decreto-ley de reconversión industrial que, aparentemente, está mucho mejor adaptada para solucionar los problemas de un sector con cuatro, cinco o seis empresas, pero que es mucho más complejo porque debe llegarse a acuerdos, debe llegarse a una situación mucho más elaborado cuando se trata de reconvertir o reorientar actividades en las que hay miles de empresas.

Este es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales nosotros construimos nuestra posición en contra del presupuesto del Ministerio de Industria y Energía. Y en las enmiendas parciales planteamos la necesidad de aumentar el desarrollo tecnológico de nuestro país, reforzando el Cedeti y señalamos también el desorden que tiene la investigación industrial en nuestro país. Hay investigación industrial dependiente de múltiples organismos, pero, como mínimo, a nivel de los Presupuestos por programas, debería presentarse el programa de investigación industrial que tiene el país, puesto que, en estos momentos, tenemos investigación industrial vía Dirección General de Informática y Electrónica, vía Dirección General de Innovación y Tecnología, vía Cedeti, vía aportación que hace el Ministerio de Industria a la financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la investigación que puede hacer propiamente el Instituto Nacional de Industria, la investigación que puede hacer el Instituto Nacional de Hidrocarburos, y luego todos los esquemas de investigación dependientes del Ministerio de Educación y Universidades.

No se trata de fundir en un solo organismo gestor la política de investigación y renovación tecnológica, sino que, como mínimo, a nivel de un programa o conjunto de programas, debería presentarse articuladamente cuál es la política industrial que vamos a desarrollar en el campo tecnológico. Igualmente una política industrial de renovación tecnológica a través del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Es decir, que esto, teniendo en cuenta el valor absolutamente estratégico de la innovación tecnológica, necesitaría una visión integral.

Con respecto a otras de las vertientes impor-

tantes del Ministerio, que es el tema energético, a nuestro entender no hay un apoyo suficiente al desarrollo de nuevas fuentes energéticas, excepto en el caso de la energía nuclear, que tiene por lema que es de dudosa rentabilidad económica y social, y sobre la que en estos momentos estamos viendo el tema de Almaraz y todos los problemas alrededor de la protección civil en Tarragona; tenemos toda una serie de problemas importantes que debemos concretar en el campo de la energía nuclear.

Esto yo creo que, fundamentalmente, resume nuestros criterios de oposición a la política industrial expresada en los Presupuestos; que la actuación de los sectores industriales debe articularse en un plan de reindustrialización; que la tecnología requiere mayor atención y coordinación; que no existe un planteamiento al tema energético coherente, etcétera. Aquí me voy a referir a una cuestión concreta, que es un problema de coherencia del propio Gobierno, y es que, a mi entender, la tasa de crecimiento que se está utilizando en estos momentos, de cara a la revisión del Plan Energético Nacional —en todo caso se me puede desmentir—, no es la tasa del 3 por ciento, que es la que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado, sino que se está utilizando una tasa más realista, del orden del 1,8 por ciento, que estaría en contradicción. Esto ha aparecido reflejado en la prensa y yo querría aquí tener conocimiento de cuál es, de verdad, la tasa que cree el Gobierno, si es el 3 ó el 1,8, si estas dos tasas son compatibles y de qué manera.

No hay un apoyo suficiente a las nuevas fuentes en el plano operativo que, en materia alimentaria, debe presentarse por separado la política de la industria alimentaria para reunirla en el sector FAO tal como se acordó aquí; y una serie de enmiendas y opiniones concretas con respecto a los distintos programas que integran el Ministerio y a los que voy a referirme.

Por ejemplo, creo que sería necesario aumentar los recursos para la política antigrisú de seguridad minera; que los centros de ensayo de la industria eléctrica debían ser financiados vía sector privado y no a través del sector público; que habría que racionalizar el Cedeti y aumentar sus recursos; que habría que significar en un solo programa la presentación de los esquemas de energía y renovación tecnológica; que habría que revisar, por tanto, los temas del PEN; que habría que introducir algunas financiaciones específicas relaciona-

das con el medio ambiente, que tampoco aparecen resumidas todas en el Ministerio de Industria, sino en varios Ministerios. Por ejemplo, a través de las propias comparecencias en la Comisión, ha aparecido el tema de Teruel y de la minería a cielo abierto, y todo esto debería reflejarse de una manera más adecuada a través de los Presupuestos del Estado.

Creo que estos son, fundamentalmente, nuestros criterios de oposición a la política del Ministerio de Industria y Energía, que no es una política activa sino que es una política de adaptación pasiva a las consecuencias de la crisis.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de las enmiendas que han sido defendidas, tiene la palabra el señor Martín Oviedo.

El señor MARTIN OVIEDO: Señor Presidente, señoras y señores diputados, a esta sección 20, Ministerio de Industria y Energía del proyecto de Presupuestos, se han presentado tres enmiendas a la totalidad que acaban de ser defendidas por parte de los Grupos Socialista y Comunista. Igualmente quiero señalar a SS. SS. que se han presentado cinco enmiendas parciales a puntos concretos, algunos de los cuales han sido aludidos lateralmente aquí y serán objeto de consideración en su momento.

Para nosotros, las grandes líneas de la política industrial y de la política energética que reflejan las cifras contenidas en este proyecto de Presupuestos, resultan satisfactorias, resultan realistas, apuestan por el futuro —como también aquí se ha dicho— y, en definitiva, nos llevan a desechar las enmiendas a la totalidad a las que me estoy refiriendo en este momento.

Habría que señalar, en primer término, que con 142.000 millones de pesetas en números redondos, a los que habría que añadir otros 33.000 millones de reconversión industrial, la política industrial y la política energética en conjunto, que es el gran contenido de esta sección 20 del Presupuesto, tiene una dotación importante, una dotación equilibrada y una dotación siempre dentro de lo posible y de la escasez de los recursos. Simplemente quiero señalar cómo el Ministerio de Industria y Energía, a través de estas partidas presupuestarias, figura en quinto lugar dentro del volumen de recursos totales de Ministerios y, lo que es más importante, en cuanto a gastos de

inversión; es decir, inversiones reales más transferencias de capital, figura en segundo lugar con un aumento del 37,7 por ciento, muy superior por tanto al incremento medio o global del presupuesto de gastos e inversiones, que es del 22,8 por ciento.

Creo que estas someras cifras siempre sustanciosas, en todo caso cifras significativas, demuestran el esfuerzo que el Gobierno ha puesto en estimular debidamente y en llevar a cabo también, a través del sector público, una política industrial y una política energética adecuada a los tiempos de crisis en que vivimos.

Frente a esta opción, como señalaba, se han presentado unas enmiendas a la totalidad que habría que distinguir, y se pueden distinguir, por la propia defensa que ha sido hecha en cuanto a su contenido y objetivos. Dicho sumariamente, las enmiendas de los Grupos Socialistas, defendidas conjuntamente, más que enmiendas a la totalidad en realidad son enmiendas que proponen aumentar una serie de recursos a los que luego me referiré, en tanto que las enmiendas del Grupo Comunista lo que plantean es una serie de consideraciones críticas, expuestas anteriormente por el diputado que ha llevado la representación del grupo, y sobre las que también haré una consideración breve.

En segundo término, referirme a las enmiendas de los Grupos Socialista del Congreso y Socialista Vasco que, como se ha dicho en la defensa, proponen un incremento de 8.751 millones de pesetas destinado a cuatro partidas.

En primer lugar, la partida más importante, la partida más significativa, es un aumento de las dotaciones para investigación y desarrollo, por un importe de 5.000 millones de pesetas. Evidentemente, podríamos estar discutiendo algo que no es en sí discutible, que es la necesidad de estimular la investigación y el desarrollo, tanto la realización por el propio sector público; como estimular o ayudar a la investigación y el desarrollo por parte del sector privado. Digo que esto no me parece discutible, porque todos estamos conformes en la prioridad y en la importancia de este tema, lo que tenemos que hacer es, una vez más, encajarlo dentro del conjunto de prioridades, dentro del conjunto de problemas, dentro del conjunto de tareas a las que el presupuesto debe colaborar. Y en ese sentido yo quería señalar ante la Cámara tres puntos que constituyen pruebas, a mi modo de ver, patentes y suficientes de la im-

portancia que al estímulo de la investigación y el desarrollo da la propia acción del Gobierno en su conjunto.

En primer lugar, y está en el propio proyecto de Ley de Presupuestos, la innovación que supone el aumento, más exactamente, que supone el artículo 33 de este proyecto cuando aumenta al 15 por ciento las desgravaciones en el Impuesto de Sociedades por las inversiones que se realicen en materia de investigación y desarrollo. Primer punto.

En segundo lugar, el hecho de que uno de los instrumentos que ha sido citado en las intervenciones anteriores, el Cedeti, organismo autónomo del Ministerio de Industria, tiene un aumento muy sustancial en su propio presupuesto y en sus recursos, exactamente del 58,9 por ciento de los recursos con referencia al año 1981, lo cual es también una prueba del interés y del estímulo que a estas materias de investigación y desarrollo se da en el presupuesto.

Y, por último, quisiera añadir, fuera de la acción presupuestaria, pero englobado en la acción del Gobierno, el hecho, que recordarán bien SS. SS., de cómo hace pocos días ha sido suscrito entre el Gobierno y los grupos empresariales un convenio de asistencia en materia de investigación y desarrollo, que implica unas subvenciones por parte del Gobierno de un montante global de 1.600 millones de pesetas.

Creo que estos datos demuestran suficientemente, a mi modo de ver, que el tema de la investigación y el desarrollo tiene un tratamiento prioritario, tiene un tratamiento importante dentro del conjunto de la acción del Gobierno, y dentro del conjunto de recursos presupuestarios que nos ocupan con ocasión del debate de esta ley.

En tercer término, las enmiendas de los Grupos Socialistas plantean un aumento de la subvención de la hulla coquizable, en los términos que han sido expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, por un importe de 1.071 millones de pesetas. La razón fundamental que nos ha dado es la necesidad de compensar —lo cual es el principio, efectivamente, de una compensación que ya figura en el presupuesto— las diferencias de la hulla coquizable con respecto a la hulla con destino térmico, y en eso estamos, una vez más, conformes.

Lo que sucede —y así se razonó en Comisión, y así vuelvo a razonarlo ante el Pleno— es que los cálculos y las estimaciones, bastante apuradas,

bastante ciertas, dentro de la improbabilidad que siempre presentan unos precios internacionales, en estos momentos ofrece una compensación suficiente, a nuestro modo de ver, para mantener la dotación presupuestaria que, para estos fines, tiene previsto los presupuestos. De forma que no vemos que haya ningún problema, ningún peligro, como se ha apuntado aquí, de incumplimiento de plazos o programas de reconversión en Hunosa, por cualquier otra derivación de consecuencias negativas por el hecho de que no se aumente esta partida presupuestaria, cuya finalidad compartimos y entendemos, que apoyamos el año pasado, y si no recuerdo mal, en contra del criterio que el Grupo Socialista mantuvo entonces de que este sistema de subvenciones no fuera aplicado.

Por último, las enmiendas de los Grupos Socialistas plantean el incremento de otras dos partidas, también porque hay dotación presupuestaria, una vez más, de 1.500 millones destinados a la subvención de instalaciones de producción de nuevas energías, con destino, fundamentalmente, al Centro de Estudio de la Energía, y otros 1.000 millones con destino al Instituto de la Pequeña y Mediana Industria, para las subvenciones a los llamados «sectores industriales de futuro». Como digo, son partidas que también presupuestariamente están cubiertas, a nuestro modo de ver, suficientemente, que reconocemos, por supuesto, y compartimos el interés por la pequeña y mediana industria, el interés por la explotación y el avance de las nuevas energías, pero que nos parece que tiene una dotación suficiente, porque, una vez más, tenemos que encajar estas necesidades presupuestarias dentro de unos recursos insuficientes y dentro de un plan de prioridades que, quizá, se pueda perder un poco en estas discusiones parciales a las que estamos inevitablemente abocados por el propio procedimiento, pero, en todo caso, si se contempla en conjunto el presupuesto aparecen claras y distintas, aparecen ordenadas dentro, insisto una vez más, de las disponibilidades de los recursos.

Por esas razones entendemos que estas enmiendas que, insisto, no son tanto de totalidad como de incremento de unos determinados recursos, no nos permiten votar a favor de las mismas.

Con toda brevedad, en cuanto a la enmienda planteada por el Grupo Comunista, quisiera hacer notar a la Cámara que se basa en una serie de consideraciones que han sido expuestas aquí y que están reflejadas en el texto de las enmiendas,

en las cuales se propone una devolución y una reelaboración de este Presupuesto en base a una serie de consideraciones, y no voy a referirme aquí a las de reconversión industrial, no voy a referirme aquí tampoco a las del Instituto Nacional de Industria, aunque no han sido abordadas aquí explícitamente, sí están en el texto de la enmienda, y tendremos ocasión de hablar de ellas en la sección 34 y del propio Instituto Nacional de Industria. Pero cuanto se ha insistido aquí fundamentalmente en las razones de investigación y desarrollo, también me he referido a ellas anteriormente con ocasión de las enmiendas socialistas; y, finalmente, todas las consideraciones que se han hecho, fundamentalmente guiadas por el interés de una nueva reelaboración, no nos demuestran que haya ni una prioridad clara y sí, en definitiva, acentuar ciertos aspectos que están en estos momentos en la política presupuestaria y en la política industrial.

En definitiva, esta política que se instrumenta a base del presupuesto del Ministerio de Industria y Energía, nos parece que es altamente favorable, altamente positiva para el momento de crisis industrial y que, además, recoge y aprovecha algo que nos parece importante subrayar, que es la prioridad de la política energética y los éxitos que se han logrado en materia de política energética por la aplicación del Plan Energético Nacional. También tendremos ocasión de hablar en esta Cámara, en la Comisión de Industria y Energía, de este Plan Energético. Pero, en definitiva, sí hay que tener en cuenta que este presupuesto está montado sobre la base de los resultados y de la experiencia que ya dos años de elaboración y de cumplimiento del Plan Energético nos han dado en esta materia.

Por último, en materia de política industrial, vuelvo a insistir que en un momento de crisis y de prioridad de la acción del Estado, como ayuda dentro de la filosofía de la reconversión industrial, no puede centrarse en un elemento que es básico, sin duda, que es la acción presupuestaria y que está contemplado, sino que la política de reconversión industrial tiene que ser un conjunto de medidas para las cuales también el Gobierno ha tomado las propias disposiciones aprobando un decreto-ley, hoy en vigor, y que, no obstante, está siendo objeto de reconsideración por la Cámara.

Por todas estas razones, señorías, nosotros solicitamos, el Grupo Centrista solicita el voto en

contra de las enmiendas de totalidad que han sido defendidas y, por tanto, la aprobación de esta sección 20 del Ministerio de Industria y Energía.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Señor Presidente, señoras y señores diputados, quería completar la cumplida exposición del señor Martín Oviedo con algunos datos que, pienso, pueden ser de interés para los señores enmendantes.

Se centra sustancialmente la argumentación de las enmiendas en el hecho de que una política de reconversión en el momento actual, lo que puede estar es trazando una desindustrialización o una industrialización a la baja en nuestro país, y que no existe, por otra parte, un empeño o diseño tan claro o definido respecto a una política de nueva industrialización.

Quería, simplemente, referirme a seis datos concretos para conocimiento de los señores diputados. En primer lugar, esta política de nueva industrialización está sustancialmente centrada, en primer término, sobre las inversiones de los dos grandes programas de acción en materia industrial que en el momento presente se desarrollan: el Programa Energético Nacional y el mismo programa de reconversión industrial.

El Programa Energético Nacional, el PEN, contiene para el año 1982 una inversión global del orden de los 680.000 millones de pesetas, con un crecimiento en términos monetarios alrededor del 27 ó 28 por ciento respecto al expresado en el ejercicio de 1981, suponiendo ello un aumento considerable de la capacidad generadora de riqueza y dinamismo económico del Plan Energético y, en consecuencia, de influencias sobre determinados sectores industriales.

Los planes de reconversión entiendo que no solamente procede su lectura, la lectura de sus primeros objetivos, sino la lectura completa de los mismos. De la lectura completa de los mismos se deduce que no solamente se están realizando unas determinadas políticas de ajuste en materias de personal o de costes financieros, sino que se están realizando importantes reajustes, y el señor Silva se ha referido a algunos de ellos, en materias de capacidad y dimensión empresarial, por lo que respecta a distintos sectores. En inversión, concretamente, lo que supone es la realización de in-

versiones importantísimas en los sectores sometidos a reconversión.

No tenemos que engañarnos con el espejismo de que la nueva industrialización de España haya que hacerla exclusivamente sobre unos sectores nuevos, ni sobre la electrónica, ni sobre la informática. La industrialización de los países de gran industrialización, en el momento presente, se realiza en más del 90 por ciento sobre los grandes sectores básicos de la economía.

En este sentido, los planes de reconversión suponen: en el sector de la siderurgia integral, inversiones de 25.000 millones de pesetas en tecnología para el año 1981 y comienzo del 1982; inversiones de 130.000 millones de pesetas a determinar, de acuerdo con los estudios contratados ya por la Comisión; en el plan de reconversión textil, inversiones de 190.000 millones de pesetas al término de los seis años que comprende el período de la reconversión; en los electrodomésticos de la gama blanca, inversiones superiores a los 11.500 millones de pesetas; más de 13.000 en Hunosa, 4.500 en el sector del cinc, etcétera. Entonces, del conjunto de la acción de reconversión se está generando una capacidad de inversión muy superior a la de anteriores ejercicios.

Segundo dato. Por lo que respecta a la inversión pública, el crecimiento para el año 1982 entre el Instituto Nacional de Industria y el Instituto Nacional de Hidrocarburos es del orden del 29 por ciento, con un crecimiento del 80 por ciento en aquellos sectores como los bienes de equipo, la defensa, la electrónica, informática y alimentación, que consideramos sectores de punta o con capacidad de incremento de desarrollo en los próximos años.

En tercer lugar, la inversión privada se está incrementando con los apoyos financieros que el Estado concede no solamente por la vía directa del Presupuesto General del Estado, sino por la vía del Instituto de Crédito Oficial y de las apoyaturas específicas a las políticas de todos los polígonos, zonas, áreas, etcétera.

Por lo que respecta al Instituto de Crédito Oficial, el crecimiento del 15 por ciento aproximadamente para el año 1982 mantiene, en términos reales, la capacidad de concesión de créditos a largo plazo y al interés típico reducido del crédito oficial. Y por lo que respecta a la política de polos, las subvenciones existentes en el Ministerio de Obras Públicas, donde se encuentra la consig-

nación correspondiente, suponen un incremento del 44,9 por ciento respecto a la del año 1981.

En cuarto lugar, se ha referido el señor Silva a la política de pequeñas y medianas empresas, haciendo referencia a que solamente existían 499 millones de pesetas en el presupuesto. A esta cifra habría que sumar 163 millones de pesetas del capítulo IV del propio Instituto, con destino a acción frente a los empresarios, y además dos acciones sustanciales: una, el hecho de que, con cargo al Banco de Crédito Industrial, se están concediendo 30.000 millones de pesetas para pequeñas y medianas industrias, habiéndose agotado en estos dos últimos ejercicios los cupos correspondientes que se incrementan para el año 1982; otra segunda cosa muy importante, que se incrementan para el año 1982 prácticamente al cien por cien (de 8.000 a 15.000 millones de pesetas), las cantidades correspondientes al aval del Estado, al segundo aval a las sociedades de garantía recíproca, elemento de financiación importantísimo para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, en esta misma línea hay que recordar que las sociedades de desarrollo del Instituto Nacional de Industria incrementan del orden del 50 por ciento su capacidad para el año 1982, en el que entran además en funcionamiento las sociedades de Castilla y León, Castilla-la Mancha y otras.

Finalmente, se ha referido el diputado señor Montserrat al problema de las nuevas energías, tema en el que también el Partido Socialista solicita un aumento de las consignaciones correspondientes. Una lectura detenida del presupuesto nos demuestra que no solamente existen 1.300 millones en el Centro de Estudios de la Energía, sino una cantidad de hasta el orden de 10.000 millones de pesetas en nuevas energías, cantidades que se encuentran en los presupuestos del INIA, Adaro, INI, y los propios convenios correspondientes de las compañías eléctricas. Si a todo ello unimos el conjunto de acciones que se están realizando para el incremento de la capacidad tecnológica del Estado, a las cuales se ha referido el señor Martín Oviedo, y que se incrementan también con la propia capacidad de los convenios de colaboración que el propio Cedeti y el Estado directamente está realizando con empresas privadas al respecto, podremos deducir que existe clarísimamente un diseño industrial para nuestro desarrollo en estos años y que lo que en ningún caso cabe

decir seriamente es que la actuación del Gobierno es de pasividad frente a la crisis industrial.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Señor Presidente, señoras y señores diputados, la respuesta tanto del señor Martín Oviedo como la del señor Ministro sería adecuada a una afirmación mía en el sentido de que por parte del Ministerio de Industria y Energía no se había hecho absolutamente nada. Lo que ocurre es que esa afirmación yo no la he hecho y, en consecuencia, la respuesta a esa afirmación que yo no he hecho queda carente de toda base.

Lo que creo es que desde el Ministerio de Industria y Energía se está haciendo extraordinariamente poco para afrontar adecuadamente la crisis industrial y, en particular, más extraordinariamente poco todavía para provocar un ajuste positivo de la crisis industrial que no se resuelva simplemente con la amortización y la desaparición de puestos de trabajo, que no dé lugar a que dentro de tres años nos encontremos con que en el sector industrial no se ha perdido medio millón sino un millón de puestos de trabajo, sino que genere nuevas inversiones en otros sectores que puedan tener un futuro más halagüeño dentro del sector industrial, que permita la recolocación de los puestos de trabajo y de los trabajadores que sean expulsados por el proceso de reconversión de los sectores en crisis y, en definitiva, sitúe el sector industrial de España en el perfil industrial futuro que se está configurando en toda Europa y en todo el mundo desarrollado.

Porque, efectivamente, las cifras que se nos dan son tangibles, pero son insuficientes. Se habla, por ejemplo, se hace referencia a ese acuerdo-marco suscrito recientemente entre el Ministerio de Industria y Energía y la organización empresarial para promover el desarrollo tecnológico. Lo que sucede es que el aporte de dinero público a ese acuerdo-marco alcanza solamente, según las cifras de que dispongo —y no dispongo directamente de las cifras del Ministerio de Industria y Energía porque no ha tenido la amabilidad de transmitir las a la Comisión de Industria y Energía—, ese aporte financiero alcanzará únicamente la cantidad de 1.500 millones de pesetas; una cifra que es irrisoria en un país en el que existe

una brecha respecto de otros países desarrollados en cuanto a inversiones y en cuanto a capital en investigación, desarrollo y tecnología, extraordinaria y que es necesario remontar y, en consecuencia, no basta con hacer la afirmación de que se producen incrementos porcentuales en determinadas dotaciones porque, a lo mejor, en determinadas partidas no tendría que producirse un incremento porcentual del 30 por ciento o de diez puntos por encima de la media de ese Departamento, sino de un 400 por ciento, porque lo que tenemos que remontar es ni más ni menos que ese enorme «gag» tecnológico que sufre nuestro país.

Se dice que es un problema de prioridades. Y ahí es donde está la discrepancia más importante especialmente con la intervención del señor Martín Oviedo, porque en estos momentos, entre la aplicación de acciones sobre los sectores en crisis, sobre la estructura industrial actualmente existente y la aplicación de nuevas acciones sobre la estructura industrial que no hay, pero que debe haber, si queremos que este país como nación industrial tenga futuro, deben situarse en igualdad en términos de prioridad. No se puede pensar que es prioritaria la actuación sobre los sectores en crisis. La actuación sobre los sectores en crisis es absolutamente necesaria si queremos garantizar la estructura industrial que en estos momentos tenemos; pero, al propio tiempo, es absolutamente indispensable que afrontemos el futuro, incentivando desde el sector público de la economía la actuación tanto del sector público empresarial como de la iniciativa privada en los nuevos sectores que en estos momentos no existen en nuestro país.

Y, ciertamente, yo no voy a caer en los latiguillos de decir que los nuevos sectores son necesariamente la electrónica, la informática, la defensa o la agroalimentaria, pero cuando hay un tópico existe un lugar común, y en muchas ocasiones ese lugar común expresa una verdad repetida que se convierte en tópico, y es cierto que, en gran medida, el perfil industrial del futuro lo van a caracterizar industrias como la electrónica, industrias que en otros países desarrollados emplean aproximadamente a un 5 por ciento de la población ocupada en el sector industrial, que en nuestro país supone únicamente un modestísimo 1,7 ó 1,8 por ciento y que, en definitiva, estos datos requieren que se pongan en marcha desde el sector público acciones energéticas que permitan supe-

rar ese desfase en el que en estos momentos nos encontramos.

Esas acciones enérgicas, señor Martín Oviedo, señor Ministro, no las vemos por ninguna parte. Porque, por ejemplo, en el tema de la electrónica y de la informática, que supone, aproximadamente, en ese sector industrial de tres millones cien mil trabajadores, un 1,8 por ciento, la participación de la inversión sobre estos sectores en el Presupuesto del INI es inferior a la participación que le corresponde a estos sectores en el conjunto del país. Porque la participación en el presupuesto del INI del sector de la división de electrónica informática comportará una inversión de 3.350 millones de pesetas, lo que supone un 1,40 por ciento del total de las inversiones del Instituto en todas las divisiones industriales. Lo que quiere decir que estamos consolidando un tamaño pequeño para determinados sectores.

La consecuencia que yo extraigo de la intervención del señor Martín Oviedo y la del señor Ministro es que vamos a concertar todos los esfuerzos en consolidar la estructura industrial actual, pero que vamos a seguir sin hacer prácticamente nada significativo en avanzar hacia nuevos sectores industriales del futuro. Es decir, que la apuesta que decía el señor Presidente del Gobierno que íbamos a hacer hacia el futuro es, como me temía al presentar esta enmienda, una apuesta meramente verbal, pero no de las de verdad, es decir, de las que se hacen con dinero.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: También en turno de rectificación, tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT I SOLE: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, de las intervenciones del diputado de Unión de Centro Democrático y del propio señor Ministro, que confirmado en mi opinión de que estamos ante una política de adaptación pasiva a la crisis.

El señor Ministro se ha referido a que existen en estos momentos dos políticas industriales, de verdad. Yo creo que sí, que hay dos políticas industriales —ya lo he dicho al principio—, la política ligada al Plan Energético Nacional y la política de reconversión industrial. El resto es gestión ministerial corriente, bien hecha, relativamente adaptada a las circunstancias o no —discutiríamos ahí—, pero los dos ejes de política

industrial del Ministerio son en estos momentos, exclusivamente, el Plan Energético Nacional y la política de reconversión industrial.

Pues bien, el Plan Energético Nacional nos llega, en estos momentos, integrado en sus previsiones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de haber sido objeto de un debate explícito en esta Cámara, que nosotros pedimos ya en diciembre de 1980 y que reiteramos en la primavera de este año.

En el momento en que estamos, las previsiones presupuestarias vinculadas al PEN tenían que haber sido fruto de una revisión explícita, en la que teníamos que haber participado activamente todos. En lugar de ello tenemos unas previsiones ya incorporadas que en el momento que vayamos a discutir si el PEN hay que revisarlo, cómo hay que revisarlo, etcétera, ya vendrán marcadas por lo que esté incorporado en el presupuesto de este año. Así, por ejemplo, el tema de las centrales nucleares de Soria y toda una serie de temas que ya vienen ahí muy claramente definidos.

En segundo lugar, hay una política de reconversión y esta política de reconversión es una política que viene a marcar —porque hoy en día, los recursos previstos explícitamente están agotados y no hablamos de si son ampliables o no, pero los recursos previstos inicialmente están ya, excepto unas migajas, agotados para el año que viene— que se han generado unas expectativas de reconversión industrial que yo creo que no corresponden, que no se ha tenido en cuenta de qué manera había que trabajar este tema, y han aparecido en el seno de la propia Administración una serie de divisiones conflictivas, una serie de tensiones que, a mi entender, reflejan la falta de verdad de una política de reconversión industrial en serio; sobre el papel, dentro de cada uno de los sectores, etcétera, han aparecido tensiones que el señor Ministro y el señor Martín Oviedo conocen perfectamente.

Tenemos después una política industrial del sector público desastrosa. Tenemos el caso de la Seat. Tenemos una serie de temas que vamos a tratar en el momento de discutir la enmienda a la totalidad al presupuesto del INI. No existe una formulación clara de una serie de cuestiones en las que se podía haber avanzado, por ejemplo, el tema del Plan Informático. Es también otro de los temas conflictivos y cuya solución nos permitiría avanzar.

Finalmente, no se me ha respondido a cuál es

la tasa de crecimiento que de verdad contempla la Administración, si el 1,8 por ciento, como ha salido en algunas publicaciones, el 3 por ciento, como viene en la Memoria de los Presupuestos, o bien si estas dos tasas son compatibles entre sí, por lo cual me reitero en mi posición.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Los señores diputados, en esta ocasión creo que se han refugiado en la exposición de unos adjetivos indeterminados para intentar calificar nuevamente sus propias intervenciones anteriores. Que si se trata de una respuesta verbal; que si son cifras insuficientes, olvidando las cifras dadas en las respuestas correspondientes; que si se confirma una adaptación pasiva, etcétera.

Quiero, en ese sentido, responder claramente con cuatro ideas sustanciales. En primer lugar, me da la sensación de que seguimos —y no es por caer en el mismo tópico, señor Silva— haciendo siempre referencia al problema de unos sectores nuevos como si en ellos estuviera la industria del futuro y fuera a desaparecer la industria del pasado; y creo que no hay nada más inexacto que eso. De alguna manera, lo que está absolutamente claro es que nuestro país va a seguir teniendo una capacidad de producción siderúrgica, una capacidad de producción naval, una capacidad de producción textil, etcétera. Si lo que quiere decir en su intervención el señor diputado es que le gustaría que fuera distinta la estructura industrial española, debo decirle que a mí me gustaría, lo que pasa es que estamos adoptando las medidas necesarias para modificar esa estructura industrial. De ahí la necesidad de incremento en la capacidad de crecimiento de determinados sectores y del reajuste de otros sectores determinados.

La política industrial es un todo; no son fragmentos sueltos de una tarta, señor Montserrat. De alguna manera, no se puede separar la política energética de la política de sectores de futuro o de la política de reconversión, y en ese sentido, lo que hace falta es, en primer lugar, la política de reconversión no entenderla únicamente como una política de reajuste de situaciones anteriores, sino que lo que hace falta es producir las cosas que se están produciendo con un nivel de calidad y con una situación de productividad y rentabili-

dad radicalmente distintos de lo que ocurre en los sectores que están sometidos a esa reconversión, y a eso tienden los planes y las cuantiosas inversiones tecnológicas que en ese sentido se están realizando.

En segundo lugar, por lo que se refiere —y contesto ya concretamente— a la energía, las tasas de crecimiento que se utilizan son las mismas tasas de crecimiento que se utilizan para el conjunto de la economía, no pudiéndose, naturalmente, utilizar tasas diferentes; lo que ocurre es que como la previsión del año efectivo es la del año 1990, las previsiones de crecimiento son tres distintas en función a los diferentes años del Plan, y ese tema tendremos ocasión de discutirlo cuando se pueda analizar en este Pleno la revisión del Plan Energético.

En tercer lugar, está clarísima, señor Silva, la política de desarrollo de las pequeñas y medianas industrias en los términos a que antes he hecho referencia, no solamente con los incrementos del Presupuesto del Estado, sino con los incrementos de fondos financieros y de ayudas tecnológicas que se están efectuando por parte de los entes públicos en el momento presente,

Finalmente, por lo que respecta al tema de la tecnología es absolutamente claro que no puede un país crecer por saltos y pasar de un 1,50 en un sector a un 5 por ciento; lo que hay que hacer es poner los datos complementarios, sucesivos y progresivos para que pueda ocurrir a lo largo de un periodo de tiempo determinado, y en ese sentido creo que se han tomado las medidas necesarias. Está finalizada la redacción de una modificación sustancial sobre la Ley de Propiedad Industrial en la parte relativa a patentes que supone un incremento importante de aportación tecnológica y de fomento a la tecnología española; se está modificando o redactando una norma de carácter general sobre la situación de la tecnología, principalmente sobre los temas de diseño industrial, de normalización, de homologaciones y de coordinación de compras públicas, tema en que se ha avanzado muy ampliamente por vía de convenios —se han realizado veintinueve convenios internos por la Administración para esa coordinación de compras en mejora de la tecnología nacional— y se acaba de constituir una comisión para el desarrollo de la industria electrónica española.

Creo que todos estos datos, junto con las cifras que di en mi intervención anterior, permiten poder tener los cimientos suficientes para conside-

rar que no son exactas las afirmaciones que se han producido en las intervenciones anteriores.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

Tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Señor Presidente, siguiendo la tónica de la Presidencia en otros debates, lo que pido es que me permita una breve intervención de respuesta al señor Ministro, un minuto solamente.

El señor PRESIDENTE: No hay más intervenciones, señor Silva. Vamos a aplicar las normas reglamentarias. Hay intervención, contestación y rectificación, nada más. Si no se ha consumido el turno en contra de la rectificación, su intervención cumple la función de ese turno.

Vamos a proceder a las votaciones.

Sometemos en primer lugar a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la sección 20.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 271 votos emitidos; 15 favorables; 155 negativos; 101 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista a la sección 20.

Sometemos ahora a votación conjunta las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialista Vasco.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 273 votos emitidos; 118 favorables; 155 negativos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialistas del Congreso y Socialista Vasco a la sección 20, relativa al Ministerio de Industria y Energía.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Gracias, señor Presidente, y lamento tener

que hacer un uso reiterado de mis posibilidades reglamentarias de intervención, para responder al señor Ministro, cuya intervención no la hizo como diputado de UCD, sino en representación del Gobierno.

El señor Ministro es sin duda en términos dialécticos —y lo digo con todo respeto— un hábil tergiversador, porque yo en ningún momento he hablado de que esa apuesta por el futuro, que queda resumida en el conjunto de enmiendas comprendidas en la enmienda a la totalidad a la sección 20, implique una desatención hacia los sectores tradicionales de la estructura industrial española. Lo que he venido afirmando es que no se puede caminar hacia el futuro industrial de España haciendo gravitar todas las acciones o las acciones más importantes del sector público únicamente sobre los sectores en crisis, porque eso es en definitiva consolidar el pasado industrial de España, pero no abrir las puertas del futuro industrial de España y es necesario compatibilizar las acciones sobre los sectores industriales tradicionales con las acciones sobre los nuevos sectores industriales que en estos momentos no existen en nuestro país o tienen una existencia tan raquítica que los convierte en insignificantes dentro de la compleja trama de la estructura industrial española. Porque, en relación con algunos de los datos que ha aportado el señor Ministro y sobre los que ha descansado su intervención —devolviendo la acusación de verbalismo que nosotros habíamos hecho a la política industrial del Gobierno—, deberían hacerse también algunas importantes precisiones. Por ejemplo, es cierto que, en relación con un organismo autónomo como es el Cedeti, se ha producido un incremento que hace pasar de 1.000 millones a 1.589 millones de pesetas la consignación presupuestaria para 1982; pero no es menos cierto que en los Presupuestos de 1981 existía una consignación de 1710 millones de pesetas para un plan de fomento a la investigación e innovación tecnológica, que en los Presupuestos para 1982 pasa a ser de 364 millones de pesetas, es decir, una ostensible reducción.

En conjunto, sumando una y otra partidas, resulta que en 1981, las consignaciones previstas para estos dos destinos eran de 2,710 millones de pesetas, y en 1982 serán de 1.953 millones de pesetas, por lo que la reducción en materia de aportes para la investigación e innovación tecnológica es manifiesta.

Pero veamos qué ocurre en relación con estos sectores industriales, tradicionales o no tradicionales, en los que podemos decir que se cifra el futuro industrial de España. El sector de alimentación acoge, en términos de empleo, un 13 por ciento de la población ocupada en el sector industrial. Pues bien, la división de alimentación en el Instituto Nacional de Industria —el aparato de inversión pública más importante que tiene este país— recibe solamente el 2,03 por ciento en relación con el conjunto de las inversiones del INI para 1982. Es decir, no solamente no se está apostando por estos sectores de futuro, sino que se está apostando a la inversa, se está reduciendo el conjunto de aportes públicos para estos sectores de futuro.

Se habla de la comisión de electrónica; pero, si no estamos equivocados, esa comisión trae causa de un decreto que data nada menos que del 20 de julio de 1974. Y lo que se hace ahora es recuperar esa vieja y —hay que decirlo— fracasada idea, un «revival» de esa vieja política de 1974, sin que comporte ningún avance ni modificación sustancial respecto de aquellos planteamientos que en estos momentos hay que considerar fracasados.

En definitiva, la conclusión que me permito extraer de este debate, y en particular de la intervención del señor Ministro, es que el señor Ministro de Industria pasará a la historia como el Ministro del ajuste negativo frente a la crisis industrial, es decir, de quien ha consolidado una estructura industrial obsoleta —si es que sale adelante el conjunto de acciones en relación con los sectores en crisis—, pero ha alejado a España del futuro industrial, tal vez irreversiblemente, de ese perfil industrial del futuro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Comunista, el señor Montserrat paa explicación de voto.

El señor MONTSERRAT I SOLE: Muy brevemente, para explicar que nuestro voto ha sido positivo a las dos enmiendas presentadas, porque creemos que, en estos momentos, estamos asistiendo a un debate sobre el futuro de la política industrial, que va más allá incluso de los grupos de la izquierda, y que debería llegar a transformarse en una auténtica reformulación de la política industrial, cosa que ha estado ausente en los planteamientos hechos, con todo respeto sea dicho, por parte del señor Ministro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Muy brevemente, únicamente para hacer referencia a una afirmación del señor Silva.

Le agradezco mucho su deseo de que pase a la historia, y estoy seguro de que así será, pero no sólo por la tarea de la reconversión industrial, sino por la del reajuste conjunto de la industria española, que es lo que hace que el Gobierno en el momento actual diese un paso hacia el futuro; lo que es un paso hacia el pasado es no adoptar ese orden de medidas.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sección **Sección 21** veintinuna, Ministerio de Agricultura y Pesca.

Para la defensa de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialista Vasco, tiene la palabra el señor Colino.

El señor COLINO SALAMANCA: Señor Presidente, a través de esta intervención queremos defender conjuntamente en este trámite la enmienda 504, que se refiere a la totalidad del presupuesto del Ministerio de Agricultura y las enmiendas 505 y 506, que se refieren la primera de ellas al IRYDA y la segunda al FORPPA.

Solicitamos la devolución de presupuesto de la sección veintinuna, Ministerio de Agricultura y Peca, básicamente porque no responde al contenido de las promesas de política agraria que, en su día, se formularon por el Ministro de Agricultura ante el Pleno de esta Cámara con ocasión de presentar su programa de cambio para la agricultura.

Nosotros pensamos que en este presupuesto del Ministerio de Agricultura no se hace el esfuerzo presupuestario ni tampoco se coordinan las acciones que en dicho presupuesto se contienen para hacer realidad el mandato del artículo 130 de la Constitución, que solicita a los poderes públicos que tomen aquellas medidas necesarias para la modernización de la agricultura.

Hay algunos rasgos del sector agrario en estos últimos años que quizá convenga poner de manifiesto. En primer lugar, hay que señalar el evidente y continuo deterioro de las rentas del sector agrario de los últimos años. Tomando algunos datos de relieve, como puede ser el índice de paridad de precios percibidos/precios pagados, pode-

mos decir que se ha pasado de una base 100, en 1976, a una 89,6, en 1980, situación que se agrava incluso si tomamos en cuenta el indicador precios percibidos/precios pagados más salarios. Igualmente, si comparamos los índices de aumento del coste de vida con la renta agraria, con el excedente neto y con las disponibilidades empresariales, percibiríamos una pérdida relativa de la renta del sector agrario, ya que ésta no ha podido seguir el ritmo de inflación de la economía española, poniendo de manifiesto que la renta agraria de 1979, el excedente neto y las disponibilidades empresariales, a partir de 1976, han crecido menos que el índice de coste de vida. En resumidas cuentas, esto significa para el sector agrario que se viene produciendo una fuerte pérdida del poder adquisitivo y la capacidad de autofinanciación del sector agrario.

Por supuesto, no es nuestra pretensión atribuir esos resultados a la actuación presupuestaria del Gobierno, pues es claro que esos niveles vienen condicionados, entre otras causas, por las variables climatológicas. Sin embargo, no es menos cierto que una determinada política agraria debe fijar prioridades y asignar recursos presupuestarios en función del modelo elegido, y que esa política puede tener un papel desencadenante del proceso de cambio, por ejemplo, en materia de investigación agraria, en materia de capacitación y extensión agraria y lo mismo en materia de industrialización y comercialización y en materia de estructuras, de concentración parcelaria, de regadíos y, en general, cuantos programas permitan un máximo aprovechamiento de los factores productivos en la empresa familiar. Así había que entender en su día el programa del señor Ministro, y, sin embargo, nos encontramos con un presupuesto que no responde a estos objetivos.

Es preciso afirmar, después de una lectura detenida del presupuesto, que nos encontramos con una política agraria que no está coordinada en los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Nos encontramos con que hay varios organismos del Ministerio haciendo exactamente lo mismo, incidiendo en el mismo sector; ejemplos: en materia de industrialización, tenemos el IRYDA y la Dirección General de Industrias Agrarias, que precisamente es el órgano específico para trabajar en esta materia; en materia de comercialización, el IRYDA y la Dirección General de Industrias Agrarias; en materia de formación profesional, de nuevo inciden el IRYDA y el Servicio de Exten-

sión Agraria; en materia ganadera, la Dirección General de la Producción Agraria y la Agencia de Desarrollo Ganadero. Estos ejemplos no solamente se limitan a la esfera propia del Ministerio de Agricultura, sino que, incluso, entran en competencia con otros Departamentos ministeriales. Es curioso, por ejemplo, que duante el año 1981, frente a una actuación del Ministerio de Agricultura no fomentando las instalaciones porcinas, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de los grandes planes de expansión regional, está fomentando la instalación de explotaciones porcinas.

Y ¿cuál es la base y razón de estas descoordinaciones que se producen en el presupuesto del Ministerio de Agricultura? A nuestro juicio, la injustificada proliferación de organismos autónomos. El presupuesto de la sección veintiuna, que recoge Agricultura y Pesca, se eleva a 172.000 millones de pesetas, de los que a Agricultura corresponden 161.000 millones, incluidos entes territoriales, Fondo de Compensación Interterritorial y Autonomías. Si de estas últimas cifras descontamos las transferencias corrientes, capítulo IV, y las de capital a organismos autónomos, capítulo VII, el presupuesto del Ministerio se reduce a 34.000 millones de pesetas; es decir, trece organismos autónomos suponen 127.000 millones de pesetas. Esta proliferación de organismos autónomos, a nuestro juicio, está invalidando los programas a realizar y, sobre todo, pone en cuestión la eficacia del presupuesto del Ministerio de Agricultura, pues no existe una especialización que justifique esa aparición de organismos autónomos.

Vayamos a los ejemplos: Programa 03, Formación Profesional. Intervienen al menos dos organismos, Servicio de Extensión Agraria y el IRYDA, y frente a los 2.200 millones de pesetas que destina el IRYDA, el Servicio de Extensión Agraria, que es el organismo especializado para estas materias, por inversiones reales y por transferencias de capital solamente dedica 1.200 millones de pesetas. Es decir, el organismo especializado del Ministerio de Agricultura dedica a la Formación Profesional menos de lo que dedica un organismo que no lo está, como el IRYDA.

Programa 08, Ordenación y Mejora de la Ganadería. Hay dos organismos, la Dirección General de la Producción Agraria y la Agencia de Desarrollo Ganadero, este último, en principio, creado como órgano especializado en materia de

producción ganadera. Sin embargo, este organismo solamente emplea 59 millones de pesetas entre inversiones reales y transferencias de capital.

Programa 09, Ordenación de la oferta y regulación de mercados: la competencia, en principio, está atribuida a la Dirección General de Producción Agraria, que destina 54 millones de pesetas en inversiones reales, mientras que el IRYDA, órgano no especializado en esta materia, dedica, por el contrario, 167 millones de pesetas.

Programa 10, Industria Agroalimentaria: Como en el caso anterior, frente a 174 millones de pesetas que por inversiones reales dedica la Dirección General de Industrias Agrarias, que es el órgano especializado, el IRYDA dedica 400 millones de pesetas.

¿Qué pone esto de manifiesto, y hemos tomado como ejemplo cuatro programas de los que están contemplados en el Ministerio? Dos cosas: por una parte, que los programas del Ministerio de Agricultura no son tales programas. Como ya se ha dicho en esta tribuna, lo que hoy aparece como presupuesto por programas, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura es una simple yuxtaposición de actividades o presupuestos de los diferentes organismos, que se han limitado a la subida correspondiente en el presupuesto para el año 1982, pero no hay de verdad la redacción de unos programas, como demuestran estas interferencias entre unos organismos y otros, para el cumplimiento de las mismas finalidades. Llega a más en la misma materia; llega incluso al manejo de criterios distintos entre unos organismos y otros en la misma materia.

Hay que señalar también que, aunque en algún momento se ha tratado de corregir esto, no creemos que el mecanismo de corrección sea llevar una simple ficha donde se recojan los auxilios concedidos a una persona o un agricultor para evitar que pueda recibir ayudas por dos vías diferentes para una misma finalidad. Existe una tremenda descoordinación que no puede llevar a la práctica una decidida política agraria.

Todo lo que hemos señalado no sólo influye respecto del futuro año 1982, sino que está en la base de que, por ejemplo, en el año 1980 se declarasen sobrantes, entre inversiones reales y transferencias de capital, más de 2.000 millones de pesetas para programas tan fundamentales como la recuperación de tierras para agricultores, la mejora integral de exportaciones agrarias, Formación Profesional de 1.º y 2.º grados, fomento de la pro-

ductividad y mejora de producción agrícola, forestal y ganadera; y en 1981, entre créditos no disponibles y retenciones, nos acercamos a 4.000 millones de pesetas, con especial significación de los créditos a programas de transformación en regadío, que supone, según nuestras cifras, 1.690 millones de pesetas.

Si con lo anterior lo que se trata de poner de manifiesto es que la eficacia de los gastos públicos en agricultura deja bastante que desear, de otra parte, las mismas finalidades presupuestarias para 1982, como consecuencia de la falta de programas, tampoco están claras.

¿Es posible, por ejemplo, pensar en un impulso decidido a la creación de industrias agroalimentarias, tema concretamente recogido en el programa del señor Ministro, o en la comercialización ejercida por los propios agricultores cuando las inversiones reales de la Dirección General de la Producción Agraria se elevan a 54 millones de pesetas, sobre un total de 1.881 millones de pesetas de esa misma Dirección General de Producción Agraria, o cuando las transferencias de capital son 452 millones frente a los 10.000 de la citada Dirección General?

Igualmente, desde el punto de vista de la ordenación de producciones, de la oferta y del mercado, el presupuesto no permite conocer ni el montante de las subvenciones ni su destino, con lo que difícilmente podremos contrastar hasta qué punto la acción pública intentará suavizar la tendencia en cuanto a la pérdida de renta del sector, de que hablabamos al principio.

Es evidente que en el presupuesto del FORPPA es imposible hacer previsiones de empleo de los fondos, tanto de subvenciones como créditos, ya que este organismo tiene que decidir sus actuaciones a la vista de la evolución de los mercados y en contacto continuo con la realidad. Pero también es cierto que de los presupuestos del FORPPA depende el tipo de política de precios que se haga, y de las ayudas indirectas que se den. Por ejemplo, podríamos sacar una serie de productos sobre los cuales, a partir del presupuesto del FORPPA, no podemos saber lo que va a pasar en 1982 y cuáles pueden ser las líneas de apoyo por parte del FORPPA, cuyo presupuesto consolidado se eleva a 310.000 millones de pesetas.

¿Qué puede pasar con el olivar, uno de los capítulos que se lleva más fondos del FORPPA, tanto en subvenciones como en créditos? Y se lleva más fondos debido, por una parte, a la subven-

ción de 11 pesetas que viene marcando la diferencia entre el precio al agricultor y el precio al consumidor; y, por otra parte, hay que constatar que el principal comprador de aceite de oliva es precisamente el FORPPA. Nos gustaría saber, al contemplar el presupuesto del FORPPA, si se va a seguir dando esta subvención. El Gobierno debería comunicar cuál es su política de grasas o las perspectivas de cambio.

En materia de cereales pasa tres cuartos de lo mismo; absorbe una partida muy alta del presupuesto del FORPPA, aunque viene disminuyendo, y comprende ayudas a crear una infraestructura de la red de almacenes, en manos de agricultores, y cuantiosas ayudas a los gastos de campaña. ¿Qué va a pasar en 1982?

Otro caso similar es el del algodón, producto con grandes partidas en los presupuestos del FORPPA debido fundamentalmente al plan de expansión del cultivo y, por otro lado, a la diferencia entre precios interiores y precios exteriores. ¿Qué puede pasar en el presupuesto del FORPPA para 1982?

Lo mismo nos ocurre respecto al vino. Actualmente, el «stock» es muy alto debido a dos cosechas importantes; tenemos bastante alcohol. En las últimas negociaciones sobre precios se habló de buscar fórmulas de regulación basadas en los «stocks» de vino, lo cual está en estudio en el Senpa. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el tema? Este año se ha hecho un convenio entre los interesados y el FORPPA financiado con fondos públicos, de cuyo desarrollo no se tienen noticias.

Lo mismo puede suceder —y podríamos hacer una larga lista— con relación a la leche y en relación con los reglamentos pendientes —que tendrían que tener presupuesto en 1982— del pollo y los huevos, reglamentos que están negociados y no sabemos si las medidas financieras articuladas están o no en los Presupuestos de 1982.

Podríamos también dar un repaso a los «stocks» de carne porcina y vacuna que están suponiendo el elevado coste de almacenamiento para el FORPPA. ¿Qué puede pasar en las próximas campañas?

Lo mismo podríamos decir respecto de las ayudas para semillas, fertilizantes, etc. En resumen, en el presupuesto del FORPPA hay algunas incógnitas que en 1982 deberían quedar despejadas y, sin embargo, no quedan.

No sólo podríamos hablar en relación a productos, también lo podríamos hacer en relación a

cuál puede ser la dinámica, la marcha que durante 1982 van a seguir, por ejemplo, las ayudas a las primas de producción, las primas de almacenamiento, las primas al transporte, transformación de productos, comercialización exterior o las acciones indirectas en materia de mejora de estructuras productivas o de estructuras industriales y comerciales.

En definitiva, a través del presupuesto que se nos ha presentado es difícil saber cuáles van a ser las líneas orientadoras del presupuesto del FORPPA para 1982, aun manejando la variable climatológica que se podrá despejar en los próximos meses. De los presupuestos del FORPPA no deducimos nada no sólo en materia de orientación de producciones ni en materia de política de precios; tampoco en materia de estructuras, concretamente en regadíos, en donde nos encontramos con que, frente a 15.584 millones de pesetas presupuestadas en 1981 para una programación de 60.000 hectáreas, en 1982 esos fondos son de 16.258 millones de pesetas, lo que ha obligado, de entrada, a rebajar la programación cuatrienal que preveía, para 1982, 77.352 hectáreas. Es decir, de entrada ya hay una rebaja de 7.000 hectáreas en las tierras transformadas directamente por parte del Ministerio de Agricultura, vía IRYDA, en transformación de regadíos.

Finalmente, el presupuesto no aborda la problemática de la situación climatológica. Creemos que se pierde otra oportunidad para enfrentarse con ese grave problema. De una parte, tenemos duda de que se pueda enfrentar con este problema porque aquellas medidas que aprobó esta Cámara en abril de 1981 todavía están por cumplir. Nos referimos, por ejemplo, a las ayudas a fondo perdido que aprobó esta Cámara en abril de 1981 y que no sabemos dónde tienen reflejo en el Presupuesto de 1982.

Por otra parte, tampoco tenemos los datos suficientes, dado que la presencia del señor Ministro en la Comisión de Agricultura, para informarnos de las consecuencias de las medidas tomadas en febrero y mayo en relación con las ayudas por sequía en el tema de créditos y moratorias, está todavía por realizarse.

En consecuencia, no podemos tener todos los datos en la mano que nos permitan prever cuál puede ser para 1982 la incidencia de esta catástrofe en el campo.

Sin embargo, en los Presupuestos aparecen dos partidas distintas: en la Dirección General de la

Producción Agraria, por una parte, y, en segundo lugar, en el IRYDA; dos partidas cuya significación seguimos sin conocer. Por una parte, en la Dirección General de la Producción Agraria hay 1.250 millones de pesetas y no se dice cuál va a ser su finalidad. En el presupuesto del IRYDA hay 2.143 millones de pesetas para la misma finalidad: daños excepcionales. No sabemos cuál es la razón de esa consignación en presupuestos distintos, ni tampoco cuáles son los objetivos a cumplir por estas partidas.

En definitiva, hoy por hoy desconocemos la suficiencia de los medios que se consignan en el presupuesto y los objetivos a cumplir, pues, como decíamos antes, los compromisos adquiridos en abril no se han cumplido todavía en su totalidad. En cualquier caso, podemos convenir en que estos Presupuestos no denotan el esfuerzo necesario para abordar con una mínima seriedad el grave problema que la sequía está provocando y puede provocar al sector agrario.

En conclusión —antes de finalizar— queremos decir unas palabras sobre el presupuesto específico del IRYDA: no se está dispuesto a pagar el precio político a que se hacía referencia en la palabras del señor Ministro en junio de 1979.

En relación con el presupuesto del IRYDA —señor Presidente, acabo en dos minutos— quisiéramos decir dos palabras. En primer lugar, que el presupuesto del IRYDA, que es el que básicamente actúa en el campo de las estructuras, ha venido a esta Cámara sin un desglose y no se sabe qué se quiere hacer con esa consignación presupuestaria.

No hay un detalle de los programas del IRYDA; no hay una regionalización de las inversiones, por ejemplo, en concentraciones parcelarias y regadíos; no hay una distribución territorial del gasto público. Por otra parte —y es, a nuestro juicio, importante—, de 61.000 millones de pesetas del IRYDA aparecen 10.000 millones para préstamos a corto y largo plazo. En nuestra opinión como grupo parlamentario, se trata de decir que no nos parece el cauce adecuado la consignación de estos 10.000 millones de pesetas en los presupuestos del Ministerio de Agricultura, cuando hay precisamente un instituto oficial de crédito, como el Banco de Crédito Agrícola, que es donde deberían recogerse estas consignaciones que tienen sentido de préstamo a corto y largo plazo, donde podrían cumplir mejores funciones.

En definitiva, señor Presidente, solicitamos el

rechazo del presupuesto del Ministerio de Agricultura porque creemos que es un presupuesto que por la descoordinación interna del Ministerio, por la confusión de los programas, porque no hace una previsión de futuro respecto a la producción ni contempla en alguna medida los graves problemas que al campo se le van a plantear esta primavera como consecuencia de la grave crisis climatológica que está pasando, y porque no afronta con decisión y, sobre todo, con previsión los riesgos que para el sector agrario se pueden producir en estos últimos meses. Por todas estas razones, solicitamos de la Cámara la devolución del presupuesto del Ministerio de Agricultura.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Señor Presidente, señoras y señores diputados, las enmiendas de totalidad de los Grupos Socialista del Congreso y Socialista Vasco, que acaba de defender el diputado señor Colino de una forma agrupada, se han basado, si no he entendido mal, en dos grandes argumentos (que tratan de ser dos grandes argumentos, que no lo son): uno, que no se hace un esfuerzo presupuestario suficiente, y otro, que no se coordinan las acciones de las distintas áreas de la Administración agraria o de la Administración en general en relación con la sacción en el mundo agrario, aparte luego puntos complementarios de si se actúa o no en orden a dar respuesta a los problemas que plantea a la agricultura la situación climatológica.

El Grupo Centrista que apoya al Gobierno ha de decir, en primer lugar, que sí se hace el esfuerzo presupuestario. Crecen los presupuestos relacionados con la agricultura en un 26 por ciento, cuando los Presupuestos globales del Estado crecen un 25 por ciento; hay, pues, un crecimiento algo más fuerte en las atenciones presupuestarias que van a repercutir en la agricultura, y todo ello en un momento en que los Presupuestos del Estado están sometidos a una serie de presiones presupuestarias, valga la expresión, para poder atender una serie de problemas graves que la crisis económica ha planteado al país: los problemas de paro, los problemas de reconversión industrial, los problemas, en definitiva, que están siendo co-

mentados y que laten a lo largo de este debate presupuestario.

Los Presupuestos del Estado globalmente, sumando todas las partidas dedicadas a la agricultura, ganadería, actividades forestales, etcétera, pasan de 166.926 millones en 1981 a 210.172 millones de 1982, y eso supone un incremento de más de 43.240 millones, es decir, un 26 por ciento, al que anteriormente he aludido.

A lo largo de la intervención del señor Colino se han sostenido afirmaciones que no son —entendemos nosotros— ciertas en absoluto, en cuanto a que no se dedica la atención suficiente a los problemas de puesta en regadío, a los problemas de concentración parcelaria, investigación agraria, capacitación agraria, que han sido mencionados de forma rápida, pero han sido mencionados. Y hay que decir que en concentración parcelaria, según la Memoria del presupuesto por programas —datos que vienen en la información presupuestaria— está previsto llegar a la cifra de 190.000 hectáreas en 1982, siendo en 1981 las hectáreas concentradas 155.000. Hay que decir que en transformación en regadíos, las que se ejecutan directamente por el Estado, se pasará, de las que son transformadas en su globalidad, de 42.000 hectáreas en 1981, realmente ejecutadas, a entre 56.000 y 70.000 hectáreas en 1982, y los mejorados, de unas 15.000 hectáreas a 20.000 ó 30.000 en 1982.

Esta acción en regadíos en transformación directa o mejora directa por el Estado, hay que contemplarla al mismo tiempo que se dan las cifras de lo que supone la transformación y mejora en riegos con lo que es la ayuda a actividades privadas que tienen esa finalidad; que pasan de 35.000 hectáreas en 1981, en transformación, a entre 50.000 a 70.000 hectáreas en 1982 (prácticamente se duplican), y en cifras de hectáreas mejoradas, de 40.000 hectáreas en 1981 a entre 50.000 a 70.000 hectáreas en 1982. Ello supone un esfuerzo de las acciones concertadas que se plantea en base al Decreto 1200/81, de fomento a la iniciativa privada en transformación y mejora de regadíos, que hará que las cifras que en base a esos conciertos para trasladar una acción crediticia que permita hacer esas transformaciones o mejoras en regadíos en la iniciativa privada, será, en lugar de 4.200 millones en 1981, 18.000 millones en 1982.

El señor Colino se ha referido, como argumento que entendemos que no es tal, a que hay una

baja en la intensidad de esa transformación directa por el Estado, aludiendo a una cifra planificada anteriormente en cuanto a transformación en riegos en 1982 de 77.000 hectáreas (palabras textuales de él), a que ahora se contemplan 70.000 hectáreas. Efectivamente, se contemplan 70.000. Pero no piense el señor Colino que es una consecuencia de la no inversión, de la falta de eficiente esfuerzo presupuestario por parte de las actividades relacionadas con la agricultura y, en general, de la Administración pública en estos Presupuestos, sino consecuencia de la necesaria programación y coordinación que tiene que haber entre la transformación en riesgo y las grandes obras que permitan esa transformación. No tendría sentido hacer un esfuerzo presupuestario superior en obras de transformación, que dependen de los organismos ligados al Ministerio de Agricultura, si no están terminadas las obras y, lo que es más importante, si no existen los recursos hidráulicos que pueden permitir esa transformación.

El señor Colino puede saber de muchos casos, pero yo conozco personalmente obras que han sido culminadas, desde el punto de vista físico, y que no han empezado a dar su fruto tras la transformación en riego porque la pluviometría —de la que estamos especialmente escasos— no ha permitido que las aguas se almacenen en las presas y luego lleguen, a través de esas obras de transformación, hasta los campos, hasta la tierra.

Cualquier tipo de coordinación y planificación que permita adaptar las cifras de lo que se invierte a de lo que va a ser posible realmente, en base a la terminación de las grandes obras y a esas posibilidades hidráulicas, me parece realista y evitará que las inversiones queden muertas durante dos o tres años en el campo, hasta que éste pueda ser fecundado con las aguas que lleguen hasta él.

Se ha argumentado, por parte del portavoz de los Grupos Socialistas del Congreso y Vasco, que no existe una suficiente coordinación en las distintas acciones que la Administración realiza en orden al progreso, a la mejora, a las transformaciones en el mundo agrario.

Sostener, señor Colino, que pueda haber acciones de organismos autónomos y de organismos comerciales-financieros, dependientes del Ministerio de Agricultura y del propio Departamento, que pueden ser paralelos, inclusive coincidentes con otras acciones de otros Ministerios, y que eso no esté coordinado es una afirmación absolutamente gratuita, porque hay unos presupuestos

por programas, a los que niega virtualidad —lo que hay que demostrar—, porque los ha calificado de mera yuxtaposición de cifras —que no es tal—, que justamente suman y tienen en cuenta las actuaciones de los distintos organismos de la Administración y, aparte de esa coordinación a nivel central que se desprende de los presupuestos por programas y de la lógica coordinación del funcionamiento de la propia Administración, existe, en primer lugar, una coordinación de los Ministerios económicos y, en segundo lugar, dentro del Ministerio de Agricultura, están los órganos idóneos para que esa coordinación se practique también de hecho en la Administración periférica.

Su señoría puede conocer también perfectamente dónde se puede —a través de reuniones colegiadas, suficientes, bajo la dirección del delegado provincial del Ministerio— realizar la correspondiente coordinación en orden a la actuación concreta en el territorio.

¿Por qué se extraña el portavoz del Grupo Socialista de que pueda haber una inversión más fuerte del IRYDA en actuaciones de formación profesional, de comercialización, o de desarrollo industrial que en lo que él llama organismos más idóneos para realizarla?, en palabras del portavoz socialista, que no hacemos nuestras. No hay razón para extrañarse de esa realidad, porque realmente cuando el IRYDA actúa en formación profesional, en capacitación agraria, en comercialización, está concentrando y realizando esas inversiones en las zonas que, por ser de un nivel inferior desde el punto de vista económico y de desarrollo, han merecido o necesitado la calificación de ordenación de explotaciones; en definitiva, de una actuación especial de este Instituto, del IRYDA, para levantar el nivel más bajo, el nivel inferior que tienen, allí donde está actuando el Instituto.

Es, por tanto, lógico que justamente allí donde la necesidad es mayor puedan ser mayores las inversiones. No podemos deducir ninguna consecuencia negativa de esas diferencias de cifras que, por otra parte —repito— en absoluto impiden la coordinación desde niveles centrales y periféricos.

Al hablar del FORPPA, el portavoz del Grupo Socialista ha reconocido que no es factible hacer una previsión exacta de las necesidades y orientaciones de cifras que puede dedicar este organismo a las distintas líneas de producción que son aten-

didadas, subvencionadas o ayudadas por las diferentes modalidades que existen. Evidentemente, dependen de la coyuntura internacional de precios, de la circunstancia interior, del volumen de producción, entre otras cifras, y para el año próximo, sobre el que preguntaba, puedo por mi parte anticiparle algunas orientaciones, porque lógicamente se ha profundizado en el Grupo Centrista en la realidad de estos presupuestos para sostener este debate. Por ejemplo, en el caso de la ayuda al olivar, puede haber una previsión algo más baja por el descenso lógico de la producción de una campaña corta como la del 81-82; en cambio, en algodón deberá ser una cifra más alta, que rozará quizá los 100.000 millones de pesetas, en atención a las diferencias de precios y al incremento de producción que, por el contrario, se está produciendo.

En cuanto a cereales y al sector vitivinícola, estarán entre los 1.500, arriba o abajo, una y otra líneas de ayuda, dentro de lo que son subvenciones del FORPPA, pero siempre con la flexibilidad que presupuestariamente sea posible, por la partida que está prevista para pérdidas en el FORPPA y que, si es necesario, puede pasar a atender las necesidades que en subvención existan a lo largo del desarrollo del año agrario y del año económico.

Se ha sostenido, por parte del portavoz del Grupo Socialista, que este presupuesto no tiene en cuenta la difícil situación climatológica de la agricultura española. Paradójicamente, al mismo tiempo que se hace esa afirmación, el mismo grupo parlamentario ha planteado algunas enmiendas que tratan de disminuir las cifras que pueden dedicar estos presupuestos a estas atenciones. Si no recuerdo mal, hay una enmienda que se dirige —lo veremos en el debate parcial de enmiendas— a que desaparezca la partida de 1.250 millones de pesetas —que él ha citado— de la Dirección General de Producción Agraria, destinada a atender estos problemas de apoyo a las empresas afectadas por la situación climatológica.

Al mismo tiempo que se hacía esta crítica de fondo, que va acompañada de esa paradoja que acabo de mencionar, se decía que por qué existía esa duplicidad de actuación, qué significado, qué finalidad tenía o de dónde venían esas cifras. Esas cifras, señor Colino, no son más que el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de seguimiento y de las ayudas que se aplican para paliar esta situación climatológica difícil en la agricultura.

Entendemos que S. S. puede tener cumplida información directa de lo que se está haciendo en esa Mesa de seguimiento. Como se sabe, la ayuda fundamental es la subvención a los intereses de los créditos especiales ya consignados, por un valor de más de 40.000 millones de pesetas, a lo largo de este año 1981 hasta ahora, de tal manera que los intereses que resulten de esos créditos para el agricultor no superen el 7 por ciento —los siete puntos— y esa diferencia, según sea el tipo de los créditos, es la que cubre esta cifra, igualmente que la cifra que también ha mencionado, que está incluida en los presupuestos del IRYDA y que es variable según la línea de crédito de que se trate. La diferencia hasta el 7 por ciento daría una cifra, que es la suma aproximada de esta partida que acaba de mencionar el portavoz del Grupo Socialista.

¿Por qué no hay más previsiones presupuestarias en relación con este tema? No es posible hacer unas previsiones si no están los datos concretos. Cuando se elaboró el presupuesto —retrocedamos en el tiempo al final del verano, cuando llegan a esta Cámara— no existía más acuerdo que el que se había adoptado y, por tanto, no había necesidad, desde el punto de vista de los créditos —me estoy refiriendo en concreto a ellos—, de poner estas consignaciones para subvencionarlos. Evidentemente, podrán adoptarse las medidas necesarias —y ya ha habido compromisos, por parte de voces autorizadas del Gobierno, en este sentido— si la situación climatológica sigue siendo difícil y el volumen de daños sigue incrementándose. En este caso, se adoptarán las medidas presupuestarias necesarias, desde el punto de vista Gobierno, para hacer frente a los problemas, como se ha hecho a lo largo de 1981, en cuanto a estas necesidades de fondo, para poder subvencionar los créditos sin que hubiera una previsión presupuestaria en 1981, porque cuando se discutían aquí, un año atrás, no era factible hacer dicha previsión.

Tenga la seguridad el señor Colino de que el Grupo Centrista está absolutamente identificado con lo que son los intereses de los agricultores y sus aspiraciones, que estará muy atento a ellas, y tenga la tranquilidad de que el Gobierno ya se ha comprometido a ello. El Grupo Centrista va a estar igualmente atento para que estas medidas se adopten en la medida —valga la redundancia— en que sean necesarias, estrictamente necesarias.

Ha comentado de pasada, dentro de la configu-

ración de los presupuestos del IRYDA, la no existencia de suficiente información sobre el presupuesto por programas y territorialización de inversión. Sin entrar a discutir si eso es así o no, sí recuerdo que en la fase de comisión informativa, cuando estuvo presente el representante del IRYDA, se habló de esos temas y se dieron unos datos, por parte del presidente del IRYDA, que constan en el «Diario de Sesiones» de la Cámara; están taquigráficamente tomados y mencionados, y existía también un compromiso de enviar más información —que no sé si ha llegado o no— al Grupo Socialista. Creo que en ello es factible profundizar.

Sí podemos anticiparle, en cuanto a esa preocupación por el tema de los préstamos en torno a que existan consignadas esas cifras, que no son tales. En los presupuestos por programas del IRYDA, que hemos podido manejar recabando la información suficiente, figura esta partida de crédito a cargo del Banco de Crédito Agrícola, lo que pasa es que está dentro del presupuesto por programas del IRYDA contando con esa cifra, pero es el Banco de Crédito Agrícola el que prevé una cifra de 9.000 millones de pesetas para esta finalidad. Igualmente hay otras del Departamento que completan hasta los 10.031 millones de pesetas a que hacía referencia el señor Colino.

En resumen y contestando a los dos grandes temas: Porque se hace ese esfuerzo presupuestario; porque se crece un 26 por ciento cuando los Presupuestos del Estado lo hacen en un 25, después de que el Presupuesto de 1981 sobre el de 1980 crece casi un 40 por ciento en el tema de inversiones para la agricultura —más de un 36 por ciento— y, sobre esa misma base, se sigue creciendo en un momento en que presupuestariamente es muy difícil atender a todas las necesidades que tiene el país y que demanda la solución de la crisis; porque entendemos que la coordinación está suficientemente garantizada con la que se practica a nivel central y con la que se puede hacer y se hace en niveles provinciales y territoriales, nosotros nos oponemos a estas enmiendas a la totalidad, apoyamos el texto del Presupuesto que ha enviado el Gobierno a la Cámara y dejamos también dicho que, evidentemente, cuando una situación de crisis existe como una realidad en la economía española es más difícil poder atender a los sectores más desfavorecidos —como nos gustaría a todos—, pero también es cierto y oportuno recordar y señalar —no vayan a ir estas palabras

en demérito de la agricultura española y de sus necesidades— que, como se ha dicho oportunamente en un artículo por el profesor Fuentes y otros economistas en un medio informativo español, la agricultura está aguantando y resistiendo mejor, no peor, que otros sectores económicos la situación de crisis; lo que ocurre es que estamos en una situación, comparativa al sector agrario, inferior en cuanto al punto de partida, que los otros sectores con relación a renta y demás, y es un objetivo absolutamente prioritario para el Grupo Centrista, con el cual estamos plenamente identificados, conseguir esa equiparación de rentas, por la que seguiremos luchando, y esperamos seguir haciéndolo, si el pueblo español nos sigue dando la confianza en las próximas elecciones, como así esperamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura y Pesca.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA (Lamo de Espinosa y Michels de Chamourcin): Señor Presidente, señoras y señores diputados, unas palabras nada más para completar la información, amplia y exhaustiva, que acaba de dar mi compañero de grupo parlamentario señor de la Torre, y en la cual me parece que ha respondido básicamente a todas las cuestiones planteadas por el señor Colino. Sin embargo, ha habido algunas afirmaciones, por parte del mismo, que yo creo que requieren o bien una ampliación de la contestación o bien la indicación de algunas cifras, que no serán muchas, no teman SS. SS., para centrar mejor la situación en que nos encontramos.

El señor Colino ha partido de una afirmación sobre la renta de los agricultores. Y quisiera señalar al señor Colino que tanto si mide la renta en términos de renta real «per capita» agraria, como en términos de renta agraria «per capita» en pesetas de cada año, observará que los interanuales crecen. Y crecen de modo muy sustancial. Concretamente, crecen el año 1978 un 10,5 por ciento —estoy hablando en renta real—; en 1979 un 12,8, en 1980 un 19,6 y en 1981 evidentemente bajarán; pero SS. SS. saben que aunque el Ministerio de Agricultura y Pesca trata de incidir en muchos temas que afectan a los agricultores, hay uno sobre el que, desgraciadamente, no tiene nin-

guna influencia, y es concretamente la situación climatológica.

Y si de ahí pasamos a un análisis, en términos de pesetas, de cada año, nos encontramos con que en 1976 —siempre en términos de renta «per capita»— creció el 24,5, en 1977 el 32,7, en 1978 el 23,3, en 1979 el 10,6, en 1980 el 16,2 y 1981 todavía no ha finalizado.

Tampoco cabe, cuando el señor Colino hablaba de los rasgos del sector agrario, hacer referencia al tema del índice de paridad. Ya le he dicho en numerosas ocasiones desde esta Tribuna que el índice de paridad es simplemente un indicador, que no tiene nunca como finalidad la de medir el crecimiento de las rentas agrarias, porque el índice de paridad lo único que pone en relación son dos índices de precios y, por consiguiente, no toma en consideración las cantidades que se producen en el caso de los índices de precios percibidos o las cantidades que se adquieren en el caso de los índices de precios pagados.

Por consiguiente, ningún valor tiene a los efectos de cálculo o de estimación de renta agraria, sino simplemente para dar un tono, una idea y una imagen de por dónde van unos precios u otros, pero hay que ponerlo siempre en relación con las cantidades producidas o las cantidades adquiridas.

El señor Colino ha dicho que este presupuesto no responde al contenido del programa de política agraria expuesto ante esta Cámara en junio de 1979. Yo quisiera rechazar sus palabras con algunas cifras. En el año 1978, el presupuesto del Ministerio de Agricultura (cuando aquel programa se presentaba se acababan de aprobar los Presupuestos del año 1979), en el año 1979, digo, estábamos en un presupuesto de 37.000 millones de pesetas. En el año 1982 estamos en un presupuesto de 88.000 millones de pesetas.

Pero hay más. Desde el año 1978 hasta hoy las cifras, por ejemplo, de algunos organismos muy concretos que llevan la mayor parte de la inversión del Ministerio, como son el IRIDA o el Icona, han pasado de 14.983 millones de pesetas, en el año 1978, para el IRYDA, a 42.669 millones en el año 1982; hay un aumento del 152 por ciento en nada menos que cuatro años. Y en el Icona se pasa de 4.650 millones de pesetas a 22.067 millones; es decir, hay un aumento del 236 por ciento. Aumentos que se corresponden concretamente con las directrices enunciadas ante esta Cámara cuando tuve el honor de exponer las acciones

directas que se iban a poner en marcha. Yo mencioné en aquel instante ocho puntos relativos a medidas de ámbito interior y cinco puntos a medidas de aproximación a la política comunitaria. Pues bien, si consolidamos las inversiones que para cada uno de estos puntos se presupuestaban en el ejercicio de 1978 y las comparamos con las que están incluidas en el Presupuesto de 1982, señor Colino, nos encontramos con los siguientes índices.

El punto primero, de las medidas de ámbito interior, era el apoyo a las explotaciones familiares agrarias. Pues bien, hemos pasado de un índice 100, en el presupuesto de 1979, a un índice 220; es decir, un aumento del 120 por ciento en tres ejercicios presupuestarios.

En el programa segundo, fomento de la ganadería ligada a la tierra y en zona de montaña, pasamos de un índice 100 a un índice 182; es decir, un aumento del 82 por ciento.

En el programa de aprovechamiento integral de aguas continentales, pasamos de cero en el ejercicio de 1979, a un presupuesto de 70 millones de pesetas en el ejercicio de 1982.

En el programa de industrialización agroalimentaria y comercialización por los agricultores, pasamos de un índice 100 a un índice de 248; es decir, un aumento del 148 por ciento en tres ejercicios presupuestarios.

En el programa correspondiente a adecuación de la calidad de la producción agroalimentaria a las crecientes exigencias de los consumidores, pasamos de un índice 100 a un índice 212; es decir, un aumento del 112 por cien en tres ejercicios presupuestarios.

En cuanto al programa de prioridad de las inversiones públicas de las zonas deprimidas del medio rural, pasamos de 8.205 millones a 25.994 millones; es decir, un aumento del 216 por ciento en tres ejercicios presupuestarios.

Y si de ahí nos vamos a los temas relativos a la política comunitaria, tengo también las cifras a disposición de S. S., las cuales crecen en el 473 por ciento en el programa primero; en el segundo, el 76 por ciento; en el tercero, el 978 por ciento; en el cuarto, el 471 por ciento; y en el quinto, el 171 por ciento. Por consiguiente, el programa de política de cambio se está cumpliendo y se está desarrollando, a lo largo de estos años, en función de las posibilidades presupuestarias.

El señor Colino ha puesto en cuestión la eficacia del Ministerio de Agricultura. Pues bien, si la

eficacia se mide, de algún modo, es en la cuantía de la inversión que cada año se atribuye al Ministerio y que éste ejecuta por funcionario. Nos encontraríamos así con los siguientes índices: En el año 1976, por cada funcionario del IRYDA la inversión era de 7.280.000 pesetas; en el Presupuesto de 1982, será de 12 millones. En el caso del Icona era de 2.300.000 pesetas; en el Presupuesto de 1982 será de 5 millones. Y en la Administración centralizada era de 2.044.000 pesetas, y será en 1982 de 3.650.000 pesetas.

Por tanto, tampoco se le puede imputar falta de eficacia al Ministerio, y lo único que yo puedo deducir de la intervención del señor Colino en esta parte del debate ha sido que al señor Colino no le gusta la estructura del Ministerio de Agricultura, porque hay excesivo número de organismos autónomos.

Bien, a mí sí me gusta que exista este número de organismos autónomos, no me parece excesivo. En todo caso, cuando él y su partido tengan la oportunidad de gobernar tendrán ocasión de cambiarlo.

Se ha referido, a continuación, a que lo que se ha enviado no es un presupuesto por programas, y alude a ello en función de que aparecen cifras consignadas para una misma finalidad, por ejemplo, en la Dirección General de Industrias Agrarias o en la de Producción Agraria y en el IRYDA. Yo creo, señor Colino, que eso es lo que demuestra claramente que estamos ante un presupuesto por programas. No estamos en un presupuesto en el cual el programa es realizado únicamente por un organismo, sino que existe un programa que es ejecutado por diversos organismos de modo coordinado, y eso es lo que sucede en cualquiera de los supuestos que su señoría ha mencionado, en los cuales, naturalmente, en unos casos —y concretamente puedo referirme a los de industrias agrícolas o comercialización— sólo se utilizan las cifras después de la Dirección General y se olvidan las del IRYDA. Unos actúan en comarcas del IRYDA, el propio Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, y otros, la Dirección General, para el resto de España.

Finalmente, una referencia a dos temas importantes: al FORPPA y a la situación de la sequía.

Con respecto al tema del FORPPA, dice que es imposible hacer previsiones. Es ciertamente muy difícil hacer previsiones, pero no es imposible, y buena prueba de ello es que se hacen previsiones en el marco de los planes financieros que, en vir-

tud de la Ley del FORPPA, aprueba el Gobierno. En el caso del plan financiero de 1980, por citar un caso concreto, se hicieron unas previsiones. Pues bien, señor Colino, la previsión del plan financiero de 1980 en materia de subvenciones, por ejemplo, era de 18.300 millones de pesetas, y el resultado del ejercicio en concreto fue de 17.907 millones de pesetas. Como ve, pese a la dificultad de hacer las previsiones, éstas se ajustaron prácticamente a la parte inicial prevista.

En el caso de las subvenciones para el año 1981, el plan financiero de 1981 preveía unas subvenciones de 17.856 millones de pesetas y normalmente el ejercicio se cerrará, en relación con aquella previsión, con 16.834 millones de pesetas. La única diferencia que encontrará, posterior a la formulación del plan, es la correspondiente al tema del algodón, para el cual se hizo también la correspondiente dotación de fondos.

Pero si las previsiones no van más allá, señor Colino, no es sólo por una cuestión que su señoría ha indicado, que es la variación climatológica, que evidentemente influye —ciertamente esto es así—, sino también por algo por lo que el señor Colino en muchas ocasiones ha manifestado su interés, que es el tema de las negociaciones de precios. La negociación de precios incidirá al final en la manera en que se distribuyan las subvenciones entre los distintos cultivos o las diferentes producciones; y todo ello, como es natural, con arreglo a la Ley de FORPPA.

Finalmente, el tema de la sequía. Es verdad que este presupuesto que estamos discutiendo, remitido a la Cámara con fecha 30 de septiembre, entra, por consiguiente, en un momento en que estamos saliendo; teóricamente se acaba de terminar en ese momento lo que son las campañas agrícolas 1980-1981 y empiezan las campañas agrícolas 1981-1982. La sequía ha incidido fuertemente sobre la campaña agrícola 1980-1981, y a ella el Gobierno ha ido aplicando diferentes medidas de apoyo para los agricultores. Lo que tenga que hacerse en relación con el ejercicio 1981-1982 deberá hacerse a partir de ahora, y por eso no puede estar consignado en los presupuestos de este año que estamos aprobando en este instante. Tendrán que ser, evidentemente, medidas extraordinarias si extraordinaria continúa siendo la situación de sequía por la que estamos atravesando en este momento.

En cualquier caso, yo quiero decirle al señor Colino que aunque yo, como Ministro de Agri-

cultura y Pesca, no haya ido a la Comisión de Agricultura a informar sobre las medidas adoptadas en el mes de abril de 1981, si quiero decirle que he remitido hace escasos días un informe a la Comisión de Agricultura sobre esta materia conteniendo —señor Colino, este es el informe, está a su disposición— la valoración de los daños producidos en los cultivos y ganadería por la adversa climatología y los créditos concedidos por tal causa, todo ello en función de lo que el acuerdo del 28 de abril de 1981 motivaba, y era que el Gobierno en el mes de septiembre del presente año informara a la Comisión de Agricultura del Congreso sobre una valoración de daños y las medidas a aplicar, y también que el Gobierno presentara a esta Comisión una relación detallada donde se reflejaran, provincialmente y por estratos de explotaciones agrarias, los montantes de créditos concedidos.

Eso es lo que ha hecho el Gobierno remitiendo ese informe a la Comisión de Agricultura para su examen, y yo estoy dispuesto a acudir a esta Comisión a discutir ese informe en el momento que lo estime oportuno.

Hechas estas observaciones, no me queda sino rechazar completamente las afirmaciones finales de la intervención del señor Colino, en las que presentaba los presupuestos del Ministerio de Agricultura como fruto de la descoordinación o de la confusión o que no afrontan los riesgos del sector agrario. Es precisamente todo lo contrario. Es un presupuesto fruto de la coordinación interna del Ministerio, que asigna a distintas unidades, en razón de la mayor eficacia del gasto público, distintas funciones, aunque estén todas ellas incluidas en un mismo programa. No hay ninguna confusión más que la que probablemente pueda tener el señor Colino. Finalmente, afronta los riesgos del sector agrario, aunque no ciertamente los de la sequía de la campaña 1981-1982 que, como bien sabe el señor Colino, en términos agrarios, es una campaña que no ha hecho más que iniciarse.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Colino.

El señor COLINO SALAMANCA: Señor Presidente, una serie de rectificaciones a las afirmaciones tanto del señor diputado de UCD como

del señor Ministro y, empezando por el final, sobre el tema de la sequía.

Yo insisto en lo que he dicho hace un rato en el sentido de que los acuerdos que se tomaron en esta Cámara en el mes de abril hay que tomarlos como se aprobaron, y dice que «el Gobierno, en el mes de septiembre del presente año...», comienza así. Estamos en el mes de noviembre. Su señoría dice que ha remitido a la Cámara un informe, y yo me lo creo, pero estamos en noviembre, no en septiembre. Si la Comisión de Agricultura hubiera visto ese documento en el mes de septiembre, la opinión seguramente no habría variado, pero por lo menos se habrían podido hacer sugerencias en el mes de septiembre, ahora las vamos a hacer posiblemente en el mes de diciembre, cuando ya la sequía lleva por lo menos otros tres meses de incremento sobre la situación de septiembre.

En segundo lugar, yo he dicho que en el acuerdo de la Cámara —y lo voy a leer también—, en el cuarto punto se decía que «el Gobierno estudie y dicte las medidas oportunas donde se contemplen, como complemento a las medidas adoptadas, ayudas a fondo perdido para aquellas explotaciones que traía el punto cuarto». Yo digo que no sé en dónde están en el presupuesto del Ministerio de Agricultura los acuerdos tomados en el mes de abril de 1981. Yo no he visto en el presupuesto dónde están las ayudas a fondo perdido.

Citaba igualmente que había un punto 10 que decía lo siguiente: «El Gobierno acelerará las inversiones públicas en curso y realizará planes de inversiones especiales en las zonas más afectadas en coordinación con programas, como, por ejemplo, el del Plan de Urgencia de Andalucía. El Gobierno, a través de los Ministerios correspondientes, presentará en el mes de septiembre informe puntual de las acciones realizadas en la Comisión o Comisiones del Congreso más idóneas».

Yo insisto en que esto no se ha realizado; en consecuencia, algunas de las medidas que tomamos aquí en abril de 1981 no se han cumplido y por eso mi incógnita, ni sensación de que no se me contesta en relación con el tema de la sequía, y creo que no se han hecho las previsiones necesarias.

Se ha hablado aquí, por ejemplo, en relación con los temas de regadío, que hacer obras de regadío si luego no llega el agua a los embalses no sirve para nada. No, señor La Torre, precisamente lo que hay que hacer es ser previsor. Es posible

que en este momento no tengamos agua, pero usted hoy construye los 35 embalses que hay en marcha en la zona del Guadalquivir y es posible que la situación que este año estamos padeciendo no se reproduzca en situaciones venideras. Lo que puede hacer es que la sequía de años posteriores no nos afecte tan gravemente como nos está afectando este año precisamente en el sector agrario.

En relación con las transformaciones en regadío, yo lo que he dicho es lo que dicen informes del propio IRYDA, de que ustedes tenían una previsión para 1981 de 60.000 hectáreas; usted me ha dicho, por otra parte, que no han sido 60.000, que han sido 40.000, que todavía es mucho más baja de la cifra prevista para 1981, y que la previsión para 1982 del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario decía 77.352, y se localizaban de una forma regional esas inversiones.

Yo lo que he dicho aquí es que en el presupuesto del IRYDA de este año no aparece por ninguna parte la distribución territorial de estas obras de regadío, y que eso es lo que he expresado y en relación con lo cual nosotros no podemos aprobar un crédito de 16.000 millones de pesetas que no sabemos cómo se va a emplear en transformaciones en regadío, ni dónde, ni con qué carencia.

El señor Ministro ha dicho que a mí no me gusta el Ministerio de Agricultura. No es que no me guste a mí, es que tampoco le gusta a usted, porque ustedes son los que tienen un compromiso aquí en la Cámara de presentar a 31 de diciembre un nuevo Ministerio que se va a llamar Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luego estamos totalmente de acuerdo con ese Ministerio en que no nos gusta cómo funciona.

En cuanto a organismos autónomos, lo que he dicho y vuelvo a decir es que no se justifica la proliferación de organismos autónomos más que por una labor de especialización, y resulta que esa labor de especialización no se comprueba en el Presupuesto, y ha puesto ejemplos. Yo no entiendo que haya una Dirección General de Industrias Agrarias que tenga una dimensión en los Presupuestos o que tenga en inversiones presupuestos menores que otros organismos que no están especializados precisamente en esa tarea; que exista una Agencia de Desarrollo Ganadero que tenga menos funciones que las de un organismo especializado o que una Dirección General de la Función Agraria, o que en formación profesional,

que es la razón, el «leitmotiv» del Servicio de Extensión Agraria; que la Dirección General de Capacitación tenga menos atribuciones en el Presupuesto que las que pueda tener el IRYDA. Sigo insistiendo en que los organismos autónomos están justificados en su nacimiento en el caso del Ministerio de Agricultura, y no se justifica que, desgraciadamente, el presupuesto en que usted cree es un presupuesto por programas, sino que es la simple yuxtaposición de los presupuestos de este año para integrar una especie de presupuestos por programas, y la prueba está en que en años pasados ustedes no tenían integrados los organismos autónomos en el presupuestos por programas y que se han limitado a sumar al Presupuesto de la Administración centralizada.

En cuanto al tema de la coordinación, yo le he puesto de manifiesto varios ejemplos a partir de los programas que usted nos presenta en el presupuesto por programas, y la falta de coordinación no es algo que diga yo, sino que lo dijeron en la Comisión de Presupuestos los propios directores generales, y entre ellos había algunos que no sabían que se coordinaban partidas para industrias agrarias en el presupuesto del IRYDA, o que se coordinaban presupuestos para el tema de la comercialización en el presupuesto del IRYDA, y esto lo han dicho los propios directores generales cuando comparecieron en la Comisión de Presupuestos. Como se ve, la descoordinación no es algo que sólo me afecte a mí, sino que parece que está afectando de alguna manera al equipo directivo del Ministerio de Agricultura.

En conclusión, lo que se pone de manifiesto con esta enmienda a la totalidad es, primero, que esa palanca, que es la política de estructura, no está funcionando como debiera funcionar, y hemos puesto algunos ejemplos en materia de regadío, en lo que se refiere a industria y en materia de comercialización, que son temas que, según su discurso de julio de 1979, iban a ser verdaderamente potenciados.

En segundo lugar, que la política de rentas, y en general la política de producción y orientación de producciones, no se plasma en el presupuesto del FORPPA; que el presupuesto del FORPPA, que se eleva, repito, a 310.000 millones de pesetas, debería venir a esta Cámara con un poquito más de claridad respecto a cuáles son los sectores y las orientaciones que a través del presupuesto del FORPPA se van a hacer.

Porque sí comparto la tesis de que es difícil sa-

ber cuáles van a ser las variables de productividad en el año 1982, pero ustedes están dando hoy algunos criterios por los cuales este año el presupuesto del FORPPA pasa de la cifra de 1981 a la de 1982. ¿En razón de qué ustedes han solicitado del Ministerio de Hacienda un aumento en el presupuesto del FORPPA si no saben cuáles van a ser las líneas orientadoras del presupuesto del FORPPA? Si las saben, acompáñenlas con el presupuesto para que tengamos información todos los grupos parlamentarios.

En definitiva, nosotros pensamos y seguimos manteniendo que los presupuestos del Ministerio de Agricultura adolecen, por una parte, de defectos en cuanto a sus propios presupuestos, que no son presupuestos por programas, y, por otra parte, que no se han hecho los esfuerzos necesarios de estructura de política de rentas y orientación de la producción.

Para terminar, tan sólo dos palabras más. He hablado de una serie de índices. Se ha dicho también en este Pleno que los índices no significan nada; significan algo si usted me dice la cifra de partida y la cifra en que estamos ahora, pero usted me dice que han pasado de 70 —y se refería concretamente al de las aguas continentales, en el que se había pasado de cero a 200—; pero si usted me dice que han pasado 2 pesetas a todo el montante que usted quiera, el problema está en que los índices no demuestran nada; lo que hace falta son las cifras y, en cualquier caso, lo que habría que tomar en cuenta sería el punto de partida, porque si el sector agrario ha estado desasistido por parte de la Administración pública, el que contemplemos presupuestos con algunos índices elevados en alguno de los programas no significa por sí solo que estemos prestando el apoyo necesario y pagando el precio que usted decía en su discurso por el sector agrario.

Por todas estas razones, mantenemos la enmienda y solicitamos la devolución del Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Agricultura y Pesca tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA (Lamo de Espinosa y Michels de Chapourcin): Señor Presidente, para contestar a las observaciones que acaba de formular el señor Colino.

En primer lugar, en relación con el tema de la sequía, tiene razón el señor Colino en que ha habido retraso; yo mismo he dado la fecha en que se ha enviado el documento, pero tendrá que reconocer también conmigo el señor Colino que lo importante, más que la fecha, es la información.

En segundo lugar, para poder remitir información, a ejercicio cerrado, de campañas agrícolas, era preciso enviarla con posterioridad al 30 de septiembre, y eso también lo conoce perfectamente el señor Colino.

En relación con la sequía, se han hecho las provisiones necesarias para el ejercicio 1980-1981, y ya he indicado muy claramente que se harán las que sean precisas para el ejercicio 1981-1982, en función de la evolución climatológica.

Dice el señor Colino que a mí no me gusta el Ministerio de Agricultura en su actual estructura. Evidentemente, creo que debe transformarse en la forma en que se aprobó en esta Cámara. Lo que he dicho es que al señor Colino no le gusta la proliferación de organismos autónomos en el Ministerio de Agricultura, y ahí tengo que decirle que me mantengo absolutamente dispar de su opinión, porque creo que es conveniente el que existan esos organismos especializados.

Lo que ocurre, quizá, es que el señor Colino no ha examinado el presupuesto con suficiente atención y hay cosas que confunde. Por ejemplo, cuando indica que hay descoordinación porque la Dirección General de Producción Agraria tiene unas partidas en materia de ganadería y la Agencia de Desarrollo Ganadero también las tiene. Pero, señor Colino, la Agencia de Desarrollo Ganadero es un organismo autónomo de la propia Dirección General de Producción Agraria, no de otro departamento ni de otra Dirección General distinta!

Por lo que se refiere a la actuación en inversiones, comercialización e industrialización, ya le he indicado muy claramente que responde a una unidad de programas, aunque con organismos ejecutores distintos, y eso me parece que es mucho más correcto que lo que existía con anterioridad, y esa es precisamente la filosofía de un presupuesto por programas.

Hay una observación, y es que me imputa y que yo haya dicho que en el caso concreto de las aguas continentales se ha pasado de cero a un índice. No, en ese caso concreto, precisamente porque estaba hablando de una base de partida que era cero —revise las actas taquigráficas del «Dia-

rio de Sesiones»—, no he hablado de un índice, he hablado de 70 millones de pesetas. He dicho que se pasaba de cero a 70 millones, no de cero a un índice 70, lo cual, evidentemente, hubiera sido un error de extrema gravedad si lo hubiera dicho así.

Señor Colino, ninguna de las razones a que S. S. ha aludido justifican el voto contrario a este presupuesto. Primero, porque la palanca de la política de estructuras sí está funcionando, sí se ha incrementado en una cantidad importante —ya lo he dicho antes y no lo voy a repetir ahora—, precisamente para atender la política de regadíos, tanto públicos como privados —S. S. no ha aludido a los privados—, a los temas de la industria y los relativos a comercialización.

En materia de política de producción es claro que se plasma en el FORPPA y, evidentemente, se saben las líneas orientadoras.

Preguntaba S. S.: ¿Es que se va a reducir la subvención al aceite de oliva? Evidentemente, no. Hay un decreto que dispone que esa es una política estructural de mantenimiento de una producción tan importante como la del aceite de oliva. Ahora bien, la cuantía definitiva que al final se atribuya por kilo de aceite de oliva será algo que se determine en el marco de las negociaciones de precios.

Por consiguiente, el Gobierno sí está incluyendo en el presupuesto el precio político que debe pagarse para el mantenimiento de una agricultura eficaz y de unas mejores rentas para los agricultores, señor Colino.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Se someten a votación conjunta las enmiendas coincidentes de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialista Vasco respecto de la sección veintiuno.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 288 votos emitidos; 119 favorables; 164 negativos; cinco abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialista Vasco respecto de la sección veintiuno, correspondiente al Ministerio de Agricultura y Pesca.

Sección veintidós, Ministerio de Economía y Comercio. Sección 22

Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT SOLE: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, estamos, al discutir la actividad del Ministerio de Economía y Comercio en su vertiente presupuestaria, ante una discusión que no tiene una vertiente estrictamente sectorial dentro de la actividad del sector público, sino que tiene repercusiones sobre el conjunto de la actividad del sector. El Ministerio de Economía y Comercio es, para entendernos, un Ministerio horizontal, no un Ministerio vertical; es decir, que la actividad del propio Ministerio se refleja en el conjunto de la actividad del sector y no exclusivamente en un área determinada.

Pues bien, este Ministerio de Economía y Comercio, que en estos momentos debería jugar un papel importante de cara a planear y a discutir los objetivos de la economía española, tiene unos recursos muy escasos, especialmente en lo que se refiere estrictamente a su vertiente de economía, y unos recursos más abundantes con respecto a su vertiente comercial.

Y en este canto a la importancia de la asignatura no es un canto estrictamente formal, sino que yo creo que debería recoger el apoyo del Ministro, porque estamos ante unas necesidades de previsión y ordenación muy importantes en nuestro país. Pero una de las primeras cosas que sorprende al estudiar los presupuestos del Ministerio de Economía y Comercio es que, incluso, los propios programas presentados tienen un nivel de detalle y de elaboración que son insuficientes, y esto nos choca precisamente en un Ministerio que debería tener un nivel de tratamiento de sus propios programas bastante amplio, bastante trabajado, bastante de acuerdo con la propia profesionalidad de la mayor parte de los funcionarios. Y esto nosotros lo atribuimos en gran parte a los problemas de falta de recursos y de medios personales, como aparece en alguna de nuestras enmiendas parciales.

Aparte de ello, no estamos de acuerdo con los objetivos de algunos programas. Por ejemplo, en política comercial y cooperación económica consideramos que el objetivo de la promoción de las exportaciones en un 2 por ciento en los mercados exteriores es un objetivo que no es realista, aunque ya nos gustaría que se llegara a este nivel.

El programa de planificación y previsión eco-

nómica carece de medios para realizar los objetivos a él asignados y, al mismo tiempo, los objetivos son pobres. Quiero señalar que el global del programa comprende 277 millones, y para que se vea en su detalle hay 60 millones para la Dirección General de Planificación, 60 millones para la Dirección General de Política Económica y Previsión y 60 millones para Ordenación Económica. Es cierto que el propio Ministerio tiene otros cauces para el estudio, para el análisis de la situación económica, y no son exclusivamente las Direcciones Generales a través de la Subsecretaría, pero lo que es evidente es que los recursos de estas tres Direcciones Generales que he citado parecen absolutamente insuficientes para afrontar las tareas de previsión, planificación y ordenación que el país requiere en estos momentos.

Estas actividades de previsión y planificación insuficientemente desarrolladas quedan puestas de manifiesto, incluso con el propio informe económico-financiero de los Presupuestos, en el que el Gobierno nos presenta un informe económico-financiero de una gran pobreza formal y que no considero que esté suficientemente trabajado de cara a las necesidades del país.

En realidad, estamos ante un retroceso de lo que era el Ministerio de Economía y Comercio en el momento de su creación, estamos, dada la insuficiencia de recursos para la parte de economía, tendiendo a conformar un Ministerio de Comercio clásico.

Pues bien, las actividades estrictamente comerciales, de orientación comercial, nos parece que también tienen elementos de crítica, y, por tanto, consideramos que las funciones de protección al consumo deberían tener muchos más recursos. A este punto nosotros hemos planteado una enmienda parcial, pidiendo más recursos, porque los problemas de protección al consumo han aparecido en esta Cámara en relación con el síndrome tóxico como algo extemporáneo, cuando en realidad tendría que haber una protección al consumo sistemática, coherente, desarrollada y con muchos recursos, puesto que las causas que generan problemas como los del síndrome tóxico son profundas. Por un lado, tenemos el problema en sí del afán de lucro, que tiende a ser modificado por las normas sociales, tenemos la herencia del franquismo con la falta de control, y tenemos en estos momentos los problemas de degradación que crea la crisis económica, la existencia de una economía paralela y la existencia de una zona de

actividades marginales que escapan al control y que, si ya son graves desde un punto de vista general, más lo son en los aspectos que tienen que ver estrictamente con el consumo privado.

Otro de los puntos que nos parece insuficiente, reformable, en el Ministerio de Economía y Comercio, son todas las actividades relacionadas con el Instituto Nacional de Estadística. La actividad del Instituto Nacional de Estadística para este año, en función del debate presupuestario de 1981, tenía que llegar a una serie de informaciones regionalizadas que no se nos han presentado. Es decir, existe la necesidad de adaptar toda la actividad del Instituto Nacional de Estadística, a través de una nueva estadística, a través de una discusión profunda, y esto no queda en estos momentos reflejado en los pocos cambios de los criterios que aparecen en el presupuesto del Ministerio de Economía y Comercio.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Egea.

El señor EGEA IBÁÑEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, con brevedad, incluso mayor, creo, que el diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, voy a defender el proyecto de ley que se presenta y a rebatir los argumentos a favor de la enmienda.

Creo que en un principio se ha dicho que el Ministerio estaba dotado de recursos escasos. Exactamente, esta es la definición que concuerda con nuestro punto de vista. Estamos ante recursos escasos y hay que utilizarlos en finalidades alternativas. Estamos totalmente de acuerdo con esta definición, porque creo que es la que justifica que determinados programas no tengan los medios con los que todos quisiéramos que contaran.

En lo referente a que los programas no han sido claramente delimitados, no estamos de acuerdo. Creemos que faltan Memorias en algunos programas, pero, ciertamente, en las fichas del presupuesto pueden recogerse los objetivos y las actividades a llevar a cabo. En los presupuestos por programas es donde aparecen reflejadas —me parece que en los tomos I y II (rojos) de los presupuestos— los datos necesarios, hay un resumen del personal, de las actividades, de la financiación, etcétera. Creemos, pues, que, de un análisis detenido y detallado de los datos que aparecen tanto en el tomo I como en el II de los presupuestos, puede obtenerse una idea exacta de cuáles van a

ser los objetivos y las actividades que se van a seguir en los programas.

No estamos de acuerdo con los criterios expuestos acerca del programa de política comercial y de promoción de las exportaciones, y me parece que en este punto, el desacuerdo no sólo es del Grupo Parlamentario Centrista, sino que también coincide el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que por uno de sus diputados ya fue expuesto en Comisión que se necesitaban mayores fondos, expresados a través de una mayor contratación de personal, para sus actividades en el exterior.

Ciertamente, creemos que conseguir unos mayores niveles de exportación, no sólo en términos físicos, sino en términos reales, desde el punto de vista monetario, es muy importante. Han sido bastantes los artículos que se han escrito expresando que unos niveles elevados de desarrollo van a suponer una importación, fundamentalmente de bienes de capital, muy importante para permitir ese desarrollo y por consiguiente, la necesaria dotación de bienes de equipo a la industria. En consecuencia, estimamos que incrementar las exportaciones es un paso fundamental no sólo para mantener la factura petrolera, sino incluso para financiar las importaciones de bienes de capital, ahora que se está procediendo a una reestructuración industrial, que es fundamental si queremos desarrollar el país a niveles superiores a los que estamos teniendo ahora.

Referente a las dotaciones para la política de planificación y previsión, consideramos que los objetivos que tiene, en el sentido de coordinar las inversiones públicas, es un objetivo bastante ambicioso, en tanto en cuanto todos tenemos conciencia de lo que supone la inversión pública. Y en este sentido, en repetidas ocasiones, cada vez que se habla de los Presupuestos Generales del Estado, se dice que la inversión pública va a servir de arrastre a la inversión privada o que va a cebar la bomba, en términos keynesianos, y solamente el objetivo de planificar y coordinar la inversión pública y establecer la regionalización de ésta es un objetivo bastante ambicioso por parte de este programa, junto al de la previsión coyuntural de la economía. Además, hemos tenido ocasión en el Congreso, y en la Comisión de Economía, de que se explicara cuál era la situación del programa de inversiones públicas por el Comité de Inversiones Públicas.

Finalmente, creemos que debe dotarse con más

dinero a la protección al consumo y también a otras actividades o programas dentro del Ministerio, pero los recursos, volvemos a repetir, como se ha dicho al principio por el representante del Grupo Parlamentario Comunista, son escasos.

En consecuencia, tenemos que oponernos a la enmienda y solicitar el voto favorable de SS. SS. para el proyecto de ley que se está debatiendo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT I SOLE: Señor Presidente, señores diputados, realmente no comprendo la posición del Grupo Parlamentario de UCD, porque viene a darnos la razón en el sentido de que los recursos son escasos, y cuando digo esto no hago una cita de Robins, sino que estoy explicando la situación de funcionamiento del Ministerio.

Precisamente nuestra enmienda señala la parquedad de los recursos para temas como el programa de inversiones públicas. Yo no he discutido en absoluto la necesidad del programa de inversiones públicas, la necesidad de la previsión; al contrario, he explicado que considero que estamos ante una situación en que este Ministerio, en lugar de ser un Ministerio de Economía y Comercio, se está transformando exclusivamente en un Ministerio de Comercio por el nivel de recursos que dedica a los temas económicos. Yo creo que esto está claro. El resto es una utilización capciosa de la situación clásica de Robins.

Sobre las exportaciones, todos estamos de acuerdo en que hay que aumentarlas; la discusión está en el cómo. Nosotros creemos que el aumento de las exportaciones no pasa por un aumento burocrático, como aparece aquí, sino por otras medidas. Este es el tema fundamental de la discusión.

Con respecto a otros elementos a los que me ha referido, no ha habido por parte de UCD respuesta alguna a mis argumentaciones. He querido ser breve no porque considerara que el tema del Ministerio de Economía y Comercio no fuera grave e importante, sino porque consideraba que, señalando los rasgos esenciales, podría comprenderse ya cuál era la posición de mi grupo; pero el tema de la función que tiene que realizar el Ministerio de Economía y Comercio, desde el punto de vista de previsión y planificación, en estos momentos no está resuelto ni mucho menos, ni lo está el

tema de planificación regional ni el de inversiones públicas, ni una serie de aspectos que requerirían unos recursos más elevados que los que figuran. Yo creo que en esto hay plena coincidencia; lo que pasa es que el señor Egea no está dispuesto a admitir mi enmienda; estamos perfectamente de acuerdo. Simplemente, pediría mayor coherencia al señor Egea.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Egea.

El señor EGEA IBAÑEZ: Señor Presidente, yo creo que, al final, la discusión ha venido a centrarse en el problema de los recursos escasos, que ha dicho el representante del Partido Comunista que existían. Nosotros hemos afirmado que es cierto, y para eso se administran, a través de los Presupuestos Generales del Estado, en sus finalidades alternativas. Usted puede tener juicios de valor en que tiene que aplicarse más a unos programas que a otros. Estamos en el terreno de juicios de valor. En este campo nosotros hemos aplicado un criterio y usted tiene otro distinto y, obviamente, el Grupo Parlamentario Centrista cree que el suyo es mucho mejor que el del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la sección veintidós.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 289 votos emitidos; 119 favorables; 166 negativos; cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la sección veintidós, correspondiente al Ministerio de Economía y Comercio.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, como se ha podido comprobar, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha votado favorablemente esta enmienda de totalidad, y ello porque consideramos que no es un argumento decir que los recursos son escasos. En principio,

siempre son escasos; pero lo que ocurre es que están mal empleados en este caso.

Ha hecho mención el señor Egea a una enmienda concreta planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros lo que no acabamos de comprender, y no se nos ha explicado en Comisión ni se nos explica ahora, es, por ejemplo, cómo se va a mejorar la gestión del Ministerio de Economía y Comercio en un tema tan importante como el de la defensa de las exportaciones españolas en el extranjero; ni si quiera se nos ha explicado lo que ha ocurrido en la Agregaduría Comercial de la Embajada de España en París.

En cuanto a la instrumentación de fondos y organización del Instituto del Consumo, el Grupo Socialista tiene sus propias enmiendas, que defenderá en su momento.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Sección veinticuatro, Ministerio de Cultura.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Bofill.

El señor BOFILL ABEILHE: Señor Presidente, señorías, voy a defender la enmienda a la totalidad, que se presenta a la sección veinticuatro por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y esta enmienda a la totalidad de estos Presupuestos se basa, fundamentalmente, en la carencia de una política de cultura por parte de dicho Ministerio.

Indudablemente, en la Memoria de los Presupuestos se observa una serie de buenos deseos, de principios, de criterios que, luego, sin embargo, están faltos de fundamento a la hora de estudiar los Presupuestos que deben de ser el sostén y lo que dé realidad y cuerpo precisamente a esa serie de principios y deseos que podrían, «grosso modo», suponer una orientación a la política cultural.

Nosotros, cuando el señor Ministro informó en la Comisión de Cultura, después de asumir la responsabilidad de dicho Ministerio, expresamos allí nuestras esperanzas y nuestra coincidencia con una serie de criterios que el señor Ministro expuso dentro de aquella larga exposición de criterios que, según él, iban a orientar su política cultural. En aquella ocasión, nuestro portavoz en la Comisión de Cultura, Rafael Ballesteros; el representante de la Minoría Catalana, don Salvador Clotas, y el propio Grupo Parlamentario Comu-

nista, a través de la señora Brabo, expusieron esas esperanzas y complacencias. Sin embargo, para nosotros es una frustración ver que en estos Presupuestos no se tienen en consideración las cantidades y las partidas necesarias para llevarlos a efecto.

Yo me atrevería a citar en este momento aquí unas palabras del señor Ministro que nos anunciaba que él se veía en aquel momento, para desarrollar esa política cultural, con la limitación que le fijaban unos presupuestos de Cultura que estaban elaborados por su antecesor en el cargo.

Unos aspectos más importantes que resaltó, especialmente, en aquel momento, y que son importantes a la hora de demostrar las limitaciones que tiene este presupuesto para el desarrollo de una política cultural, se recogen en aquellas palabras que textualmente están en el «Diario de Sesiones». El señor Ministro de Cultura decía en aquella sesión informativa que existía un desequilibrio entre los gastos corrientes del Ministerio y sus posibilidades de acción e inversión. Seguidamente añadía, además, que su primer objetivo iba a ser dimensionar adecuadamente el Ministerio de Cultura, especialmente en los medios de personal, para cumplir unos objetivos y descargar a su presupuesto del exceso de gastos de personal que tenía en aquel momento y que sigue teniendo.

Digo que es importante para entender nuestra posición porque resulta que en este presupuesto, señor Ministro, ocurre todo lo contrario. No se han disminuido, precisamente, los gastos de personal, sino que, al contrario, han aumentado, y lo que es más grave, se ha venido a reiterar el criterio que existía en el anterior presupuesto en el sentido de que las inversiones reales siguen disminuyendo en realidad, con un fuerte aumento que experimentan los gastos de personal, si usted quiere, señor Ministro, las operaciones corrientes.

Para que baste un ejemplo, quiero decir que existen dedicados a inversiones reales 6.500 millones de pesetas en este presupuesto, y para llevar a cabo esta inversión real se gastan 13.000 millones de pesetas en gastos de personal y de bienes de servicios. Es decir, por cada inversión de una peseta se utilizan dos pesetas en gasto de personal. Esto viene precisamente a contradecir aquel espíritu, aquel interés que usted expresó cuando defendía lo que iban a ser los criterios programáticos de su política.

Además tenemos que resaltar que en estos presupuestos de la sección 24 nos encontramos con que ha habido un aumento global del 16,9; es decir, exactamente eso responde a 4.381 millones de pesetas con respecto al presupuesto anterior, de los cuales, 3.718 millones de pesetas, es decir, un 20,2 por ciento, se dedican a operaciones corrientes. Y a operaciones de capital que, en definitiva, son las que dan la dimensión de la capacidad de gestión política, se dedican exclusivamente 662 millones de pesetas, lo que supone un 8,8 por ciento. Si se tiene en cuenta, además, que de esas operaciones corrientes, el 39 por ciento se dedica a gastos de personal, verá el señor Ministro que es cierto lo que decía anteriormente cuando señalaba que en vez de disminuir aquellos gastos de personal que él nos anunció que iba a ser un objetivo prioritario, lejos de esta realidad nos encontramos con otra, que es precisamente el aumento de estos gastos con el deterioro en cuanto a las posibilidades de concretar la política a que más adelante me referiré.

Nosotros, los socialistas, pensamos que en un momento en que precisamente nos encontramos con una crisis de carácter económico, no estaría de más reforzar aquellos aspectos inversionistas que fomentaran puestos de trabajo y, sobre todo, que pudieran concretar un salario social que compensara la grave situación por la que atraviesan sectores importantes de nuestra sociedad. Indudablemente, en este aspecto cabría distinguir y analizar, fundamentalmente, en este momento, porque creemos que es el lugar y el tiempo adecuado, la capacidad de gestión que tiene el Ministerio de Cultura. No existe una capacidad de gestión. Si tenemos en cuenta los últimos datos que se nos han facilitado en cuanto a la ejecución del gasto en el mes de agosto, vemos que en todo lo que hace referencia a personal, bienes y servicios, y transferencias corrientes para aquella fecha del mes de agosto, se habían ejecutado el 47,46 por ciento. Sin embargo, en lo que hacía referencia a inversiones reales y transferencias de capital, solamente se había ejecutado un gasto del 21,5 por ciento. Es decir, las inversiones reales en agosto, según últimos datos que constan publicados y han sido facilitados a todos los señores diptuados, eran del 15 por ciento exclusivamente, y las transferencias de capital, el 36 por ciento.

Esto nos lleva al Grupo Parlamentario Socialista a una conclusión, y es que la política que se hace en el Ministerio de Cultura es una política

de personal exclusivamente, mientras que no existe una capacidad de gasto, porque, como hemos visto, la ejecución de este gasto en el mes de agosto no llegaba ni siquiera al 25 por ciento de lo presupuestado.

Creo que el señor Ministro se encuentra en una grave dificultad, y es que su Gobierno, de alguna forma, lo ha convertido, estrictamente, en un jefe de personal de una pagaduría, que se dedica a cumplir con aquellos funcionarios de las instituciones del antiguo régimen que desaparecieron. Esto es una realidad.

Quiero expresar personalmente, y en nombre de mi grupo, que no dudamos de las buenas intenciones del señor Ministro, pero nos encontramos con esta realidad cotidiana. Esta falta de capacidad de gestión es palpable, incluso grave, en uno de los servicios más importantes, el servicio 03, en el que precisamente el 87 por ciento de la inversión de los presupuestos se encuentra en dicho servicio. En este momento, en los presupuestos que estamos debatiendo, hay una partida consignada de 5.522 millones de pesetas, frente a los 4.666 del año anterior, lo que supone el 82 por ciento de la inversión del Presupuesto.

Pues bien, el estado de nuestro patrimonio, que corresponde cuidarlo a dicha Dirección General, es lamentable. Usted lo conoce tan bien como nosotros —lo reconoció en su intervención— y las cosas no han cambiado. Posiblemente por la falta de capacidad en la ejecución del gasto, las cosas se siguen manteniendo igual que estaban. Sabe usted perfectamente que no existe todavía un sistema de seguridad que acabe con el expolio de nuestros bienes patrimoniales; sabe usted el deterioro por el que atraviesa en este momento todo lo que es legado de nuestra cultura material; sabe usted que las catedrales de León, Santiago y Cádiz se encuentran en una situación lamentable, y que los sistemas de seguridad no han respondido en el caso de la catedral de Toledo y en otra serie de centros que, por su importancia, suponen un legado cultural digno de ser tenido en cuenta, para evitar esta fuga de lo que son preciados objetos de nuestro patrimonio.

Pero si esto ocurre a nivel de la Dirección General (y voy a pasar a detallar otra serie de aspectos importantísimos para nuestro desarrollo cultural desde el punto de vista social), quisiera hacer hincapié en que no basta, señor Ministro, que su director general, el señor Tusell, desarrolle, con un claro afán de notoriedad, una política de

oposición a una serie de pancartas publicitarias que defienden la libertad, sino que debía mostrar el mismo celo para que ese patrimonio artístico no fuera destrozado por la permanencia —me atrevería a decir desordenada— durante muchos años. Nos hubiera gustado que el señor Tusell hubiera mostrado ese mismo celo, y nos gustaría conocer por boca del señor Ministro su posición respecto a este tema tan importante, en el transcurso del debate que estamos manteniendo.

Además, nos encontramos con que esta explotación sigue siendo posible porque, pese a haberse recogido en presupuestos anteriores unas cantidades para realizar un inventario de nuestra riqueza artística, ese inventario todavía no se ha realizado. Tampoco hemos visto llevar a la práctica una política de enriquecimiento de ese patrimonio. Vamos con pena, señor Ministro, que en estos Presupuestos se utilizan 140 millones de pesetas para la compra de obras de arte, mientras que existen cantidades más elevadas para gastos de representación y dietas, dependientes del propio señor Ministro.

Nuestra política bibliotecaria sigue siendo escasa, deficiente, y lamentablemente nos encontramos en una situación comparable a los países del Tercer Mundo. Vemos que no se abren centros bibliotecarios; que los pocos centros bibliotecarios y el acumulo de volúmenes que se realiza tienen una orientación obsoleta. No se conciben estos centros bibliotecarios como centros de difusión y agitación cultural, sino que exclusivamente se tienen bajo una concepción de acumulación de una serie de textos.

Por tanto, esas buenas intenciones que usted nos expuso en el transcurso de su intervención en la sesión informativa de la Comisión de Cultura y que se recogen también en la Memoria del presupuesto, no se pueden llevar a la práctica porque realmente no existe la infraestructura que podría llevar la cultura a todos los sectores sociales, a cada uno de los ciudadanos españoles para que éstos pudieran desarrollar un espíritu crítico que les diera respuesta a lo que están haciendo, a lo que hacen, a cuál es su sentido o significación en el desarrollo de su vida y, sobre todo, para que les permitiera desarrollar un espíritu tolerante que hiciera posible que el sistema de libertades que está basado en el respeto personal, fuera una realidad lo antes posible.

Quisiera también hacer en esta intervención una serie de referencias a otras Direcciones Gene-

rales, especialmente la que se refiere a Juventud y Promoción Sociocultural, porque según los datos que hemos podido ver en los Presupuestos, resulta lamentable que de los 2.571 millones de pesetas de que consta esta Dirección General, 1.978 millones de pesetas, es decir, el 76 por ciento, tengan como objeto transferencias, mientras que solamente el 24 por ciento queda para la gestión directa de esa Dirección General, y el 24 por ciento, que son 593 millones de pesetas, para la promoción sociocultural, que es uno de los objetivos que usted resalta más dentro de la Memoria que nos presenta junto a los Presupuestos.

Nosotros pensamos, por otra parte, que en esta Dirección no se han tenido en cuenta una serie de criterios importantes y vemos que el aumento de las subvenciones a las organizaciones juveniles y al Consejo de la Juventud, van disminuyendo precisamente el año en que el Consejo de la Juventud se pone en marcha y en el que pasa el umbral de los catorce años, es decir, se consideran en España 600.000 nuevos jóvenes.

Estos son, a grandes rasgos, los criterios que han llevado al Partido Socialista a presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos que usted presenta y que están siendo objeto de debate en estos momentos.

Además, señor Ministro, nosotros hemos visto con bastante sorpresa que en la estructura del programa y en la Memoria, usted hace un diagnóstico acertado de cuál es la situación cultural en estos momentos en nuestro país, en España. Usted además declara una serie de objetivos fundamentales que deben presidir la acción cultural de su Ministerio. Pues bien, señor Ministro, resulta sorprendente —al menos a los socialistas— que precisamente cuando se empiezan a realizar uno por uno los objetivos que usted nos presenta y vamos a los presupuestos y analizamos las partidas consignadas por los mismos, éstas resultan simplemente ridículas.

Usted nos habla de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural y promover el acceso a todos los bienes de cultura mediante el apoyo y la promoción de las iniciativas y actividades culturales de los grupos sociales. Al margen de que no se crean, como he dicho anteriormente, los instrumentos que posibiliten que llegue la cultura al ciudadano medio, a que todos los españoles se puedan enriquecer a través de una participación colectiva en lo que deben ser las expresiones culturales de un pueblo, usted

cuando hace especial hincapié en este primer apartado a que esta participación de los ciudadanos debe llevarse a la práctica mediante el apoyo y promoción de las iniciativas y actividades culturales de los grupos sociales, resulta que analizando las distintas partidas presupuestarias para esa labor inmensa, se dedican 498 millones de pesetas. Esto supone un 1,6 por ciento del Presupuesto.

Cuando usted nos habla, señor Ministro, de garantizar la participación y promover el incremento, como he dicho anteriormente, del inmenso Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, se dedican para promover ese enriquecimiento solamente 140 millones de pesetas.

Para defender ese patrimonio contra la exportación y expoliación nos encontramos con que no existe ni siquiera un inventario; existen buenas intenciones y partidas consignadas en los presupuestos anteriores, pero que no se llevan a cabo. Especialmente podemos resaltar el hecho de que esa expoliación no cesa y que las seguridades que están previstas y que se desarrollan por el Ministerio de Cultura son claramente insuficientes. Se habla de participar y promover la comunicación cultural entre los pueblos de España, y no aparece ninguna partida presupuestaria dedicada al intercambio de las culturas autóctonas. Por tanto, resulta que ese objetivo tampoco se puede llevar a la práctica.

Reconozco, señor Ministro, que usted está expresando buenos deseos, que tiene usted de alguna forma recogida una serie de principios que podrían hacer una política cultural acertada, pero no vemos el soporte material a través del cual pueda llevarse a cabo. Estimular la creación y producción literaria es otro de los objetivos, y sin embargo (veo que el tiempo se me ha acabado) adolece en los Presupuestos de las mismas limitaciones, apenas 38 millones aparecen para esta función, y en cuanto a aquellos aspectos que usted también cita como objetivos fundamentales para promover la condición de la equiparación real de la mujer o el apoyo de promoción sociocultural, vemos, lamentablemente, que no supera los 150 millones lo consignado en este presupuesto que usted ha presentado a través del Gobierno a esta Cámara.

Nosotros quisiéramos hacer de nuevo la reafirmación de que, afectivamente, estos buenos deseos y estos principios con que usted nos ilustró y nos ilustra ahora en la Memoria del Presupuesto

no se pueden llevar a la práctica y, por tanto, nos reafirmamos en el convencimiento de que no existe una política cultural, porque aunque el señor Ministro tenga buenos deseos y quiera llevar a cabo una política cultural, el resto del Gabinete, al parecer, no atiende sus razones y le reduce el Presupuesto hasta límites que hacen inviable, gestión positiva por parte de dicho Ministerio.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará a las cuatro y media en punto de la tarde. Tendremos un descanso de media hora, alrededor de las ocho y, después del descanso, seguiremos sin interrupción hasta las once y media o las doce de la noche.

Se suspende la sesión.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista a la sección veinticuatro, correspondiente al Ministerio de Cultura.

Tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA I MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, forzosamente tengo que empezar mi intervención, tal como decía el señor Bofill al defender la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista —y creo que es la mejor forma de empezar la discusión de los presupuestos del Ministerio de Cultura—, comprobando si los objetivos y consideraciones previas que se hacen en su estructura de programas y la política definida por el Gobierno, y en concreto por el Ministerio de Cultura, se corresponden o no con los Presupuestos que se nos presentan para 1982. Estas consideraciones previas que hace el Gobierno, y que ya se reiteraron en el debate de los Presupuestos para 1981, podríamos resumirlas en cinco puntos.

En primer lugar, la difícil situación en que se encuentra lo que podríamos llamar mundo cultural. La estructura de programas y Memoria del presupuesto que nos presenta el propio Gobierno nos presentan una descripción bastante acertada, creo yo, de las extremas dificultades con que se encuentra el mundo cultural en nuestro país. Se habla de la existencia de un inmenso patrimonio histórico, cultural y artístico en precarias condiciones de conservación; se nos habla de la insufi-

ciente infraestructura bibliotecaria de España y la inadecuada instalación de los centros nacionales de bibliotecarios; se nos habla de las difíciles condiciones en que se desenvuelven los escritores, artistas plásticos, músicos y demás creadores; se nos habla de la necesidad de la promoción del libro y de una difícil situación derivada de deficiencias estructurales; se nos habla de las malas condiciones en que se desarrolla la cinematografía, de la escasez de medios de los que disponen las orquestas y conjuntos instrumentales, de la crítica situación en que se encuentra el teatro, etcétera, etcétera. En definitiva, de cada uno de los aspectos en que el Ministerio de Cultura tiene una responsabilidad de actuar, y, por tanto, de trabajar en función de estas necesidades, se nos pinta un cuadro verdaderamente dramático de la situación en que se encuentra el mundo cultural en nuestro país.

En segundo lugar, se nos habló, en aquella larga intervención que nos hizo el señor Ministro en 1980 sobre la política cultural, de la escasez de medios debida a las dificultades que atraviesa la economía española, la economía de nuestro país.

En tercer lugar, se nos decía que un programa de cultura es un programa a largo plazo, es un programa que hay que planificarlo y, como muy bien decía el señor Ministro cuando intervino en los debates de 1981, «podría ser un programa de concepción global y un programa de medidas concretas que no solamente inciden sobre el año 1981. Yo indiqué en aquel momento» —se refería a cuando explicó su programa— «que mi programa como Ministro de Cultura, en cierta medida, engarzaba con las medidas anteriores, y que no se trataba de la posibilidad de desarrollar este programa exclusivamente dentro del marco de 1981. Siempre que se hace un programa, sobre todo en un tema tan importante como el de cultura, no se puede pretender en un año, exclusivamente en 1981, resolver todos los profundos problemas que tiene en estos momentos la cultura en su sentido más amplio».

Quiere esto decir que este programa puso de manifiesto que había dos objetivos, y estos objetivos tendrían un escalonamiento en el tiempo: que una parte podría resolverse en el Presupuesto de 1981 y otra se iría resolviendo en presupuestos sucesivos. Se recalca, lo dijo el señor Ministro, que estamos ante un programa a largo plazo que cada año debemos ver cómo se va a desarrollarlo.

En cuarto lugar, la necesidad de seleccionar y clarificar los objetivos esenciales de una política

cultural. Esto es lo que también se nos dice en la estructura de programas y Memoria del presupuesto.

En quinto lugar, programas estructurales de este Ministerio, programas estructurales que se han convertido en una especie de cajón de sastre. Y después, el gran problema que siempre se nos presenta cuando se nos habla del presupuesto del Ministerio de Cultura: el problema de personal, con esos veintidós mil y pico de funcionarios que, evidentemente, absorben una buena parte del presupuesto.

En estos cinco puntos yo creo que estaríamos de acuerdo, no solamente el señor Ministro y yo mismo, sino todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Por tanto, debemos partir de esta realidad, en la que podemos estar de acuerdo y, partir de ella, ver qué va a pasar con el Presupuesto de 1982 y responder a las siguientes preguntas:

Si el 31 de diciembre de 1982 la situación cultural en nuestro país va a ser mejor o peor que la que tenemos en la actualidad.

Si se está haciendo un esfuerzo importante para contar con unos medios mejores que los que teníamos en 1981.

Si están claramente especificados los programas, los objetivos y la transparencia de la política del Ministerio de Cultura.

Si, en definitiva, se va a mejorar la estructura y la actuación del Ministerio.

Por tanto, nosotros, a partir de estas preguntas, deberíamos ver, cogiendo ya los datos del presupuesto del Ministerio de Cultura, si estas preguntas van a resolverse afirmativamente y, por tanto, se nota que hay un programa, se nota que el Ministerio va a mejorar su propia estructura interna, se nota que, en definitiva, se va a incidir con los pocos medios que se tienen, en que la situación cultural de nuestro país sea mejor cuando termine el año 1982.

Yo tengo que decir, con los datos en la mano, que este presupuesto es regresivo en todos los aspectos. Evidentemente, dicha esta frase hay que intentar demostrarla.

En primer lugar, el presupuesto de 1981 del Ministerio de Cultura representaba exactamente el 0,91 del Presupuesto total; en 1982 representa el 0,85. Por tanto, hay una verdad incuestionable, que es que en el conjunto del Presupuesto para el año 1981 teníamos el 0,91 y para 1982 el 0,85. Por tanto, lo que nosotros dedicamos a la política

cultural, con respecto al conjunto del Presupuesto, va a ser menor en el año 1982 que en 1981.

Si a esto le restamos los doce mil y pico millones que van al deporte, a la política deportiva, que es una parte muy importante del presupuesto del Ministerio de Cultura, y deja y dejamos la parte estrictamente cultural, se nos queda en 18.000 millones, un presupuesto ridículo, un presupuesto que, en definitiva, lo que demuestra es que estamos dando pasos atrás y no hacia delante.

Sigamos. Sobre las inversiones reales y transferencias de capital, que evidentemente para la política cultural es otro aspecto muy importante, se nos dice en estos papeles de la estructura de programas y Memoria del presupuesto la siguiente frase: «Se incrementa así el esfuerzo inversor del Departamento que pasa, para actividades culturales, a alcanzar el 1 por ciento del conjunto de las inversiones públicas». Pero no se nos dice que en el año 1981 no era el 1 por ciento, sino el 1,1 por ciento; y decir que hemos alcanzado el 1 por ciento, cuando en el año 1981 teníamos el 1,1 por ciento, desde luego no es ningún logro ni ninguna victoria, sino que, en definitiva, hemos conseguido llegar a un 1 por ciento.

Nos gastamos 8.272 millones de pesetas en el año 1982, un 1 por ciento; en 1981, 7.502 millones de pesetas, que representa el 1,1. Por tanto, en inversiones reales también hemos dado un paso atrás. Se considera que esto es un gran logro, cuando yo lo que creo es que estamos dando pasos atrás de una forma vertiginosa.

Pero sigamos con el tema del deporte. Al deporte se dedican inversiones reales y transferencias de capital por importe de 5.231 millones. Si restamos los 8.272 millones, se nos queda también en una miseria para dedicarlo a lo que es estrictamente la política cultural.

Los gastos corrientes también disminuyen: pasan de 3.700 millones a 3.594. Y los gastos corrientes en la política cultural no son meramente burocráticos, sino que representan la necesidad de dar una oferta cultural, significan abrir locales, significan mantener locales, significan toda una serie de gastos que quizá en otros Ministerios pueden ser superfluos, pero que en Cultura son gastos fundamentales.

Por tanto, hay tres datos —y nos gustaría, si es que no son así, que se rebatieran— que indican que en este año el Ministerio de Cultura va a gastarse menos, en proporción al año anterior, con respecto al conjunto del Presupuesto y que las in-

versiones reales y los gastos corrientes también disminuyen. Así pues, es perfectamente demostrable que estamos ante un Presupuesto regresivo.

La cuestión de los medios es una opción política y en esto estamos todos de acuerdo. Hace unos días nosotros leíamos en los periódicos que se ha aprobado la propuesta de Presupuesto del Gobierno francés, del Estado francés, para el tema de cultura y hemos visto que este año se ha doblado lo que se dedicaba a política cultural. Por tanto, vemos que se trata de una opción política. Los medios son escasos, tanto en Francia como aquí en España, pero si hay que escoger estos medios, ¿qué política se va a hacer y que política vamos a afrontar?

Entremos en el tema de los programas. ¿Están claros los programas del Ministerio de Cultura? Tal como se nos han presentado no están claros: se confunden programas y actividades y se repiten programas en diferentes Departamentos. No existe clarificación de cómo se van a dar más subvenciones, que es un aspecto fundamental para la política cultural del Ministerio y para la política cultural en general, porque una parte importante de ese dinero va a parar a otro tipo de entidades y, por tanto, se requiere una clara transparencia y una clarificación de cómo se dan estas subvenciones, y el propio hecho de la confusión en que nos encontramos en los programas está en que, si sumamos todos y cada uno de los programas, nos salen 49.735 millones de pesetas, o sea, que sobran 19.000 millones que no sabemos de dónde salen; si vamos cogiendo programa por programa, nos saldrán 49.000 millones, cuando resulta que el presupuesto de Cultura son 30.000 millones de pesetas. Esto sólo tiene una explicación: que estos programas se repiten en diferentes Departamentos, tanto en personal como en medios, transferencias, etcétera.

No existe, creo yo, un programa articulado en ninguno de los Departamentos. Solamente pondré unos ejemplos. Primero, el tema de bibliotecas. En cuestión de bibliotecas estamos completamente de acuerdo en que es insuficiente la oferta que nosotros damos a la sociedad española. La Unesco nos dice que harían falta dos trabajadores, dos personas dedicadas a la bibliotecas por cada 5.000 habitantes; en nuestro país, esta proporción es de uno por 100.000. Por lo tanto, vemos que la diferencia es realmente enorme.

Pero no sólo se trata de eso, sino que luego hay que coger el presupuesto y ver cómo avanzamos

en esta dirección. Pues bien, examinado el presupuesto de bibliotecas nos encontramos con que al terminar 1982 no habremos hecho nada, no ya para llegar a dos trabajadores por cada 5.000 habitantes, sino ni siquiera para intentar reducir la desproporción que existe actualmente en este terreno, porque no encontramos ninguna oferta clara, ni en los objetivos ni en las actividades del Departamento, en relación concretamente con el tema de las bibliotecas.

Otro ejemplo es el tema juventud. El patrimonio juvenil es un patrimonio que cada vez está más en recesión, cada vez hay menos oferta para la juventud en lo que hace referencia a los locales. En concreto, y para dar un dato que nos ilustre sobre este tema, diré que se estima que, una vez operada la liquidación definitiva a que anteriormente se hace referencia (se está hablando del presupuesto del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud), la disminución de la financiación del presupuesto de este organismo autónomo, en los tres últimos ejercicios económicos, asciende aproximadamente a 7.800 millones de pesetas que, por lo tanto, el organismo, que debería preocuparse del tema fundamental del patrimonio juvenil, resulta que en tres años ha visto disminuida su financiación en aproximadamente 7.800 millones de pesetas. En consecuencia, no es que nosotros queramos una oferta en este terreno extraordinariamente importante, sino simplemente que se mantuviera la misma financiación que en los años anteriores, pero resulta que también aquí estamos en un proceso claro de recesión.

Finalmente nos queda el tema de la estructura del Ministerio. ¿En el presupuesto de 1982 se puede intuir que vamos a mejorar el funcionamiento interno del Ministerio? ¿Se va a afrontar de verdad uno de los problemas clave, que es el problema que hace referencia al personal, que absorbe una gran parte del presupuesto? También con los datos en la mano: en el año 1981 se dedicaban 6.790 millones al capítulo primero, que se califica como de personal; en 1982 se dedican 9.480 millones. Esto no significa un aumento del 10 por ciento, que es lo que hubiere podido representar el aumento de los salarios de estos trabajadores, sino que es un aumento desproporcionado. Yo lo que intuyo es que realmente la plantilla del Ministerio en 1982 va a ser superior a la de 1981. Si no, ¿de dónde salen estos 3.000 millones de pesetas que se dedican para 1982 a los gastos de personal?

En definitiva, y para resumir (creo que hemos intentado llevar el debate con los datos y con las cifras), para nosotros no hay objetivos claros en el Ministerio de Cultura. Nosotros pensamos que al terminar el año 1982 vamos a estar en una situación más precaria que la actual. Yo creo que no existe política cultural por parte del Gobierno, porque, evidentemente, es mejor pensar que no existe política cultural, que no pensar que el resultado de esta política cultural es que este año, el presupuesto del Ministerio de Cultura sea inferior al del año anterior y que, por lo tanto, la oferta y la política cultural que hace el Gobierno en estos momentos están en peores condiciones que el año anterior. Tampoco el señor Ministro nos podrá decir esta vez que se encontró con un presupuesto hecho con muy poco margen de maniobra, puesto que este año, el presupuesto lo ha elaborado él, ya que ha estado todo 1981 ocupando la cartera de Ministro de Cultura.

Quería terminar refiriéndome a un tema, al que he intentado no referirme directamente, porque en relación con él ya tenemos enmiendas en concreto, que es el de la financiación del deporte. Porque una buena parte de las inversiones del Ministerio de Cultura, una buena parte de su presupuesto, va a parar a la financiación del deporte y, por lo tanto, es bueno referirnos a este tema.

A mí me da la sensación de que el Gobierno no tiene una política clara de cómo financiar el deporte a través del Consejo Superior de Deportes. En la Ley General de Cultura Física y del Deporte quedaba claro que la financiación del deporte se tenía que hacer a través de los Presupuestos Generales del Estado y que esta financiación debía ir con cargo a recursos públicos. Este Parlamento aprobó en diciembre de 1980 una moción, que voy a leer, que es muy corta y que, en definitiva, dice lo siguiente: «Que en los Presupuestos Generales del Estado de 1982 se incluya la totalidad de la financiación de la cultura física y del deporte con cargo a recursos públicos y que, por tanto, la partida de ingresos que en el presupuesto del organismo del Consejo Superior de Deportes se designa como transferencia del organismo autónomo administrativo pase a denominarse "transferencia del Estado"».

Nosotros cogemos el presupuesto del Consejo Superior de Deportes y vemos que esto no se ha cumplido. Evidentemente, el Gobierno no tiene la obligación de cumplir las mociones del Parlamento, pero una moción aprobada en el Parla-

mento, en la Comisión de Cultura, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, no se ha cumplido y, por consiguiente, los presupuestos siguen de la misma forma que en 1981. Y resulta que el señor Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol, se mueve durante unos días y consigue que parte de lo que se recaude de las quinielas, el 1 por ciento, vaya a parar a la Federación Española de Fútbol, los que nos parece que es una medida unilateral porque, en definitiva, nosotros pensamos que el dinero de las quinielas no puede dividirse ni darse a una Federación en concreto y, por tanto, a su favor.

Por consiguiente, parece que tiene más influencia sobre el Gobierno y sobre el señor Ministro de Cultura el presidente de la Federación Española de Fútbol que no este Parlamento, al que, habiendo aprobado por unanimidad una moción, no se le hace caso y, sin embargo, cuando se mueve un poco el señor Porta parece que todo el mundo va corriendo para solucionarle sus problemas y, además para asegurar que las próximas elecciones en su Federación pueda ganarlas tranquilamente presentando este 1 por ciento como un logro personal de su política.

Pensamos que el Gobierno debería tener más en cuenta las exigencias de la Cámara y menos las de grupos de presión y, en concreto, del señor Porta, porque en definitiva parece que manda más que el conjunto del Parlamento.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para consumir un turno en contra de estas enmiendas, el señor Yebra.

El señor YEBRA MARTUL-ORTEGA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, es difícil contestar en detalle a los numerosos argumentos que han presentado los diputados enmendantes en la defensa de sus respectivas enmiendas. Pero yo creo que hay que ver en este trámite de la sección veinticuatro el planteamiento de conjunto y cuáles son aquellos temas importantes que realmente se han objetado a este presupuesto de Cultura.

Un primer tema yo diría que es la acusación de que no existe por parte del Ministerio de Cultura una política de tal naturaleza, es decir, una política cultural. Los objetivos están perfectamente diseñados y expuestos en la Memoria del presupuesto por programas que se ha presentado a las

Cortes Generales. En este presupuesto presentado por el Gobierno podemos ver —como se ha dicho en las anteriores intervenciones— que había un análisis acertado por parte del Gobierno que se ha ido perfilando, incluso casi también como el mismo presupuesto por programas nos explica, y realmente resulta difícil pensar que en este planteamiento existía una crítica.

Esta acción del Ministerio de Cultura se desarrolla a lo largo de quince programas perfectamente delimitados, a través de los cuales se piensa llevar a cabo la labor del Departamento en 1982. Voy a repetir brevemente —aunque ya los diputados que me precedieron en el uso de la palabra lo han dicho— estos objetivos.

Tenemos el objetivo de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural y promover el acceso de los mismos a los bienes de la cultura; garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del inmenso patrimonio artístico-cultural e histórico de España; facilitar y promover la comunicación cultural entre los pueblos de España; estimular la producción y creación literaria y artística mediante la protección, apoyo y promoción del autor y del artista; promover la difusión de los bienes culturales mediante una intensificación de las manifestaciones del mismo género y de una mejora de las instalaciones de carácter cultural al servicio de la comunidad; facilitar y promover la formación humana y la integración social de la juventud a través de su participación en las tareas comunitarias en el desarrollo cultural; promover la equiparación real de la mujer; fomentar su participación y facilitar la formación integral de los componentes de la familia; y, por último, promover la educación físico-deportiva del ciudadano, así como fomentar el deporte recreativo y de ocio, y elevar el nivel deportivo del país mediante el apoyo al deporte de alta competición.

Cualquiera de los diputados que haya tenido la paciencia de leerse este presupuesto por programas creo que coincidirá conmigo en que existe una claridad de objetivos, que se ha dicho, y lo repito, por los diputados que me han precedido, en lo que no están de acuerdo es en que la cantidad destinada a estos objetivos sea suficiente, pero quizá sí coincidirán —y se ha reconocido— en que existe un proyecto cultural por parte de este Ministerio.

Se ha criticado, por otra parte, que no existe un suficiente planteamiento de inversiones en el Mi-

nisterio. Yo diría que sí existe tal planteamiento inversor, puesto que precisamente el mayor incremento real del presupuesto de cultura es el relativo al capítulo VI, de inversiones, que aumenta en un 25,5 por ciento, y que unido a las transferencias de capital consignadas, hacen que el total de las transferencias alcance prácticamente el uno de las inversiones públicas. No se puede hablar aquí —como se ha hecho hace unos minutos— de que estamos ante un presupuesto regresivo, porque a ello también hay que añadir la existencia de una partida nueva, de subvenciones de capital a las Corporaciones locales, para inversiones de carácter cultural por valor de 825 millones de pesetas, por lo que las inversiones en materia cultural de la Administración del Estado alcanzan la importante cifra de casi 9.000 millones de pesetas en 1980.

¿A dónde va dirigido ese esfuerzo inversor del Ministerio? Ello va a permitir proceder a la realización de obras de restauración de más de 350 monumentos nacionales; la realización de más de 40 proyectos de excavaciones arqueológicas; la construcción, equipamiento, modernización y ampliación de aproximadamente 20 museos en distintas localidades de España; la realización de obras de 11 nuevos archivos históricos provinciales; y la realización, de construcción, equipamiento y modernización de 16 bibliotecas públicas del Estado, así como obras de ampliación y modernización en tres centros bibliotecarios de ámbito nacional. También he de añadir la iniciación de la construcción del Auditorio Nacional de música, así como las posibilidades de que las Corporaciones locales realicen obras de infraestructura en materia de bibliotecas, museos, teatro y música. Cualquiera que tenga, repito, la paciencia de leer el presupuesto por programas verá claramente fijados los objetivos del Ministerio y en qué se va a traducir esta inversión.

Estamos naturalmente, como también se dijo hace unos minutos, ante una política a largo plazo, cuyo objetivo fundamental es responder a dos de las necesidades más acuciantes. En primer lugar, evitar un deterioro del inmenso patrimonio histórico-artístico extendido a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en segundo lugar, crear la infraestructura de instalaciones culturales para la intensificación, en el futuro, de la vida cultural española. En este punto, precisamente, en colaboración con las Corporaciones locales.

Otro aspecto que se ha criticado a este presu-

puesto del Ministerio de Cultura, en su visión global que trata de hacer aquí, es el argumentar el aumento que se ha producido en los gastos corrientes; es decir, que el gasto corriente era mayor que el de inversión. Se ha producido en las operaciones corrientes de los capítulos II y IV, un incremento del 8,8 por ciento, mientras que en el capítulo II existe una disminución del 4,76, precisamente tratando de responder a una política de austeridad del Departamento.

En cuanto al capítulo IV, de transferencias corrientes, que son esenciales para la acción tanto de gestión directa del Departamento como de su acción de fomento, se produce un aumento del 15,3 y ello debido, fundamentalmente, a transferencias que se hacen a los organismos autónomos, que se convierten en brazos fundamentales para la ejecución de las tareas encomendadas al Departamento; por un lado, al Instituto de la Juventud, por consolidación presupuestaria de partidas que no figuraban anteriormente en el presupuesto; por otro lado, al Instituto Nacional del Libro Español por su futura conversión en organismo autónomo de carácter administrativo; igualmente, a la Filmoteca Nacional, también por su conversión en organismo autónomo, y, finalmente, a la potenciación de dos organismos autónomos adscritos a la Dirección General de Música y Teatro.

En esta crítica que se hace al Ministerio respecto al aumento de los gastos corrientes, es cierto que en el capítulo I de personal se produce un incremento importante, un incremento, como se ha mencionado, del 39 por ciento; pero también hay que decir que ese incremento es aparente. Es aparente precisamente con respecto al ejercicio anterior, puesto que en 1982 se incluyen por primera vez en el presupuesto del Ministerio de Cultura las cuotas de Seguridad Social del personal funcionario de los cuerpos a extinguir del antiguo Movimiento, que en el presupuesto de 1981 figuraba en la sección correspondiente a Presidencia del Gobierno, y que ascienden a 1.169 millones de pesetas.

No ha habido, en contra de las dudas que aquí han quedado flotando, en el Ministerio de Cultura ningún aumento de personal durante el ejercicio de 1981. Es más, se ha producido una disminución de sus efectivos; de 11.434 funcionarios y contratados en 1980, a 10.181 a 1 de noviembre de 1981. Invito a que se lea el programa 0/1, Dirección y Servicios Generales, para comprobar el

detalle de las cifras que estoy dando. Esa disminución es de 1.254 funcionarios. De los 10.180 reseñados anteriormente, 1.178 han pasado a depender de las Comunidades Autónomas y entes preautonómicos, lo cual indica que se está produciendo un importante reajuste del personal del Departamento dentro de esta política. Por lo tanto, este problema estructural y esta crítica que se hacía por el diputado que me ha precedido no corresponde a la realidad, sino que lo que hay dentro de este programa 01, de la Dirección y Servicios Generales, es una idea muy clara de conseguir la mejor utilización del conjunto de personal funcionario y contratado y una asignación de medios personales a cada uno de los Departamentos.

Esta es una tarea de enorme importancia para lograr el óptimo funcionamiento de los servicios generales del Ministerio y poder así conseguir en el futuro que el Departamento pueda cumplir, de la mejor forma posible, los objetivos que tiene encomendados.

Se ha hecho una acusación de represivo al presupuesto del Ministerio de Cultura y esta acusación, importante, yo creo que merece la pena estudiarla con detalle, analizarla con detalle. Evidentemente, en cualquier planteamiento presupuestario, la dialéctica entre deseos y necesidades y medios es una dialéctica que se plantea a lo largo de todo el presupuesto, y mucho más si cabe precisamente es un presupuesto como el de Cultura, como también aquí se ha dicho, donde los proyectos, las ambiciones del mismo o los planteamientos realmente son inagotables, incluso la imprecisión del mismo término «cultura», incluso la distinción entre lo cultural y lo educativo, incluso entre el papel de la acción estatal sobre el campo de la cultura, que se lleva a cabo en los diversos países de forma distinta, y la de las Corporaciones locales, regiones u otros grupos sociales. Por ejemplo, esta preocupación se ha manifestado en las diferentes reuniones que se han desarrollado en el marco del Consejo de Europa y en las que se ha intentado, todavía sin éxito, trazar un cuadro comparativo sobre las cuentas nacionales.

De todas formas, del examen comparativo de los presupuestos de la Administración pública destinados a Cultura pueden deducirse unas conclusiones. Las conclusiones son las siguientes: Por ejemplo, el tipo de porcentaje ideal entre gastos culturales y gastos generales se estima en estos momentos entre el 1 ó 1,2 de los presupuestos del sector público. Pero la gran mayoría de los países

europeos no han alcanzado todavía el porcentaje del 1 por ciento. Mientras que Holanda ha figurado en la cabeza con el 1,37 por ciento, la participación en los Presupuestos Generales en otros países como Italia, Suecia o Luxemburgo no ha llegado al 0,6 por ciento, y en Francia, en los últimos años, ha oscilado entre distintos porcentajes, sin llegar al 0,8 por ciento. Precisamente, en el caso francés, se ha anunciado el ambicioso plan de llegar en 1983 a ese deseado 1 por ciento.

Si ahora vemos el proyecto del Ministerio de Cultura para 1982, los 30.306 millones que le corresponden representan, como se ha dicho hace un momento, el 0,85 por ciento del total. Y si a esta cifra se añaden otras partidas dedicadas a cultura que aparecen en Asuntos Exteriores, Administración Territorial y Obras Públicas y Urbanismo, el porcentaje de gastos culturales del proyecto de presupuestos se eleva al 0,91 por ciento, cifras coincidentes pero en sentido contrario a las que se daban anteriormente. Por tanto, no hay un planteamiento regresivo en este tema.

Si bien el partido del Gobierno ha manifestado su pretensión de que se alcance lo antes posible ese porcentaje, del uno por ciento, hay que repetir nuevamente, y las veces que sea necesario, que los problemas derivados de la crisis económica y los problemas derivados de la confección de los Presupuestos, donde tanto el Departamento de Cultura como otros Departamentos han visto sacrificado su presupuesto a favor de otros Ministerios, precisamente para atender necesidades de tipo social, en este tema no se haya podido cumplir ese ambicioso programa de aumento cultural.

En el Presupuesto de 1982 y como necesaria adecuación a la limitación de los recursos destinados a Cultura, ha sido precisa la elaboración de unos programas, inevitablemente selectivos, que están en esos, presupuestos, que tienden inevitablemente a la concentración de medios, donde la acción del Ministerio se concentra en el mantenimiento, potenciación y consolidación de aquellas tareas imprescindibles para cumplir el funcionamiento de las disposiciones legales que se encomiendan al Ministerio y de la política cultural que realiza ese Ministerio. Es decir, se produce una adecuación entre medios y fines. En ese sentido, no puede dejar de señalarse que el presupuesto del Departamento de Cultura para 1982 puede calificarse de un presupuesto de transición, puesto que tiene presente el proceso de transfor-

mación o de conformación del nuevo Estado de las Autonomías, que afecta, fundamental y profundamente, a las competencias y a las propias líneas de acción del Ministerio. Ello obliga a una adaptación de los servicios existentes para responder a las exigencias de la nueva estructura del Estado, así como para que toda la organización administrativa pueda orientarse a los fines esenciales que tiene asignados.

En definitiva, no podemos hablar en ningún momento, no podemos admitir que se diga que estamos ante un presupuesto regresivo, que se diga que no existen planteamientos de política cultural en el Ministerio, porque creemos que eso está claramente reflejado en el presupuesto. Podrá estarse de acuerdo o no en que los medios son escasos, pero los medios en materia presupuestaria siempre son escasos.

Hay algún punto concreto que se ha señalado, como puede ser la afirmación de la poca claridad en las subvenciones. No es cierto que exista una falta de claridad en los criterios para la concesión de subvenciones ni que exista poca transparencia en las mismas. En cada uno de los programas se especifican las disposiciones legales y reglamentarias a las que se ajustan las distintas subvenciones y, por otra parte, las subvenciones que se conceden a los distintos programas en cumplimiento de las diversas disposiciones reglamentarias se acuerdan tras el proceso de tramitación administrativa correspondiente; se fiscalizan todas ellas a través de la Intervención delegada de la Intervención General del Estado y figuran en los correspondientes documentos administrativos.

Por último, y con esto termino, en cuanto al tema de la moción correspondiente al Consejo Superior de Deportes y la no inclusión en su presupuesto, no es que no haya existido voluntad por parte del Ministerio en cumplir esa moción de este Parlamento, sino que han sido dificultades técnicas las que han impedido llevarlas a este presupuesto, pero existe por parte del Ministerio la obligación, existe el deseo de que esa obligación, esa moción se lleve a cabo. Repito, solamente ha sido un problema técnico.

Por todas estas razones, mi grupo parlamentario se va a oponer y va a pedir el voto el contra de las mencionadas enmiendas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABEILHE: Señor Presidente, señorías, la intervención del representante del grupo parlamentario que apoya al Gobierno no nos ha venido a sacar de dudas ni a desdecir, en lo fundamental, de las alegaciones que hemos hecho esta mañana, y que demuestran la actitud del Grupo Parlamentario Socialista de oponerse a unos presupuestos del Ministerio de Cultura porque realmente imposibilita, en las partidas que se recogen del mismo, la realización de cualquier tipo de política cultural.

El representante del Grupo Centrista nos ha expuesto aquí, nos ha leído, todo lo que viene acompañando al presupuesto en los distintos programas, y esto no es lo fundamental; lo fundamental es saber si las partidas, las previsiones económicas hacen viable o no inviable la realización de esos objetivos.

Yo no quisiera ser reiterativo, porque esta mañana creo que he puesto de manifiesto que esto es inviable, solamente con leer los objetivos que marca la Memoria del presupuesto, y viendo las partidas que se dedican para la consecución de esos objetivos queda demostrado que ese presupuesto hace inviable una política cultural, al menos tal y como nos la expuso en su declaración de intenciones el señor Ministro en su comparecencia en la Comisión de Cultura.

El tema es que aquí, como dato novedoso, se nos ha expuesto que contamos con uno de los presupuestos de Cultura, digamos, mayores dentro del ámbito geográfico cultural del mundo en que nos movemos, pero olvida el señor Yebra que estos presupuestos en los demás países no se dedican para pagar a una serie de funcionarios que han llegado a ese Ministerio con ocasión de la desaparición de una serie de instituciones que existían durante el régimen anterior. Si usted, con la paciencia que ha demostrado durante su lectura, estudia este tema, verá cómo el presupuesto de Cultura que estamos debatiendo es bastante inferior que los presupuestos a que usted ha hecho referencia.

En cualquier caso, sí quiero poner de manifiesto —y esperamos que nos desdiga el responsable del Ministerio de Cultura— que existe una concepción cultural distinta, una concepción cultural que aquí se puede expresar y definir como la ausencia de política cultural. Una cosa es el deseo, las buenas intenciones del señor Ministro, y otra cosa, señor Ministro —y yo creo que usted lo reconocerá y convendrá en ello con los socialis-

tas—, es que es muy distinto el hecho de que usted se encuentre con la incomprensión de sus compañeros del Consejo de Ministros. Porque usted puede tener el deseo de que existan unas directrices que, aunque ambiguas, puedan reflejar una cierta política cultural. Lo que usted no podrá negarnos, señor Ministro, es que al Gobierno de la UCD no le importa en absoluto la cultura.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en turno de rectificación, el señor Riera.

El señor RIERA I MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo diría al señor Yebra, al representante en este debate del Grupo Centrista, que, evidentemente, su obligación es defender las posiciones del Gobierno y de su grupo, en este caso referentes al debate del presupuesto del Ministerio de Cultura, pero no creo que su obligación le deba llevar más allá de exponernos aquí que somos, casi casi, uno de los países de Europa que dedicamos más cantidad a la cultura en los presupuestos. Una cosa es defender la posición del Gobierno y otra es intentar convencernos de que, sumando una cifra de aquí y otra de allá, nos queda un presupuesto del Ministerio de Cultura comparable al de cualquier país de Europa, porque esto no es cierto.

Nosotros no estamos hablando de un presupuesto utópico, porque aquí se nos dice repetidamente que los medios son escasos. Esto ya lo sabemos, los medios son escasos. No queremos un presupuesto que nos vaya a resolver todas las acuciantes necesidades que tiene la cultura en nuestro país; no pretendemos esto, porque sería ilógico y no sería responsable. Lo único que queremos es que el Presupuesto de 1982 sea, como mínimo, en la misma proporción que el de 1981, porque en definitiva, el que sea el mismo, superior o inferior es la opción política, porque los problemas en que se encuentra nuestro país, la crisis económica, no se van a resolver en un año. Es un problema real, que existe, y, por tanto, es una opción política, y este es un presupuesto regresivo; no nos hemos inventado la palabra. Se demuestra en el mismo sentido que he dicho al principio, de que en el año 1982 vamos a dedicar para la política cultural una cantidad inferior a la de 1981, y punto. Y esto no merece más discusión.

En segundo lugar, se nos ha hablado de las sub-

venciones. Está perfectamente claro cómo se dan las subvenciones a las diferentes entidades culturales. Yo me voy a referir a un tema que sigue candente: las subvenciones que se dedican o se entregan por el Consejo Superior de Deportes a las entidades deportivas. Pues bien, resulta que tenemos desde hace tres años ya, desde 1979, unas auditorías que se han hecho en algunas Federaciones deportivas porque parece —y estas auditorías lo han demostrado en su momento— que ha habido irregularidades en el destino de estas cantidades y subvenciones y esto hace ya dos años; han pasado los dos años y no sabemos todavía qué ha ocurrido ni las conclusiones de estas auditorías. Por tanto, es lógico que nosotros tengamos, como mínimo, una cierta susceptibilidad de a dónde van a parar estas subvenciones. Se nos ha dicho además que el no haber aprobado, cumplido o seguido la moción aprobada en el Parlamento hace ya un año ha sido por cuestiones técnicas. Me gustaría, si luego interviene el señor Ministro en la aclaración después del señor Yebra, nos diga cuáles son las cuestiones técnicas, porque esto se aprobó en 1980, ha transcurrido un año y en un año hay tiempo suficiente para resolver el tema, porque no lo hemos dicho hace una semana, sino hace un año; cuáles son las cuestiones técnicas que no han hecho posible que en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes se hayan cumplido las propuestas que hicimos en el Parlamento por unanimidad. Quiero recordar que fue por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Y, finalmente, se nos dice que vamos a concentrar los medios y los esfuerzos en dos objetivos: por un lado, evitar el deterioro del patrimonio histórico, y, en segundo lugar, mejorar y ampliar las instalaciones culturales. Pues bien, en este presupuesto, ni vamos a evitar el deterioro de nuestro patrimonio —que ya tiene su correspondiente proyecto de ley, que no va a hacer más que perjudicar y deteriorar todavía más esta situación— y en segundo lugar, no sé cómo vamos a mejorar y ampliar las instalaciones culturales porque con este presupuesto lo que vamos a tener que hacer va a ser cerrar algunas de las pocas instalaciones culturales que tenemos en nuestro país.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Cultura.

El señor **MINISTRO DE CULTURA** (Cavero Lataillade): Señor Presidente, señorías, para contestar y poner de manifiesto alguno de los aspectos que, no obstante la clara intervención del representante del Grupo Parlamentario Centrista, han podido quedar sin aclarar.

El señor Bofill se refería a la corta capacidad inversora del Ministerio de Cultura. Yo le puede manifestar —y estoy dispuesto a acreditarlo con datos y con pruebas— que en estos momentos, respecto a 1981, de los 2.616 millones de pesetas que teníamos para inversiones, se han gastado ya 2.598. Por tanto, podemos decir que prácticamente en este momento, casi el 88 por ciento de este presupuesto está ya invertido.

¿Por qué razón los datos del mes de agosto son diferentes del último trimestre del año? Por una razón muy sencilla. Las inversiones en materia cultural, en conservación de patrimonio, exigen la colaboración de proyectos muy singulares. No es lo mismo construir viviendas o construir cualquier tipo de edificaciones que respondan a unos módulos estereotipados. Se trata en este caso de construcciones singulares, de iglesias, monumentos, etcétera, cuyo proyecto, desde que se encarga, una vez iniciado el ejercicio, suele ocupar una parte importante del año. Por tanto, suele notarse al final del año, evidentemente, el esfuerzo inversor, ya que una parte importante del ejercicio lo consume la elaboración del proyecto y la contratación de cada una de estas obras, que suelen ser obras también de una contratación específica en cada caso.

Y de otra parte, también se ha referido al tema de que no se han elaborado programas de seguridad. En todo caso, yo tengo que decir, puesto que ha utilizado el ejemplo de la catedral de Toledo, que por muchas medidas de seguridad que se tomen, es muy difícil que por el Ministerio de Cultura se pueda garantizar que cualquier estatuilla o elemento externo de una catedral no pueda estar en algún sujeto a riesgos de sustracciones.

Señores diputados, el patrimonio cultural español es quizá desproporcionado a la capacidad y medios de que dispone nuestro Estado para atender económicamente con eficacia y hay que actuar con criterios de selección. Hay problemas de titularidad jurídica —que no todos son de titularidad jurídica estatal— y no obstante los convenios y concordatos que tenemos con la iglesia y las medidas de colaboración, no siempre se pueden llevar con toda su eficacia. Por tanto, las sustrac-

ciones se producen en todos los países de nuestro marco cultural. Si cogemos la página de sucesos, lo mismo ocurre en Francia y lo mismo ocurre en Italia; y por muchas medidas de seguridad que se adopten nunca se podrá evitar que aparezca de tiempo en tiempo una noticia en los periódicos, de la cual se quiere hacer la regla general.

De otra parte, en lo que se refiere a la política de personal, yo me voy a limitar a dar un dato, que creo que es suficientemente clarificador, de la política seguida en el Ministerio. Desde el 30 de noviembre de 1980 —en que tuve una intervención en la Comisión de Cultura del Congreso y donde di unas cifras de personal hasta el 11 de noviembre de 1981, en que ante la posible intervención en este debate tuviera que dar unos datos— el Ministerio de Cultura, frente a 11.434 personas, tiene en la actualidad 8.913. Es decir, se ha producido una disminución de 2.521. Y en este momento está también en cauce de reducción de personal de otras 227 personas, que pasarán al servicio de otros Ministerios, con lo cual no se puede decir que la política de reducción de personal para adecuar los medios a las necesidades no está dentro del programa del actual equipo del Ministerio de Cultura y dentro de la política del Gobierno.

Contestando también al señor Bofill, yo añadiría más. En esta política de querer disminuir los gastos corrientes, durante 1981 se han desafectado 101 edificios propiedad del Estado y 139 en alquiler. Estos datos me parece que son suficientemente ilustrativos de que existe una preocupación por parte del Ministerio de Cultura de reducir sus gastos corrientes, aunque ya ha explicado el diputado don Perfecto Yebra con claridad que el aparente aumento de los gastos de personal se debe también a haber pagado el Ministerio de Cultura las cotizaciones de la Seguridad Social de todo el personal transferido del Movimiento.

Finalmente, en lo que se refiere a las intervenciones del señor Riera, en primer lugar ha hecho una referencia a Francia —ya esperaba yo esta intervención— a la que tengo que hacer las siguientes puntualizaciones: Primera. La estructura del Presupuesto francés no es semejante a la del Presupuesto español; la comparación es complicada. En segundo lugar, las funciones y competencias del Ministerio de Cultura francés no son semejantes a las del Ministerio de Cultura español. En tercer lugar, indudablemente, quisiera yo que la estructura de servicios comunitarios españoles

estuviera dotada tan bien como la francesa y no tuviéramos por delante una serie de prioridades de gran importancia en el orden sanitario, de viviendas e infraestructura que, evidentemente, permitieran esa confortable duplicación del porcentaje del Presupuesto. Pero junto a ello le diré, además, que si jugamos con porcentajes —siempre se puede jugar con porcentajes— actualmente el porcentaje del Ministerio de Cultura en lo que se refiere a los Presupuestos Generales del Estado es el 0,85. Ya sé que se puede reducir si deducimos las inversiones que afectan a la Dirección General de la Juventud y a la promoción socio-cultural, y al deporte, que pasa a ser el 0,68; si además reducimos los medios de comunicación social al 0,69, pero, como estamos jugando con porcentajes, si añadimos a esto todo lo que en materia cultural está también en otros Ministerios que tienen competencias en aspectos de apoyo a la infraestructura cultural, puedo también acreditar que llegamos al porcentaje del 0,91 por ciento. Por tanto, estas comparaciones de porcentajes son siempre aleatorias y se prestan a todo tipo de argumentos.

Por lo que se refiere a otros aspectos de la intervención del señor Riera —parece que por mi parte faltaría a una sensibilidad en cuanto a la referencia que ha hecho a la falta de una política de bibliotecas—, puedo decirle que además de los programas a que se ha referido el diputado Perfecto Yebra también existe en la actualidad un programa muy importante y esperanzador, que es apoyar el sistema de bibliotecas en los centros educativos. En muchas poblaciones españolas, ya se ha repetido en diversas ocasiones, será muy difícil tener un edificio singular para bibliotecas y poderlo mantener. Se están desarrollando unos trabajos en colaboración con el Ministerio de Educación y existen ya veintitantos centros pilotos en los cuales se aprovecha el aspecto físico de los centros escolares para instalar bibliotecas y conseguir que con la colaboración del profesorado y de los alumnos se pueda mantener este tipo de servicio comunitario y cultural. En esa política estamos en el año 1981. Se ha iniciado con estos programas de ensayo, y yo espero que en 1982, dentro de nuestras limitaciones —que, evidentemente, existen muchas—, podamos continuar con ellos.

Se ha referido también el señor Riera, como tema importante —y de alguna manera me ha requerido para que contestara—, a la moción de la

Comisión de Cultura de 1980, en la cual se establecía que, en los Presupuestos Generales del Estado, las inversiones del Consejo Superior de Deportes no vinieran relacionadas o condicionadas, como una aportación finalista, por los resultados de las quinielas o de las apuestas deportivo-benéficas. En realidad, el Ministerio de Cultura intentó que, para el ejercicio de 1982, el Ministerio de Hacienda pudiera llevar a cabo este deseo loable, y que, efectivamente, no hubiera ingresos finalistas, pero las dificultades técnicas de alguna manera incidían sobre la redistribución que quedaría luego, en el futuro, de las apuestas mutuas deportivo-benéficas al desaparecer esa partida e ir directamente al Tesoro. En todo caso, puedo asegurar, por haberse comprometido ya el Ministerio de Hacienda, que en el Presupuesto para 1983, la partida destinada a la financiación del deporte vendrá, directamente, en los Presupuestos Generales del Estado como una partida más, y no dependiendo de los ingresos finalistas del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

Finalmente, ha hecho unas referencias a algunos temas actuales de porcentajes sobre las quinielas. Creo que es en la Comisión de Cultura donde, con mucho gusto, tendré la oportunidad de poderle contestar, si me hace cualquier pregunta en este sentido.

Por último, ha hecho una referencia a un tema de pasada, que me interesa dejar bien claro, en relación a las subvenciones, cuando ha mencionado que por parte del Ministerio de Cultura no existe una preocupación sobre el destino de las subvenciones. El destino de las subvenciones tratamos de controlarlo con el máximo rigor. Se ha referido a que hay unas auditorías de 1978 de tres federaciones deportivas, que todavía no han llegado a sus conclusiones. Puedo decir que desde el mes de julio están a disposición de la Intervención General del Estado todos estos datos; que se ha nombrado un juez instructor para cada uno de esos expedientes, y que, en diversas ocasiones —la última no hace tres días—, he vuelto a preguntar cómo marchan estas diligencias. Se me ha indicado que siguen bajo la tutela de la Intervención General del Estado. Espero que en un plazo razonablemente corto tengamos una información suficiente sobre este tema.

En cuanto a la inexistencia de una política cultural —y para terminar—, creo que el Gobierno tiene una política cultural. Tuve la osadía de

abrumar a los miembros de la Comisión de Cultura durante diez horas, en dos sesiones de cinco horas, sobre los objetivos, pero también quiero recordar que en el libro que nos ha facilitado la Cámara sobre el debate de los Presupuestos para 1981, como ya ha recordado el señor Riera, tomo 2.º, página 1390, líneas 16 y 17, tengo buen cuidado de decir que, indudablemente, el cumplimiento de esta política sólo se puede ir resolviendo en Presupuestos sucesivos. Y los presupuestos de contracción del gasto y de difícil situación económica, indudablemente no son los mejores para conseguir estos logros.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABEILHÈ: Señor Presidente; muy brevemente, para rectificar al señor Ministro en algunas de las afirmaciones que ha hecho.

En primer lugar, señor Ministro, y sin entrar en lo que hace referencia a los presupuestos del Consejo Superior de Deportes, al que el Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una enmienda de totalidad, que defenderá mi compañero don Miguel Angel Martínez, yo le quisiera decir que, por lo general, señor Ministro, nos asombra y nos abruma, unas veces por exceso y otras veces por defecto, como en esta ocasión.

El señor Ministro se ha referido a la ejecución del gasto, de la inversión, de los Presupuestos del año en curso como que, en la actualidad, más del 88 por ciento están ya ejecutados y, por tratarse de obras complejas, por las características de las mismas, exigen una serie de procedimientos que vienen retrasando esta ejecución. Yo, al menos, le puedo decir, señor Ministro, que entonces, la política que están llevando en este plano es mala, porque si tenemos, por un lado, que en principio se deberían haber fijado objetivos prioritarios y nos encontramos con la situación de las catedrales de León, Santiago y Cádiz, y en tema de seguridad nos encontramos con el hecho escandaloso de la catedral de Toledo, tendrá usted que convenir conmigo en que, al menos, los objetivos no se han fijado adecuadamente, porque entendemos los socialistas que, por la dimensión y la importancia de estas obras de arte, éstos debieran haber sido objetivos prioritarios.

Con respecto al tema del aumento de los gastos de personal no cabe la menor duda, señor Ministro, de que usted ha venido a ratificar lo que yo he

dicho esta mañana cuando hablaba de que el Ministerio de Cultura se parece más a una pagaduría que a un Ministerio que debe cumplir con el desarrollo de una política como la que estamos debatiendo.

Por último decirle, señor Ministro, que, efectivamente, los recursos son escasos, que hay unos objetivos fijados, pero existen partidas realmente sorprendentes. Yo me he fijado, y en todos los servicios de la sección a la que hacemos referencia, Ministerio de Cultura, veo que hay una partida de Acción Cultural que suma entre todo 950 millones de pesetas, y que no sabemos qué objetivos se van a cubrir con esa partida.

Por tanto, pensamos que la creatividad del señor Ministro es muy importante y que la creatividad de sus colaboradores también lo es, pero nos parece que cuando los recursos son tan escasos no se pueden dejar al albur de las circunstancias cantidades tan importantes como ésas.

Por último decirle, señor Ministro, que no deja de ser paradójico y chocante para los socialistas que haya una cantidad de 2.500 millones de pesetas para subvencionar a los medios de comunicación social del Estado, cuando usted sabe —como todos sabemos— que precisamente está en curso una ley de enajenación y que parte de esas subvenciones no tienen ningún sentido.

Nosotros pensamos que el Ministerio tenía que haber hecho un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos que usted había fijado, y que nosotros desde aquí, y pese a la ambigüedad de los mismos, creemos que cubren un marco de actuación, pero nos vemos defraudados al comprobar que el soporte material que hace posible el cumplimiento de esos objetivos sigue siendo escaso.

Por tanto, ratificarme en la posición anterior, señor Ministro, de que, pese a sus buenas intenciones, el Gobierno de la UCD sigue sin dar importancia a algo tan relevante como es la cultura.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA I MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente. En primer lugar, el tema de personal, del que tanto se ha hablado en el debate del Ministerio de Cultura.

El señor Ministro nos ha dicho que de las cifras que habíamos dado al principio, como mínimo, las proporciones no eran completamente correc-

tas ya que, por un lado, hay estos 1.160 millones dedicados a cuotas de la Seguridad Social y que, por tanto, el aumento que nosotros decíamos no es tal.

Además, nos dice que el personal del Ministerio ha disminuido en 2.500 personas. Nos encontramos con que el personal disminuye en 2.500 personas, pero añadiendo estos 1.160 millones todavía nos sale un aumento de 1.580 millones de pesetas en el presupuesto dedicado en concreto a personal. Disminuye la plantilla y sigue aumentando desmesuradamente la cantidad que se dedica a esta plantilla. Por tanto, nos gustaría saber qué es lo que ocurre con esta parte del presupuesto dedicada al personal del Ministerio de Cultura.

En segundo lugar, el elemento que se ha insistido aquí de las comparaciones entre Francia y España. Yo no he entrado a comparar la situación cultural y la situación en que se encuentran España y Francia en este terreno, sino que yo he dado un dato que me parece que sí que es incontrovertible, que es el siguiente. En 1981 el Gobierno francés propuso en su proyecto de Presupuestos una cantidad determinada para Cultura. Actualmente, un Gobierno de mayoría socialista y con participación comunista propone en concreto doblar la cantidad de 1981.

En España en 1981 se dedica el 0,91 a Cultura, del conjunto del Presupuesto. En 1982 se dedica el 0,85, y estos datos son incontrovertibles.

En Francia, con un Gobierno de izquierdas, se dobla el presupuesto dedicado a Cultura. En España, el Gobierno de UCD nos reduce todavía más la parte dedicada a Cultura. Se dedicaba en el año 1981 el 0,91, y en este año el 0,85. Estos son los datos incontrovertibles, que demuestran, a nuestro entender, que no existe política cultural ni prioridades en la política cultural, en la política general del Gobierno de UCD.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Se someten a votación las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Comunista respecto de la sección veinticuatro. Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 287; 127 favorables; 156 negativos; cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios So-

cialista del Congreso y Comunista respecto de la sección veinticuatro, correspondiente al Ministerio de Cultura.

Sección veinticinco. Ministerio de Administración Territorial. Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Montserrat.

Sección 25

El señor MONTSERRAT I SOLE: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, voy a defender en este trámite conjuntamente las enmiendas de totalidad a las secciones veinticinco y treinta y dos, «Administración Territorial» y «Entes territoriales», que están, en última instancia, bastante conexas, y mi argumentación está basada en los siguientes fundamentos. Desde el punto de vista del Ministerio de Administración Territorial, hay dos razones básicas para que nosotros en este trámite nos expresemos en contra del presupuesto. Por un lado, hay la presencia en los presupuestos de este Ministerio de partidas que no están territorializadas, que no están definidas, y que está prevista, en última instancia, su distribución, por parte del Consejo de Ministros, lo cual crea una situación de arbitrariedad con la que no estamos de acuerdo. En todo caso, suponen unos recursos que no tienen un control específico claro y neto en este trámite parlamentario.

Por otro lado, el Ministerio de Administración Territorial recoge el Instituto de Estudios de Administración Local, Instituto que, a nuestro entender, está muy anquilosado, que no cumple las funciones que cabría esperar de un Instituto de esta naturaleza, que se dedica a dar cursillos, normalmente sólo para miembros de cuerpos nacionales, cuando los problemas de Administración local deberían tener una mayor amplitud; no se consigue la formación permanente que sería necesaria, se continúa con el trámite de lecciones magistrales en lugar de ir al fondo de las cuestiones; hay algunas tareas realizadas con concejales, pero tampoco están bien hechas. Cabría pensar, incluso, en cursillos de verdad, más breves, más concretos y más trabajados, pero fundamentalmente el problema no es un problema metodológico de cómo dar los cursillos, sino que creemos que, en estos momentos, existiendo la Federación de Municipios, es posible pensar en formas de autogestión de los propios municipios, de su formación de personal, y que una gran parte de los recursos y del funcionamiento del Instituto de Estudios de Administración Local debería canalizarse

a la financiación de actividades en manos de la Federación de Municipios. Creemos que esto permitiría una mayor agilidad, atacar de manera mucho más directa los problemas que tiene planteados, de formación y de estudios, la Federación de Municipios e iría a cubrir una parte de las necesidades que la propia Federación se ha planteado que tiene que cubrir.

Estas son, pues, las dos razones que tenemos para oponernos, fundamentalmente en este trámite, al presupuesto del Ministerio de Administración Territorial. Por un lado, el hecho de que existen unos fondos que, diciéndolo claramente, pueden transformarse en fondos de carácter electoral, porque no están distribuidos en los Presupuestos, no sabemos los criterios de distribución, y están en manos del Consejo de Ministros, y, por otro lado, la existencia de una estructura anquilosada del propio Ministerio, en lo que representa el Instituto de Estudios de la Administración Local.

Con respecto al presupuesto de «Entes territoriales», nosotros queremos señalar, también muy brevemente, nuestros criterios. Hemos de partir de la base de que los entes territoriales, de los que UCD ha tenido el control total, no han funcionado, no han puesto en marcha, de una manera eficaz, el proceso preautonómico; nos estamos refiriendo a los casos de Castilla-León, Extremadura y Castilla-La Mancha, que no siguen por esta vía.

Nosotros creemos que cabría estimular el proceso de creación del mapa autonómico español, en su concreción en Comunidades Autónomas, a través de la facilitación de recursos adicionales a los entes preautonómicos que hoy en día estuviesen de verdad en trámite de negociación de su Estatuto correspondiente.

Igualmente, en «Entes territoriales» aparecen recursos que no están distribuidos provincialmente, que constituyen fondos de libre disposición, en toda una serie de partidas. Hay partidas de 281 millones, de 826 millones, de 825 millones, etcétera, que no están distribuidas o que corresponden a conceptos poco claros, y nosotros creemos que estos recursos podrían ir destinados, por ejemplo, al Fondo de Compensación Interterritorial o, en todo caso, si se considerara conveniente que se mantuvieran en la correspondiente sección treinta y dos, deberían tener una distribución claramente conocida por parte del Parlamento.

Estamos, pues, tanto en «Administración terri-

torial» como «Entes territoriales» ante la presencia de unos fondos, de unos recursos, que por su falta de control se vienen a convertir en cajones de sastre, que reproducen situaciones de las antiguas secciones, de fondos nacionales que se suprimieron entoces, y ahora nos estamos encontrando con que hemos suprimido en las primeras secciones del presupuesto los fondos nacionales y estamos introduciendo en las secciones últimas partidas, que, en todo caso, corresponden a este criterio de discrecionalidad y de vaguedad, que deberán ser objeto de una discusión detallada y de un conocimiento exacto.

Este es el tema; no vamos a entrar aquí en la discusión de todos los problemas de financiación de los municipios, que sería otra discusión aparte, pero estos criterios yo creo que son suficientes como para que se comprenda la naturaleza de nuestras enmiendas de totalidad a estas dos secciones y se acepte la devolución de las mismas al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de estas enmiendas tiene la palabra el señor Figuerola.

El señor FIGUEROLA CERDAN: Señor Presidente, señorías, yo tenía la intención de dirigirme a la Cámara desde el escaño, no por una falta de respeto hacia la Cámara, sino por razón de la brevedad de mi intervención. Lo que ocurre es que parece que la puesta en marcha del micrófono no sé si va a hacer posible esto, o si hubiese sido más lógico bajar al estrado.

Es señor interviniente ha fundamentado su oposición a las secciones, tanto veinticinco, «Administración territorial», como treinta y dos, «Entes territoriales», en dos argumentos: de una parte ha puesto de relieve, con un criterio que tiene que reconocer que es meramente subjetivo; que no le convence la actuación ni la forma en que se realiza la formación en el Instituto de Estudios de Administración Local. Yo entiendo que este es un criterio meramente subjetivo. Lo importante es ver si se realiza o no esa formación con arreglo a otros criterios, que pueden ser suficientemente buenos. Para ello sería suficiente con remitirle a los dos programas que ha realizado el Ministerio de Administración Territorial, con relación a ese presupuesto, del Instituto de Estudios de Administración Local.

De otra parte, ha fundamentado también aquí

su rechazo a estas dos secciones en un argumento que parece ser que es el fundamental de los esgrimidos: que hay una serie de partidas que no tienen una distribución de carácter territorial, que ésa se realiza escuetamente por el Consejo de Ministros y que no responde a criterios de carácter objetivo.

Creo —y tendremos ocasión de aclararlo cuando discutamos las distintas partidas de la sección treinta y dos, «Entes territoriales»— que en ellas aparecen claramente una serie de consignaciones que se distribuyen en razón a criterios objetivos, que no son impuestos por el Consejo de Ministros, sino criterios objetivos conocidos porque han sido aprobados por la Subcomisión de Colaboración del Estado con los entes locales. Y de otra parte hay, dentro de estas mismas secciones de Planes comarcales y de acción comunitaria, otras partidas que son aquellas que no se distribuyen con arreglo a estos criterios de carácter objetivo, porque tienden exclusivamente a hacer desaparecer aquellos desequilibrios internos que puedan producirse dentro de las distintas provincias y como consecuencia de necesidades que van surgiendo durante el curso de la aplicación de este presupuesto.

Por todo ello, nosotros entendemos, y nos oponemos a estas dos enmiendas, que no cabe hacer con alegría o subjetividad esta crítica. La distribución se hace no con fórmulas ocultas ni con criterios estrictamente conocidos por el Consejo de Ministros, sino con arreglo a fórmulas de carácter polinómico, completamente objetivas, y teniendo en cuenta datos de carácter real, y que son perfectamente conocidos. Lo único que hace el Consejo de Ministros es aprobar la distribución de estos fondos, pero no hace la propia distribución por cuanto que esto es competencia de la Subcomisión de Colaboración del Estado con las entidades de carácter local.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT I SOLE: Mi criterio en la defensa de estas enmiendas no ha sido en absoluto subjetivo, sino que corresponde a las necesidades objetivas que tienen los municipios españoles en estos momentos, como, por ejemplo, en materia de formación de su personal, que debe adaptarse a una Administración local que no tiene que seguir los criterios burocráticos del régi-

men anterior; tiene que adaptarse plenamente. Creo que el Instituto de Estudios de Administración local, a pesar de los loables esfuerzos que puedan haber hecho algunos de sus funcionarios, no corresponde en absoluto a las necesidades de los ayuntamientos españoles. La prueba está en que la Federación de Municipios tiene planteados problemas de formación de personal, etcétera. Es decir, que no es un criterio personal mío, sino un criterio perfectamente objetivado.

Finalmente, con respecto a la distribución de los recursos, es evidente que a través de acción comunitaria, a través de los Planes provinciales, hay una canalización de recursos que no se decide en esta Cámara, sino fuera de esta Cámara, y a eso me refería yo. Evidentemente, aquí hay también unos criterios objetivos que no son los míos, sino los que en un momento determinado pueden aparecer con respecto a la gravedad de la situación o a los problemas de una u otra provincia, que no pasan por esta Cámara, sino que pasan por la actitud del Gobierno.

Se me dirá que este es un juicio de valor; efectivamente, es un juicio de valor del Gobierno la distribución de estos recursos, de una u otra forma. Creo que en estas circunstancias, en todo lo que tiene que ver con materias de ordenación territorial, entes territoriales, y de Administración territorial, la transparencia, la claridad, la ordenación y el conocimiento preciso de todos los recursos, es una garantía no solamente de que estos recursos no van a ser utilizados con criterios electorales, sino que estos recursos corresponden a criterios objetivos, desde el punto de vista de la distribución territorial de los fondos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Figuerola.

El señor FIGUEROLA CERDAN: Señor Presidente, con la misma brevedad; creo que no se puede decir que la actividad del Instituto de Estudios de Administración local no responde a las necesidades de las Corporaciones locales, cuando, si el señor enmendante se toma la molestia de leer el programa 8, se dice específicamente que corresponde y tiene como objetivo y finalidad este Instituto, en este programa «la selección de funcionarios de los Cuerpos Nacionales, los cursos de perfeccionamiento para funcionarios locales, los cursos de especialización en materia de Administración local y los cursos internacionales

y seminarios de investigación». Creo que esto sí se corresponde con las necesidades de las Administraciones y las Corporaciones de carácter local. Tampoco puede decirse que en este presupuesto, en relación a la distribución de fondos de carácter territorial, no se decide por estas Cortes, porque, efectivamente, sí se decide por estas Cortes. Lo que ocurre es que las Cortes pueden decidir aquello que puedan decidir y no pueden decidir aquello que es imprevisible y que surge en el curso —como ya he dicho— de la aplicación del presupuesto, como consecuencia de necesidades que van surgiendo en las distintas comarcas y en las distintas provincias, e incluso en cada uno de los pueblos de la geografía española.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, respecto de la sección veinticinco, correspondiente al Ministerio de Administración Territorial.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 287 votos emitidos; 26 favorables; 163 negativos; 98 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la sección veinticinco.

Se somete ahora a votación la enmienda del mismo Grupo Parlamentario Comunista a la sección treinta y dos, correspondiente a entes territoriales.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 287 votos emitidos; 23 favorables; 162 negativos; 102 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la sección treinta y dos.

Sección treinta y tres, Fondo de Compensación Interterritorial.

Sección 33 Enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, señoras y señores diputados; el Grupo Parlamentario Andalucista ha presentado una

enmienda a la totalidad a la sección treinta y tres sobre el llamado Fondo de Compensación Interterritorial, y ello porque creemos que lo que se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 1982 no es un Fondo de Compensación Interterritorial, y porque, además, así se preveía en la página 90 del informe de la comisión de expertos sobre financiación de las Comunidades Autónomas. En dicha página se decía que «un fondo de este tipo (del que se podría establecer quizá para 1982) difiere del contemplado en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial que se ha propuesto, y se limitará, en buena parte, a un puro ejercicio de reasignación de partidas presupuestarias».

Simplemente, con este párrafo de la propia comisión de expertos nos serviría para justificar nuestra enmienda a la totalidad.

No obstante, y muy brevemente, porque la discusión a fondo será cuando veamos la ley en esta Cámara, simplemente a título informativo, quiero exponer cuáles son los criterios, un poco más concretos, por los cuales nosotros creemos que no existe tal Fondo de Compensación, y que, en realidad, lo más justo sería quitarle este nombre a la sección treinta y tres y reagruparla en los diferentes Ministerios en los cuales estaban ya de antemano las partidas, y de donde se han sacado para meterlas en la sección treinta y tres, Fondo de Compensación Interterritorial.

No vamos a abundar en nuestro criterio de que para nosotros, la política de un Fondo de Compensación Interterritorial nunca sirve para superar zonas de auténtico subdesarrollo; para lo más que sirve es para crear zonas dependientes económicamente de otras, que, en último término, son las que se pueden beneficiar. Pero entrando exactamente en lo que se pretende configurar con el Fondo de Compensación Interterritorial, nosotros diremos que la gravedad del tema, en el momento presente, es que vamos a fijar, en alguna forma, aunque sea provisionalmente —y todos sabemos lo que son en este país los temas que se fijan provisionalmente—, una filosofía elaborada sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, y que dentro de esa filosofía vamos a aprobar, o esta Cámara aprobaría, en último término, una serie de criterios, provisionales, pero una serie de criterios, que configuran la futura distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. Esa, para nosotros, es la más grave cuestión si seguimos manteniendo la existencia de un Fondo de

Compensación; es decir, si seguimos manteniendo la existencia de la sección treinta y tres.

Dentro de esa filosofía, evidentemente aprobada por el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera —y la composición SS. SS. la conocen ya—, hay una situación de partida difícil, complicada, y es que hay unas Comunidades que tienen competencias y van a poder aplicar esos fondos, y otras Comunidades u órganos preautonómicos que no van a tener ninguna posibilidad de control, ni, por supuesto, de ejecución de las pretendidas partidas del llamado Fondo de Compensación.

Pero yendo a los criterios en concreto por los cuales nos oponemos, diremos, en primer lugar, que es el de la procedencia de los fondos. Es decir, se han cogido diferentes partidas, se han reagrupado en un difícil ejercicio de prestidigitación, para conseguir llegar a los 180.000 millones, de acuerdo con unos criterios y esas partidas son las que se nos presentan como Fondo. No estamos de acuerdo con la procedencia de los fondos. Se podía haber creado un fondo más pequeño, pero con cargo a una partida del déficit, o que se hubiese utilizado el déficit para el fondo aún en cuantía menor.

No estamos de acuerdo con la cuantía que se fija, que ya decimos que no es propia del Fondo de Compensación. La filosofía que se fija es que sea un 30 por ciento de las inversiones exclusivamente nuevas. Creemos que eso no es lo que estaba pactado en la LOFCA; ese no era el espíritu de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), sino que era un 30 por ciento de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos públicos, que se dedicaban a inversiones, y dentro de ellos, serían los capítulos VI y VII, sumados ellos dos.

Es más, parece que en la propia discusión de la Ponencia, cuando se reclamó que un 30 por ciento sería una cantidad mínima, uno de los ponentes, en ese momento representante del Grupo Parlamentario de UCD, el señor Fernández Ordoñez, prácticamente venía a decir que el 30 por ciento, aunque era pequeño, no obstante, se sobreentendía que era sobre las partidas de los capítulos VI y VII de los Presupuestos Generales del Estado. Eso nos daría el criterio, vuelvo a repetir, nunca la cuantía, porque el Fondo no existe; el criterio sería de unos 250.000 millones de pesetas, aproximadamente la cuantía mínima para el

futuro que se fijaría en el Fondo de Compensación Interterritorial.

No vamos a entrar ahora en discutir por qué quitar los gastos de conservación y mantenimiento en una política que puede ser grave, y el mantenimiento a ultranza de unos servicios en unas Comunidades desarrolladas. Unos niveles de servicio que pueden ocasionar problemas en cuanto a la futura redistribución y en cuanto a las propias nuevas inversiones que destina el fondo a las Comunidades subdesarrolladas, que también van a necesitar unas cuantías para la conservación y el mantenimiento. Es decir, toda esa filosofía que puede llevarnos, en el fondo, al final, a que no sirva para nada. Pero ya digo, lo más importante sería que el 30 por ciento se fijara sobre el total de la inversión pública.

Otro de los criterios que consideramos es que no se deben beneficiar —y en esto no quisiéramos entrar, porque siempre que se dice algo nos dicen que entramos en una guerra de Comunidades—, las Comunidades desarrolladas. En primer lugar, yo diría que me gustaría que las Comunidades de las que voy a hablar aquí, Extremadura, Galicia, Andalucía, ojalá no se tuvieran que beneficiar del Fondo de Compensación Interterritorial. Pero, señores, la LOFCA era clara, y, realmente, es una broma de mal gusto que se diga que hay bolsas de pobreza en las zonas desarrolladas. La LOFCA contemplaba claramente que el Fondo se destinara a gastos de inversión en territorios comparativamente menos desarrollados. Ese es el criterio que está en la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es decir, lo que hoy deberíamos fijar, aunque fuera provisionalmente, y que en el futuro nos puede servir para configurar la Ley del Fondo.

Es verdad que en el informe de los expertos y en la propia Memoria del proyecto para hacer una justificación —que evidentemente ni el que ha escrito la Memoria se la acaba de creerse— nos dice con respecto a los criterios: «Cualquiera de ellas, de haber aceptado que las Comunidades desarrolladas se beneficiarían o no del Fondo, cualquiera de ellas puede entenderse ajustada de Derecho habiéndose adoptado la decisión política de que durante el período de vigencia de la presente Ley del Fondo de Compensación Interterritorial sean beneficiarios de él todas las Comunidades Autónomas». Eso es lo que dice la página 20 del proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.

Para justificarlo se nos habla de bolsas de pobreza —y ya digo que entraremos más a fondo en ello en la futura Ley del Fondo—; pero no se puede hablar de bolsas de pobreza en las zonas desarrolladas porque también existen bolsas de pobreza en las zonas subdesarrolladas, y cómo vamos a comparar los índices de zonas tan pequeñas unas con otras, es materialmente imposible.

Se ha sacado una justificación que en el fondo no tiene ninguna apoyatura, y ello ¿por qué? Porque si realmente existen zonas de pobreza en algunas Comunidades, en todas, diría yo, para ello se podría crear lo que podríamos llamar unos Fondos de Compensación Interterritoriales, y para ello se podrían buscar cantidades económicas o partidas presupuestarias dentro de las propias Comunidades a base de la propia potestad impositiva y las propias competencias que tienen las distintas Comunidades en el pago de los tributos, empezando por las Comunidades desarrolladas.

Por último, en cuanto a los criterios, y pasando por alto, por el estado en que se encuentran, las estadísticas de nuestro país, nosotros, independientemente de que se haga un estudio mucho más profundo y se pueden hacer diferentes simulaciones por diferentes caminos, creemos que se ha aplicado un mal criterio. Para aplicar el criterio del paro o de la emigración, se dice: aquellas que den saldos positivos o negativos, aquellas Comunidades que tengan un índice de paro inferior a la media, no se benefician; pero cuando llega la renta nacional se dice: aquellas Comunidades que tienen una renta superior a la media sí se benefician. Eso por poner un ejemplo de cuál es la distribución que se nos quiere aplicar.

De ahí viene, que se apliquen de una forma u otra, la importancia del Fondo. Por ejemplo, Comunidades como Castilla-León pasaría el Fondo de 16.800 millones de pesetas a 19.600 ó 20.000; o Castilla-La Mancha, pasaría de 11.900 millones de pesetas a 15.800 ó 16.300 millones de pesetas, en el caso de que solamente fueran las Comunidades subdesarrolladas. Y en el caso de Galicia, se pasaría de 17.600 millones de pesetas a 22.900 ó 23.248 millones de pesetas. Yo no voy a dar las estadísticas de lo que le correspondería a Andalucía, sino, simplemente, a esas Comunidades, que el señor Ministro de Hacienda conoce perfectamente, que tienen una situación económica subdesarrollada.

En definitiva, ¿qué es el Fondo de Compensa-

ción Interterritorial? El Fondo de Compensación Interterritorial lo resumiría como un compañero mío decía, que es el color que se le ha querido poner a la película. Es decir, este año, los Presupuestos Generales del Estado los tenían que presentar en tecnicolor, y les han puesto color; pero la película es la misma, el argumento es el mismo y los fines son los mismos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana. Tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, señorías, fundamentamos la presente enmienda a la totalidad de la sección treinta y tres referida al Fondo de Compensación Interterritorial, en base a dos razones fundamentales: la primera, de tipo jurídico; la segunda, de tipo técnico.

Por lo que hace referencia a la primera, entendemos que jurídicamente, dada la inexistencia de la correspondiente ley prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, debe establecerse la ponderación de los criterios de distribución en dicho Fondo, según dicha ley. Y, por tanto, no cabe considerar creado este Fondo, por ser su aplicación inviable desde el punto de vista jurídico.

Como saben SS. SS., el artículo 16 de la LOFCA dispone que en los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Compensación Interterritorial, e indica los criterios que han de servir para la distribución del mismo. Pero el propio artículo 16 dispone taxativamente que la ponderación de tales criterios se establecerá por ley. Sin embargo, ahora nos encontramos con que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado aparece dotado de un Fondo de Compensación Interterritorial, sin que exista explicitación legal alguna de la ponderación de los criterios seguidos para su distribución entre las distintas Comunidades Autónomas, cuando lo cierto es, como hemos visto, que tal explicitación mediante ley es un requisito que está establecido en la LOFCA.

Bien es verdad que en la Memoria del Ministerio de Hacienda, la que acompaña al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, se nos habla de que el Fondo ha sido confeccionado, siguiendo, y cito textualmente, los acuerdos auto-

nómicos alcanzados a finales de junio entre el Gobierno y los partidos mayoritarios, llegando a explicarse en base a tales acuerdos la ponderación de los criterios de distribución utilizados. Pero no puede entenderse, a poco que enfoquemos el tema con un mínimo de seriedad y de rigor, que con tan expeditivo trámite se haya dado cumplimiento al mandato expreso de la LOFCA, hurtando a esta Cámara la posibilidad de una discusión previa y a fondo en una materia que todos coincidimos en que es muy importante, y en cambio sí se sitúa esta Cámara delante de una situación de hechos consumados.

Tampoco sirve, a estos efectos, el hecho de que la ponderación de los criterios de distribución haya sido aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera instituido en la LOFCA; pero como se instituye en esta ley, tal Consejo es un órgano meramente consultivo y de deliberación, cuyos acuerdos revisten, conforme dispone el propio Reglamento interno de funcionamiento, la forma de simples recomendaciones al Gobierno. Queda, por tanto, al menos para nosotros, claro, que el requisito del establecimiento mediante ley de la ponderación de los criterios de distribución del Fondo ha sido incumplido y, en consecuencia, queda con ello invalidada la plasmación numérica que se contiene en la sección treinta y tres del proyecto.

Partiendo, pues, de que los criterios de distribución del Fondo para ser operativos necesitan ser ponderados, y habida cuenta, por otra parte, de que tal ponderación debe establecerse por ley, y teniendo presente, además y por último, por lo que se refiere al aspecto jurídico, de que tal ley no existe, entendemos que no cabe considerar creado el Fondo, toda vez que la ausencia de determinación legal de la ponderación de los criterios para su distribución hace inviable jurídicamente su puesta en práctica.

En el aspecto técnico referido a los criterios de distribución, podríamos entrar con todo lujo de detalles en lo que es desglose y en la precisión que nosotros exponemos al texto alternativo que hemos presentado al proyecto de ley que ahora se halla en el Senado, pero como creemos que es ahí, en el Senado, donde está ese proyecto de ley en estos momentos, donde debe discutirse, y en su momento lo discutiremos aquí cuando llegue a esta Cámara, no procederá ahora hacer esta defensa de unos criterios, porque, como he manifestado, este trágala, fruto de los acuerdos autonó-

micos concertados a espaldas de esta Cámara, no es éste el momento de discutir la aplicación de una ley que aún no ha sido aprobada.

Déjenme únicamente decirles a SS. SS. que en la distribución que nosotros defendemos no aparecerá un trato de privilegio para Cataluña o las áreas económicamente más desarrolladas. Lo que buscamos son criterios más justos y efectivos con respecto del mandato constitucional, de solidaridad efectiva entre todos los españoles, y que nos lleva, por ejemplo, a dar un peso mayor en la propuesta del proyecto que ahora está en el Senado, a magnitudes tan obvias como puedan ser la población de cada región o nacionalidad, o de sus tasas de paro efectivo.

Deseo añadir, finalmente, que no se piense que esto del Fondo de Compensación Interterritorial sea la panacea ya para el próximo año en el proceso de lucha contra los desequilibrios territoriales. Aquí en estos Presupuestos, bajo el nombre del Fondo de Compensación Interterritorial, se ha agrupado un tercio aproximadamente de la inversión directa, el resto no sabemos con precisión cómo se va a aplicar, y por los datos que nosotros tenemos, la redistribución del Fondo de Compensación Interterritorial entra en contradicción con la no distribución del resto no regionalizado. Poco haremos, señorías, si la transparencia exigible en la distribución regional de las inversiones no la llegamos a aplicar ni tan sólo a medias.

Por su carácter de incumplimiento del artículo 16 de la LOFCA y del amago, puramente espejismo, de que realmente se entra de verdad y a fondo en el tema de la lucha de los desequilibrios territoriales como una forma de cumplimiento del principio de la solidaridad, establecida en la Constitución, en aras del rigor y de la seriedad y del puro respeto a esta Cámara, es por lo que pido a SS. SS. el voto favorable de esta enmienda del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT SOLE: Señor Presidente, señores diputados, el Fondo de Compensación Interterritorial ha sido una demanda de nuestro grupo parlamentario a lo largo de todos los trámites que ha habido con respecto a este tema. Tanto en el contexto de la discusión del ar-

ticulo 158 de la Constitución como en la propia discusión de la LOFCA, como en el contexto de la necesaria coherencia con los Estatutos aprobados, nosotros hemos defendido la necesidad de un Fondo de Compensación Interterritorial importante, coherente y útil para la lucha contra las desigualdades en nuestro país.

Sin embargo, el Fondo de Compensación Interterritorial que se nos presenta en estos Presupuestos no corresponde a los objetivos de fondo que nosotros creemos que están contenidos en el artículo 158.2 de la Constitución y en su desarrollo legislativo posterior, fundamentalmente porque este Fondo que se nos presenta aquí representa el establecimiento aparente de un Fondo de Compensación Interterritorial cuando en realidad se trata simplemente de una presentación distinta de recursos y proyectos que, en principio, iban ya a integrarse en los presupuestos de los Ministerios respectivos.

En las comparecencias de los distintos directores generales ante la Comisión de Presupuestos, he pedido varias veces que explicaran cuáles eran los criterios que habían seguido para la atribución de este o aquel proyecto al Fondo de Compensación Interterritorial o al resto de las inversiones programadas por su propio Ministerio, y realmente no he obtenido una respuesta clara, una respuesta coherente que nos permitiera decir que realmente los proyectos que han ido a parar al Fondo de Compensación Interterritorial eran de verdad proyectos que respondían al objetivo finalista señalado en el artículo 158.2 de la Constitución y, en cambio, he confirmado la impresión que tenía anteriormente de que se trataba simplemente del cambio de estantería de las carpetas de unos proyectos que estaban ya en su generalidad previamente definidos, fundamentalmente por el Comité de Inversiones Públicas.

Nosotros creemos que es necesario que exista un Fondo de Compensación Interterritorial importante. Ya en el curso del debate presupuestario del año pasado nosotros defendimos un criterio parecido con respecto a los planes de urgencia para Andalucía, Extremadura y Canarias, planes que, en última instancia, a nuestro entender, no se han concretado en ninguna mejora sustancial para las regiones menos avanzadas.

Nosotros creemos que el Fondo de Compensación Interterritorial que vaya a establecerse, si se aprueba esta sección, va a tener un fin gris como los planes de urgencia para Andalucía, Extrema-

da y Canarias que obtuvieron en el momento de su discusión parlamentaria una cierta repercusión en la opinión pública pero que, a la hora de la verdad, nosotros consideramos que no han tenido una eficacia auténtica.

Creemos, además, que el Fondo de Compensación Interterritorial que se crea tiene un marcado carácter neocentralista. En su inmensa mayoría todos sus recursos van a pasar por innumerables niveles de control central cuando uno de los principios de la autonomía y aun de la descentralización es el de la distribución de responsabilidades.

Aún más, si este tipo de Fondo de Compensación Interterritorial llegara a cuajar, veríamos florecer, antes del primero de mayo de cada año, una política clientelar de las Administraciones autonómicas y preautonómicas tendentes a conseguir que los distintos proyectos de inversión que les interesaran fueran a parar no al Fondo de Compensación Interterritorial, con respecto del cual conocemos la distribución territorial de las inversiones, sino al resto de las inversiones públicas, sean en forma de inversiones reales sean en forma de transferencias de capital. Es decir, entraríamos en una dinámica de negociación para conseguir que el máximo de recursos para una región o nacionalidad determinada quedara reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, pero no en la sección 33, sino en las distintas secciones que fuera necesario considerar.

Aquí estamos, además, ante uno de los temas que no ha sido discutido previamente a la discusión del Fondo de Compensación Interterritorial, que es cuáles y cómo van a ser las inversiones nuevas que se van a dar en el país, en el futuro. Si aprobamos esta distribución con los criterios últimos que están detrás del Fondo de Compensación Interterritorial nos vamos a encontrar con que las inversiones nuevas que se van a dar en España en cada año van a ser de dos tipos: las inversiones nuevas a través de las inversiones de cada uno de los Ministerios y las inversiones nuevas a través del Fondo de Compensación Interterritorial, de modo que las distintas Comunidades Autónomas no van a tener directamente ningún papel en la determinación o en la utilización de inversiones nuevas por parte de las distintas Comunidades Autónomas. Es decir, toda la inversión nueva no tiene ningún nivel de transferencia a las Comunidades Autónomas, en cuanto a los criterios de su decisión última, sino que viene siempre definida a través de uno de estos dos conceptos: o

el Ministerio o el Fondo de Compensación Interterritorial.

Hay que añadir que el Fondo de Compensación Interterritorial responde aparentemente a un anteproyecto de Fondo pactado por UCD y PSOE, partidos muy respetables y evidentemente mayoritarios, pero que difícilmente pueden pactar solos en una materia que, por su propia naturaleza, necesita de decisiones consorciadas. En materia territorial, en materia de Estado de las Autonomías es absolutamente imprescindible si queremos llegar a acuerdos permanentes claros y transparentes —lo cual es necesario desde el punto de vista institucional general, pero es todavía más necesario cuando estamos discutiendo de dinero— que las decisiones sean decisiones consorciadas, que cuenten con un acuerdo no solamente mayoritario, sino con un auténtico consenso en el conjunto de fuerzas políticas y de ámbitos territoriales afectados.

Además, los criterios adoptados para la distribución de los recursos del Fondo le parecen a nuestro grupo parlamentario rígidos e inadaptados a una situación de paro y de crisis económica, que previsiblemente va a prolongarse no durante el año 1982, sino en el curso de los próximos cinco años.

En nuestras enmiendas, el proyecto de ley de la LOFCA, que fueron en parte admitidas y en parte no, avanzábamos unas proposiciones en todo caso más ajustadas, pero que podrían ser también elementos de discusión y de negociación en una redistribución del Fondo.

Con la aprobación de este Fondo, aquí, se pondría en marcha, a nuestro entender, una nueva, inmensa y absolutamente desfasada, para las exigencias del país, Cassa del Mezzogiorno, una fuente adicional de mal gobierno, de mercadeo, de negociación poco transparente, entre las distintas Comunidades Autónomas, y estaríamos en una situación que no avanzaría en la consecución del Estado de las Autonomías, sino que haría pender las actitudes, las decisiones de cada una de las Comunidades Autónomas de la negociación concreta, que en un momento determinado pudiesen tener en curso, con respecto a sus recursos de inversión nueva para el año siguiente.

Hay argumentos adicionales de carácter técnico-jurídico con respecto a esta cuestión en los que no voy a entrar y voy a referirme finalmente a algunos de los problemas de los recursos destinados a este Fondo.

Nosotros creemos que la cifra de 180.000 millones de pesetas no está plenamente justificada en los criterios de establecimiento en los Presupuestos Generales del Estado. No aparece ninguna estimación de las inversiones de conservación, mejora y sustitución. La cifra nos parece que no ha sido discutida, no ha sido plenamente expuesta con criterios claros y nítidos.

Nosotros creemos, como he dicho al principio, que los criterios, que el criterio finalista definido en el artículo 158.2 de que este Fondo tiene que servir para la lucha contra las desigualdades no corresponde al criterio que se ha seguido, que ha sido simplemente de distribuir los expedientes en distintas carpetas y pasarlos a estanterías distintas. Por ejemplo, nosotros creemos que a poco van a contribuir, sino en la medida en que cualquier inversión pública puede contribuir a la lucha contra el subdesarrollo de una manera muy genérica las inversiones en edificios administrativos del Ministerio de Hacienda que aparecen reflejadas en el Fondo de Compensación Interterritorial.

Hay también otras partidas de la misma naturaleza que nosotros creemos que no van a contribuir al objetivo finalista al que debía ajustarse el Fondo. Creemos que cualquier discusión del Fondo de Compensación Interterritorial debía haber pasado por un conocimiento preciso de la distribución territorial de las inversiones públicas; y con ello no estamos pidiendo sino lo que ya se acordó el año pasado en este mismo debate presupuestario; no estamos pidiendo otra cosa que lo que ya la Administración jacobina centralista, y tan criticada, francesa tenía presente con la Transoperation Regional, en que todo el mundo podía conocer cuál era la parte de la tarta que le iba a corresponder en las inversiones públicas. Nosotros creemos que es imprescindible conocer muy claramente cuál es la parte de la tarta que corresponde a cada una de las regiones y nacionalidades, y a partir de ahí es posible discutir. Por lo tanto, sostenemos que el criterio que ha servido para la fijación del Fondo ha sido un criterio estrictamente contable. El Fondo recoge expedientes de gastos por esta cifra y con unos criterios de distribución territorial que no han sido negociados ni discutidos ampliamente, y no existe una adecuación al criterio finalista.

Nosotros creemos que cabría concebir un Fondo de Compensación Interterritorial de otra naturaleza; concebido de manera que afectara a que

pudiese tener incluso más recursos, pero creemos que esto tiene que surgir del debate, de la negociación, de la discusión, y por ello nosotros pedimos la devolución de esta sección, no porque nosotros seamos contrarios a la existencia de un Fondo de Compensación Interterritorial, que sí somos partidarios y que estamos dispuestos a que ese Fondo de Compensación Interterritorial, dada la naturaleza de las desigualdades territoriales en España, sea incorporado incluso a los Presupuestos de este año. Nosotros creemos que este tema del Fondo de Compensación Interterritorial debería ser devuelto para ser objeto de una nueva negociación; negociación amplia, transparente; negociación que afecta a todos los temas de construcción del Estado de las Autonomías que hoy en día está claro que debe ser objeto de un debate claro, amplio y permanente por parte de todos los grupos parlamentarios.

Yo no voy a entrar aquí en razones de carácter técnico; las razones de carácter técnico con respecto a este Fondo han sido criticadas desde muchas perspectivas; desde una perspectiva ideológica completamente opuesta a la mía han aparecido argumentos del mismo nivel.

Voy a terminar diciendo que en los Presupuestos del año anterior, la parte correspondiente a Andalucía representaba el 14,85 por ciento de las inversiones públicas y este año, teniendo en cuenta las inversiones del Fondo y el resto de las inversiones, no hay ninguna garantía para que se llegue a esta proporción, que continúa siendo inferior a la proporción de población que representa Andalucía sobre el total de población española. Si este Fondo no cumple las exigencias necesarias para poner en marcha de verdad el funcionamiento de inversiones en las Comunidades Autónomas ya existentes, ni cumple tampoco el objetivo de luchar contra las desigualdades territoriales y contra los desequilibrios en zonas como Andalucía, que requieren una mayor aportación de inversión pública por parte del Estado, nos encontramos con un Fondo que, puestos a discutirlo y valorarlo objetivamente, con calma y con seriedad, no tiene base suficiente para que sea aceptado por esta Cámara.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, señorías, la Memoria que se acompaña a los Presupuestos Generales del Estado dice en su página 243, que es donde por primera vez se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial: «De conformidad con los acuerdos alcanzados en esta materia» —se refiere a los acuerdos sobre el régimen autonómico—, «los Presupuestos Generales del Estado para 1982 incorporan por primera vez el Fondo de Compensación Interterritorial». Esto, evidentemente, quiere decir que, según el Gobierno —porque es el Gobierno el autor del proyecto de Presupuestos—, el Fondo de Compensación Interterritorial se incluye en el proyecto de Presupuestos para el año 1982 porque ha habido unos pactos y son los pactos los que obligan a que en los Presupuestos Generales del Estado para 1982 aparezca el Fondo de Compensación Interterritorial. Creemos que esto no debe ser así, porque los pactos no son ley que esta Cámara deba cumplir y acatar —suponemos—; obligarán, evidentemente, a las partes, pero no al Parlamento, a no ser que la vía del pacto se prevea en la ley como procedimiento de determinación del contenido de una ley, y ese no es el caso que nos ocupa, no es el caso del Fondo de Compensación Interterritorial.

Señorías, si el Fondo de Compensación Interterritorial tiene que ser recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para cualquier ejercicio económico es, en primer lugar, porque lo dice el artículo 158.2 de la Constitución: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso». Será porque este precepto se recoge en la Constitución, no porque existan unos pactos autonómicos, suponemos nosotros. Y será también, suponemos nosotros, porque existe una ley llamada Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida como LOFCA, que, en su artículo 16.1, dice: «De conformidad con el principio de solidaridad interterritorial a que se refiere el apartado 2 del artículo 158 de la Constitución» —que acabo de leer—, «en los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente el Fondo de Compensación Interterritorial», etcétera.

Es decir que el Fondo de Compensación Inter-

territorial debe recogerse en el proyecto de Presupuestos del Estado porque lo establece en el proyecto de Presupuestos del Estado porque lo establece la ley, porque lo establece la Constitución y no porque haya unos pactos que, por muy respetables que sean, nunca pueden tener el carácter vinculante de una norma legal. Más adelante, en la página 452, párrafo tercero (se está haciendo una referencia a la Constitución y demás), se dice: «... el Fondo de Compensación Interterritorial, el cual ha sido confeccionado siguiendo los puntos que se recogen en los acuerdos autonómicos alcanzados a finales de julio entre el Gobierno y los dos partidos mayoritarios».

De nuevo, de forma recalcitrante, se les da a los acuerdos entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición de la Cámara carácter de normas.

Señorías, con esta introducción quiero decir que esta Cámara, y el Senado en su momento, aprobará, por supuesto; modificará, lo dudo; mejor dicho, no creemos que modifique; o rechazará la propuesta del Gobierno. Pero creemos, estamos firmemente convencidos de que, tal como se justifica en la Memoria y en los datos a que me he referido anteriormente, aun cuando no se diga expresamente, esta Cámara no va a tener más papel que el de cumplir un puro trámite, desgraciadamente, porque en realidad ya está decidido cómo tiene que ser y cuál va a ser el papel que al Parlamento se le encomienda desde el Gobierno, desde el partido del Gobierno y desde el principal partido de la oposición en este asunto.

¿Qué dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, además de lo que antes he leído? Antes he dicho que se dotará en los Presupuestos Generales del Estado anualmente de una partida de recursos, etcétera. Quiere decir que en los Presupuestos Generales del Estado, y por lo que luego veremos, o trataré de demostrar a SS. SS., no se debe ir más allá. En primer lugar, se debe establecer la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial. El apartado 1, además de esta dotación a la que antes me he referido, también dice: «Dicho Fondo se distribuirá por las Cortes Generales» (es decir, se encomienda a las Cortes Generales la facultad de distribución del Fondo de Compensación) «... de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 de la Constitución».

Insisto, el Fondo de Compensación Interterri-

torial, una vez determinada su cuantía en el proyecto de Presupuestos o en los Presupuestos Generales del Estado, «se distribuirá...» (y es taxativo, tajante y terminante, y creo que aquí no cabe interpretación alguna más que la que literalmente se puede deducir leyendo el texto de la LOFCA) «... de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 de la Constitución».

El artículo 74.2 de la Constitución dice: «Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2» —que es al que al comienzo de mi intervención me he referido— «se adoptarán por mayorías de cada una de las Cámaras». En el primer caso, en el caso del artículo 94.1 de la Constitución, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos, es decir, en el 145.2 y en el 158.2, se iniciará por el Senado.

Quiere esto decir, señorías, insisto de nuevo, que en este momento, en este trámite procesal, esta Cámara solamente puede, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la propia Constitución, establecer la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial. En ningún caso existe norma legal alguna que faculte a esta Cámara, por muchos pactos que haya habido previos a la llegada del proyecto de Presupuestos a la misma, para establecer ningún tipo de distribución territorial, porque esa distribución territorial tendrá que realizarse por un trámite que se habrá de iniciar necesariamente, de acuerdo con lo que dice la Constitución en el artículo 74.2, en el Senado.

Por tanto, yo creo que podemos sacar ya una conclusión, después de lo que he manifestado hasta la fecha, y es que el planteamiento que se hace en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial en el proyecto de Presupuestos para el año 1982 vulnera la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y la Constitución, creemos que de forma evidente.

En el punto 2 de la página 453, también de la Memoria que se acompaña a los Presupuestos, se dice, y leo textualmente: «Su distribución —se refiere al Fondo, a la cifra que ya aparece del Fondo, a los 180.000 millones— entre las diferentes regiones y territorios responde a los resultados aportados por el INE» (Instituto Nacional de Estadística), «el cual ha realizado los cálculos sobre la base de los criterios aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Por tanto, esto significa, primero, que el INE

ha aportado unos resultados (que, dicho sea de paso, no se explica en la Memoria de los Presupuestos en qué consisten; son totalmente desconocidos; de manera que no sabemos cuáles han sido los criterios) y segundo, que el INE ha realizado esos cálculos en base a unos criterios aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pues bien, en cuanto a lo de que el Instituto Nacional de Estadística supongo —porque, como decía antes, lo que se refiere a la distribución, que supongo que es a lo que se refiere a su vez esta manifestación que se hace en la Memoria, no aparece por ninguna parte—, supongo que se refiere esa información o conclusiones del INE a la renta «per capita». Y yo me pregunto: ¿cómo es posible que el Instituto Nacional de Estadística pueda asumir la responsabilidad de hacer suyos unos resultados que no han sido publicados? Porque, que nosotros sepamos, todavía no existe información correspondiente a este ejercicio en el que nos encontramos que permita saber cuál es el nivel de renta «per capita» para poder realizar y aplicar una de las variables con las que hay que ponderar la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿No será, me pregunto, que el Instituto Nacional de Estadística se utiliza aquí para dar cobertura a algo que, quizá, no se puede justificar?

Por otra parte, el apartado 1 de la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas dice: «El Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, anualmente elaborará y publicará las informaciones básicas que permiten cuantificar a nivel provincial la renta por habitante, la dotación de los servicios», etcétera, y otros indicadores de riqueza y bienestar social. Asimismo elaborará estudios alternativos sobre la ponderación de los distintos criterios de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. En ningún caso aquí aparece una referencia a que el Instituto Nacional de Estadística se tenga que apoyar en unas decisiones adoptadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para llegar a determinar unos resultados.

Cuales son los criterios —ya sabemos lo que ha hecho el Gobierno en el proyecto que nos ha remitido en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial— que se establecen en la Ley

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que debe ser la matriz, que debe ser el punto básico, el punto de partida para ver hasta qué punto lo que aquí se está discutiendo y se está debatiendo, el contenido, en este aspecto concreto, de los Presupuestos Generales del Estado, se ajusta a la norma vigente que esta Cámara y el Senado en su día aprobó, o no es así. ¿Qué dice la LOFCA sobre los criterios en que tendrá que basarse la distribución territorial?

Primero, evidentemente, como antes he dicho a SS. SS., se distribuirán de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución, el cual establece, como ya he manifestado, que el proceso se iniciará en el Senado.

Segundo, se dice que se deberá destinar la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial a gastos de inversión «y se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios». Esto se dice en el punto 1, párrafo tercero: «El Fondo se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados y se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios: a) La inversa de la renta por habitante; b) La tasa de población emigrada por los diez últimos años; c) El porcentaje de desempleo sobre la población activa; d) La superficie territorial; e) El hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular; f) Otros criterios que se estimasen procedentes».

La Ley de Financiación establecerá la ponderación en un momento posterior para hacer la distribución territorial del Fondo de Compensación, y dice seguidamente —porque, evidentemente, a cada uno de estos factores hay que darle un peso específico—: «La ponderación de los distintos índices o criterios se establecerá por ley»; no en los Presupuestos Generales del Estado, por ley, una ley específica, «y será revisable cada cinco años». Señorías, se establecerá por ley, no por pactos, no en los Presupuestos Generales del Estado, no por el Instituto Nacional de Estadística ni por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino por ley; ley que no existe todavía, porque se ha iniciado su trámite hace muy poco y supongo que, como consecuencia de lo que se suponía que se iba a decir en el debate de los Presupuestos, se ha iniciado el debate en el Senado.

El punto 3 de la página 453, también de la Memoria que se acompaña a los Presupuestos como justificación del Fondo de Compensación Interterritorial, dice lo siguiente: «Las diferentes cuotas

regionales se han aplicado, en primer lugar, a financiar proyectos de materias que o bien están transferidas o pueden ser transferidas en el futuro. Esta es una de las justificaciones que da el Gobierno al texto que remite dentro del proyecto de Presupuestos del Estado para 1982, que, como saben SS. SS., no solamente plantea el Fondo en su cuantía, sino que establece su distribución territorial en base a unos criterios que todavía no han sido discutidos, como he demostrado a SS. SS., y va mucho más lejos, inclusive hace una distribución territorial.

¿Qué es lo que significa esto? En nuestra opinión, significa algo tan elemental y, por otra parte, tan lógico —diría yo— si tenemos en cuenta lo que parece que significa para ciertas fuerzas políticas, no sé si también para el Gobierno, probablemente sí, la autonomía, algo tan elemental como la pérdida de soberanía, la pérdida de autonomía, en una palabra, de los distintos ámbitos territoriales a los que deben ir destinados los fondos que correspondan, con arreglo a la distribución que se debería hacer en su día del Fondo de Compensación Interterritorial.

Esta conclusión no es que se las haga este diputado que está en el uso de la palabra en este momento, porque creo que cualquiera que esté preocupado por el futuro de la autonomía, el respeto a la soberanía de los distintos ámbitos territoriales en el ejercicio de su competencia es algo que debe ser elemental. No es esta la razón, aunque para mí sea muy importante; la razón o la causa de mi afirmación está apoyada en lo que dice la ley, en lo que dice la LOFCA en su artículo 16.3, que voy a leer seguidamente. Dice: «El Estado, Comunidades Autónomas, provincias que no formen parte de ninguna Comunidad Autónoma y territorios no integrados en la organización provincial, con el fin de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, de común acuerdo» (es decir, todas estas instituciones de común acuerdo) «determinarán, según la distribución de competencia existentes en cada momento, los proyectos en que se materializan las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial».

Por tanto, ni esta Cámara ni el Gobierno tienen facultades para establecer una distribución territorial ni del Fondo de Compensación Interterritorial ni de las partidas que a nivel territorial correspondan a los distintos ámbitos del Estado español. Esa facultad no existe, esa facultad está dada precisamente a cada uno de los entes insti-

tucionales que se verán afectados por esa distribución. En ningún momento, leyendo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas —si es que queremos respetar la ley—, aparece la referencia a que ni el Gobierno por sí mismo, ni esta Cámara ni el Senado tienen facultad para entrar en una distribución sectorial. Esa distribución sectorial corresponde y es potestad única y exclusiva de la soberanía de los distintos ámbitos territoriales, a quienes pertenece la parte correspondiente del Fondo de Compensación Interterritorial.

¿Hasta dónde, entonces, llega la facultad de las Cortes Generales en el proceso de utilización de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial? Pues esto también lo dice la ley, señorías. No hay que ir a ninguna parte, a ningún pacto ni inventar nada. Lo dice la ley en el artículo 16.4 que es la clave de todo el asunto de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y es la primera vez que se hace referencia a una competencia de las Cortes Generales sobre cómo se han utilizado las partidas del Fondo de Compensación Interterritorial, y en qué medida esos proyectos realizados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial están avanzados o no. Ahí es donde se da por primera vez competencia a las Cortes Generales, y se dice lo siguiente: cada territorio deberá dar cuenta a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución».

Esto, señorías, no tiene nada que ver con que esta Cámara tenga la competencia de distribución ni del Fondo de Compensación en su cuantía total ni de la distribución territorial. Esta Cámara tiene competencia para conocer, en su día, a dónde han ido destinados esos fondos y cuál es el estado de desarrollo de los distintos proyectos.

Señorías, termino diciendo que toda esta serie de razones son las que, al Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, nos ha impulsado a presentar una enmienda a la totalidad, solicitando la devolución al Gobierno del proyecto de Presupuestos, en la parte que afecta al Fondo de Compensación Interterritorial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Bandrés.

El señor BANDRES MOLET: Señor Presidente, señoras y señores diputados, también Euskadiko Ezkerra, desde su modestia, se honra en pertenecer a este grupo ya numeroso, y en conjunto importante, de voces que en este Congreso se levantan en contra de esta sección treinta y tres, que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1982 que estamos discutiendo.

Me parece importante una primera afirmación para que las cosas queden claras: la necesidad de regular la acción redistributiva de los Presupuestos del Estado y cuantificarla no sólo en lo que se refiere a los individuos, sino también en lo relacionado con el desarrollo equilibrado de los pueblos del Estado español, es un principio que Euskadiko Ezkerra defiende plenamente.

Los Presupuestos Generales del Estado, las leyes económicas en general tienen que tender a buscar la redistribución justa entre los ciudadanos, a la solidaridad de los ciudadanos, pero también a la solidaridad entre los pueblos. Nosotros, ya en la enmienda a la totalidad que hicimos a los Presupuestos para el año 1981, señalábamos la insuficiencia estadística que impedía —decíamos textualmente— «la necesaria comparación que se debe llevar a cabo entre las inversiones a realizar y las deficiencias infraestructurales de las diferentes provincias, regiones y Comunidades autónomas; por lo cual era imposible —decíamos entonces— determinar la relación de las inversiones con la distribución de la riqueza por provincias».

Hoy puede repetirse esta misma afirmación, no sólo referida a las inversiones, sino referida a los gastos totales. Como superación a este hecho y, además, por mandato constitucional, que ha sido expuesto repetidas veces esta misma tarde, el Gobierno presenta el Fondo de Compensación Interterritorial por un montante de 180.000 millones de pesetas, además de otros 645.000 millones como gasto de capital por parte del Estado.

Hasta aquí, en principio, no tendríamos nada que objetar. Quizá pudiera ser objeto de discusión si el Fondo de Compensación Interterritorial debe ser de cuantía superior y, en cambio, inferior los gastos de capital. En definitiva, no se puede gastar más de lo que se tiene. Hasta aquí no habría nada que objetar, en principio.

Las discrepancias comienzan cuando se analiza

la formulación concreta que adquieren tanto el Fondo de Compensación Interterritorial como el resto de las inversiones a realizar por el Estado. Esta divergencia se concreta, para hacerla sencilla, en los siguientes aspectos:

Primero, si se piensa que son las inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial las que se destinan a equilibrar los niveles de renta y empleo, es lógico opinar que el resto de las inversiones se producirán teniendo en cuenta, fundamentalmente, el volumen de la aportación fiscal que realizan las diferentes provincias y Comunidades autónomas. En cambio, esta afirmación, que parece lógica, se ve desmentida mediante un simple análisis, en lo posible, de la distribución territorial de esos otros 645.000 millones de pesetas de gastos de capital, al menos en lo referente a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay que aclarar que, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, hemos considerado que las inversiones se realizan a cargo de ésta. En ese sentido, las estimaciones realizadas señalan que del total de inversiones reales regionalizadas del Estado, excluido el Fondo, sólo corresponden al País Vasco el 2,33 por ciento del total.

En cuanto a las transferencias de capital a los organismos autónomos, las estimaciones señalan que en lo referente a los organismos autónomos administrativos sólo va a corresponder a la Comunidad Autónoma el 2,31. Estamos siempre —yo lo advierto— excluyendo el Fondo de Compensación Interterritorial.

En lo que respecta a los organismos autónomos comerciales y financieros, esta proporción es menor y bajaría hasta un 1,8 por ciento.

En definitiva, ponderando los tres conceptos observamos que las inversiones presupuestadas —insisto en que excluimos el Fondo de Compensación Interterritorial— para el País Vasco suponen un tanto por ciento que ronda el 2,1, frente a unas aportaciones del 6,24 en las cargas generales del Estado.

Así se da el caso paradójico de que el Fondo de Compensación Interterritorial, en la forma en que está propuesto, aporta más (en realidad el 3,21 por ciento) a una Comunidad Autónoma comparativamente rica, como es la vasca, que las inversiones del Estado que aparece en los capítulos VI y VII de los Presupuestos.

Por tanto, cabe opinar a este respecto que, tanto por la cuantía de los fondos como por su distribución, el Estado realiza una labor de drenaje del

País Vasco muy superior a la del Fondo, perdiendo éste su carácter de instrumento solidario preferente.

En segundo lugar, en el proyecto no se especifican los criterios utilizados en cuanto a la definición de las variables y la ponderación de éstas. Todo esto admitiendo esencialmente lo que ha manifestado desde esta tribuna hace un momento el representante del Partido Nacionalista Vasco: que, por imperativo legal, no se podría hacer esta Ley, esta distribución.

Entrando de todas maneras en estos criterios utilizados, vamos a seguir analizándolos. Vemos, como han visto los que me han precedido en esta tribuna, que coincide la asignación total al Fondo y los resultados por Comunidades Autónomas con los datos contenidos en el anteproyecto del Fondo de Compensación Interterritorial, objeto de un pacto firmado por los dos partidos mayoritarios, y se supone, por tanto, que los mismos criterios que allí se manejan son los que han presidido la distribución que se hace y que está siendo sometida aquí a discusión.

Se está aplicando, en definitiva, un anteproyecto de ley a un proyecto que, en todo caso, está en discusión como si estuviera aprobado, como si fuera ya ley. Tales variables no son las definidas por la LOFCA, ni en ésta se les asigna una ponderación específica.

Nosotros compartimos la necesidad de delimitar estos conceptos, que en la LOFCA son confusos y que no están bien recogidos y pueden dar pie a repartos injustos. Lo que no se comparte es la formulación específica del proyecto del Fondo de Compensación Interterritorial, ya que en cuanto a las variables se han introducido conceptos totalmente ajenos a la ley y en cuanto a la ponderación se han infravalorado indicadores importantes de las necesidades económicas de las Comunidades Autónomas. En concreto, en lo referente a la renta, la variable elegida tiende a ampliar excesivamente el abanico de los valores que toma. En lo que respecta a la emigración la variable utilizada no respeta lo previsto en la ley y, además, considera como idénticas las necesidades de los inmigrantes y los recursos que libran los emigrantes, cuestión a todas luces incierta.

En cuanto a la tasa de paro, no se hace ninguna referencia en el proyecto que estamos discutiendo al número absoluto de parados en las Comunidades Autónomas. la ponderación del proyecto infravalora el problema más importante con que se

enfrenta el país, el paro, pues sólo se le concede un índice de ponderación del 5 por ciento. Además, hay que resaltar que en provincias y Comunidades Autónomas con un fuerte volumen de inmigrados son precisamente éstos los que sufren con más intensidad la problemática del paro.

Es preciso interpretar la lógica, pero hay que interpretarla dentro de los criterios legales, dentro del pensamiento que está informando esta Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y hay que considerar las siguientes variables:

La renta por habitante ponderada de la población correspondiente a cada Comunidad Autónoma. Esta variable no es contradictoria con la ley, e interpreta la LOFCA de forma más ajustada a su finalidad desde nuestro punto de vista. Hay que ponderar el nivel de emigración por el número de habitantes. Además de recoger lo señalado en la ley, no se caería en el error de suponer que los inmigrados utilizan de forma íntegra y suficiente los recursos e infraestructura abandonados por los emigrados.

Hay que tener en cuenta el nivel de paro ponderado por el número de parados. Este está más en la línea de lo deseado por la LOFCA, a la vez que considera el paro como una lacra estructural y, por tanto, obliga a tenerlo más en cuenta.

En cuanto al nivel de imputación de las variables, el proyecto señala el 70 por ciento a la renta, el 10 por ciento a la emigración, el 5 por ciento al paro y el 5 por ciento a la superficie. Nosotros consideramos más adecuado y proponemos que se dé el 60 por ciento a la renta, el 20 por ciento a la emigración, el 18 por ciento al paro y el 2 por ciento a la superficie, considerando aceptable la valoración que se da al hecho insular. Se me puede decir que por qué esta distribución y no otra, pero esta pregunta se vuelve contra el que la hace, diciéndole: ¿por qué ésa y no otra?

Esta nueva propuesta está orientada a revalorizar la importancia del paro por su carácter estructural y porque afecta a sectores de población en muchos casos emigrados, como se ha dicho repetidas veces.

En tercer lugar, a pesar de lo manifestado en la Memoria explicativa del proyecto de ley de Presupuestos, que indica que las asignaciones del Fondo serán de libre disposición por parte de la Comunidad Autónoma Vasca (y en 250 estaría de acuerdo con lo que precisamente dispone la LOFCA), esto resulta incierto, pues dentro del

mismo proyecto, en el anexo de distribución del gasto, ya se prevén las aplicaciones de cada uno de los 5.957 millones que corresponderían al País Vasco, y además hay que decir que 1.200 de estos millones están ya destinados a una empresa autónoma que escapa al control propio de la Comunidad Autónoma. Me estoy refiriendo al puerto autonómico de Bilbao, al superpuerto, que, como puerto autónomo, tiene autonomía frente al Estado, así como frente a la propia Comunidad Autónoma.

Este planteamiento indica cómo el Gobierno, con la coartada del Fondo de Compensación Interterritorial, lo que intenta es recuperar el control sobre la mayor parte de las inversiones públicas de todas las Comunidades Autónomas, con objeto de proteger su principal instrumento electoral, desde nuestro punto de vista.

Como consecuencias inmediatas de esta formulación nosotros deducimos:

Primero, la intención por parte del Gobierno de atenuar las autonomías, desnaturalizarlas, amenazarlas con el hundimiento económico, en definitiva, convertirlas en simples descentralizaciones administrativas, y ello, como ha dicho muy bien el representante del Partido Nacionalista Vasco, en contra de lo que dispone taxativamente la ley.

Segundo, imposibilidad de asumir una política anticrisis desde cada Comunidad Autónoma. Se hace evidente en este apartado la desconfianza del Gobierno ante el desarrollo de iniciativas o planes económicos de las Comunidades que escapen a su estricto control.

Tercero, una gran incertidumbre en cuanto a la efectiva realización de los programas de inversiones presupuestados, pues hasta ahora su incumplimiento ha sido sistemáticamente practicado por los distintos Gobiernos del partido que gobierna.

Por todo ello, nosotros entendemos que debe ser devuelta al Gobierno esta sección treinta y tres, del Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado, para su reelaboración conforme a los siguientes criterios que voy a exponer brevemente, y que vienen implícitos en lo que acabo de decir:

Variables e índices de ponderación: Renta por habitante ponderada por la población correspondiente a cada Comunidad Autónoma, 60 por ciento. Nivel de emigración ponderado por el número de emigrados, 20 por ciento. Nivel de paro

ponderado por el número de parados, 18 por ciento. Superficie, 2 por ciento. Distancia a considerar para la valoración del hecho insular, formulación idéntica a la del proyecto.

Aportaciones del Fondo de Compensación Interterritorial a las diferentes Comunidades Autónomas: me remito a la participación y relaciones que aparecen en la enmienda escrita y que no repito por no alargar esta intervención, puesto que los señores diputados las tienen a su disposición.

Finalmente la aplicación de los fondos asignados. Las Comunidades Autónomas con Estatuto de Autonomía en vigor son las competentes, y las únicas competentes, en la asignación de tales fondos. Unicamente como la ley establece —y aquí se ha recordado— tendrán en su momento que dar cuenta a las Cortes Generales de la aplicación de estos fondos y, en todo caso, del estado de los proyectos de obra que están en curso de realización.

Eso es todo, señores diputados. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, de las intervenciones anteriores se puede llegar a la conclusión, y puede haber quedado en el ánimo de la Cámara, de que el Fondo de Compensación Interterritorial que contempla la sección treinta y tres de los Presupuestos Generales del Estado, en primer lugar, no es un auténtico Fondo de Compensación Interterritorial. En segundo lugar, no responde a criterios redistributivos entre las distintas regiones. Y, en tercer lugar, parece que se ha hecho con criterios, de alguna manera, caprichosos.

Me resulta difícil intentar convencer a los que han intervenido anteriormente, puesto que existiendo una Memoria de 120 páginas, explicativa del Fondo de Compensación Interterritorial, si no les han bastado esas explicaciones difícilmente puedo yo, en unos minutos, intentar convencerles de que el Fondo de Compensación Interterritorial es un auténtico Fondo de Compensación; en segundo lugar, que está hecho con criterios objetivos, discutibles como todos los criterios pero desde luego objetivos; y, en tercer lugar, que cumple los criterios redistributivos que hay que

determinar claramente para el Fondo de Compensación Interterritorial.

En primer lugar, es un Fondo de Compensación no exclusivamente porque se haya pactado la existencia de dicho Fondo, sino porque evidentemente hay preceptos constitucionales, y también legales.

Quiero recordar que me parece que fue el artículo 18 de la Ley de Presupuestos del año anterior, del Presupuesto vigente para 1981, el que estableció la obligatoriedad de un Fondo de Compensación. Reconocemos que la Ley del Fondo de Compensación que desarrolla el artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas no está todavía vigente, se encuentra en estos momentos en el Senado pendiente de su aprobación y, por tanto —se dice en la propia Memoria—, el Fondo de Compensación es un Fondo de Compensación tentativo en el sentido de que es no firme, absolutamente, en sus criterios para años posteriores, pero, evidentemente, entre la opción de no presentar un Fondo de Compensación porque no existiera esa Ley, o de presentar un Fondo con las características que éste tiene, el Gobierno ha optado por presentar un Fondo de Compensación Interterritorial en las condiciones en que éste está presentado. Por tanto, nosotros afirmamos rotundamente que se trata de un Fondo de Compensación Interterritorial.

En segundo lugar, se ha discutido la cuantía. Por parte de algún grupo parlamentario, el Grupo Andalucista, se ha dicho —y lo dice además en su enmienda— que le parecen escasos los 180.000 millones de pesetas y él propone 250.000 millones de pesetas. Por parte de algún otro grupo, aunque no se ha dicho por sus posiciones políticas, sabemos que se pretende un Fondo inferior. Concretamente el Partido Nacionalista Vasco en su intervención en la Comisión de Política Fiscal y Financiera proponía un Fondo menor, de 80.000 millones de pesetas.

Los 180.000 millones de pesetas están efectivamente acordados en los pactos autonómicos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, pero es que, además, responde a un criterio que sigue lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, porque estos 180.000 millones de pesetas significan un 40 por ciento de la inversión real neta nueva incorporada a los Presupuestos, puesto que de la inversión del Estado hay que descontar los gastos

de Defensa, que se consideran como consumo en términos de contabilidad nacional, los gastos de mantenimiento de otras inversiones y las transferencias a organismo autónomos para gastos de mantenimiento y de inversiones. Por tanto, a nosotros nos parece adecuado el importe de 180.000 millones de pesetas, que puede resultar de alguna manera insuficiente, evidentemente, pero que responde a unos criterios ajustados a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Donde después se ha producido el mayor debate, porque es lógico que en estas cuestiones se produzca ahí, es respecto a los criterios de distribución de estos 180.000 millones de pesetas. Evidentemente, estos criterios de distribución —como dije anteriormente— pueden ser discutibles —y de hecho se discutirán en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial— pero son criterios objetivos elaborados por una comisión de expertos y aprobados por la Comisión de Política Fiscal y Financiera, donde tiene representación las distintas Comunidades autónomas y preautonómicas y, desde luego, responde a criterios objetivos que consiguen la finalidad última del Fondo, que es una redistribución de rentas entre los distintos territorios de España. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios son justamente aquellos que nos recordaba el señor Elorriaga del artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: La renta «per capita», es decir, la proporción inversa a la renta «per capita»; proporción directa a superficie demográfica; el saldo migratorio de los últimos diez años; el paro; y la contemplación del hecho insular.

Es verdad que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que se podrán utilizar otros criterios, pero justamente el informe de la comisión de expertos —y así lo acordó la Comisión de Política Fiscal y Financiera— estableció que los criterios deben ser pocos y claros y los criterios de distribución son, pues, justamente los que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece, que son estos cinco que yo he enunciado; y ahora veremos en qué porcentajes.

Se ha autorizado un porcentaje del 70 por ciento para la inversión de la renta «per capita» porque se considera que, efectivamente, ese es el criterio más notable dentro de las desigualdades regionales. En segundo lugar, un 20 por ciento para

el saldo migratorio en los últimos diez años; un 5 por ciento para el índice de paro y un 5 por ciento para la superficie. A todos estos porcentajes nuevos se les aplica un corrector, en relación con el hecho insular, que produce como consecuencia un incremento del 0,15 para Baleares y un 1.93 para Canarias.

Efectivamente, estos criterios podrán ser discutibles. El señor Bandrés ha expuesto aquí unos criterios distintos. A estos criterios distintos que ha expuesto el señor Bandrés y que se ha preguntado: ¿Por qué no los que yo propongo?, le voy a contestar. Porque esos criterios que propone el señor Bandrés, por ejemplo, producen un efecto redistributivo más desfavorable para aquellas regiones más pobres. Concretamente los criterios del señor Bandrés favorecen al País Vasco, ¡faltaría más!, a Cataluña y a Madrid capital. En definitiva, aquellas zonas que tienen una renta «per capita» más alta, y perjudica, respecto a los criterios elaborados e incorporados por el Gobierno, a Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha. Es decir, las regiones más subdesarrolladas.

Los criterios son, evidentemente, discutibles, pero estos criterios que aquí se han incorporado producen un efecto redistributivo importante y van en la línea de la solidaridad territorial.

Evidentemente, las descompensaciones que existen entre los distintos territorios españoles, no se van a salvar ni a solucionar con este Fondo ni, probablemente, con un fondo similar o mejor durante varios años, pero es indudable que estamos en el camino adecuado. Quiero decirle que en la Memoria del Fondo se expresa claramente este criterio, porque con los criterios que en la Ley de Presupuestos vienen incorporados, se consigue que las cuatro regiones con una renta «per capita» más alta de España y que agrupan en su conjunto un 35 por ciento de la población española, reciban un 17 por ciento del Fondo de Compensación Interterritorial y, por el contrario, las cinco regiones con una renta «per capita» más baja de España, también con una población similar de un 36 por ciento aproximadamente, reciban un 60 por ciento del Fondo. Por tanto, aquí hay una redistribución; una redistribución que es importante en el camino de avanzar hacia esa redistribución territorial, que no produce, en nuestra opinión, unos daños irreparables a ninguna región porque, efectivamente, fuera del Fondo de Compensación Interterritorial, a través de las in-

versiones de mantenimiento, de alguna manera esas diferencias no son tan grandes. Pero estamos, evidentemente, ante una aplicación estricta de lo que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; es decir, que sean las inversiones nuevas y netas las que consigan el efecto redistribuidor.

Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores diputados, y aunque yo no he querido extenderme en largas consideraciones acerca del Fondo de Compensación, que evidentemente es un tema delicado y que produce el natural desasosiego en muchos miembros también de mi grupo parlamentario, sobre si estaremos o no acertando en este Fondo de Compensación, evidentemente cualesquiera que sean los criterios que aquí se utilicen, han de conducir hacia el camino que nos marca la Constitución: la redistribución regional.

Por las razones que yo he tratado de exponer con claridad, nos parece que el Fondo de Compensación, en la cuantía en que viene y con la distribución y aplicación de los criterios que yo he indicado, consigue este objetivo y esto es, ni más ni menos, lo que mi grupo pretende al pedir el voto en contra de estas enmiendas de totalidad que pretenden la devolución de la sección treinta y tres de los Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Andalucista, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, con objeto de ser breve voy a contestar directamente desde el escaño. Simplemente decirle al diputado de Unión de Centro Democrático que el gran problema del Fondo no se ha planteado. El gran problema lo tenemos planteado en la totalidad de las inversiones, y ya dijimos en la enmienda a la totalidad que, por ejemplo, para el caso de Andalucía si consideramos inversiones regionalizadas las que figuran en los Presupuestos Generales del Estado o consideramos las que figuran en informaciones del Ministro, resulta que nos encontramos al mismo nivel de inversiones que el año pasado. Es decir, que no existe tal Fondo de Compensación y no existe ningún efecto del mismo, independientemente de que nos metamos en los criterios del Fondo.

Así, en concreto, hoy quiero hablar de una zona que no sea por la que yo he salido diputado, por ejemplo, Extremadura. A Extremadura, por

el Fondo de Compensación Interterritorial se le dan 14.690 millones de pesetas, lo que representa un 8,16 por ciento. El resto regionalizado, el 0,5 por ciento, son 1.300 millones de pesetas, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que lo que se le pretende dar por un lado, se le quita por otro.

Entonces, debíamos ponernos de acuerdo —y ha sido el criterio que yo he mantenido— en que lo que hay son unas partidas presupuestarias en los diferentes Ministerios y que esas partidas deberían volver a los Ministerios, pero discutámoslo cuando esté la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. No he querido meterme a atacar el Fondo, sobre si ha sido un pacto o no. No es mi problema. En esto no he querido entrar. Lo que sí digo es que no existe tal Fondo, ni por las cantidades, ni por de dónde viene ni por los efectos que tiene. Este es el tema de fondo y no traigamos aquí el problema político que lo deberemos discutir cuando venga el proyecto de ley.

Ustedes utilizan argumentos más o menos lógicos, más o menos censurables desde diferentes posiciones, con acuerdos con otros partidos, y yo diría que ese no es el problema en este momento. Yo creo que, inclusive, se están falsificando esos acuerdos, pero, evidentemente, no voy a sacar una espada para defenderlos. No quiero decir eso, sino que no nos engañemos. Es fundamental que se diga. Si no se puede hacer este año porque no ha habido tiempo, que se diga; pero que no se pretenda decir que hay un Fondo de Compensación Interterritorial. Además, cuando ustedes mismos, señores diputados, lleguen a sus diferentes regiones, les van a poner colorados, si es que no hemos perdido la capacidad de asombro. (*Rumores*)

No entro en la discusión de fondo en cuanto a si los gastos de Defensa son, en términos de contabilidad, consumo, no consumo o inversión; los españoles nos gastamos el dinero en ello pero repito que no voy a entrar porque el 30 por ciento es discutible. Sobre qué va o no va, es un problema que discutiremos en la Ley de Fondo; pero lo que sí quisiera decir es que, cuando se nos habla, se nos dice que hay criterios objetivos, eso, el diputado que ha intervenido antes que yo no lo creera. Es decir, no existen criterios objetivos. Me imagino que lo que ocurre, cuando hay un acuerdo con otro partido, el que fuere, es que hay una fuerza política, y en función de esa fuerza política se tira y se afloja, que es normal, llegándose a un

pacto, lo que en el sistema democrático es fundamental.

Nosotros aquí no queremos atacar los fundamentos de un sistema democrático, siempre que todos acabemos en el pacto. Los que vituperan estos acuerdos son los que están extramuros del sistema parlamentario, los que quieren que los llamados principios siempre se impusieran a lo que es el pacto, diría, para sacar adelante el país.

No digamos que son objetivos. Aquí el Fondo de Compensación Interterritorial, debemos entre todos, no convertirlo en una discusión pueblerina; en decir yo me llevo mil y tú te llevas quinientas, y al final no nos llevamos nada. Se va a repartir en función de la fuerza política que se tenga y del peso específico. Eso es normal. La misma relación que existe en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, o las diferentes partidas que en el futuro veremos, son las mismas discusiones que, en alguna medida —sin que valga la comparación—, cristalizan también con el sistema impositivo. Es decir, en función de esa fuerza se van distribuyendo los Presupuestos Generales del Estado.

Y yo terminaría, simplemente, con una referencia, que me entienda el diputado, señor Bandrés, cariñosa desde Andalucía. No es el problema de los parados absolutos; no es ese, fundamentalmente, el tema. Y, además, el señor Bandrés que ha hablado de algo que es la soberanía, la competencia que deben tener las Comunidades Autónomas, la propia soberanía debe de servir —y hablo al señor Bandrés como representante de un partido nacionalista de izquierda—, dentro de la propia Comunidad Autónoma se pueden establecer, como he dicho antes, una serie de impuestos que graven a las capas más beneficiadas de esa sociedad, y que con esos fondos intraterritoriales se haga frente a áreas de subdesarrollo.

No quiero entrar si en su fondo es importante el criterio del paro. Eso ha de decirlo la ley. Lo único que he de decirle es que no hay que aceptar unos determinados criterios, que en todos los sitios existen bolsas de pobreza, pero, en alguna medida, tenemos que utilizar los mecanismos que nos dan. Es decir, si queremos la autonomía, esa autonomía nos debe servir no solamente para exigir al Poder central, sino para que nosotros mismos, desde nuestras propias Comunidades Autónomas, nos distribuyamos lo poco o mucho que tengamos, porque también existen diferencias in-

traterritoriales; es decir, dentro de la propia Comunidad.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por Minoría Catalana, el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA BOHM: Señor Presidente, señorías, en la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Centrista para este tema, el señor Bravo de Laguna, en ningún momento ha citado un tema que nosotros creemos que es absolutamente fundamental, que es el mandato del artículo 16 de la LOFCA, que dice que para hacer y aplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, es precisa una ley. Aquí se plasma en una sección de los Presupuestos sin esa ley. Se continúa vulnerando un acuerdo y el mandato de una ley orgánica.

La segunda cuestión es que la Memoria explicativa de las 120 páginas lo que explica son los acuerdos del Consejo, no vinculantes, que reflejan los acuerdos, como dice la Memoria, entre el Gobierno y los partidos mayoritarios de este Parlamento, pero no explica cuál es la política de lucha contra los desequilibrios territoriales en España.

No explica, por ejemplo, por qué no se ha ponderado por un índice tan objetivo como es la población o por qué sólo se da un peso del 5 por ciento a la población en paro, cuando es, junto con la inflación, como todo el mundo sabe y lo hemos tratado aquí en los debates de la globalidad del Presupuesto, los dos temas más importantes que en este momento tenemos en la economía española. Tampoco explica lo que yo creo que es una auténtica aberración, cómo es que este Fondo de Compensación Interterritorial, por ejemplo, en el caso de Cataluña resulta que aplicando el Fondo sale favorecida respecto del resto de las inversiones que hay regionalizadas dentro de los Presupuestos. Es decir, en este caso, según se ha aplicado este Fondo, resulta que Cataluña es una de las regiones menos desarrolladas de España, cosa sobre la que no creo que obtendríamos la coincidencia de la opinión de esta Cámara.

Entonces el tema es que el Fondo de Compensación resulta simplemente de agrupar de alguna manera y para cumplir unos acuerdos, una serie de inversiones para que cubran el 30 por ciento de la totalidad de las inversiones regionalizadas en el Fondo, pero no responde a una política, ni, evidentemente, incluso dentro del Presupuesto, a

una verdadera política de compensación interterritorial para el próximo año de 1982. Yo creo que si ustedes tienen acuerdos, los han de aplicar, pero en este caso no pueden justificarlos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Monserrat.

El señor MONSERRAT SOLE: Señor Presidente, señorías para ratificarme en los criterios que he expuesto. Teniendo en cuenta que el desasosiego que embarga a algunos miembros de UCD, según ha dicho el propio señor Bravo de Laguna, es todavía mayor en mi caso, después de las parcas explicaciones del señor Bravo de Laguna, para manifestar que sí estamos de acuerdo con el Fondo, pero que no estamos de acuerdo con este Fondo; que este Fondo tiene un carácter nominalista, que este Fondo no cumple el objetivo finalista señalado en el artículo 188.2; que es previo a poder discutir de verdad estos temas disponer de una regionalización de todas las inversiones; que es previo definir cuál es la capacidad inversora de las Comunidades Autónomas y cuál es la capacidad inversora del Estado vía Fondo y vía no Fondo; que hay que clarificar los temas institucionales previamente a la fijación definitiva del Fondo, y que luego hay que discutir con mayor detalle el tema de la distribución.

En ciencias sociales no existen criterios objetivos, existen criterios intersubjetivos, y los criterios intersubjetivos son el resultado de la capacidad de entenderse. Yo creo que en esta capacidad de entenderse es absolutamente imprescindible en el tema de las autonomías, en el tema de la lucha contra las desigualdades, y que es necesario devolver el presupuesto de la sección 33, no para suprimir el Fondo de Compensación Interterritorial en este año, sino para renegociar la distribución de estas inversiones de una manera más adecuada.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, señorías, voy a procurar no extenderme excesivamente.

Señor Bravo de Laguna, el Fondo de Compensación Interterritorial es uno de los temas básicos, creo yo, de los Presupuestos, tanto por la filosofía

que entraña como por sus efectos económicos, sobre todo por los efectos teóricamente redistributivos que se pretenden alcanzar con el mismo. Y no se puede subir a esta tribuna y despachar el tema como cuando en esas corridas de toros —de las que yo no soy aficionado precisamente— porque el toro sale cojo o manso, se le dan dos capotazos, se le pegan dos descabellos y al corral. No se puede hacer esto, es una falta de respeto a los distintos grupos parlamentarios que han intervenido desde esta tribuna y que han expuesto una serie de argumentos a los que S. S. tenía la obligación de responder y contestar. Concretamente al argumento fundamental en que se ha basado nuestra tesis para oponernos al Fondo de Compensación Interterritorial, consistente en que hay unas normas que hay que cumplir, S. S. no ha respondido, no ha respondido en modo alguno y la razón es muy sencilla: es que no hay respuesta.

La Memoria de 120 páginas a que usted se refiere no es una Memoria que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado; por si no lo recuerda usted, es una Memoria del proyecto de ley que ha entrado en el Senado, que algún día llegará aquí, y mientras no llegue aquí, para nosotros no tiene fuerza de ninguna clase, ni vinculante, lo más informativa. Curiosamente es una información que llegó a la Comisión de Presupuestos cuando se estaban debatiendo las enmiendas puntuales el último día, si no recuerdo mal; y creo recordar también que unos cuantos diputados, quizá por desconocimiento de lo que contenían aquellos sobre, ni se enteraron del tema. Por tanto, no vale decir que existe una Memoria, a la que ya otros portavoces anteriores a mi intervención han calificado adecuadamente.

Dice S. S. que, además de la Constitución, la Ley de Financiación en su artículo 16 dice que hay un precepto del Presupuesto para el año 1981 que determina que efectivamente tenía que haber un Fondo de Compensación Interterritorial.

Esto no quiero calificarlo de desvergüenza, pero es inaudito, porque usted acaba de reconocer, al hacer esa manifestación, que el Gobierno ha tenido todo un año para presentar el proyecto de ley que debería ponderar los distintos criterios establecidos en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas para cuando llegase esta Ley de Presupuestos que incluyese la determinación del «quantum» del Fondo de Compensación Interterritorial, las Cámaras estuviesen en condi-

ciones de proceder a una redistribución territorial inmediata.

Usted mismo ha reconocido que se ha perdido, lamentablemente, un año; o quizá no se ha perdido un año, quizá lo que ha ocurrido es que el Gobierno, o el partido del Gobierno, o no sé quién, ha preferido, en lugar de mandar un proyecto de ley, que eso se discuta en otros ámbitos, cuando donde debía haberse discutido era aquí.

Pero hay otra cosa que todavía es más chocante y, sobre todo, más preocupante, y que ya, señor Bravo de Laguna, se le escapó en Comisión; lo que pasa es que, como tiene menos trascendencia, y particularmente este año, por la forma en que se ha llevado la discusión de los Presupuestos, ha pasado un poco como un fantasma. Ha dicho en un momento determinado: lo importante es que consiguen el objetivo último, que es el de su redistribución. Usted con esto ha aplicado la teoría, ni más ni menos, de que el fin justifica los medios. Esto es lo que acaba de decir usted: que como al final se consigue eso —evidentemente, desde su punto de vista—, es por lo que este procedimiento vale.

Ese ha sido todo el argumento que S. S. ha dado desde esta tribuna para justificar el procedimiento seguido por el Gobierno de incluir el Fondo de Compensación Interterritorial, con su distribución, cuantía y demás, tal como se recoge en el proyecto de Presupuestos.

Esto no es de recibo, porque es tanto como decir por parte de S. S. (que espero sea un criterio no compartido, y hasta pienso yo que es algo que no ha querido decir S. S.), si se lleva hasta sus últimas consecuencias, que esta Cámara sobra, porque es suficiente con que haya unos pactos para que se pueda hacer cualquier cosa. Eso es lo que quiere decir: el fin justifica los medios.

Esto mismo lo dijo S. S. en la Comisión y por eso el tema me preocupa, porque no es la primera vez. En Comisión, si se lee S. S. el «Diario de Sesiones», que ahí constará, en alguna parte estará, dijo concretamente palabras parecidas a éstas, y no creo equivocarme mucho; dijo: «Y, en última instancia, de lo que se trata es de que las dos fuerzas mayoritarias se han puesto de acuerdo, y eso es un motivo importante para que esto se recoja». Con esos argumentos no se puede andar por este país, en el que se supone que las distintas fuerzas políticas, si de algo tenemos que hacer acopio y demostración, es de verdadero respeto a los prin-

cipios parlamentarios y a los principios democráticos. (*Varios señores diputados: ¡Muy bien!*)

Ha metido usted la pata hasta el zancarrón, como se suele decir en mi pueblo, cuando ha dicho que el Partido Nacionalista Vasco apoyó y aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los distintos acuerdos.

En primer lugar, el Partido Nacionalista Vasco, por si S. S. no lo sabe, no está representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quienes están representados son los distintos órganos de Gobierno de las distintas Comunidades Autónomas, no el Partido Nacionalista Vasco, por si no estaba esto claro. Son dos cosas totalmente distintas; una cosa es el aspecto ideológico de las personas y otra cosa es el institucional. El PNV no estaba.

Desde luego, lo que sí le puedo asegurar a S. S. es que el portavoz, concretamente consejero de Economía, señor Uriarte, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se debatió este tema, manifestó su oposición con argumentos, no como S. S. ha hecho desde esta tribuna, el porqué se oponía a los criterios que cierta Comisión había presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, Consejo de Política Fiscal y Financiero que, como ya ha manifestado otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no tiene más carácter, que el de órgano consultivo, de acuerdo con lo que establece el artículo 3.º de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas —que está para leerse de vez en cuando— en su apartado 2, que dice: «El Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano consultivo y de deliberación entenderá...». En ningún momento son determinantes sus criterios o los acuerdos a los que pueda llegar en este aspecto concreto.

En cuanto a que esos criterios que usted ha dicho que son los que se dicen en el artículo 16 (el de la inversa de la renta por habitante, la tasa de la población emigrada de los diez últimos años, el porcentaje de desempleo, etcétera), habiendo manifestado que puntualmente se han recogido, le voy a sugerir que se lea, por si no se lo ha leído, el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera al respecto, porque las distintas variables, y concretamente las que S. S. ha mencionado, precisamente lo que hacen es incumplir la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, porque, aún cuando hacen referencia a

esos temas, el concepto y el contenido de las distintas variables que se plantean en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el dictamen que allí se probó, no tienen nada que ver con el tema. Le puedo decir que, por ejemplo, en el tema de la inversa de renta por habitante, la definición que se hace de esta variable en la propuesta infringe el artículo 16.1 a) cuando hace referencia exclusiva, como le decía a S. S., a que el criterio que se sigue es el de la inversa de renta por habitante.

Pues bien, el criterio mantenido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según las notas que tengo aquí apuntadas (porque es una información adicional de la que disponía y que suponía no iba a entrar en este debate porque entiendo que no es objeto de discusión en este momento, lo más en el Senado y algún día, cuando llegue aquí, ya lo discutiremos, pero, no obstante, voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones y pido perdón a SS. SS. porque son puntualizaciones sobre la marcha) dice: «Sin que quepa desvirtuar este posicionamiento en base a la introducción de un coeficiente como el presupuesto.» Es decir, el Consejo de Política Fiscal y Financiera introduce un coeficiente que corrige los resultados de la aplicación de esta variable en función de las distancias de renta por habitante entre cada Comunidad y la Comunidad Autónoma con índice más bajo, y esta ponderación que se hace de la inversa de la renta por habitante no aparece en ningún momento en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Con esta fórmula propuesta, señor Bravo de Laguna, se penaliza a las regiones con mayor renta por habitante con una intensidad que sobrepasa los límites previstos en la Ley Orgánica.

Nosotros no decimos que las que tengan más renta por habitante tengan que pagar más. Lo que decimos es que si hay un criterio, que es el de la inversa de renta por habitante, que se aplique y que no se utilice un complemento, un nuevo factor de ponderación que aún hace más gravoso ese criterio, porque ya estamos infringiendo de nuevo la Ley de Financiación, deporte, al parecer, al que el partido del Gobierno y algunos otros son bastante aficionados, dicho sea de paso.

Le voy a dar algún otro dato más, por si no lo sabía. Respecto a esa variable de emigración, cuando se habla de la tasa de población emigrada en los últimos diez años, se sustituye en el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera —por si S. S. no lo conocía— por la de saldo mi-

gratorio; no tiene nada que ver la variable de emigración; no tiene nada que ver la variable de migración con el saldo migratorio, y esto es una nueva vulneración del artículo 16.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Si estamos de acuerdo, creemos, en que la aplicación estricta de esta variable, tal como se prevé en la Ley de Financiación, podría crear inconvenientes, pero estos inconvenientes se solventarían interpretando lógicamente el precepto de la LOFCA. Y la interpretación lógica del efecto de la LOFCA sería, desde nuestro punto de vista, ponderar la tasa de emigración de cada Comunidad por su respectivo número de emigrados, no con el criterio que se ha sustentado. Y así podríamos seguir hablando de otros temas, pero, insisto, no deseo entrar en este debate, porque no es en ese terreno ni en este momento en el que hay que plantear este tema. Ese debate es el que hay que tener en el Senado, dentro de pocos días, y más adelante en esta Cámara.

En cualquier caso, he de manifestar a S. S. que sí entiendo cuáles han sido los criterios por los que esto va a salir adelante. Y le voy a decir que ese criterio que no ha manifestado S. S., pero que subyace en las declaraciones de usted, criterio por el cual este Fondo de Compensación Interterritorial va a ser aprobado, es lo que podríamos calificar como ley del embudo: tantos votos de aquí y tantos votos de allá, esto saldrá adelante. Pero que quede perfectamente claro, y así constará en el «Diario de Sesiones», que S. S. no ha sido capaz de demostrar con argumentos, desde esta tribuna, que esos criterios se ajustan a lo que dice la ley.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bandrés.

El señor BANDRES MOLET: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente para indicar al señor Bravo de Laguna que estará conforme, después de haber oído a todos los portavoces, en que ha sido muy poco convincente, que ha convencido únicamente a aquellos que ya habían pactado. Realmente, se podía haber ahorrado el discurso.

Quiero simplemente hacer una referencia a esa acusación, que me ha parecido observar en sus palabras, de insolidaridad en mi posición.

Se habrá dado cuenta S. S. de que yo no he querido hablar del Fondo de Compensación Interterritorial separadamente de la política de inversio-

nes que aparece en este proyecto de Presupuestos Generales. He indicado allí que cuando la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca es el 6,24 por ciento de las cargas generales del Estado, las inversiones que el Estado hace en el País Vasco rondan aproximadamente el 2,1 por ciento. Ya sé que esto son cifras simples que requerirían quizá un mayor análisis, pero, como dato indicativo, me parece que no se puede tachar de insolidario al que da seis y recibe dos: cosa que, además, se hace con gusto y no quiere decir, en absoluto, que yo proteste por ello.

Por eso no he querido separar ambos problemas, que me parece que van muy unidos, sobre todo habida cuenta de que lo que se emplea para inversiones son 645.000 millones de pesetas y lo que se emplea para Fondo son simplemente 180 millones.

Finalmente, quiero decir que, al igual que me ocurrió una vez que cené con un antiguo Ministro de Asuntos Exteriores y al final de la cena sacó un hermosísimo puro, con un anillo que decía «El Ministro de Asuntos Exteriores» y yo le pregunté «¿Esto quién nos lo manda, el Ministro actual?» y me dijo «No, no; estos son restos de la pasada grandeza», pudiera ocurrir que restos de la pasada grandeza en lo económico es lo que estuviera teniendo como fama nuestro País Vasco.

A mí me parece que cuando utilizan los criterios de renta —no lo puedo decir con seguridad, porque no nos indican cuáles han utilizado—, se han servido posiblemente de los de 1977 (digo «posiblemente»; si no es así, me rectifica). Y hay que decir que los datos que tengo firmados aquí, en el valor añadido bruto en producción y empleo industrial, la diferencia entre 1977 y 1979 dio para todo el Estado español un incremento del 35,54 por ciento. Aproximadamente dentro de esta media se mantuvo Alava, con un 33,37; Guipúzcoa estaba con el 19,07, muy por debajo de la media estatal, y Vizcaya con el 4,58 por ciento. Pudiera ocurrir que muchas veces parezca que se es grande, importante y rico, cuando realmente se ha sido rico, pero se ha dejado de serlo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, he subido a la tribuna fundamentalmente para que no se irrite el señor

Elorriaga y crea que si le contesto desde el escaño es que desprecio absolutamente su intervención, que no es nada de esto. El sabe que cuando se consume un turno en contra de distintas intervenciones es posible que se queden algunos aspectos específicos sin contestar.

He tratado desde esta tribuna de dejar perfectamente claro, desde el punto de vista del Grupo de UCD, lo que en mi opinión eran tres puntos básicos de esta cuestión que estamos debatiendo. En primer lugar, si estamos o no ante un Fondo de Compensación Interterritorial. Para nosotros es un Fondo de Compensación Interterritorial, a pesar de que todavía no haya Ley del Fondo de Compensación porque los criterios que se utilizan son ajustados completamente a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y entre la disyuntiva de tener un Fondo de Compensación que inicie ese camino redistributivo o no tenerlo, nosotros hemos optado por este Fondo.

En segundo lugar, he tratado de dejar claro que la cuantía de ese Fondo responde también al criterio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que para la determinación de ese 40 por ciento de la inversión neta del Estado, aparte de estar estipulado en unos pactos con otro partido (lo que no tiene por qué condicionar, evidentemente, a la Cámara, y de ninguna de mis intervenciones, ni aquí ni en Comisión, podrá desprender el señor Elorriaga ninguna afirmación en ese sentido), la Cámara es soberana. Pero, naturalmente, si hay un acuerdo previo entre partidos, corresponderá a esos partidos que sus parlamentarios respeten o no ese acuerdo. Es un tema anterior a la traída de la Ley a la Cámara, pero en cualquier caso no condiciona la soberanía de la Cámara ni yo he dicho nunca tal cosa.

En tercer lugar, he defendido los criterios objetivos —aunque discutibles, lo he reconocido— que inspiran a este Fondo de Compensación Interterritorial y que producen un determinado resultado redistributivo; en cambio, hay otros criterios, como el del señor Bandrés, que no producen ese resultado redistributivo, sino todo lo contrario.

El Grupo Andalucista ha vuelto a dar sus argumentos y ha añadido uno más que en estos días queda bien, es gracioso: decir que los parlamentarios de UCD se van a poner colorados en sus regiones. Los parlamentarios de UCD tratarán de

explica razonablemente este tema, pero no sé cómo podría el Grupo Andalucista, si tuviera parlamentarios en otras regiones, explicar cómo es que pretende que el Fondo de Compensación Interterritorial deje al margen un montón de regiones españolas, porque la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas se refiere a territorios menos desarrollados y no a Comunidades Autónomas menos desarrolladas.

El señor Gasoliba tiene razón: no se ha utilizado en el Fondo de Compensación Interterritorial el tema de la población, pero ya que menciona la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para decir que como no hay Ley del Fondo no debería haber Fondo de Compensación, también debería recordar que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación no menciona estrictamente la población entre los criterios a utilizar, sino que utiliza la renta «per capita», está ponderada en función de la población con el criterio aquí incluido; utiliza el saldo migratorio, el paro, la superficie, el hecho insular y otros criterios pero, evidentemente, no menciona la población.

Yo creo que las intervenciones anteriores demuestran, como ya indiqué en mi intervención, que este tema del Fondo de Compensación puede producir incluso irritabilidades, susceptibilidades, y yo he sido, en mi opinión, lo suficientemente claro y explícito para decir que en el propio seno del Grupo Parlamentario, cuando un Grupo Parlamentario está compuesto de representantes de todas las regiones de España, puede producirse también algún tipo de susceptibilidad, qué duda cabe. Este no es tema fácil, no es un tema en el cual quepa aplicar una fórmula matemática y ya resulte una suma equis, sino que es un tema, evidentemente, de criterios. Discutiremos los criterios definitivos cuando se debata aquí la Ley del Fondo de Compensación que en este momento está en el Senado. Pero, insisto, entre la opción de tener o no un Fondo de Compensación para el año próximo en la cuantía indicada, el Gobierno, y mi grupo parlamentario entienden que es preferible aprobar este Fondo de Compensación e iniciar el camino de la solidaridad territorial. Por esas razones nosotros pedimos el voto en contra de las enmiendas de devolución de esta sección al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas de los diversos grupos parla-

mentarios respecto de la sección 33, relativa al Fondo de Compensación Interterritorial.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 302 votos emitidos; 40 favorables; 156 negativos; 106 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Andalucista, Minoría Catalana, Comunista, Vasco (PNV) y Mixto respecto de la sección 33.

Para explicación de voto, por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Guerra.

El señor GUERRA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, con brevedad y con la cortesía de los señores del Gobierno y de UCD que van a permitir una explicación sobre este tema, que me parece importante, un tema capital, el de la redistribución de la riqueza, voy a fundamentar esta explicación de voto, de una manera muy concreta, en la ausencia de los Ministros responsables en este debate.

Yo creía que en la primera intervención del señor Arredonda, el Ministro de Economía y Comercio, o el de Hacienda, pensaría salir a defender los acuerdos autonómicos en lo que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. No fue posible porque el señor Ministro dormitaba mientras el señor Arredonda hacía su parlamento. Con posterioridad, se ausentó también el señor Ministro de Hacienda y han estado ausentes durante todo el debate, quizá porque no han creído conveniente su presencia en el debate, a nuestro juicio muy importante.

En el proceso de la construcción del Estado de las Autonomías, si hay un tema realmente importante es el de la redistribución de la riqueza, el conseguir que en los desequilibrios territoriales se llegue a un acuerdo en el que deben estar involucradas todas las Comunidades Autónomas. Suscitar una guerra de Comunidades Autónomas por el tema de la distribución del Fondo de Compensación que venga a resolver los desequilibrios económicos nos parece a nosotros una situación de irresponsabilidad grave. No quiero decir que en el debate de hoy esto se haya suscitado, ni mucho menos. Si algo hay que señalar es que, justa-

mente, en este debate sí ha habido algún atisbo, que por alguien ha podido ser considerado como insolidaridad de unas Comunidades hacia otras o de representantes que pertenecen a unas Comunidades hacia representantes que pertenecen a otras.

La verdad es que, en general, se han tratado más cuestiones de forma que cuestiones de fondo, y valga la redundancia, puesto que estamos hablando del Fondo de Compensación. Incluso se ha dado en alguna intervención una especial dureza en las cuestiones formales, pero no se ha entrado en las cuestiones de fondo con una auténtica batalla entre Comunidades, afortunadamente, separándose, por tanto, de alguno de los escritos enviados al Consejo de Política Fiscal y Financiera en los que evidentemente se entraba en los temas de fondo y en temas que nos llevarían a una discusión de solidaridad-insolidaridad realmente peligrosa.

Es cierto que hay un mandato constitucional para que haya redistribución de la riqueza entre regiones. Es cierto que la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, obliga al Gobierno a la presentación de un proyecto de Ley de Fondo de Compensación Interterritorial y que esa ley fue publicada en 1980, con lo cual el Gobierno ha tenido un año de tiempo, y, sin embargo, no ha llegado aquí. Hay que decir que, efectivamente, el Gobierno, de alguna manera, distrajo el proyecto de Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas durante dos años y que ha estado un año, después de su publicación, demorando la presentación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.

Algún miembro de esta Cámara que ha subido a la tribuna ha dicho con claridad que si hay un Fondo de Compensación, o lo que viene en los Presupuestos como Fondo de Compensación, lo hay por los acuerdos autonómicos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y —ha añadido— el partido que sostiene al Gobierno, lo cual no es cierto. Fue una negociación estricta entre el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Y lleva razón este representante cuando dice que si aquí hay un Fondo, que después se ha llamado Fondo aparente —y nosotros coincidimos en que se le pueda llamar Fondo aparente—, lo hay porque han existido los acuerdos autonómicos, y no sólo no hay que despegarse de ello, como ha podido parecer de la intervención del representante del Grupo de UCD, sino

que hay que señalarlo como algo a favor de que puede establecerse un Fondo de Compensación —y ahora procederé a lo que consideramos inconvenientes de la plasmación en los Presupuestos Generales de ese Fondo—, que, afortunadamente, lo hay por primera vez, y ojalá que lo haya en toda su integridad y naturaleza en los Presupuestos de los años próximos.

No se puede señalar, como se ha hecho también, aunque, ya digo que siempre dentro de una cierta cortesía, no se puede señalar que se trate de acuerdos ajenos o de espaldas a esta Cámara, porque, entre otras razones, han sido los acuerdos más transparentes que se han podido hacer por representantes de partidos políticos que se han sentado en la Cámara y por el Gobierno. Y habría otros que se podrían citar —y no quiero hacerlo por la delicadeza de su naturaleza— que se realizan, o que incluso se puedan estar realizando y sobre los que, sin embargo, la Cámara no pueda tener en su momento información puntual.

El Grupo Socialista dice que sí a la cuantía del Fondo: el 40 por ciento de las inversiones públicas que se establecen en los Presupuestos. La LOFCA dice que será un mínimo del 30 por ciento. Se ha llegado, gracias a los acuerdos autonómicos, a un 40 por ciento, superando en un 10 por ciento lo que establece como mínimo la LOFCA, lo que supone en esta ocasión 180.000 millones, detrayendo lo que ya ha sido citado en esta Cámara como defensa, mantenimiento y transferencias a los organismos autónomos.

Y decimos que sí también a la distribución regional que se contempla, en cuanto a la ponderación que se ha hecho de los criterios y valores que la LOFCA establecía. Sí estamos de acuerdo en que ésa sea la distribución porque se prima evidentemente, como debe ser, a las Comunidades, a las zonas y regiones menos desarrolladas y, por tanto, se deja de primar a las que están más desarrolladas, y eso es un problema real al que ya tendré ocasión de referirme.

Decimos que sí al proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que en este momento se tramita en la Cámara Alta, en el Senado. Pero decimos que no, y claramente, a la aplicación que de todos estos criterios y acuerdos se hace en los Presupuestos Generales del Estado para 1982.

Y decimos que no porque, en primer lugar, creo que el Gobierno debiera haber subido antes que nadie a esta tribuna a defender esos acuerdos

autonómicos y, después, a decir: «Señoras y señores diputados, los acuerdos no están aquí plasmados en este Presupuesto General porque no ha habido tiempo». El señor Arredonda ha tenido oportunidad de dar también ese argumento. El Gobierno no ha tenido voluntad de hacerlo antes o capacidad para hacerlo antes, porque si hubiese estado preparado al 31 de julio, que es cuando se firmaron los acuerdos autonómicos, podría haber tenido tiempo de presentarlo; como no los tenía preparados, desde el 31 de julio a la presentación de los Presupuestos, lógicamente el Gobierno no ha podido regionalizar en el proyecto, y además no ha podido ser negociada con las Comunidades Autónomas la dotación que se atribuye al Fondo, que en realidad es una dotación equivalente al Fondo de Compensación, pero no un tal Fondo como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Es, por tanto, un Fondo de Compensación aparente; es, por tanto, y es cierto, un Fondo de Compensación nominal o nominativo, pero no un fondo tal como establece la ley y como se debiera haber plasmado. No ha habido esa negociación con las Comunidades porque en estos Presupuestos Generales no hay proyectos para financiar con esta dotación de 180.000 millones; no se ha negociado, como dice la LOFCA, con las Comunidades porque no ha habido nada que negociar, no hay ningún proyecto establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Y no se han hecho las valoraciones por ley, como establece el artículo 16 de la LOFCA, y no se han hecho porque el proyecto de Ley del Fondo de Compensación también fue un resultado de los acuerdos autonómicos de 31 de julio, y ni siquiera tendríamos eso en el Senado si esos acuerdos no hubieran existido.

Esa es la obligación, al menos moral, que yo atribuyo al Gobierno: haber defendido esos acuerdos para que siquiera estuviese, como está en el Senado, en tramitación una ley, que no lo estaría ahí si no hubiese habido esos acuerdos. Pero como la ley viene con tres años de retraso respecto de lo que el Gobierno debiera haber hecho, no ha podido hacer una valoración de criterios por ley, sino que se ha atendido a lo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aceptado. Si el Gobierno no ha tenido tiempo, capacidad o voluntad para hacerlo, que salga un señor Ministro, bien sea el de Hacienda o bien el de Economía, y que lo diga en la tribuna y los señores

res diputados obrarán en consecuencia, votando en base a ese criterio que el Gobierno debe dar con toda sinceridad.

Porque el problema regional existe y no lo puede negar nadie; el problema es si podemos atender muchísimas valoraciones, y así ha habido señoras y señores diputados que han subido a la tribuna a decir: no estoy de acuerdo con la valoración que se ha hecho sobre el paro, sobre la renta o sobre la superficie, y están, con toda legitimidad, en una posición que les permite decir eso, y otros hemos creído que son otras las valoraciones que debieran haberse tenido en cuenta. Pero lo cierto es que si se toma la tabla de valoración de la renta y unos dicen que se ha tomado el 77 como base y que ya debiera haber otras posteriores al 77, sin entrar en esa pequeña disquisición para lo fundamental, si nos atenemos a la tabla de renta que existe, la que se ha utilizado para este caso, o cualquier otra que se utilizara, la verdad es que en cifras absolutas, que utilizaremos aquí sólo como índice, la región a la que más —no quiero citar nombres para que no haya guerra de Comunidades— se le establece una renta «per capita» de 301,61, y a la que menos, sin citar el nombre, se le establecen 149,01. O sea, que hay zonas o regiones en nuestro país que están en la renta «per capita» por debajo de la mitad de la de otras zonas, y así valorando en cada una de las zonas.

Como eso es una realidad que nadie puede negar, un Fondo de Compensación es algo que tiene que defender todo el mundo. Que podamos llegar a acuerdos más o menos sutiles sobre valoraciones o criterios, en eso creo que hay mucho margen para actuar, pero la verdad es que incluso en el proyecto de ley para el Fondo de Compensación Interterritorial —acordado, también, por los acuerdos autonómicos y que está en el Senado enviado por el Gobierno— se dice en el artículo 1.º precisamente: «Las inversiones del sector público estatal no comprendidas en el Fondo de Compensación Interterritorial se inspirarán igualmente en el principio de solidaridad».

Aún es peor si uno atiende en estos Presupuestos Generales del Estado a lo que puede ser la suma de esas cantidades regionalizadas, o a lo que ya se puede comprobar del año anterior, 1981: el criterio tampoco es un criterio a tenor —como dice la propia ley que envía el Gobierno— de la necesidad de redistribuir la riqueza.

Nosotros, que decimos sí a la cuantía, sí a la

distribución y no a la plasmación puramente aparente en estos Presupuestos Generales del Estado, nos hemos abstenido porque, estando de acuerdo en la necesidad de llevar ese Fondo de Compensación incluso con los valores que aquí se han utilizado para la distribución regional, no podemos estar de acuerdo en que este presupuesto no se haya hecho. Sin embargo, podíamos haber votado también en contra, pero tenemos que ser suficientemente serios para reconocer que nosotros sabíamos al 31 de julio que este Gobierno no tenía capacidad para traer el Fondo como tal, sino más otra cosa que una dotación equivalente al Fondo, pero no tal Fondo, porque del 31 de julio aquí no podían negociar proyectos concretos con las Comunidades Autónomas.

Por eso y porque sabemos que la devolución en este momento de la sección 33 no nos da ninguna garantía, sino todo lo contrario, de la capacidad del Gobierno para en un plazo breve traer esos proyectos concretos negociados es por lo que el Grupo Socialista se ha abstenido en un tema que nos parece capital, en el que la guerra de Comunidades debe ser evitada por todos los señores diputados que se sientan en esta Cámara, y en el cual realmente estamos jugando con la construcción del Estado de las Autonomías que hemos votado en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, señorías, muy brevemente. Únicamente para explicitar que, a la vista de los últimos argumentos que nos ha expresado el portavoz del Grupo Centrista para este tema, no ha llegado, evidentemente, a convencernos ni a aproximarnos a una aceptación, tal como se presenta aquí el Fondo de Compensación Interterritorial. No se ha contestado ni al mandato jurídico ni a la posibilidad de debatir los temas que podríamos llamar técnicos, y tal es la falta de argumentos que, según en la Memoria del Ministerio de Hacienda vienen de la mano de este proyecto del Fondo de Compensación Interterritorial, no ha permitido ni tan sólo darle el voto afirmativo al mismo. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Rodríguez Alcaide.

El señor RODRIGUEZ ALCAIDE: Muy brevemente, señor Presidente, para decir que hemos votado sí a la sección treinta y tres a pesar de que el líder de la oposición no ha estado presente durante el debate. (*Risas y rumores.*)

Además, hemos dicho que sí porque estamos dispuestos a que un pacto que ha firmado el Gobierno con el partido de la oposición se lleve a efecto; y en ese pacto, en su punto 43, nosotros no nos hemos abstenido, sino que hemos dicho que sí, porque el punto 43 dice exactamente lo siguiente: En la Ley de Presupuestos del Estado de 1982 se incluirá una dotación al Fondo de Compensación que tendrá los siguientes rasgos: Primero. El volumen de este Fondo será de 180.000 millones de pesetas, y así aparece en la sección treinta y tres. Segundo. Incluirá una propuesta concreta de distribución regional del Fondo de acuerdo, no con una Ley, sino con un proyecto de ley que ahora comenzará a debatirse en el Senado, y así viene aquí de acuerdo con un proyecto de ley y no de acuerdo con una ley. Y también, porque antes de eso, el Gobierno informará al Consejo de Política Financiera y Fiscal de los proyectos de inversión que pretendan incluir en ese Fondo, y así lo ha hecho, y por eso hemos votado que sí.

Pero es más, es que cuando se firma un pacto, hay que leérselo de vez en cuando también, y nosotros lo hemos leído, y en su punto 2 dice que todo el proceso de las autonomías se llevará a cabo garantizando un doble equilibrio; de una parte, el equilibrio financiero de las Comunidades Autónomas, y de otra parte, el equilibrio financiero de la Administración Central del Estado. Y cualquiera que analice el proceso sabrá que ambos equilibrios se producen en el marco general de estos Presupuestos Generales del Estado que estamos debatiendo.

Y, por último, hay un elemento básico y es el punto 32, donde se dice claramente qué partidas componen el Fondo o de qué partidas el Fondo puede constituirse. Habla claramente de que eliminados los gastos de inversión del Ministerio de Defensa, se hará en función de los capítulos 6 de la Administración del Estado, y 6 de los organismos autónomos. Hay quien confunde todavía aquí, después de cuatro años, los capítulos 6 y 7 de los Presupuestos Generales del Estado, y es menester que algún diputado que salga a la tribuna se lea perfectamente lo que eso quiere decir, porque cuando aparece un capítulo 7 de la Ley de

Presupuestos, sabe que son transferencias a organismos autónomos que tienen naturalmente partidas que van a representar los capítulos 6 y 7 de esos respectivos organismos autónomos. Y sigue diciendo también el punto 32; y de las transferencias de capital a las corporaciones locales. De éstos se excluirán aquellos gastos dedicados a conservación, mejora y sustitución de bienes de capital público. No voy a entrar en más detalles. Creemos que el Gobierno estaba en su posibilidad de, utilizando la Constitución, generar una nueva sección, presupuestaria, que ha denominado 33. A nosotros nos han convencido tanto las enmiendas y los argumentos que han dado los enmendantes anteriores, que hemos votado que sí, de esta forma, porque este es un Fondo de Compensación. Se podría haber llamado Fondo de Compensación de acuerdo con el artículo correspondiente de la Constitución y, efectivamente, podrá tener mayor o menor nominalismo financiero, pero hay un hecho básico en técnica presupuestaria, y es que se ha iniciado el primer paso, como dije en días pasados, a este respecto. Hemos votado que sí porque en un pacto que ha hecho nuestro Gobierno con el Partido de la oposición, nos parecía coherente votar en este momento legislativo de suma importancia, a favor de la sección treinta y tres del presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Andalucista, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, en una breve explicación de voto, cuando nosotros hablamos del tema de fondo —valga la palabra, y la hemos repetido muchas veces—, es decir, que las inversiones siguen siendo iguales si juntamos el 70 por ciento que queda con el 30 por ciento que se dice que va al Fondo, y ése es el tema real y por eso no hemos querido entrar en polémica, porque cuando venga aquí la Ley del Fondo entraremos cuanto a la distribución, siempre teniendo cuidado de no tratar de decir: me voy a llevar lo máximo a mi región. Pero yo no me resisto la tentación de que las dos veces me ha contestado el mismo señor diputado. Tengo que decirle al señor Rodríguez Alcaide, no sé si para bien o para mal, que hay un libro que estaba leyendo, «Pasaporte andaluz», de Antonio Ramos —y yo siento que al señor Rodríguez Al-

caide le den siempre unas tareas muy difíciles— en el que en la página 278 se dice: José Javier Rodríguez Alcaide, diputado cordobés, que aparecía hasta hace poco tiempo como andalucista, que iba a la conquista de Ronda...

El señor PRESIDENTE: Señor Arredonda, tenga la bondad de explicar el voto. No haga referencias, que lo único que haces es complicar el debate en función de alusiones.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, este diputado admite las sugerencias siempre oportunas de la Presidencia. Creo que otras veces —y sabe el señor Presidente que lo hemos discutido en la Junta de Portavoces— es verdad que hemos hecho un mal uso de la explicación de voto, porque a veces a lo que hemos ido es a una controversia con otros partidos, y no voy a seguir, evidentemente voy a aceptar las recomendaciones de la Presidencia, y no voy a seguir con ese tema.

Simplemente decir, para acabar, que nuestro voto ha sido positivo a la enmienda a la totalidad de nuestro grupo, no porque quisiéramos que se devolviera el Fondo, sino porque queríamos que esas partidas se adjudicaran a los diferentes Ministerios, que es la realidad, y que discutamos los diferentes criterios cuando esté aquí la ley, y esas partidas pasémoslas a los diferentes Ministerios y la distribución del Fondo la haremos cuando sea el momento oportuno.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Para responder estrictamente a la alusión de que ha sido objeto, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZALEZ MARQUEZ: Puede tener la seguridad, señor Presidente, señoras y señores diputados. En primer lugar, quiero agradecer el tratamiento que se ha hecho por parte del portavoz del Grupo de Unión de Centro Democrático, señor Rodríguez Alcaide, del líder de la oposición. Le quiero decir que tengo el raro privilegio de tener en el despacho uno de esos mecanismos electrónicos a través de los cuales se pueden seguir los debates, cosa que hemos pedido que no sea un privilegio en exclusiva para una, dos o tres personas, sino que cada diputado pueda tenerlo, y así podría aprovechar el tiempo de trabajo, en cada despacho, naturalmente, y que hu-

biera dotación para ello. (*Rumores.*) Por consiguiente, quizá la referencia no ha sido excesivamente pertinente. Sin embargo, la referencia que ha hecho el presidente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, mi compañero Alfonso Guerra, ha sido pertinente hasta el extremo de no haberse referido en ningún momento al líder de la Unión de Centro Democrático o del Gobierno, probablemente porque tuviera dudas para plantear su nominación. (*Risas y rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda para responder a las alusiones de que ha sido objeto.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoveros): Muy brevemente, señor Presidente.

Yo no he subido a esa tribuna, ni siquiera he utilizado el escaño para explicar el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos en materia del Fondo de Compensación, porque no creía que fuera necesaria mi explicación para que quien se ha comprometido a aprobar algo lo aprobara; para que se respetara la palabra dada y firmada. Nada más, y muchas gracias. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará puntualmente dentro de media hora. Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Sección 34 Sección treinta y cuatro, Reconversión industrial. Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados; se me ocurre, señor Presidente, que en determinadas secciones de los Presupuestos, sobre todo después de estas pausas, se podría llamar, primero, al voto y, luego, dirimiríamos el debate a través de explicaciones de voto, con lo cual la asistencia sería considerablemente mayor.

Hecha esta pequeña observación formal, entro en lo relativo a la sección treinta y cuatro, que, si no me falla la memoria, es la última del Presupuesto de Gastos del Estado para 1982.

Esta es una sección nueva, con un importe de 32.700 millones de pesetas, en donde los 32.700 millones de pesetas se traducen, recordando lo

que decía antes el señor Rodríguez Alcaide, en nada en el capítulo 1, sobre personal, nada en el capítulo 2, sobre compra de bienes y servicios, nada en el capítulo 3 sobre intereses, 7.000 millones de pesetas en el capítulo 4 sobre transferencias corrientes, nada en el capítulo 6 sobre inversiones reales, 25.700 millones en transferencias de capital, y nada en los capítulos 8 y 9, que se refieren a variaciones de activos financieros y de pasivos financieros.

Esto nos muestra, y no es simplemente una recapitulación de los capítulos, valga la redundancia, que se trata de una sección que cuenta, sencillamente, con dos grandes partidas, con dos grandes bolsas. Una, de 7.000 millones, que va desde el servicio de «Trabajo y Seguridad Social» y que, aunque no se explica en ningún sitio, se supone que es para indemnizaciones por despido, para jubilaciones anticipadas y para otras prestaciones sociales, y otra, de «Industria y Energía», servicio 01, de 25.700 millones, que es la que va al capítulo 7, de transferencias de capital, que se supone que es para toda una serie de operaciones de inversión dirigidas, fundamentalmente, a aumentar la intensidad de capital por unidad de trabajo y a contribuir así a —entre comillas— modernizar el sector, sin tener graves preocupaciones por el tema de la reconversión.

Y es que, señor Presidente, señoras y señores diputados, no se trata de una sección treinta y cuatro, de Reconversión, sino que se debería llamar de reestructuración de empresas y de regulación de empleo, porque en realidad de eso es de lo que se trata y no hay otro sentido en esta sección nueva de los presupuestos de gastos.

En realidad, además, se puede afirmar que la información facilitada por el Ministerio de Industria y Energía ha sido escasísima, por no decir prácticamente nula; solamente que aparece en la página 1577 del «Boletín Oficial de las Cortes Generales», dedicada a los Presupuestos Generales del Estado.

Yo he estado buscando entre los documentos que se nos han heco llegar, que están en la biblioteca, e incluso entre los que están en el despacho de la Comisión de Presupuestos, y no he podido encontrar ni una sola mención en los presupuestos por programas del Ministerio de Industria y Energía a este tema. Y es que no hay información; no sabemos todavía con exactitud en qué se van a gastar estos 7.000 millones de pesetas de «Trabajo y Seguridad Social» y esos 25.700 mi-

llones de pesetas de «Industria y Energía». Y a mí me parece que esto es muy poco serio, porque significa que se están introduciendo toda una serie de planes sectoriales de reconversión y, sin embargo, no se está ofreciendo la suficiente información. No digo que lamentablemente, porque tampoco hay que lamentarse, pero no es serio, por eso lo digo, que no tenga el Congreso la información que un diario muy prestigioso de la mañana sí consiguió, a través —supongo— de sus corresponsales o redactores ocupados de estos problemas, y que es la única información que ha salido de verdad a la luz pública.

Entonces diré, para empezar, que se planifica, por así decirlo, al margen de todas las previsiones constitucionales —luego me referiré a eso— y que se planifica, además, en el mayor de los secretos, porque yo creo que si se quiere hacer planificación tendríamos que tener un enunciado claro de en qué se gastan esos 7.000 millones y en qué se gastan esos 25.700 millones de pesetas. Y creo que esto es bastante claro, señores Ministros, porque, aparte de que alguno me pidiera contundencia al subir a esta tribuna, realmente no es un problema de contundencia, sino de claridad, de luz y taquígrafos, y aquí lo que sí hay son taquígrafos, pero luz, desde luego, no hay ninguna sobre esta sección treinta y cuatro.

Recuerdo muy bien que el primer día, cuando empezó el debate presupuestario —hace ya una semana— y se me replicó en la enmienda a la totalidad, se me dijo que no tenía razón, que lo estaba mezclando todo y que, en realidad, la sección treinta y cuatro estaba muy clara y que ya habría momento de discutirla, porque había un proyecto de ley ordinaria para tramitar lo que había sido un Decreto-ley, concretamente el Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio.

Efectivamente, yo ahora puedo decir que es el momento de discutir estos temas, y de discutirlos con algún sentido de la oportunidad y de la consecuencia, porque realmente traer en estos momentos una sección como la treinta y cuatro sin ninguna información precisa, y cuando se está discutiendo el proyecto de ley ordinario, es, sencillamente, decirle al Congreso: hablen ustedes de lo que quieran, porque los hechos están consumados y bien consumados; no se va a tocar ni una coma en el Decreto-ley o no se va a tocar nada sustantivo, y, desde luego, el dinero ya se está repartiendo. Se está repartiendo de forma que no es conocida, o mejor dicho, que es conocida a través

de informaciones secundarias, no proporcionadas a esta Cámara, como sería lo lógico.

Evidentemente, el decreto-ley al que me refiero, que se está tramitando como ley ordinaria, está ahí, pendiente de discusión; no lo hemos discutido todavía a nivel de Comisión y hay muchas críticas que hacer. Porque en ese decreto ley se aprecia, con una lectura minuciosa del mismo, que no hay una verdadera planificación pública, sino que hay un reparto de fondos. En primer lugar, no hay una proyección de empleo, una previsión de puestos de trabajo en actividades alternativas para los trabajadores afectados y, por tanto, no se puede hablar de reconversión, puesto que es una reestructuración; la reconversión significa cuando algo se reconvierte; se reconvierte la industria y se reconvierten los trabajadores. Y, por tanto, no se pierde empleo, y la empresa invierte para crear empleo y no para destruir puestos de trabajo, como está sucediendo.

En segundo lugar, se puede decir que en el proyecto de ley que está tramitándose ahora, y en el decreto-ley, vigente hasta sus últimas consecuencias, no hay participación del comité de los trabajadores de la empresa en la preparación del programa de cada una de las empresas incluidas en los planes de reforma sectorial. Y esto es grave porque va a seguir sucediendo que se enteren los trabajadores de lo que pasa la mañana antes de que empiece la regulación de empleo, y puede haber votaciones en referéndum de algunos planes, pero de planes insuficientemente conocidos e insuficientemente explicados, planteados muchas veces por la dirección, como ha sucedido en el caso de SEAT, de forma, en mi opinión, no absolutamente responsable. Y además, se están produciendo hechos verdaderamente lamentables, como es el hecho de que SEAT, en estos momentos, haya invertido, entre comillas, del orden de los 10.000 millones de pesetas para expulsar a 5.000 trabajadores, a una media de algo más de dos millones de pesetas por trabajador, que se marchan del empleo y que vamos a ver adónde van. Por lo pronto, ingresan en el paro, que es otra de las argucias, otra de las falacias de todo el mecanismo de la reconversión industrial; no reconversión, es enviar a la gente al paro con indemnizaciones que muchas veces aparecen, incluso, como inversiones productivas, y no lo son. Y esto es lamentable que se esté haciendo así, y así se está haciendo por el decreto-ley y se está haciendo por esos planes que no tienen una ex-

presión clara en el Presupuesto General del Estado.

También en el artículo 6.º del decreto-ley se habla de que si en tres meses no se ponen de acuerdo los trabajadores y la empresa, se hace lo que diga, por así decirlo, el Ministerio de Industria y Energía. Eso es una nueva forma de laudo, y todos sabemos que lo que no se ha tratado ni siquiera de paliar —no ya de resolver— durante años, difícilmente se puede resolver en ocasiones en tres meses. Y admitir estos laudos es crear condiciones de verdadera expulsión de trabajadores; de expulsión, además, en la que los trabajadores, en determinados momentos, alguien puede llegar a pensar que son cómplices de una operación financiera que no tiene ni pies ni cabeza.

Y luego, en una erosión de los derechos legales, de los derechos adquiridos, y en realidad ya lo último que hay en el artículo 6.º del decreto-ley, es la declaración de que la operación de reconversión se convierte en fuerza mayor. Esto parece como si casi el Ministerio de Industria y Energía, con la declaración de industria a reconvertir, tuviera al poder de las grandes calamidades públicas, de las fuerzas mayores inevitables.

Verdaderamente es una situación por todos los conceptos lamentable, por todos los conceptos criticable, que no da la imagen de lo que debe ser una operación de reconversión industrial en el sentido más profundo de la expresión, como se hizo en casos como, por ejemplo, en el de Japón o como se ha hecho en otros países, donde al mismo tiempo que se disminuye la fuerza de trabajo en actividades que tienen una demanda disminuida se aumenta la fuerza de trabajo en actividades que presentan una tendencia a la demanda favorable.

Podríamos estar luchando contra la contaminación, podríamos estar creando infraestructuras de transportes, podríamos estar ejecutando un programa de viviendas al día, de verdad, construyendo las viviendas que se han prometido. Y no se está haciendo nada de eso y mientras tanto se están destruyendo puestos de trabajo, que, desde luego, no se van a compensar a través del ANE ni de ninguno de los otros mecanismos.

Hoy he recibido —me lo ha enviado un antiguo amigo, José María Zufiaur, que es secretario de Relaciones Sindicales de UGT— un libro azul, que me parece que está bastante bien hecho y que es bastante instructivo. Supongo que habrá que repasarlo, pero tiene, además, la ventaja de que

cuenta con un índice analítico. Pues bien, ustedes en el índice analítico pueden leer cosas como revisión salarial, o trabajadores fijos del campo o salario mínimo, etcétera. Vayan ustedes a la entrada, a ver si existe, de reconversión industrial. Pues bien, la entrada de reconversión industrial. Pues bien, la entrada de reconversión industrial no existe, y no existe, sencillamente, porque un presupuesto que su corazón es, por así decirlo, el Acuerdo Nacional de Empleo, sin embargo, cuando en el Acuerdo Nacional de Empleo, que está fundamentalmente hecho para reducir los salarios reales, se tendría que plantear, como derivación lógica, la reconversión industrial, esta reconversión industrial se hace completamente al margen, no tiene nada que ver con el corazón del Presupuesto y está pasando lo que está pasando; es decir, que nadie se acuerda de cómo se van a crear esos 350.000 puestos de trabajo para compensar en parte los 120.000 ó 200.000, porque no lo sabemos con precisión, que pueden derivarse de la destrucción de puestos de trabajo por la política de reconversión industrial.

Lógicamente, si se tienen enmiendas al proyecto de ley, como tramitación ordinaria, y si se tienen todas estas situaciones de oscuridad en lo que es la ausencia total de una explicación de los programas, no ya de los programas de las empresas, sino incluso de los planes sectoriales, lo lógico es que no pueda aceptarse esta sección número 34 de los presupuestos de gastos.

Pero hay algo más. Resulta que el Gobierno, por lo que sabemos a través del «Boletín Oficial del Estado» y a través de las informaciones ordinarias, ha venido publicando ya toda una serie de planes sectoriales. Esos planes sectoriales, que yo recuerde ahora, son la siderurgia, el textil, los aceros especiales, los componentes eléctricos de la industria del automóvil y la línea blanca de los electrodomésticos. No sé si me engaño, pero me parece que estos son los cinco sectores; el Ministro asiente con un gesto, y evidentemente, son los cinco sectores.

Ahora bien, lo que no está claro es que en todos estos sectores lo que hay es una regulación de empleo, una «cartelización», pero no hay ni previsiones de creación de puestos alternativos, no hay ni previsión de exportaciones, ni hay previsiones de incorporación de tecnología, que es la base de una reconversión industrial, ni nada parecido. Y, además, no sabemos cómo se han repartido los fondos, porque también están en estudio otros

sectores, como son la construcción naval, el cobre, la forja pesada o como pueden ser algunos más.

En realidad, todo esto significa que el Real decreto-ley de 5 de junio de 1981, tal como intuimos en el debate de convalidación, se está aplicando de forma sumamente discrecional. Yo comprendo que el Gobierno tenga mucha renuencia a aceptar algo tan sencillo como que debe desarrollar el artículo 131 de la Constitución con un proyecto de ley de Consejo Económico y Social (ya dije en la discusión de totalidad que había presentado una proposición de ley en este sentido). Pero el Gobierno, cuando planifica sí que tiene que planificar de acuerdo con la Constitución. Podría o no podrá planificar, pero si planifica, todos tendrán que aceptar que tiene que hacerlo de acuerdo con la Constitución, y resulta que esta planificación, que de forma bastante oscura está realizando el Ministerio de Industria y Energía, se está haciendo al margen de cualquiera de las previsiones constitucionales del artículo 131, que en su apartado 2 están muy claras, respecto a participación de las Comunidades Autónomas y participación de los trabajadores, de los empresarios y de las demás organizaciones económicas y profesionales, que no son necesariamente las patronales y los sindicatos sólo, sino que también son los consumidores, que también son los afectados en las grandes ciudades por los efectos de la reconversión industrial y, en definitiva, son muchos más de los que, de vez en cuando, se sientan en torno a la mesa del Ministro para discutir estos temas.

Por lo tanto, es una planificación que no tiene nada de constitucional, que incluso podría decirse que es inconstitucional, y en la que, desde luego, las Cortes es el órgano más alejado de esta planificación, por la carencia de información a que me refería antes.

En definitiva, señor Presidente, y con esto termino, ya sabemos de qué forma van estos planes sectoriales, que llegan tarde, que llegan, desde luego, de una forma inusitadamente hermética, que llegan al margen de la Constitución y que, sobre todo, no son planes de reconversión, sino que son planes de reestructuración, de regulación de empleo, de despido y, en definitiva, de lo contrario de lo que tendría que hacer el Ministro de Industria y Energía; es decir, en vez de industrializar y mejorar el nivel tecnológico, lo que se está ha-

ciendo es desindustrializar y no sabemos nada sobre el nivel tecnológico.

Por lo tanto, señoras y señores diputados —y creo que hay otros grupos parlamentarios, además del Mixto, que han presentado enmiendas a esta sección—, pido a todos que voten en contra de esta sección, por entender que es una situación lamentable la que presenta dentro de la estructura del presupuesto de gastos del Estado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores diputados, para defender la enmienda a la totalidad de mi grupo parlamentario a la sección treinta y cuatro quería comenzar por una consideración que ha formulado esta mañana el señor Ministro de Industria y Energía en el debate a la sección de su Ministerio, en la cual ha venido a decir —y no tengo las palabras exactas—, en réplica a la intervención de un compañero de mi grupo, que el Gobierno, y él personalmente, pretendía pasar a la historia por la operación de reajustar la estructura industrial de nuestro país.

Esa frase, que puede parecer rimbombante y, quizá, fuera de lugar en un debate de presupuestos, sin embargo, la podemos poner en conexión con la importancia que el propio discurso de investidura del Presidente del Gobierno, revalidado en ese aspecto en la presentación de los presupuestos, hace escasamente una semana, y en la Memoria o en el informe económico-financiero que nos presenta el Gobierno junto a los datos presupuestarios, refleja de la política del Gobierno, y pretendiéndose dar esa importancia en algún momento se habla de la trascendencia de la política de reconversión industrial.

Y eso no cuenta con la desaprobación de mi grupo, ni muchísimo menos, teniendo en cuenta que es bastante común la opinión de que la crisis económica es, en buena medida, una crisis industrial; que, lógicamente, para superar la crisis económica tenemos que cambiar la forma de funcionar de nuestro sector industrial; en definitiva, reconvertir nuestro sector industrial. Por lo tanto, quizá estemos, al hablar de una sección relativa a la política de reconversión industrial, en uno de los «tests» más importantes para ver cómo un

Gobierno, a través de los presupuestos, enfoca y traduce a cifras esa política, que él, igual que nosotros, considera trascendental, considera necesaria para superar la crisis económica.

Pero partiendo de este principio de acuerdo en el análisis, muy global, de la situación y de una de las prioridades a adoptar, tanto en la política económica como en los presupuestos, empiezan las divergencias, yo diría que profundas, de mi grupo con la política que se deduce de la información y de las cifras presupuestarias que el Gobierno nos envía a la Cámara.

En primer lugar, habría que preguntarse, si la reconversión es un asunto trascendental, por dónde empezamos a reconvertir, qué queremos reconvertir quién decide los sectores industriales que se van a beneficiar de los apoyos públicos, que, a través de los presupuestos, se quieren destinar a la reconversión industrial. Y la verdad es que la información, tanto en la documentación presupuestaria, como la información a esta Cámara, en general, en momentos anteriores, en el momento del debate de convalidación del decreto-ley de reconversión industrial, o en intervenciones públicas, que llegan a través de los medios de comunicación a nuestro grupo, no nos hacen pensar que el Gobierno tenga una idea clara sobre cuáles son los sectores que prioritariamente deban pasar, a través de una política de apoyos públicos, a la reconversión industrial.

Es evidente que tenemos una lista, que ha citado Ramón Tamames, de sectores que ya tienen su plan de reconversión aprobado; esos cinco, y prácticamente aprobado —en momento de discusión de las centrales sindicales y de los trabajadores— grandes astilleros. Seis sectores que han pasado ya por una negación y que tienen su plan de reconversión. Podemos estar más o menos de acuerdo sobre los contenidos de esos planes. Parece que es bastante fácil calcular la repercusión económica que los compromisos públicos incluidos en esos planes deban tener, de cara a los Presupuestos del año 1982. Me imagino que una parte importante de las cifras que consigna la sección treinta y cuatro, tanto para transferencias corrientes como de capital, pertenecen a los compromisos ya adquiridos por el Gobierno y por las partes, de cara a esos planes ya negociados.

El problema, y donde creo yo que se demuestra la falta de una política claramente definida del Gobierno en materia de reconversión industrial, empieza a partir de franquear la barrera de los

sectores que ya han negociado y que ya tienen su plan de reconversión. Sabemos que hay algunos sectores en negociación, que probablemente se llegue a un acuerdo, pero no sabemos todavía, ni el Gobierno nos ha avanzado cuáles son sus previsiones para el volumen de recursos públicos que estaría dispuesto a comprometer en los sectores industriales, que, en este momento, se encuentran en fase de negociación. Y no sabemos (y ahí ya nos metemos en un terreno de dudas, de opiniones contradictorias, de informaciones no coherentes en los medios de comunicación, de declaraciones del señor subsecretario en la comparencia ante la Comisión de Presupuestos, que se pueden contraponer con otras noticias, con otras informaciones procedentes del mundo sindical o de los medios de comunicación) cuáles son los sectores que, no habiendo iniciado aún un proceso de negociación entre las partes, están en la mente del Gobierno como sectores susceptibles de reconvertirse, a través de una política de apoyos públicos, que es la que contempla la sección treinta y cuatro.

¿Por qué no lo sabemos? Yo creo que no es sólo por la falta de voluntad del Gobierno de informar cumplidamente a esta Cámara y a la opinión pública sobre cuál es su política concreta y sus objetivos concretos en materia de reconversión, sino porque el Gobierno, pura y simplemente, no tiene una visión global de lo que debe ser una auténtica política de reconversión industrial, que, como mi compañero Pedro Silva decía por la mañana, debe estar, además, en un marco más global de definición de un modelo industrial para nuestro país, de definición de unas políticas de reindustrialización y de reajuste positivo que no nos convierta al sector industrial en algo que a trozos, a pedazos y sin una visión coherente previa se va reduciendo en plantillas, va recibiendo apoyos por unas fórmulas de control que todavía no estamos en disposición de ver cómo van a funcionar en el futuro, y en planes que no sólo van a durar un año, sino cinco o seis años en algunos de los casos.

El Gobierno no tiene una visión global ni de los sectores que necesita dinamizar y promover de cara al futuro para reestructurar, reconvertir o reindustrializar un sector tan vital para nuestro país como es el industrial, ni tiene incluso una visión clara de cuáles son los sectores que van a recibir apoyos públicos de aquí a finales de 1982, que es el límite de vigencia de estos Presupuestos

y que es el límite de vigencia de los posibles apoyos públicos del decreto-ley de reconversión industrial.

Además, podíamos disponer de unos criterios objetivos que dijese: tal sector que cumpla tales y tales condiciones se podrá beneficiar de los acuerdos, y tal sector si no cumple esas condiciones objetivas no podrá acudir a la Administración a solicitar esos apoyos públicos. Pero, desgraciadamente, en la norma que está en la base de esta sección 34, que es el decreto-ley de 5 de junio, el tema de la iniciativa de a quién corresponde definir cuándo un sector es susceptible de iniciar un plan, una negociación de un plan de reconversión, en base a cuál pueda recibir unas ayudas, es absolutamente oscura.

Yo creo que los representantes del Grupo Parlamentario Centrista que asistieron a la reunión de la Ponencia donde se debatió el decreto-ley de 5 de junio sobre reconversión industrial, hicieron allí patente lo oscuro que puede ser el artículo 1.º de este decreto-ley, que es el que define quién tiene iniciativa para proponer que un sector es susceptible de reconvertirse con apoyo público y quién acuerda al final que una vez cumplidos determinados pasos en ese sector esté en disposición de ir recibiendo las ayudas.

En el artículo 1.º del informe de la Ponencia se dice, por un lado, que en aquellos sectores industriales de interés general —no sabemos quién fija los límites del interés general de un determinado sector— que atraviesan situaciones de crisis de especial gravedad, el Gobierno, con carácter excepcional —una serie de condiciones vagas, sin definir, sin poder hacer una idea de cuáles son los sectores que pueden entrar dentro de esa definición— podrá aplicar por real decreto medidas que sean objeto de negociación previamente entre las partes.

Pero en el mismo artículo se dice que en aquellos sectores básicos en los que concurren circunstancias especiales —separando esta segunda iniciativa de la primera fijada en el apartado 1 del artículo 1.º— también el Gobierno podrá proponer en los términos a que hacía referencia el apartado 1 de ese artículo, la elaboración y negociación de un plan de reconversión.

¿A qué se está refiriendo esta norma? Esto no es simplemente un motivo de curiosidad de mi grupo o de precisión de una norma, que ya tendremos tiempo de debatirla en Comisión o en Pleno, es simplemente saber, a la hora de definir cuántos

miles de millones se dedican a la reconversión industrial, en quién estamos pensando para destinar ese dinero, saber si la lista es amplia o menos amplia, saber si los fondos que el Gobierno consigna en la sección son suficientes o no, saber si los criterios para asignar esos fondos son racionales o no. Creemos que el tema es totalmente oscuro.

Pasamos a otro tema. ¿Cómo se reconvierte? Se reconvierte en función de esta oscuridad, aparte de algunos sectores de incontestable necesidad de reconversión que son, probablemente, los que ya han pasado por una negociación y que tienen el plan vigente por una política de presiones. Por un lado, esta norma que define quién tiene la iniciativa, promueve, en primer lugar, una política de fomento del acoso de los sectores industriales al Ministerio para poder entrar en la lista de los privilegiados, y, en segundo lugar, por una cláusula final que les dice a los trabajadores que si no están de acuerdo con el plan, el Gobierno puede dictar, en todo caso, un decreto para apoyar públicamente a tal sector, incluso para que apoye un expediente de reducción de plantillas, es una política de presión de la Administración sobre los sindicatos y sobre los trabajadores.

Tampoco estamos de acuerdo en cómo se reconvierte en cuanto a la definición del tipo de ayudas, no creo que sea ahora el momento de entrar en ese tema, pero no estamos de acuerdo con el tipo de ayudas públicas que se definen en la actual política de reconversión del Ministerio; no estamos de acuerdo en que se olvide totalmente una política de compensación de los efectos sociales de la reconversión sobre las zonas que ven cómo miles de trabajadores se quedan sin empleo por efecto de una reducción de plantillas, negociada en un plan de reconversión. No hay una política que compense el coste social que supone enviar a estos trabajadores al desempleo. No estamos de acuerdo, tampoco, en las garantías y en los controles que establece la actual política del Gobierno.

Llegamos al último punto, que es cuánto nos cuesta la reconversión, para ver si las cifras por lo menos cuadran, ya que no cuadra la idea sobre la política para distribuir esas cifras entre los posibles beneficiarios.

Transferencias de capital. Aparentemente, los sectores que ya han negociado la reconversión no cubren la cifra máxima que se consigna en la sección treinta y cuatro, pero no sabemos cuántos

sectores van a ser acreedores a beneficio de transferencia de capital a través de un plan de reconversión, porque no sabemos cuántos sectores se van a reconvertir, por tanto no podemos pronunciarnos definitivamente, a pesar de haber pedido la información en su momento oportuno, sobre si la cifra de transferencias de capital es o no suficiente para la política que se vaya a desarrollar en el año 1982.

En transferencias corrientes sí tenemos algo más de información, y somos conscientes de que no es suficiente la cifra de transferencias corrientes para jubilaciones anticipadas, ni siquiera sumando una partida que aparece en la sección del Ministerio de Trabajo, sección diecinueve, ni siquiera sumando a esas dos partidas de 7.000 y 3.000 millones, 2.000 millones que puedan quedar de remanente en el ejercicio de 1981. Según otras informaciones, la cifra de jubilaciones anticipadas que se puede deducir que el Gobierno deberá apoyar es mayor que la suma de esas tres partidas, que sería de 12.000 millones.

Por último, y esto no creo que lo sepa ni el Gobierno ni nadie, no sabemos qué coste tienen las exenciones, bonificaciones o desgravaciones fiscales, a través de las cuales la política plasmada en el decreto-ley pretende incentivar la reconversión y la inversión en tecnología. No sabemos si esa política de ayudas, a través del instrumento de desgravaciones fiscales, es económica, o si a través de otro tipo de ayudas podía obtenerse una mayor transparencia, podía obtenerse un coste de la reconversión menos caro, y podía obtenerse, y de eso sí estamos seguros, un mantenimiento de la moral fiscal de las empresas, que no crean las empresas que sólo a través de desgravaciones fiscales pueden recibir ayudas, porque las empresas, cuando dejen de estar cubiertas por el período temporal a través del cual se conceden las ayudas, no van a tener una moral fiscal, no van estar preparadas para, al día siguiente de finalizar el plazo temporal de concesión de ayudas a través de beneficios fiscales, estar en condiciones de comenzar a tributar por el cien por cien de lo que les correspondería en situación normal.

Por último, quería hacer referencia a la poca información de la sección treinta y cuatro. No hay una mínima explicación detallada por sectores; no hay una mínima explicación de desglose de las partidas y ello contrasta de forma bastante incoherente con una afirmación que hizo el señor Presidente del Gobierno en su discurso de inves-

tidura en febrero de 1981, cuando decía: «Esta Cámara conocerá con precisión los recursos que podemos destinar a la reconversión industrial y la aplicación que de ellos vayamos realizando». Yo no sé si en otros aspectos de la política económica del Gobierno el señor Presidente del Gobierno hizo también este compromiso, desde luego lo que sí está claro es que en la sección treinta y cuatro este compromiso no se ha cumplido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Fernández Inguanzo.

El señor FERNANDEZ INGUANZO: Señor Presidente, señoras y señores, la enmienda a la totalidad del Grupo Comunista a la sección treinta y cuatro es coherente con nuestra oposición al decreto-ley sobre reconversión industrial.

El programa de reestructuración de sectores que recoge ese capítulo pretende, leo literalmente: «Asegurar la financiación presupuestaria necesaria para el logro de los objetivos por los diferentes decretos de reestructuración industrial, según los términos de lo establecido en el decreto-ley de reestructuración industrial».

Es evidente que tal definición es insuficiente, oscura, al igual que los contenidos del decreto de reconversión a los cuales se remite.

Por tanto, mantenemos la enmienda, porque está a la vista que el Gobierno renuncia a orientar siquiera de forma indicativa los objetivos y metas deseables para cada sector, así como asegurar la coherencia entre ellos con nuestras necesidades y potencialidades, al dejar a expensas de una negociación entre sindicatos, empresas y Administración, que no se produce en las mejores condiciones y que, por tanto, no tiene necesariamente por qué ser la mejor y mucho menos al producirse sin ningún marco de objetivos nacionales.

Sostenemos el Grupo Comunista que definir qué producir, cuánto, cómo y dónde, con qué paro obrero —aspecto fundamental hoy en el contexto político actual— son decisiones a tomar por el conjunto de las fuerzas representadas aquí de nuestro pueblo. Determinar qué tipos de especialidades productivas queremos para España en la nueva división internacional del trabajo, qué sectores hay que potenciar, así como el tipo y nivel de tecnología a utilizar y su disposición por zonas y regiones son decisiones que igualmente

han de ser tomadas entre los representantes del pueblo español con la máxima urgencia. Es precisamente por esto por lo que el Grupo Comunista ha presentado el 5 de mayo último una proposición no de ley, solicitando del Gobierno la presentación de un proyecto de ley de reindustrialización.

Ahora bien, teniendo en cuenta las recientes experiencias en la línea de actuación del Gobierno, a lo dicho hay que añadir que tal forma de operar cada reestructuración es una lucha dramática en la que los más fuertes acaban imponiendo sus intereses, intereses que no siempre coinciden con los nacionales.

Un ejemplo nos lo brinda recientemente la reestructuración de la siderurgia integral, donde las empresas públicas de este sector, Altos Hornos del Mediterráneo, pero particularmente Ensidesa, que produce el 48 por ciento del acero español, ha sido nuevamente sacrificada a los intereses del capital privado que trabaja en este sector. Algún miembro de esta Cámara que no se sienta precisamente en los escaños de la oposición puede dar fe de algunas de estas cuestiones.

Con este tipo de actuación, una reestructuración costosísima para el país y, en particular, para los trabajadores, corre el peligro de verse frustrada en sus resultados, pues si no se rentabiliza Ensidesa, tampoco lo será el sector, ya que tiene suficiente peso tanto para absorber las posibles mejoras que se logren en las demás empresas del sector como para salvar la competitividad media y la rentabilidad media del sector en buenos resultados. Es evidente, señor Presidente, señoras y señores diputados, que este caminar sin horizontes definidos, a la deriva, siempre en favor de los intereses dominantes en el sector o del momento han de resultar y harán sumamente más costosa la salida de la crisis que, en las actuales circunstancias, significa una gravísima irresponsabilidad, creemos los comunistas.

No basta hablar como aquí se ha hecho, señor Presidente, señoras y señores diputados, de lograr la competitividad de nuestra producción, de abrir las empresas a los mercados exteriores. Es preciso incluir en el debate hoy, cuando es preciso terminar con el caldo de cultivo a la involución, y esto pasa por solucionar los problemas de la crisis, pasa por atenuar el problema del paro. Es preciso señalar, discutir aquí a costa de cuántos puestos de trabajo vamos a pretender conseguir una com-

petitividad, cuáles son de cara a ello las medidas prioritarias que debieran imponerse.

Se calcula —también se ha dicho ya aquí— que solamente en el sector del metal, la reestructuración va a costar más de 120.000 puestos de trabajo, y lo alarmante de tal presagio no es simplemente esa cifra, sino la resistencia que se observa a cumplir de hecho los acuerdos siderúrgicos.

¿Dónde está, señor Presidente, señoras y señores diputados, dónde está, señor Presidente del Gobierno, la voluntad de hacer cumplir el ANE? Aquí tenemos los resultados hasta ahora, y aquí tenemos los medios que vamos a emplear para la reestructuración, para la llamada reconversión.

¿En función de qué criterios se confecciona la cifra total de 32.700 millones de pesetas? ¿Por qué precisamente 32.700 millones y no 32.800 ó 32.600? ¿Si no se han establecido unos objetivos bien definidos y evaluados cómo se pueden fijar unos presupuestos? ¿Cómo pueden darse unas cifras que parecen caprichosas, sin objetivos definidos concretos?

Hasta el momento, para seis sectores en reconversión, el Ministerio de Industria y Energía tiene comprometidos para 1982, 22.450 millones sobre los 25.700 previstos. Lo que queda es una ínfima cantidad, pero además la ausencia de objetivos, pese a ser un presupuesto por programas, hace incontrolable dicha partida de fondos, lo cual nos lleva a la conclusión de que dichos objetivos se fijan en áreas ajenas a la propia Administración del Estado.

A mayor abundancia de datos si, en la actualidad el volumen de gasto comprometido para jubilaciones anticipadas, para 1982, supera los 10.000 millones de pesetas, ¿cómo es posible que se asignen sólo 7.000 millones en este presupuesto? ¿No serán estas cifras fruto de pactos previstos desconocidos, con sectores igualmente desconocidos? Sería necesario que el Gobierno lo aclarase y sería necesario igualmente que el Gobierno aclarase qué contenido y qué objetivos tienen los llamados acuerdos o convenios entre empresa y Administración, que cita el proyecto de presupuestos en su explicación de gastos. ¿Se tiene en cuenta, por ejemplo, la tecnología? ¿Están vinculadas dichas subvenciones a inversiones? ¿Se exigen proyectos concretos? Yo creo que no, luego no existe reconversión, no puede existir y es lo que viene sucediendo en los puestos alternativos que impone la reestructuración.

La triste experiencia es que se acelera el proce-

so de desindustrialización, en gran medida, porque las subvenciones no van vinculadas a una política de empleo, sino que dicho fondo público se utiliza para bajas incentivas, con lo que, insisto, se pone muy entredicho la voluntad de cumplir el ANE.

Se nos pide que concretemos. Esta mañana hablaba el señor Ministro de la reestructuración del subsector del cinc. La fusión de la Real Compañía Asturiana y Asturiana de Zinc. Pues bien, solamente al capítulo de jubilaciones anticipadas, y además no de ahora, sino de 1979 y 1980 se le conceden mil millones de pesetas.

Y no digamos lo que pasa en la gama blanca. IBER 22 y REVI comercial, y productora, plantean el problema de la fusión. No se produce la fusión. En mayo, REVI recibe 300 millones de pesetas, y hoy anuncia su cierre para primeros de enero.

Señor Presidente, si no se aprueba nuestra enmienda a esta sección veinticuatro se acentuará la orientación de que las subvenciones se dirijan principalmente hacia el saneamiento financiero de las empresas, no a elevar su capacidad de producción en el sentido de mantenimiento de puestos de trabajo.

Y referido a los estímulos a la inversión, cabe preguntar, señor Ministro, ¿qué sucede?, ¿es cierto que las empresas mineras de Asturias, me refiero a las antraciteras, han elevado sus inversiones y en cambio el Gobierno no les da la ayuda financiera correspondiente? Si esto fuese así, si no se correspondiese con la ayuda que responde a esas inversiones, qué duda cabe que estaríamos obstaculizando el ANE y que estaríamos también obstaculizando una producción básica para nuestra independencia nacional y además, fundamentalmente, estamos negando estímulo a las inversiones.

Es preciso señalar igualmente que el Grupo Comunista ha venido defendiendo la racionalización del sector público. El Gobierno incumple reiteradamente también su compromiso al no traer a las Cortes el proyecto de Estatuto de la Empresa Pública.

Señor Presidente, señoras y señores diputados, ante la evidente carencia de una política industrial clara y concreta, ante la impresión que deja el análisis de esta sección treinta y cuatro de que toda la reconversión industrial se está convirtiendo en un tráfico de influencias y presiones, corremos el riesgo de que el Gobierno persista en esta

actitud de negociar sólo cuando hay en juego un número de votos importantes o cuando se le plantean conflictos políticos graves, dando lugar con ello a la marginación de sectores y regiones que en una coyuntura determinada ofrecen menos rentabilidad política, pero cuya marginación significa un despilfarro de potencial económico, humano y técnico con muy graves repercusiones sobre la economía y nivel de dependencia nacional.

Podríamos aducir múltiples ejemplos de sectores, regiones o provincias sacrificadas hasta el extremo de haber sido conducidas a una situación de recesión sin precedentes. Por falta de tiempo voy a referirme únicamente a Asturias, no porque sea mi región, sino fundamentalmente porque lo que sucede en Asturias es la más clara expresión de la carencia de un auténtico programa de reestructuración industrial, de la no explotación racional de sus enormes posibilidades.

Asturias, como todos saben, es una región donde predomina el sector industrial; más del 50 por ciento del valor añadido bruto regional se genera en el sector industrial. Este porcentaje es muy superior a la media nacional, y es mayor al de cualquier otra región. El sector industrial asturiano está especializado en producciones básicas. Si además tenemos en cuenta que esta crisis industrial afecta de forma especial a las industrias básicas y añadimos que el grueso de la producción básica predominante en Asturias, y con ello el grueso de la producción industrial asturiana, es generado en dos empresas en crisis podemos hacernos una idea de la repercusión que en Asturias tiene esta crisis.

Por otra parte, estas empresas, Ensidesa y Hunosa, son públicas, lo que significa que la iniciativa privada con la que puede contar Asturias para su recuperación, o con la que debiera contar, es escasa. Es claro que la acción del sector público será decisiva para la recuperación del sector industrial asturiano y con él el de su economía. A nadie puede extrañar que los asturianos nos consideremos con razones sólidas para pedir el apoyo del sector público. Asturias ha sido, como todo el mundo sabe, en las últimas décadas una de las regiones españolas que más ha contribuido al desarrollo del país, sacrificando incluso otros caminos quizá más rentables para la región. Y sucede esta situación mientras Asturias ofrece a España la mayor producción de carbón, acero, electricidad, cobre, aluminio, etcétera; es decir, de elementos

básicos para nuestra independencia y para un desarrollo económico racional.

Sin embargo, Asturias asiste hoy al ritmo mayor de pérdida de puestos de trabajo del país. El campo asturiano, que está en cabeza en la producción de leche, resulta que pierde seis mil puestos de trabajo al año y tiene una renta «per capita» del 25 por ciento del salario mínimo interprofesional; es decir, muy por debajo de la media nacional en el país, que es del 40 por ciento.

Es natural que Asturias se preocupe al mismo tiempo porque es base, como otras regiones, de sectores de pequeñas industrias, etcétera, que no figuran en los planes de reestructuración. De conformidad con ello, creemos que el Gobierno atenta contra el principio constitucional de solidaridad entre los territorios españoles si sigue en la línea actual de abordar la reestructuración industrial de España sin un marco de objetivos claros y sin que en ellos se contemple la variable regional.

En resumen, señoras y señores diputados, a juicio del Grupo Comunista —y es la razón principal de nuestra enmienda a la totalidad de esta sección treinta y cuatro— el tema de la reconversión industrial pasa por dos vertientes fundamentales. En primer lugar, es necesaria una política industrial por sectores, teniendo en cuenta ya las variantes regionales. En segundo lugar, cumplimiento global de los acuerdos a que se llegue en los sectores a reconvertir.

De la primera vemos que por parte de la Administración no existe una política clara ni se arbitran unos medios claros, pero lo que es meridiano y de actualidad es que la Administración no muestra convincentes deseos de cumplir los acuerdos ya firmados.

Un ejemplo más que avala esto es el acuerdo tripartito de la siderurgia integral que, habiendo sido firmado el mes de abril pasado, fue torpedeado por la Administración al sacar ésta un real decreto de medidas de reconversión y saneamiento de la siderurgia integral, al mes siguiente, cuando relanzaba una obsoleta Comisión de coordinación sin participación de uno de los firmantes del pacto como son los sindicatos. Dicha Comisión de coordinación suplantaba en buena medida a la Comisión de seguimiento de los acuerdos, vaciándola de contenido. Esta Comisión de coordinación tampoco ha funcionado, fundamentalmente por las luchas intestinas que provocan las empresas, por no compartir una política comercial conjunta.

El porvenir de los acuerdos siderúrgicos, que son una buena muestra de lo que puede pasar en el resto de los acuerdos de otros sectores, ya que fue el primero en firmarse, es bastante incierto salvo que la Administración aclare su actuación y se decida claramente por su cumplimiento, como es en el caso de las necesarias inversiones básicas, que deberían comenzar en 1982, según los acuerdos, y cuyos fondos no aparecen explicitados en los Presupuestos que estamos discutiendo.

Por todo ello, señoras y señores diputados, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Comunista pide la retirada de esta sección y que sea presentada de nuevo con un desglose por sectores, acompañado de las líneas maestras de actuación sectorial, enmarcado en un plan de reindustrialización, en la línea ya esbozada en nuestra proposición no de ley presentada con anterioridad al Real Decreto-ley de 5 de junio, es decir, justamente un mes antes, el 5 de mayo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de las enmiendas defendidas respecto de la sección 34, tiene la palabra el señor Garí.

El señor GARI MIR: Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero resaltar en el comienzo de mi intervención que, tal como ha comentado el diputado señor Tamames, ésta es una sección nueva en el Presupuesto; y es nueva en cumplimiento puntual y escrupuloso de un compromiso contraído por el señor Presidente del Gobierno en su discurso de investidura.

Discurso de investidura que enmarcaba la reconversión industrial en dos coordenadas fundamentales. En primer lugar, que fuera un tratamiento sectorial, eliminando actuaciones puntuales, garantizando el principio de igualdad de las empresas ante la reconversión y de las empresas ante el mercado; y en segundo lugar —cito palabras textuales—, que esta política de reconversión se debe completar —decía—, se completará con una estrategia industrial que, a la vista de la integración en Europa, permita aumentar la productividad, afiance las posibilidades de creación de nuevas industrias y estimule la utilización de nuevas tecnologías.

Yo no voy a repetir aquí, señorías, el análisis que se ha reiterado en torno a la crisis económica, en torno a la crisis industrial. Se han señalado tres posibles políticas para encarar esta crisis. Una de

ellas, una mayor beligerancia e intervención del Estado, apoyando a sectores que él considera convenientes y merecedores de la ayuda. No sé si me falla la memoria, creo que no, pero esta forma de encarar la crisis ha sido rechazada abiertamente por un representante del Grupo Parlamentario Socialista, dando como argumento principal el que no disponíamos de un sector público importante. Yo no sé, por contra, si dispusiéramos de este sector público importante, si ésta sería la forma de encarar la crisis del Grupo Parlamentario Socialista.

En segundo lugar, se ha planteado la posibilidad de no hacer nada: liberalismo respecto al tema. También se ha rechazado esta solución.

En tercer lugar, la ayuda transitoria del Estado, pero con la sola finalidad de la reconversión. Obviamente, se ha escogido esta tercera solución, pero enlazándola directamente con la segunda coordinada planteada por el señor Presidente del Gobierno al exponer aquí el tema de la reconversión industrial.

El señor Tamames, el señor Almunia y también el señor Fernández Inganzo han planteado el tema de la falta de información. El señor Tamames decía que no ha habido ni luz ni taquígrafos. Señor Tamames, ha habido luz y ha habido taquígrafos. El dijo que había taquígrafos, desde luego, pero taquígrafos y luz había en la Comisión de Presupuestos; el señor Tamames era el que no estaba allí; el señor Almunia sí estaba y preguntó al señor subsecretario de Industria y Energía, que dio una cumplida explicación de los sectores a reconvertir y de las cifras que todos estos sectores suponían. El que escuchó mejor creo que fue el señor Fernández Inganzo, que ha anotado el dato de que había ya comprometidos 21.000 millones de pesetas, y, según dijo el señor subsecretario, quedaban 6.000, que él ha calificado de pocos, para la reconversión, pero debo señalar, tal como lo hizo el señor subsecretario del Departamento, que ya está aprobada la reconversión de sectores tan importantes como son el siderúrgico y el textil, que entre los dos se llevan nada más y nada menos que 17.000 millones de pesetas.

También ha señalado el señor Tamames que en el Presupuesto de la sección 34, de esa nueva sección 34, aparecían dos grandes bolsas, y una de ellas la ha calificado de indemnizaciones por despido. No, señor Tamames, no son indemnizaciones por despido, son indemnizaciones por ju-

bilaciones anticipadas, y no son solamente 7.000 millones de pesetas. Y aprovecho para contestar también al señor Fernández Inguanzo, con la precisión que ha hecho el señor Almunia, en el sentido de que en el capítulo 442 del Ministerio de Trabajo hay 3.000 millones de pesetas más y, además, remanentes de los 5.500 millones de pesetas del crédito extraordinario del año 1981, hay 2.000 millones de pesetas. En total, 12.000 millones, que a nosotros, señor Almunia, sí nos parecen en principio suficientes para los compromisos contraídos para el año 1982.

Y decía, señor Presidente, señoras y señores diputados, que se ha escogido la política de ayuda transitoria del Estado; pero no en la óptica, no en el encuadramiento que se hacía esta mañana de ajuste negativo de la crisis. Porque aquí no se trata solamente de financiar determinados compromisos, no se trata solamente de hacer una reestructuración de las plantillas de las empresas; aquí se trata, tal como señaló ya el señor Ministro de Industria y Energía en su intervención de presentación del real decreto-ley a esta Cámara, de preparar a nuestra industria para su integración en el futuro inmediato en el Mercado Común. Y así, en las negociaciones de los distintos decretos de reconversión se ha tenido muy en cuenta no solamente esos dos capítulos que he comentado anteriormente, sino que se ha tenido muy en cuenta el grado tecnológico de las empresas para igualarlo y equipararlo a las empresas europeas; se han tenido en cuenta los distintos índices de productividad, los distintos índices de participación de los distintos factores en la producción de los costes de las empresas.

Se comentaba esta mañana, y se ha incidido también esta tarde, que no se trata simplemente de esta política de reestructuración, que, repito, no es una política de reestructuración en su aspecto negativo, porque se trata de conservar, y conservar bien, lo que tenemos para que eso continúe manteniendo importantemente esos empleos que hay en estos sectores, sino que, además, se trata, se decía, de actuar sobre las dificultades a que este sector industrial se está enfrentando en este momento. Voy a seguir, incluso, el mismo índice que se planteaba esta mañana.

Se hablaba, en primer lugar, de que hay que hacer un esfuerzo importante en innovación tecnológica. Señorías, la innovación tecnológica es algo serio, algo difícil que no se puede resolver con planteamientos voluntaristas. La innovación

tecnológica se realiza, fundamentalmente, a través de una mejora de productos y procesos o por la creación de nuevos productos y procesos. Debe fomentarse, debe existir el espíritu empresarial capaz de relacionar las expectativas de beneficio con la capacidad también de asumir riesgos y, naturalmente, estar propicio a aceptarlos; debe disponer de recursos tecnológicos apropiados; del saber hacer y, por último, se debe poseer una cierta capacidad y ánimo de innovar en función de unos conocimientos. Se debe, por tanto, haber recibido una determinada información. Todo esto, enumerado a nivel de principios, plantea un complicado entramado si se quiere instrumentar adecuadamente la información. No se trata de tener ideas; se trata de que esas ideas puedan ser plasmadas en un proceso de diseño que, como saben perfectamente SS. SS. no es la simple idea, sino es integrarla en todo el proceso productivo; se trata de investigaciones importantes de tecnología; se trata, a continuación, del proceso de la industrialización, para terminar con todo el proceso de la comercialización.

Estoy comentando esto, señorías, para poder entrar después en las distintas acciones que tiene el Ministerio de Industria y Energía planteadas respecto a todas y cada una de estas cuestiones.

Esta mañana se argumentó que el presupuesto del año pasado del Cediti, más el presupuesto del Plan de acción en materia de innovación tecnológica, era superior a las consignaciones presupuestarias de este año. Evidentemente, el año pasado los dos conceptos sumaban 3.029 millones de pesetas y este año el concepto del Cediti tiene una consignación de 2.400 millones de pesetas. Pero es que a esta consignación, señor Presidente, señorías y señores diputados, hay que sumar los 1.500 millones de pesetas que, a través de los convenios de innovación, engrosarán esta partida, lo que en total va a sumar 3.900 millones de pesetas.

Acciones concretas en el tema de la innovación industrial: complemento de la reconversión industrial; la creación de una comisión interministerial de normalización y homologación industrial; la publicación del Reglamento de actuación en materia de normalización y homologación; la red nacional de laboratorios de ensayo; la potenciación de asociaciones para la protección del control de calidad y, dentro de este contexto, las normas que anunció el señor Ministro de Industria esta mañana en su intervención. Una norma general sobre tecnología que contemple los as-

pectos de normalización y diseño, que contemple la instrumentalización de las sociedades de Derecho capital, para resolver ese tema que planteaba el señor Silva esta mañana de desplazar el concepto de préstamo al concepto de crédito a las ideas; el tratamiento fiscal de las sociedades de innovación tecnológica y, después, la ley de propiedad industrial, con el fin de establecer la actividad inventiva, el informe sobre el estado de la técnica y la obligación de explotar la patente, con los objetivos concretos de acercar nuestro Derecho al Derecho europeo de patentes y, además, de fomentar la tecnología propia.

Señor Presidente, señoras y señores diputados, todas estas acciones, que muchas de ellas no necesitan el rango de ley, forman parte de la política general en materia industrial del Gobierno. Puede que sean acciones, algunas de ellas, incluso modestas, pero también es necesario atender a través de estas acciones a las pequeñas y medianas empresas, que son realmente las generadoras de actividad en estos sectores importantes y en estos sectores nuevos.

Nosotros creemos que es a través de estas acciones y de estos planteamientos como se consigue realmente entrar y resolver las crisis. Lo contrario, los otros planteamientos, señor Presidente, señoras y señores diputados, nos parece que en el fondo lo único que hacen es forcejear inútilmente con la utopía.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, algunas observaciones de réplica a las palabras del señor Garí.

Yo creo que habría que empezar, diciendo que no nos parece muy bien que nos haya recordado el discurso de investidura del señor Presidente del Gobierno, porque, desde luego, si tuviéramos que traer a colación nosotros el discurso en este momento para encontrar el segundo pilar de su política industrial, no solamente ese tratamiento sectorial, sino esa estrategia industrial, a que se ha referido el señor Garí, en términos de productividad de nuevas industrias y de nuevas tecnologías, ni con la linterna de Diógenes íbamos a encontrar eso, porque no está en ninguna parte.

Si usted me dice que en estos momentos hay nuevas industrias en marcha y me las enumera, yo lo aceptaré con mucho gusto, pero en estos momentos el único gran proyecto que está a punto de inaugurarse es el de la General Motors, y no es precisamente por decisión del Gobierno español, sino porque a la General Motors se le hizo el traje a medida, en la forma que la General Motors lo pidió, con las consecuencias que usted y yo vamos a ver a partir del año que viene cuando la General Motors empiece a producir; lo dije en la intervención de la enmienda a la totalidad y lo digo ahora. Como tampoco se ven las nuevas tecnologías, señor Garí; porque aquí, que se sepa, en los últimos cincuenta años —por no decir en los últimos cuarenta años, porque parecería, más o menos, una especie de referencia a los cinco últimos años y a los treinta y cinco anteriores—, la verdad es que no se ha patentado una sola cosa que merezca una representación internacional decorosa, si empieza usted a repasar. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, y luego le diré por qué no hay voluntad.

En segundo lugar, quería decir al señor Garí que las actas de las Comisiones se publican; para eso están los taquígrafos, con su trabajo esforzado muchas veces, sobre todo en las intervenciones muy rápidas. Yo he tenido el gusto de leer las intervenciones del señor subsecretario de Industria en las actas taquigráficas, y la verdad es que no me han proporcionado ningún conocimiento adicional. Yo dije que había fondos comprometidos. Usted me ha precisado la cifra y no ha cambiado la información. La verdad es que las dos grandes bolsas siguen sin explicación.

Yo también he hablado de jubilación anticipada. No me he referido sólo a los despidos, sino que me he referido también a las jubilaciones anticipadas. Ahora, lo de que es una ayuda transitoria, eso no se lo creen ni ustedes; transitoria es una cosa que dura más o menos tiempo; puede durar desde seis meses hasta seis o veinte años. En este momento hay empresas que están recibiendo ayudas transitorias en la siderurgia desde hace por lo menos diez años, y ahí están; están recibiendo ayuda transitoria desde 1974 la mayoría de esas industrias, y ahí siguen. Hemos entrado —aunque ustedes no lo quieran aceptar todavía— en una especie de túnel de la eutanasia industrial, una especie de eutanasia industrial larga porque, como dirían algunas personas que lo dicen por ahí y lo escriben, incluso, en las paredes, no tie-

nen ustedes prisa. Pero la verdad es que por ahí vamos a la eutanasia industrial; porque es, sencillamente, un sistema de cuotas, de contingencia, de destrucción de equipo industrial, de paro y nada más, sin ninguna alternativa, por mucho que lo diga el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. No hay alternativa para esos obreros que se quedan en paro. Si no, que se nos diga, porque, desde luego, esa información no se ha dado en ninguna parte. No sabemos cómo se van a poner en marcha esos 350.000 puestos de trabajo.

Además, el señor Garí dice que reconoce que la reestructuración tiene sus aspectos negativos. Efectivamente, hasta ahora no tiene más que aspectos negativos. Lo ha reconocido, y me parece bien. ¿Sabe usted en qué consiste el plan de reestructuración de la industria siderúrgica? Pasar de 18 millones de toneladas, equivalente a cero, a doce, once, diez; es decir, sencillamente, aspectos negativos. En vez de estar planteándose lo que es una industria transformadora, un plan de vivienda, lo que es, en definitiva, abrir horizontes a la inversión y a la economía en general para que haya donde invertir —porque en estos momentos no tenemos ni siquiera proyectos para invertir—, lo que están haciendo, como dice la Ley Básica de Empleo —que es una de las leyes seguramente más negativas, en muchos aspectos, de las que se han promulgado por este Parlamento— en su artículo 1.º, si lo repasa ahora, es lo siguiente: La política de empleo es ajustar la oferta a la demanda; crear un equilibrio entre oferta y demanda. Eso es una petición de principio. Lo que pasa es que ese equilibrio lo tiene usted con una oferta de trabajo muy amplia y, desde el punto de vista de los empresarios, una demanda de trabajo muy reducida, o lo tiene usted en el lado contrario: un equilibrio distinto con una oferta de trabajo que es plenamente satisfecha. Eso nos dice la Ley Básica de Empleo. Sólo se habla de equilibrio, y no dice siquiera el mejor equilibrio. Habla así de la situación de los parados; señal de que no se persigue el pleno empleo. Estamos hoy padeciendo las consecuencias de una legislación que nos hemos estado dando de forma poco satisfactoria y vamos a seguir padeciendo sus consecuencias.

La innovación tecnológica. Dice usted que son voluntarismos. Quiero recordar algo muy sencillo que está en el catecismo, y es lo de las potencias del alma. Hay que tener memoria, entendimiento y voluntad. Si no hay voluntad no se hace

nada. Este Gobierno no tiene voluntad de introducir la tecnología y llevar a cabo avances tecnológicos. El Gobierno no está haciendo nada por la tecnología. Hay que decirlo así de claro. Porque, ¿quiénes están haciendo hoy tecnología en España? La IBM, la Nixffor, Honda, Yamaha y General Motors, que son empresas que no tienen que ir al Ministerio de Industria para pedir ayuda para la tecnología. Si la piden es que forma parte del traje a medida que les han cortado oportunamente. Este es el tema, y no hay más. Este Gobierno no tiene una política tecnológica porque la política tecnológica se traduce en hechos. No tenemos ni tecnología en agricultura, donde todavía tenemos que saber cómo acabar con la peste porcina o con la tristeza del naranjo; ni la tenemos en la pesca, donde la piscicultura va con retraso sobre cualquier otro país con un litoral equivalente al nuestro, o en la industria. Y es porque no hay voluntad. Aquí la tecnología está burocratizada y llega a tales niveles que no se investiga, y ni siquiera se sabe lo que se está investigando fuera.

No es por agorerismo, ni pesimismo ni por catastrofismo, sino porque estos temas no interesan a todos y hay que decir las verdades, porque si no se dicen se empiezan a mencionar los decretos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», las órdenes ministeriales y las circulares y parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero todo el mundo sabe lo que pasa y todo el mundo sabe que estamos en una situación tecnológica incluso tendencialmente peor que en los años 40 y 50, y usted lo sabe. En los años 40 se les podrían llamar los Julio Verne, pero ahí estaban investigando en Enasa, en una serie de empresas del INI, cosa que no hacen ellos, sino las empresas multinacionales que han entrado en las empresas del INI.

Digo todo esto porque usted no ha sabido, porque es difícil, porque es imposible —yo lo comprendo, señor Garí— que usted pueda defender la sección treinta y cuatro, porque no tiene defensa, y se ha dedicado sistemáticamente a dar vueltas en torno a la sección veinte, de Industria y Energía.

El resultado es que estamos ante una situación que, se quiera o no reconocer, se parece mucho a la de una eutanasia industrial, con todas sus secuelas negativas. Además, lo de que no hay reconversión casuística, eso tampoco se lo creen ustedes. La reconversión dentro del INI que no está

en los planes sectoriales, es una reconversión ca-suística.

El otro día me entretuve leyendo unas Memorias de las empresas del INI para ver lo que había perdido en 1980, y ha perdido 100.000 millones de pesetas. Y están en pérdidas casi todas ellas, y no solamente por la crisis industrial, porque hay sectores donde otras empresas están con beneficios; y no sólo es problema de empresas públicas, pues, como se ha dicho antes, cuando hay que sacrificarlas, se las sacrifica.

Evidentemente, hoy la más afectada por la «carterización» de la industria siderúrgica es Ensidesa, que podría estar en un momento de recuperación de competitividad y se están sacrificando las posibilidades de Ensidesa al resto de la siderurgia. Hay que decirlo porque no basta con decir que hemos hecho unas cuotas. Pero detrás hay lo que se dice una filosofía —aunque la palabra no sea muy apropiada—, hay una idea de frenar a unas, de darles unas posibilidades a otras. ¿En base a qué? A perspectiva de saneamiento real. ¿Es que Altos Hornos de Vizcaya tiene un plan estratégico que nos permita asegurar que va a tener una solución pronto? En realidad, dentro de esas empresas el problema es que nos encontramos igual o peor que hace tres años cuando discutíamos los problemas de la empresa pública, cuando decíamos que había que acabar con las prebendas y con las situaciones de favoritismo, y siguen los mismos señores al frente de esas empresas.

Ahí tienen el caso de SEAT a que me refería antes. Yo escuchaba el otro día Radio Nacional y decían que habían hecho una encuesta en SEAT para saber lo que iban a hacer los obreros con dos millones, aproximadamente, de indemnización que les tocaba por ese autodespido llamado voluntario. Decía el locutor que unos iban a comprar una casa, otros iban a poner un pequeño taller e incluso daba a entender que algunos iban a volver a comprar fincas rústicas en sus pueblos para dedicarse a la agricultura. Esta es una especie de égloga, una especie de canto al despido industrial. La realidad es que lo que se estaba haciendo era una especie de canto de vuelta al campo, y lo que habría que pensar de una vez es ver si se pueden volver al campo los presidentes de las empresas que no funcionan, los consejeros delegados de las empresas que no funcionan, que a esos sí que hay que darles la jubilación anticipada

y enviarles al campo para que refresquen todos sus planteamientos. (*Risas y aplausos.*)

Pueden coger las declaraciones de directivos de las empresas de este tipo que dicen: En el año 1977 estaremos en punto muerto y en los años 1978, 1979 y 1980 tendremos beneficios. Ahora dicen que en 1983 y en 1985. Y ahí siguen y no puede ser. No podemos funcionar así con esos ejecutivos al frente de empresas que les cuestan al Estado millones, decenas de millones y miles de millones de pesetas.

Fíjese usted, señor Ministro de Industria y Energía, por lo menos aprenda usted lo poco bueno que tiene la señora Thatcher. No funcionaba la British Steel Corporation, ¿y qué hizo la señora Thatcher? En vez de vendérsela a los norteamericanos, que no la querían, o a los japoneses, a los que seguramente no les interesaba, contrata al mejor ejecutivo mundial en ese momento, y ese señor, con toda una serie de planteamientos, está elevando la producción de la British Steel Corporation cuando nosotros estamos haciendo un plan malthusiano de eutanasia industrial.

Y ese es el problema, que estamos ante una situación de pactos, de compromisos muchas veces de carácter no estrictamente técnico ni económico, sino que tienen otras razones de ser que todos sabemos y, por tanto, no vamos a mencionar aquí. Y ese es el problema y, por tanto consiguiente, si se quiere desarrollar una política industrial, sobre todo una política de reconversión industrial, el camino elegido no puede ser peor, porque no hay lo que prometió el señor Presidente del Gobierno, no hay nuevas industrias nacientes para compensar la desindustrialización ni hay técnicas alternativas a las que las empresas multinacionales están introduciendo. No digo que sean culpables de introducirlas; hacen lo que quieren y lo que pueden, pero se les está dejando hacer lo que quieren o pueden, y perdiendo incluso el último viso de soberanía industrial y de soberanía económica que tenemos en este país.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Garí, yo no creo haber anotado una sola respuesta a mi intervención inicial. Usted ha hablado de tecnologías, ha hablado de la sección veinte, ha intenta-

do hacer un turno de réplica suplementario, por la puerta de atrás, a mi compañero Pedro Silva en el debate que habíamos tenido por la mañana, pero en absoluto considero que haya no ya respondido satisfactoriamente, sino ni siquiera tocado la inmensa mayoría de los temas que constituyen los motivos de crítica de mi grupo y de petición de devolución del texto de la sección treinta y cuatro al Gobierno.

Hemos planteado una enorme confusión, de la que no nos ha sacado ni el Gobierno ni, desde luego, la intervención del señor Garí, que ni siquiera ha entrado en el tema, ni, desgraciadamente, el señor Aldama, sobre la lista de sectores industriales que van a tener acceso a las ayudas públicas a lo largo de 1982 derivadas de la sección treinta y cuatro, reconversión industrial.

El señor Aldama, que en Comisión, a petición de este diputado, nos informó de una lista de sectores que podrían entrar, y dijo claramente que están en negociación, por ejemplo, sectores como la forja pesada, componentes electrónicos, estudios de aceros comunes, papel, cobre y toda otra lista de sectores que o bien tenían una solución negociada o decidida o estaban en negociación o estudio, pero que eran sectores cuya reconversión no pasaba por los beneficios que se contemplan en la sección treinta y cuatro, pocos días después, y en la prensa, nos ofrece una lista distinta a la que expuso en la Comisión de Presupuestos en su comparecencia, y cito: Se han acogido a la reconversión sectores de electrodomésticos, aceros especiales, etcétera; otros, como el de construcción naval, están negociándose; en fase de estudio, aceros comunes, el papel y el cobre. Y añade a continuación: «Si se cumplen los planes del Gobierno (y esos planes son los que queremos que el Gobierno nos explique en este debate de Presupuestos, y si no se concibe cómo pueden aprobarse treinta y tantos mil millones de pesetas para unos planes desconocidos en esta Cámara), con estos sectores se cerrará la reconversión industrial».

A diferencia de nuestra petición de explicación de esos planes, el señor Garí ha intentado repetir consideraciones del señor Ministro por la mañana, que, sin entrar en el tema de nuestras críticas a la política de reconversión industrial, porque no era precisamente el tema de la mañana, se ha tratado de encubrir con bellas palabras y deseos que no se encuentran después en la realidad de la política del Ministerio y del Gobierno; se ha tra-

tado de justificar que podría existir una política de ajuste positivo. Y para intentar justificar eso, que, desde nuestro punto de vista, no se justifica en la explicación del señor Ministro en la mañana, ni muchísimo menos en la intervención del señor Garí, extemporánea en este momento, se ha llegado a remitir el señor Ministro a los polos de desarrollo del señor López Rodó.

Por tanto, repito, ¿qué sectores se reconvierten, qué sectores en 1982 van a beneficiarse o piensa el Gobierno que deben beneficiarse de los apoyos públicos previstos en la sección treinta y cuatro?

Hay contradicciones en las propias palabras, con pocos días de diferencia, del subsecretario de Industria del Ministerio de Industria y Energía.

Segundo, transferencias corrientes. Insisto en que las transferencias corrientes para jubilaciones anticipadas, a pesar de incorporar incluso los remanentes que puedan existir a fines de 1981, no son suficientes, y doy cifras que no se las ha inventado este diputado. Para siderurgia, tres mil doscientos y pico millones; para aceros especiales, 1.020 millones; para aceros comunes, 2.000 millones; construcción naval, 2.500 millones; textil, 1.260 millones, etcétera. Se suma, y con sectores que no sabemos todavía si son los únicos que van a poder beneficiarse de los apoyos públicos del capítulo 4 de la sección treinta y cuatro, nos da más de 12.000 millones de pesetas, que es la suma máxima con la partida de la sección diecinueve que nadie nos ha explicado porque no figura en la sección treinta y cuatro, incorporando incluso el remanente.

Por tanto, sólo nos queda interpretar que la falta de respuesta del señor Garí o del señor Ministro de Industria a nuestras objeciones y preguntas concretas no obedecen a un olvido, a que hayan escuchado mal o a una equivocación; obedece, pura y simplemente —a no ser que consigan convencerme de lo contrario— a que no tienen respuesta, porque no hay una política de reconversión industrial y sólo se va haciendo la reconversión industrial parche a parche, plan a plan, dependiendo de las presiones y de los intereses coyunturales del Gobierno o de las empresas que acosan al Ministerio de Industria.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Inganzo.

El señor FERNANDEZ INGUANZO: Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde

luego yo no esperaba muchas cosas debido a que el decreto-ley y al presupuesto por programas no se les puede sacar mucho jugo. Sin embargo, esperaba que, por lo menos, se nos contestase a algunas cuestiones concretas, por ejemplo, qué se piensa del sector público; qué se piensa de industrias de cabecera; qué criterios se piensan seguir con las pequeñas y medianas empresas en los planes de reestructuración, etcétera.

No esperaba que se nos contestase exponiendo cuáles son los criterios reales del Gobierno con respecto a la reindustrialización en estos momentos. Eso no lo esperaba porque no lo puede traer el Gobierno, porque eso estamos viendo que no lo impone el Gobierno, sino las grandes empresas privadas en este país. Esta es la cuestión; por eso no podemos esperar que se nos den criterios. Eso es lo que pedíamos, pero eso no se nos puede dar.

Una demostración de ello es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la empresa pública. Ensidesa, herida de muerte porque se le imponen unas exportaciones que la hundan y una producción en la que se le niega todo aquello que puede producir realmente valor añadido. Es el problema del galvanizado, de Comerciales de Veriña, del alambón y de los angulares. Se les restringe tremendamente el mercado en favor de la industria privada. Algo parecido sucede con Altos Hornos del Mediterráneo, que está llamado a cerrar y que, aunque no se le aprietan tanto los tornillos como a Ensidesa, va por ese camino. Esa es la cuestión. Eso es lo que determina que no se nos puedan dar criterios, porque éstos los imponen siempre, por presión, las grandes empresas en este país.

Lo único que se ha puntualizado es que no estamos por el reajuste de plantillas, sino por colocar a nuestras empresas en condiciones —como se dijo anteriormente— de competir e ir a Europa.

Lo primero que creo que tendremos que analizar, y ya lo planteamos en nuestra intervención anterior, es por qué vías, qué es lo prioritario para poner las empresas en esas condiciones. Señores, nosotros creemos que poner a una empresa en plan competitivo no pasa precisamente por eliminar uno de los objetos fundamentales de la producción, sino que pasa por algo que se ha señalado aquí anteriormente; pasa por establecer una tecnología propia, por hacer un plan de investigación de tecnología, por establecer una red comercial propia, que es precisamente una de las

cuestiones fundamentales, que se restrinja a la empresa pública en favor de la empresa privada, concretamente, en este caso, Ensidesa.

Nadie discute la necesidad de la reestructuración de amplios sectores productivos de nuestra economía. Desde el año 1977 lo vienen exigiendo los partidos políticos de la oposición y los sindicatos. Precisamente el retraso de tal plan da lugar a esas reestructuraciones salvajes que rompen totalmente el equilibrio en las zonas; ese es uno de los problemas graves que tenemos en la región asturiana. Un plan de reestructuración exige valorar efectivamente el material, la infraestructura, pero debe tener también en cuenta el desenvolvimiento que exige soluciones alternativas; los daños que causa desde el punto de vista económico y social en una zona determinada. Ahí tenemos zonas del más alto nivel tecnológico con grandes reservas de todo tipo, por ejemplo, el Valle del Caudal, en Asturias, que ha perdido 20.000 habitantes en menos de un año. Ha perdido el pequeño comercio del orden de cinco mil millones de ingresos porque se han llevado a Ensidesa y no se ha sustituido absolutamente nada.

Siguiendo la dinámica que se viene produciendo en el proceso de reestructuración, basado únicamente en intereses estrechos de cada empresa, y en muchos casos de dudosa necesidad inmediata, sin tener en cuenta las repercusiones sobre un número importante de trabajadores, esto determina el tremendo desequilibrio, insisto, a que nosotros estamos asistiendo. Por eso, señor Presidente, señoras y señores Diputados, no me siento nada optimista en cuanto a la posibilidad de cumplimiento de aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la democracia y para la consolidación de la democracia en nuestro país. Yo he planteado un problema serio: ¿Qué pasa con los acuerdos siderúrgicos? No se me ha dicho una palabra, y me temo que esa sea la línea general que ponga de manifiesto que la voluntad expresada aquí el otro día, de hacer cumplir el ANE, empieza por manifestarla el Gobierno no cumpliendo los aspectos que atañen a él directamente.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Señor Presidente, se-

ñoras y señores diputados, dice don Ramón Tamames que la reconversión industrial es la eutanasia industrial. La eutanasia industrial, señor Tamames, es el proyecto que usted nos ha expuesto. Eutanasia industrial es mantener la vergüenza de las pérdidas de las empresas sin adoptar las medidas de reconversión necesarias, año tras año. Eutanasia industrial es no adoptar las medidas de reconversión necesarias porque la pérdida del empleo, señor Tamames —y eso hay que decirlo en boca de un profesor para ser serio en posición externa y en boca de un político—, se estaba produciendo mucho más con anterioridad la reconversión industrial que como consecuencia de la aplicación de esta política.

Basta con el ejemplo del sector textil, en el que se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo en varios años por no adoptar medidas de reconversión y, si no se aprueban las medidas de reconversión correspondientes, se pierden 70.000 puestos de trabajo en los años próximos.

No es eutanasia industrial, por el contrario, el adoptar un plan de reconversión de ese orden, en el que los puestos de trabajo que se van a perder como consecuencia de la aplicación tecnológica y de la modificación tecnológica de este tipo de industria se recuperan por la importante inversión que se realiza en la maquinaria textil mientras tanto.

Eutanasia industrial, señor Tamames, es mantener las industrias sin una capacidad de competencia frente a la Comunidad Económica Europea, y esa reconversión industrial o la hacemos hoy o nos la harán posteriormente cuando, como consecuencia del levantamiento de las barreras arancelarias, nuestras industrias tengan una mucho más abierta necesidad de competir en los mercados internacionales y en el mercado español frente a las distintas empresas europeas que entren en el mismo.

Eutanasia industrial, señor Tamames, es mantener una situación de productividad tan baja en nuestras empresas, y sobre todo eutanasia industrial es meter la cabeza debajo del ala y decir que aquí no ocurre nada, así como pensar —y eso me temo que es el contenido de su intervención— que la siderurgia española puede mantener una capacidad teórica de fabricación de 18 millones de toneladas, cuando han fallado, absoluta y radicalmente, las previsiones que al respecto se hicieron desde hace aproximadamente diez o doce años.

En consecuencia, en toda Europa ha habido necesidad de efectuar el ajuste necesario de las producciones, y los planes de Avignon son sumamente significativos al respecto. Por tanto, creo que la aplicación de esa que usted llama desindustrialización o caída a la baja no es sino la necesidad del reajuste de los distintos elementos económicos en las empresas y en los sectores y eso es absolutamente necesario.

Además, señor Tamames, tiene usted importantes defectos de información. Intentar convecer a la Cámara de que la British Steel es un ejemplo importante de la siderurgia es un importante error de información, puesto que la British Steel pierde por unidad de producción mucho más de lo que pierden Ensidesa, Altos Hornos del Mediterráneo y Altos Hornos de Vizcaya y porque, además, la British Steel, como consecuencia de la aplicación de los planes correspondientes del comisario de Avignon, está necesitando disminuir su capacidad de producción de los últimos años y me parece ello sumamente razonable.

En segundo lugar, se hace referencia al problema de la tecnología y se dice que se carece absolutamente de capacidad política o de voluntarismo político —me parece que ha sido su expresión— para poner el tema de la tecnología en marcha. Creo que no es muy justa esa afirmación y, sobre todo, lo que es más grave en términos políticos, no corresponde a los hechos.

El Instituto Nacional de Industria, por utilizar el mismo ejemplo que usted, efectivamente, gasta en investigación e innovación tecnológica mucho más que en todos los ejercicios anteriores a los que ha hecho usted referencia, pero creo que olvida, por ejemplo, la importantísima aplicación tecnológica de las empresas del Instituto Nacional de Hidrocarburos al sector eléctrico en su conjunto, en el sector privado, para la búsqueda de nuevas fórmulas de energía; olvida, por ejemplo —eso también hay que citarlo, señor Tamames—, que estamos construyendo aviones que se venden a todo el mundo, que se están fabricando en Indonesia, que se van a fabricar dentro de poco en Corea y en los propios Estados Unidos, y me parece absolutamente importante. Eso es una punta de tecnología que pone nuestro país a través del Instituto Nacional de Industria.

Además, precisamente, la aplicación tecnológica entiende el Ministerio de Industria y el Gobierno que ha de realizarse con criterios liberales y no con criterios burocráticos, y por eso es con-

tradictoria su afirmación, puesto que lo que estamos examinando es el Presupuesto General del Estado y en el Presupuesto General del Estado no aparecen esas consignaciones correspondientes, aparecen las medidas de fomento necesarias para que la industria privada sea la que realice esa investigación correspondiente y no tenga que pagarse con el Presupuesto General del Estado.

En consecuencia, hacer simplemente una lista de las empresas multinacionales instaladas en España para demostrarnos que ellas tienen gran capacidad de tecnología, creo que no es precisamente lo más justo, porque, además, muchas de esas empresas no realizan aquí la investigación, son investigaciones realizadas fuera y lo que estamos haciendo aquí, por tanto, son pagos de derechos de propiedad industrial.

Se refieren los distintos señores enmendantes al tema del contenido de los planes de reconversión, y creo que sobre este tema conviene alguna puntualización, si bien es cierto que me da la sensación de que el señor Almunia ha desviado en alguna ocasión el debate presupuestario a la discusión que deberíamos tener con motivo de la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley de reconversión industrial.

Pero también lo entiendo, y me parece oportuno, porque la información que aparece en el propio epígrafe no es muy amplia y entiendo, como consecuencia, que esa información se solicite.

El contenido de los planes entiendo que afecta, al menos a cinco puntos distintos, y no solamente a un punto, que es al que se ha hecho referencia en el debate, que es al problema de los costes. No estamos efectuando una reconversión en la que lo que se aplique sea una disminución de costes de personal y una disminución de costes financieros. Estos son dos datos absolutamente necesarios pero no suficientes para realizar la operación de reconversión correspondiente y no de reestructuración de empresas y de expedientes de regulación de empleo. Aunque ellos sean unos datos paralelos al problema existen —y esta mañana el diputado señor Silva en su intervención creo que lo ha reiterado de una manera acertada— también otros factores en los expedientes correspondientes y en los planes de reconversión. Por una parte, la necesidad del reajuste de la dimensión empresarial; y esa dimensión empresarial se está reajustando en los distintos planes. Creo que el ejemplo clásico es el plan de la «línea blanca» de electrodomésticos, en la que se está promoviendo

la fusión y la unificación de las distintas empresas a fin de alcanzar unos niveles de producción suficientes que permitan utilizar los beneficios de la economía de escala para poder tener competencia en los mercados internacionales.

En tercer lugar, está un reajuste correspondiente de la producción y a ese tema se ha referido ampliamente el diputado señor Fernández Inguanzo, al tratar de la reconversión de la siderurgia integral. En este tema es absolutamente preciso recordar que nuestras industrias están insertas en una economía de mercado internacional y que no cabe, en absoluto, desligarse de los condicionantes generales de mercado que afectan a cada una de esas producciones.

En cuarto lugar, existe una componente importante de inversión, inversión que conlleva una reindustrialización o una generación de puestos de trabajo o una modificación sustancial de las capacidades de producción de las empresas, y esa inversión se está realizando en una cuantía muy importante, que no se hubiera realizado si no se hubieran puesto en marcha los distintos planes de reconversión.

La inversión afecta, en primer lugar, a la siderurgia integral —y esta mañana he hecho parcial referencia al tema—, con inversiones de 25.000 millones de pesetas para coladas continuas, y modificación de las distintas cadenas de producción de Endidesa, y de las dos empresas de Altos Hornos, y a ello seguirá una contratación por valor que se estima del orden de los 130.000 millones de pesetas de nuevas instalaciones siderúrgicas, porque no es que tengamos que dejar de producir siderurgia, sino que la tenemos que producir a la calidad, al precio y con los niveles de productividad y rentabilidad en las empresas que son necesarios.

En la industria textil recordaba esta mañana que la inversión es del orden de 190.000 millones de pesetas a lo largo de los siete años que dure el período de reconversión. En la industria de electrodomésticos, del orden de 11.500 millones de pesetas, aproximadamente, algo más de 13.000 millones para la empresa Hunosa, durante el período de tres años, y 4.500 en las industrias del cinc.

Finalmente, hay un contenido de componente tecnológico importante, con lo cual el tema del textil vuelve a ser un ejemplo sustancial, y es la primera vez en la historia industrial de España en la que se efectúa una importante inversión, no re-

cuerto en este momento la cifra, pero superior a 11.000 millones de pesetas en tecnología textil concreta, en moda, en diseño y en calidad. Creo que reconducir, simplemente, la discusión de los planes de reconversión industrial a la temática de la reducción de costes y de la reducción de personal es desconocer el contenido conjunto de los planes.

Y ¿cuál es, en consecuencia, el diseño industrial que nos sale de los mismos? El diseño que nos sale, es, en primer lugar, en los sectores energéticos, un incremento importante de su capacidad de sustitución del petróleo y un incremento importante de la inversión. En segundo lugar, en los sectores sometidos a reconversión, una modificación a través de este conjunto de medidas del contenido de su capacidad de producción actual. Y, en tercer lugar, parte el resto de los sectores, la aplicación de las medidas generales a que me refería esta mañana, de incentivos de la inversión por vía territorial o sectorial, ayudas a la pequeña y mediana industria, y política tecnológica.

Y entramos con esto en la pregunta que efectuaba el señor Almunia de cuáles son los sectores. Los leyó correctamente al leer la contestación que el señor subsecretario dio en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara de los Diputados. Los sectores que van a ser objeto de reconversión a lo largo del ejercicio de 1982, esperamos que sean (y digo esperamos que sean porque la política de concertación exige que se produzca esa negociación correspondiente a lo largo del ejercicio) el de aceros comunes, el sector naval, los componentes electrónicos, los bienes de equipo eléctricos, el cobre y la forja pesada por estampación.

También efectúa el señor Almunia otra pregunta correspondiente a si existe dinero suficiente para ello. Creo que tenía un error en las cifras que desde el escaño estaba tomando respecto a jubilaciones anticipadas e indemnizaciones y pagos correspondientes al personal, porque estaba leyendo cifras plurianuales de distintos sectores, cuando esas cifras aplicadas al ejercicio nos dan la cifra correspondiente de los 12.000 millones de pesetas para la aplicación correspondiente en el año 1982.

Finalmente, quiero referirme a un tema concreto que ha sido suscitado por el señor Fernández Inganzo en relación con Asturias. Ha dicho el señor Fernández Inganzo dos cosas: una, en esta última intervención, que se trata de una reestructuración industrial salvaje, término que me

parece poco aceptable para las centrales sindicales que están negociando todos estos pactos, y creo que la lectura, señor Fernández Inganzo, del contrato-programa de Hunosa y del plan de reconversión de Ensidesa, de la siderurgia integral, le serán sumamente provechosos para conocer cuál es la situación del personal y poder catalogar si el adjetivo «salvaje» es el más apropiado.

En segundo lugar, dice el señor Fernández Inganzo, que respecto de Asturias se está atentando a la solidaridad; y en su segunda intervención, el señor Tamames recoge el tema diciendo que a Ensidesa se la sacrifica en beneficio del resto de la siderurgia. También el señor Fernández Inganzo dice que a Ensidesa se la sacrifica —creo he tomado la frase literal— en favor de los intereses dominantes del capital privado, frase sumamente bella desde su óptica comunista, pero sumamente atentatoria a la verdad más mínima que se quiera guardar respecto a los pactos correspondientes, cuya lectura le aconsejo, porque ni por pesetas concedidas, ni por subvenciones efectuadas, ni por reparto de productos y de mercados puede hacerse una afirmación semejante.

En consecuencia, señores diputados, solicito, por todo este orden de razones, el voto contrario a las enmiendas que se han defendido. (*Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien! Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo rogaría al señor Ministro de Industria —y creo que es un ruego que no le va a molestar— que no vuelva a repetirme que no es serio algo que ha dicho un diputado, porque creo que es la mínima cortesía que todos debemos guardarnos, seamos diputados o no. Además, señor Ministro, creo que está mal que usted se enfade, y que se enfade a propósito de una palabra que parece que le ha sentado mal, que es «eutanasia». Comprendo que le siente mal, porque es casi, y la expresión es muy castiza, algo así como mentar la soga en casa del ahorcado. (*Risas.*)

Y es que ustedes no están haciendo reconversión industrial. A ver si nos enteramos de una vez. Usted ha hablado muy alto, con muchos decibelios, pero no nos ha dicho ni una sola alternativa de industrias nacientes para dar empleo a los

trabajadores, ni nos ha dicho usted un solo caso de tecnología que en estos últimos años se haya puesto en marcha. Fíjese usted qué sencillo para rebatirle todo lo que ha dicho hace un momento.

Pero es que hay más. Hay más porque en realidad usted ha hablado de la industria textil y de la reconversión de la industria textil. Usted sabe perfectamente que la reconversión de la industria textil es un viejo juego; usted sabe que ha habido casi decenas de planes de reconversión textil, que, precisamente por la falta de una Administración eficaz, los husos y las máquinas de tejer que se desmontaban en un sitio se ponían en otro, y que la capacidad no disminuía. Usted ha hablado de la industria textil en cuanto a su reconversión actual, y no ha dicho la esencial: que ahí hay 380.000 trabajadores y que la previsión es que vayan al paro 80.000!; usted lo sabe perfectamente, lo que pasa es que, naturalmente, se ha librado mucho de decirlo.

Lo que no hay es ningún plan para que en las comarcas de Cataluña donde está esa industria textil haya empleos alternativos para evitar que se conviertan, como ya están convirtiéndose algunas, en comarcas deprimidas. Una comarca o una superficie geográfica entra en una fase de depresión —eso lo saben muy bien los ingleses y los escoceses—, y se sabe cuando entra, pero lo que no se sabe es cuando va a salir.

Usted dice que esto hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo en que hay que hacer la reconversión industrial, pero la reconversión industrial con estrategias complementarias que ustedes no tienen. Además, habría que decirle a este Gobierno, aunque todavía hay muchos ministros o algunos por lo menos del año 1977, que esto se planteaba también en los Pactos de la Moncloa, y que, precisamente, si entraron toda una serie de ministros nuevos en 1978, en el mes de febrero, fue para acabar con lo mejor de los Pactos de la Moncloa y para retrasar una operación que ustedes están tratando de iniciar ahora y que lleva nada menos que cuatro años de retraso.

Eso es importante también en el balance que hay que hacer. Sobre todo, señor Ministro, no me intente dar usted lecciones de intendencia mercantil, porque todos sabemos perfectamente que no es lo mismo mantener la capacidad teórica en Alemania que en España, porque en Alemania tienen un consumo por habitante de hierro y acero mucho mayor que el nuestro y en la OCDE hay países que consumen 400 kilos de papel por

habitante y año, nosotros consumimos 80, y somos el país más subdesarrollado de Europa Occidental, exceptuando Portugal y Turquía en ese caso y en otros muchos otros casos. Entonces, un país que acepte las consecuencias de la madurez industrial de una asociación en la que está, como si nosotros estuviéramos ya en plena madurez (hay algunos indicadores de que estamos en ese camino, pero estamos tan lejanos de los consumos «per cápita» y de las posibilidades de desarrollo industrial), es aceptar la eutanasia, o por lo menos procedimientos mal estudiados en cuanto a capacidad industrial: eso lo sabe usted perfectamente, y por eso le molesta tanto.

En realidad, usted sabe también que las economías se manifiestan por el pulso de su demografía y que España todavía, comparativamente en Europa, tiene un pulso considerable, demográficamente hablando. Alemania Federal está disminuyendo su población, Dinamarca está disminuyendo su población, han llegado al crecimiento demográfico cero. Es hasta lógico, con niveles de renta de 14.000 dólares por habitante y año, que esos países estén entrando en una situación de ajuste; en países como el nuestro, que no llega a 5.000 dólares por habitante y año y todavía con una demografía por encima de 0,5 por ciento de crecimiento anual, no tienen derecho sus dirigentes a hablar en la forma en que hablan.

Además, señor Ministro, yo le traeré el recorte del «Financial Times», donde habla de la British Corporation, creo que tiene usted información atrasada, que sus servicios no funcionan bien, no le han dado la información de última hora, y desde luego, a pesar del plan de Avignon, la British Steel Corporation está creciendo su producción, está creciendo en sus exportaciones, está en una situación de franca recuperación, y es porque han encontrado un buen técnico y han hecho una serie de medidas y están planeando también algún tipo de desarrollo industrial en la zona. A mí no me duelen prendas, digo esto aunque sea la señora Thatcher la que está en Inglaterra, porque es más bien la excepción que la regla, para lamento de los propios ingleses.

Usted ha tenido que citar el caso de las empresas Casa y Aviocar. Dice que se están exportando unas decenas de aviones. A mí me parece estupendo leerlo en los periódicos y sé que se está haciendo el nuevo Aviocar para más pasajeros. A ver si finalmente Iberia se decide también a establecer líneas de tercer nivel con este tipo de avio-

nes, etcétera. Pero lo que usted no dice es que los camiones que fabricábamos con patentes españolas ya son de International Harvester, y que las motocicletas van a ser Yamaha y Honda, y que en automóviles, lo digo ya con mucha claridad, hoy en Seat no son capaces de hacer un prototipo, y si después de treinta años una industria no es capaz de hacer un prototipo, es que hay que jubilar anticipadamente a todos sus directivos, que llevan muchos años al frente de ella.

Señor Ministro, estamos haciendo una tesis doctoral en el departamento que yo dirijo en la Universidad sobre tecnología contratada y creo que va a ser muy ilustrativa sobre lo que está pasando en el campo de la tecnología. Los «royalties» por tecnología son ya más que las inversiones de capital en los últimos años, usted sabe eso también; sabe que las exportaciones de tecnología son menguadas, y eso significa que sí, que hay muchas palabras, muchas afirmaciones, mucha elevación del tono, muchas afirmaciones gratuitas, pero no hay la política industrial que España se merece. Si usted se enfada, lo siento. Háganlo mejor y estaremos todos contentos. (*Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores diputados, en pocas palabras, algunas observaciones a la intervención del señor Ministro de Industria.

En primer lugar, es evidente que no hace falta que el señor Ministro nos explique las diversas facetas que tiene un proceso de reconversión industrial, precisamente eso sería, en todo caso, desbordar el ámbito de un debate presupuestario. Estamos en un debate presupuestario y estamos analizando fundamentalmente la incidencia presupuestaria de las facetas de la reconversión industrial de los distintos planes sobre la sección treinta y cuatro. Algunas de las facetas que ha citado el señor Ministro estoy de acuerdo con él en que son inherentes a toda reconversión industrial y que no tienen repercusión presupuestaria. En todo caso, hay algunas que tienen una repercusión presupuestaria indirecta, y no precisamente en la sección treinta y cuatro, pero sí nos gustaría conocer, por lo menos, las estimaciones del Gobierno en cuanto a su coste como, por ejemplo, cuántos gastos fiscales originan las desgravacio-

nes previstas en el decreto-ley de reconversión industrial y que previsiblemente van a estar aplicándose en una lista de sectores que usted ha citado, sobre la cual ahora formularé alguna observación, durante el año 1982.

Yo, ahora me encuentro no sólo con dos listas del señor Aldama, sino con esas dos listas y con una tercera del señor Ministro de Industria y Energía distinta de las otras dos. Si mal no recuerdo, no ha citado el calzado. El señor Aldama ha hablado de otros sectores que sí se reconvertirían, pero sin incidencia presupuestaria, a lo largo de 1982, pero el señor Ministro no ha hecho ninguna mención a ello, etcétera. No coinciden ninguna de las tres listas, pero no es eso lo que más importa. Lo más importante es que seguimos sin recibir una explicación cabal del Gobierno, y ahí es donde se ve la falta de una política global, de por qué esos sectores que el señor Ministro ha citado, o que el señor Aldama mencionó en la prensa o citó en la Comisión de Presupuestos, se acogen al decreto-ley y por qué otros sectores que han presentado solicitudes de reconversión —que incluso el Gobierno en algún momento ha tenido en mente que pasasen por las ayudas públicas del decreto-ley— no van a pasar a lo largo del año 1982 por esas ayudas públicas y se quedan fuera. Eso denota, desde nuestro punto de vista, una falta de proyecto global y que probablemente ha ganado el que más presión haya hecho en un momento concreto en el Ministerio.

En cuanto a las jubilaciones, le confirmo, señor Ministro, que se refieren exclusivamente a los gastos correspondientes a 1982 y que las cifras no me las invento: proceden de un documento de la Administración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Inguanzo.

El señor FERNANDEZ INGUANZO: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, con toda la cordialidad, yo sostengo que las medidas de reestructuración a la búsqueda de competitividad no se pueden conseguir a costa de poner fuera de competitividad a una empresa como Ensidesa, que es la que menos pérdidas tiene por facturación de todo su sector, y eso es lo que se está haciendo con una serie de medidas en este momento. Y algo parecido —insisto—, aunque no de igual medida, está sucediendo con Altos Hornos

de Vizcaya e igualmente en Hunosa. También algo parecido se está produciendo en la empresa pública. Usted sabe que precisamente uno de los grilletes que tiene Hunosa es no poder alargar el proceso de producción, el problema de la térmica de riego, etcétera.

¿Quién se beneficia de esa política? Ese es el problema. La empresa pública, no; al contrario, la empresa pública se resiente.

Me cita usted el caso de Ensidesa. Esto está totalmente claro, señor Ministro, y usted lo sabe. Hemos discutido con usted este problema en Asturias cuando hablábamos del decreto, y usted ha recibido cartas y han discutido con usted los organismos regionales, el presidente del Consejo General, etcétera.

Le voy a poner el último ejemplo. ¿Cuánto se le asigna a Ensidesa de su producción para exportar, precisamente para competir en un mercado que tiene que vender casi a precio de «dumping»? El 40 por ciento de su producción. ¿Cuánto se les impone a empresas del sector privado? A una en concreto, el 16 por ciento.

Además, para más inri, en el gran acuerdo al que últimamente se ha llegado resulta que Ensidesa, por ejemplo, el galvanizado que no vende en el exterior pueden comprárselo en el interior pero a precios internacionales, es decir, prácticamente a precios «dumping» para luego comerciar los otros en el mercado interior. Si eso no es perjudicar a Ensidesa en favor del sector público, que venga Dios y lo vea, señor Ministro.

Pero, además, estamos asistiendo —insisto— a una Hunosa, por ejemplo, donde estamos viendo que los trabajadores y los sindicatos están demostrando una gran responsabilidad, que han elevado la producción por encima de la situación y, en cambio, se les están poniendo grilletes precisamente para que eso no se manifieste. Si hay alguna medida mayor que perjudique a la empresa pública, dígalo usted, señor Ministro, porque yo estoy totalmente desconcertado. Pero esto es así, lo tenemos escrito y lo podemos repasar mañana cuando quiera, señor Ministro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Señor Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, al señor Fernández Inguanzo yo le daré con mucho

gusto una explicación amplia y documental de la situación de los pactos de la siderurgia para que tenga conocimiento exacto de la misma. No son esas las cifras, pero me ha parecido extraño el que usted me critique al mismo tiempo que estamos sacando de competitividad a Ensidesa y también a Altos Hornos de Vizcaya. Yo creía que lo que S. S. me estaba criticando antes era que favorecíamos demasiado a Altos Hornos de Vizcaya en perjuicio de Ensidesa. Posiblemente haya sido un lapsus mío.

Hunosa no tiene ese problema, ni muchos menos. Hunosa está incrementando muy fuertemente su producción en estos años. Estamos pasando de una producción de 27 millones de toneladas de carbón a una producción de 35 millones para el año 1982. Creo que eso no es estar desperdiciando sus capacidades, ni tampoco las cifras que se están consignando para la empresa nos permiten hacer ese orden de afirmaciones.

El señor Almunia solicita tres aclaraciones o tres cifras concretas. En primer lugar, respecto de los sectores, la lista que yo he dado coincide exactamente con la lista que dio el subsecretario, y le remito a la página 2302, del «Boletín Oficial de las Cortes». Lo que ocurre es que, a continuación, el subsecretario se refirió también a actuaciones, no en la línea o en el canal del decreto-ley de reconversión, que se adoptan por otra serie de sectores, como, por ejemplo, el del calzado, al que he hecho referencia y al cual no hay que aplicarle el decreto-ley, sino otra serie de medidas de apoyo y reestructuración de orden tecnológico sin incluirlas, repito, en este canal concreto desde el punto de vista legislativo.

Los gastos fiscales son gastos de neutralización correspondientes de las operaciones que lleva consigo la reconversión industrial. Por ejemplo, el caso típico de la necesidad de efectuar las fusiones correspondientes, en que se produce la exención de impuestos que gravan ese tipo de fusión. En consecuencia, no existe una disminución para el Tesoro, sino que lo que existe es un no gravamen sobre las operaciones de reconversión.

Por lo que respecta a jubilaciones, mis cifras no coinciden exactamente con las suyas. El cálculo que tengo es que los cinco sectores en que llevamos aplicando el decreto de reconversión suman para el año próximo 8.000 millones de pesetas, quedándonos 4.000 millones de pesetas para la actuación en el resto de los sectores.

Respecto al señor Tamames —hablo bajo para

que sus oídos no sufran por mis decibelios—, cuando él comienza a dar cifras es cuando le fallan las cosas. Solamente se ha referido a tres cifras. Primero dice que en el plan textil se aplican decenas de planes. Señor Tamames, se han aplicado solamente cuatro: el de la seda, el de la lana, el del yute y el del algodón, y estos planes son los llamados «decretos de reestructuración de sectores», que vienen aplicándose desde el año 1967, el último de los cuales, el del algodón, fue prorrogado por un decreto del verano —de julio o agosto, creo recordar— de 1980.

En segundo lugar dice que en el sector textil trabajan 380.000 personas. Según mis datos son 412.000. En tercer lugar, que se perderán 80.000 puestos; 40.000 según nuestras estimaciones más negativas, los cuales se recuperan por la generación de puestos de trabajo en la industria de maquinaria textil, como consecuencia de la inversión de los 190.000 millones de pesetas a que anteriormente me he referido.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Se someten a votación las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista del Congreso y Comunista respecto de la sección treinta y cuatro.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 295 votos emitidos; 121 favorables; 169 negativos; cinco abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista del Congreso y Comunista respecto de la sección treinta y cuatro. *(El señor Fernández Inguanzo pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Fernández Inguanzo.

El señor FERNANDEZ INGUANZO: Simplemente quiero aclarar que cuando hablaba de la pérdida de competitividad me refería, obviamente, no a Altos Hornos de Vizcaya sino a Altos Hornos del Mediterráneo.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al presupuesto-resumen de la Seguridad Social, al que hay una enmienda del Grupo Parlamentaria Socialista del Congreso. Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores diputados, intervengo en la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista al presupuesto-resumen de la Seguridad Social, enmienda que pide la devolución al Gobierno del presupuesto-resumen de la Seguridad Social y, por tanto, pretende que el Gobierno vuelva a elaborarlo de acuerdo con otros criterios que, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la política de la Seguridad Social, serán objeto de exposición en mi intervención. *(El señor Vicepresidente, Gómez Llorente, ocupa la Presidencia.)*

De todas formas, antes de entrar en el análisis del presupuesto, me van a permitir SS. SS. que llame la atención sobre un hecho que me choca sobremanera: el silencio del responsable del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, que no ha subido, como esperábamos, supongo, más de un diputado en esta Cámara, a presentar o introducir en el debate un presupuesto de nada menos que de dos billones 330.000 millones de pesetas. He de decir que creo que se trata de una ausencia importante, no irrelevante, ya que el señor Ministro de Hacienda, el día en que intervino en la presentación complementaria que hizo respecto a la del señor Presidente, habló del Presupuesto del Estado y de los organismos autónomos, pero no habló del presupuesto de la Seguridad Social, salvo en lo relativo a las transferencias de aquél a éste.

Creo que, por otra parte, el señor Ministro ha quebrado una línea de conducta positiva desarrollada aquí el año pasado por su antecesor en el empleo, el señor Oliart, que nos explicó el presupuesto de la Seguridad Social y las líneas conductoras. No sé si alguien podrá valorar esto como un menosprecio a la Cámara, intentando que dos billones 330.000 millones pasen como el que no quiere la cosa, pero lo cierto es que, cuando menos, hay que dejar constancia en el tema. Le aseguro, señor Ministro —y puede buscarlo en el Libro Verde— que el señor Oliart intervino. Lo digo a efectos de ahorrarle el trámite de la localización de la intervención.

En todo caso, nos encontramos ante un presupuesto de una Seguridad Social que se halla sometida en España en estos momentos a una dialéctica. De una parte, el bajo ritmo de crecimiento del producto interior bruto y la crisis de las empresas; de otra, la necesidad de aumentar las transferencias a familias para hacer frente a los

efectos de la crisis. En alguna medida, esta dialéctica da lugar a distintas hipótesis de salida de lo que creo podemos llamar claramente la crisis de la Seguridad Social, aunque hay quien habla con palabras más contundentes, al situar a la Seguridad Social en la UVI, en palabra más o menos connotada con algunas de las prestaciones que desarrolla.

Lo cierto es que hay dos salidas: una, la que podríamos definir como dejar que las cosas vayan como todos los años (y me van a oír ustedes hablar de lo de todos los años, porque esto va como todos los años, con el inconveniente de que han pasado más años y, consecuentemente, va peor); otra salida, la que pasa por una reforma de la Seguridad Social, una reforma cuyo desarrollo no precisa del ANE. Es una reforma de la gestión en su sentido inmediato, cotidiano, diario. Y, por supuesto, pasa por el desarrollo de una línea de lucha contra las desigualdades a través de los instrumentos redistributivos que la Seguridad Social comporta.

El señor Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura y en el capítulo de política económica, hablaba —y él nos lo recordaba el otro día— de seis temas que habrían de fijar la atención del Gobierno. Refiriéndose, uno de ellos, el segundo, que era la articulación de decisiones eficaces para crear puestos de trabajo duraderos, nos decía el señor Presidente del Gobierno, entre las medidas a través de las cuales se pretendía articular esa política eficaz de empleo duradero, que se corregirían las peculiaridades del sistema de financiación de la Seguridad Social en tanto en cuanto —y estamos todos de acuerdo— ese sistema es una causa determinante del incremento del desempleo. Dicho en pocas palabras, el señor Presidente del Gobierno prometía en aquella ocasión reducir los costes de la Seguridad Social y cabría por tanto preguntarse qué ha hecho el Gobierno desde entonces y engranar esta reflexión con la parte relativa a ingresos a través de la financiación y otras vías en el capítulo de ingresos del Presupuesto para 1982.

Creo que el Gobierno ha hecho lo que el ANE dice, pero el ANE tiene padres y, por tanto, no hay que atribuirlo en exclusiva al Gobierno. Pero la pregunta es si el Gobierno ha hecho algo que no estuviera en el ANE, algo más que no necesitaba el ANE para ser llevado adelante y, por tanto, no es la reforma anunciada por éste a través de lo allí convenido por el Gobierno, la patronal y

las organizaciones sindicales. Yo diría que no, que el Gobierno no ha hecho básicamente nada, al menos perceptible, y estamos dispuestos a que se nos explique y a percibir, si es posible, qué es lo que por otra parte se puede haber hecho por el Gobierno. Pero, sobre todo, el Gobierno no ha hecho nada por terminar con una situación que es la que constituye en estos momentos los pies de barro de la Seguridad Social: el control del gasto.

El Gobierno no está gobernando la Seguridad Social; la Seguridad Social está al borde del caos. Y no es demagogia; haré referencias concretas, contestando así a la demanda del señor Presidente del Gobierno en su intervención inicial en este debate, a casos determinados en los que se explicita y se pone de relieve cómo hay una política de abandonismo que pone en última instancia a la Seguridad Social al borde del caos. Y no está la Seguridad Social en esa situación por falta de hombres con voluntad de cambio. Creo que el nombre del profesor Barea, en alguna medida ya inscrito sucesivas veces en el «Diario de Sesiones» como expresión de la queja de lo que comportó su cese, pone de relieve dos cosas fundamentales.

La primera es que cuando desde el Gobierno se intenta terminar con el caos de la Seguridad Social, especialmente el gasto indebido en las prestaciones en especie o en las económicas que no tienen acreedor previsto, como es el caso de las pensiones, el partido principal de la oposición apoya al Gobierno y, consecuentemente, asume la responsabilidad de, cuando hay una gestión eficaz, decir que es eficaz y apoyarla consecuentemente.

Pero, en segundo lugar, queremos que se tenga conciencia de que, o se pone al día por parte del Gobierno una política de gestión que no se limite a las grandes palabras y que no se limite, en última instancia, a las actuaciones más o menos grandilocuentes desde esta tribuna, o el Gobierno pondrá de relieve ante los empresarios y ante los trabajadores lo que ya prácticamente conoce todo el país: que la Seguridad Social va camino —la palabra ya está aquí, cómo no— de la reprivatización, porque no puedo decir cosa distinta de años anteriores puesto que el proceso es el mismo y, como decía anteriormente, acumulado.

En última instancia, aquí de lo que se trata es de elegir entre salir de la crisis salvando el sistema público de la Seguridad Social o, permítanme us-

tedes la expresión, cargándose el sistema público de la Seguridad Social. Hay pruebas de que esta línea, la última, la de terminar con el sistema público, es la línea elegida por el Gobierno y a ella voy a aludir seguidamente para que no se quede en la posibilidad de una afirmación que sea susceptible de ser calificada como demagógica.

Creo que estamos a punto de llegar a certificar un día la existencia de un cadáver llamado Seguridad Social, que lógicamente están esperando recibir, en la medida en que desprotege a los ciudadanos, personas que con soporte en normas legales, algunas de ellas coladas en esta Cámara de rondón, con la oportuna discreción que brinda el no haberse elaborado una Ley General de Seguridad Social, dan, insisto, prueba evidente de que no hablamos de reprivatización por el gusto de hacerlo ni por una manía, aunque honradamente creamos en ella, sino simplemente porque son ustedes los que nos dan pruebas de tal reprivatización.

Por tanto, nosotros creemos que no cabe afirmar, como hizo el señor Presidente del Gobierno, que éste —el Gobierno— ha cumplido puntualmente sus compromisos de investidura en lo relativo a la Seguridad Social. El Gobierno ha reducido los tipos de cotización; evidente. Los va a reducir. El Gobierno, sin embargo, tolera el gasto desbordado, tolera la connivencia del deterioro de los ingresos de la Seguridad Social con una inmoderación descontrolada en los gastos, de tal suerte que, si me lo permiten, diría que desde el Gobierno no se sabe dirigir la Seguridad Social y, parafraseando, al menos en el espíritu, una frase anteriormente dicha por el señor Tamames, permítanme decir que el mercado de ejecutivos podría tener en paro a algunos que están actualmente gestionando entidades gestoras de la Seguridad Social.

En el terreno de la financiación, en el terreno de los ingresos, creo que se hace preciso hacer algunas referencias.

Siguen ustedes cometiendo el error, o siguen ustedes infravalorando voluntariamente —elijan la fórmula—, los ingresos por vía de cotizaciones. 50.000 millones es la estimación que realizamos para el año 1981. Quiero señalar, y se hablaba de ello el otro día haciendo referencia a la aportación del Estado a la Seguridad Social, que no se puede afirmar que ésta sea en sí misma redistributiva, puesto que la redistribución va a depender del contenido y destino de los fondos que se

transfieren a la Seguridad Social. En una palabra, una transferencia del Estado a la Seguridad Social malgastada en una transferencia, pero no realiza un proceso de distribución, como tampoco lo realiza, en última instancia, el hecho de que más que el importe de las transferencias del Estado a la Seguridad Social es el de las del Régimen General de la Seguridad Social al Régimen Agrario, que no debiera recaer sobre el Régimen General, sino, lógicamente, sobre una financiación estatal afectada, dada la situación deficitaria.

En ingresos, ustedes siguen hablando de cotizantes, es decir, hacen lo contrario que cualquier empresa, que factura por los servicios en función de los clientes, los cobre o no; otra cosa es que haya fallidos ulteriormente. Ustedes reflejan en su contabilización los cotizantes, no los afiliados. He de señalar a este propósito que se trata de un proceso repetitivo, insisto, año tras año. Pero dada la brevedad del trámite —porque sólo dispongo de un cuarto de hora para hacer una exposición que necesariamente es amplia—, tendré que decir que siguen ustedes manejando este año datos falsos: 50.000 millones. Pero, además, hay que afirmar otra cosa. Como han visto que seguíamos la pista año tras año a los presupuestos y habíamos introducido un modelo matemático para estudiar el desarrollo de los mismos, este año nos han negado, a través de la técnica de la elaboración del presupuesto, la posibilidad de seguir la metodología de años anteriores. Ya no nos dan las cifras previsibles de cierre, no son capaces de decirla, o al menos la han omitido en el presupuesto.

He de señalar que, respecto del Presupuesto de 1980, nos están dando la cifra presupuestada, cuando ustedes, y nosotros también, tenemos la cifra realizada, y concretamente hay que poner de relieve que en el año 1980 hubo 57.000 millones de infravaloración de los ingresos, según datos contenidos en las cuentas de la Seguridad Social, en el librito rojo recientemente distribuido. Quiero señalar, en última instancia, que este proceso de infravaloración de cuotas tiene una finalidad clara, que es la de reducir determinadas prestaciones. La historia es evidente: se eleva el «ticket» moderador de la farmacia como se hizo en su momento, o se reduce la protección de la incapacidad laboral transitoria o se reducen las inversiones, pero también, formalmente, bajo el pretexto de un reducido ingreso por cotizaciones, se reducen los conciertos, se reduce la farmacia, se redu-

cen otras cifras que, posteriormente, sí van a ser rebasadas por la realización, de tal suerte, insisto, que esa infravaloración sirve para frenar pensiones, para frenar prestaciones económicas, pero no sirve para frenar los conciertos con el sector privado, que siempre se disparan respecto de la cifra presupuestada, y tampoco sirve para frenar el gasto farmacéutico, que siempre se dispara respecto de la cifra presupuestada; desde luego, sirven para no aumentar las inversiones y, consecuentemente, desviar los incrementos de la demanda sanitaria fundamentalmente a la iniciativa privada.

No puedo entrar en detalles, pero quiero señalar, en esta misma línea de los ingresos, algo que me parece especialmente importante y a cuyos efectos tomo datos facilitados por el secretario de Estado de la Seguridad Social a la Comisión. Teniendo en cuenta el pendiente no cobrado por la Seguridad Social y materializado en certificaciones de descubierto, en base al año 1970 y con índice 100, se sitúa en 1977 en el índice 705. Pues bien, desde 1977, en que el partido de UCD está gobernando, el índice 705 sube, al 30 de junio de 1981, al índice 4.775. Me parece que esto es un dato importante, porque en última instancia es la contrapartida de los ingresos, lo que no se ingresa, y está poniendo de relieve, por supuesto, una situación de crisis y de dificultades económicas, pero también habría que poner de relieve que la tesorería no factura adecuadamente. Y entre esos organismos que adeudan importantes sumas están los propios Ministerios, la propia Administración del Estado.

Otro tema al que ya se aludía el otro día aquí es la cuota que el Estado debe pagar a la Seguridad Social, al Instituto Nacional de Empleo, como consecuencia de aquellos trabajadores que perciben desempleo y cuyas cotizaciones corresponde a éste. ¿Dónde están contabilizadas esas cuotas? Nosotros, de momento, no las encontramos.

Quiero señalar, por otra parte, señor Presidente, señoras y señores diputados, que se producen asimismo importantes anomalías en otras partidas de ingresos. Todas ellas, la ya citada de la infravaloración de los ingresos, el pendiente progresivo con índices tan escandalosos como los señalados y la que seguidamente voy a señalar son ejemplos claros de una política de no recuperación de ingresos que hipoteca la acción protectora de la Seguridad Social. Así, como ejemplo, me voy a referir a los servicios facturados por las ins-

tituciones sanitarias a clientes privados. En este sentido hay que señalar cómo han subido desde 1979 a 1981 en 5.414 millones de pesetas, siendo el punto de partida 4.656; es decir, se ha más que duplicado en dos años. Concretamente, en el año 1981, cada día del año dio lugar a que no se cobraran, no a que se cobraran, a que no se cobraran, 50 millones de pesetas, cifra posiblemente importante cuando se están negando algunas cuestiones en pensiones o cuando se reducen prestaciones.

Pero si se molesta el señor Ministro, o quien quiera, en leer las cifras que nos han sido facilitadas en Comisión y ver el desglose de la actual partida de deudas por servicios sanitarios prestados, observarán ustedes cómo hay una distribución provincial que revela de entrada, por densidad de población y características de la misma, aspectos tan curiosos como que Valencia y Sevilla se mueven en cifras de 164 y 144 millones de pesetas pendientes y que provincias más modestas económicamente, o con población más reducida, como Alicante, se mueve en 249 millones; La Coruña, en 249; Huelva, en 382; Murcia en 318; Santander, 418. En una palabra, suponen que hay una distribución irracional que revela una mala gestión provincial o regional, según las circunstancias, en torno a la percepción de este ingreso, y aquí hay que arañar la última peseta cuando se ha prestado un servicio y no cabe dejarla en el olvido, ni tan siquiera en la inercia de una gestión.

No puedo entrar en detalles de otras fórmulas que dificultan o minimizan los ingresos. Hay toda una batería de fórmulas de fraude a la Seguridad Social, como el hecho de que haya empresas que descuentan a sus trabajadores e ingresan menos; como que, en definitiva, se produzca un proceso de altas y bajas en las que se procura tener cubierto al casado, pero no al soltero; como que se puedan adelantar bajas o como que haya trabajadores en activo cuya situación de reingreso al alta se demore por el hecho de la existencia de unos partes de enfermedad más o menos graciosamente mantenidos.

Lo único que quiero resaltar es que ahí hay mucho que resolver en la picaresca del fraude y, por tanto, se están poniendo en crisis los ingresos. Y como el tema no es nuevo y el tema fue objeto, en su día, de la preocupación del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, yo me permitiría preguntar a quien corresponda, al señor Ministro o a quien intervenga, qué fue de la ope-

ración especial montada en tiempos del señor Barea para incrementar la recaudación.

Quiero señalar a este propósito otra serie de cosas, y es que, si bien es cierto que el señor Presidente del Gobierno nos hablaba de la reforma de la Seguridad Social, nos decía claramente cómo por parte del Gobierno, de las centrales sindicales y de la patronal había un acuerdo de reforma en el área, pero no es menos cierto, y hay que señalarlo aquí claramente, que el llamado Libro Rojo publicado por el Instituto de Estudios de Sanidad y de la Seguridad Social ha sido no aceptado en su inspiración de los tres niveles, el básico, el profesional y el complementario, este último libre, por las autoridades del Ministerio, que, sin embargo, nos van a ofrecer, posiblemente después de las elecciones —nunca antes porque sería peligroso para éstas— una reprivatización sobre las bases de dos niveles: el básico, con prestaciones reducidas, y el complementario, para cubrir con cotizaciones lo que hoy está cubierto por la Seguridad Social, si bien, gestionado, insisto, por la iniciativa privada.

En última instancia quiero señalar que también el señor Presidente del Gobierno, cuando en su discurso el otro día hablaba de estos temas, nos señalaba que había que contar, para la reforma de la Administración y para la disminución de los costes de trabajo, con la comprensión social. Evidentemente, comprensión hay que tenerla, pero fundamentalmente lo que hay que tener es solidaridad y, de momento, lo único que hay son reducciones en el tipo —va a haberlas—, reducciones en las prestaciones. Por tanto, lo que no cabe pedir, puesto que el señor Presidente del Gobierno solicitaba fórmulas no impuestas, sino acordadas, es que los trabajadores se aprieten el cinturón en tanto subsisten situaciones de mala gestión, como las descritas en los ingresos, ya que resulta difícilmente exigible que se les incorpore a una política de austeridad voluntariamente cuando hay una política de descontrol y despilfarro en el gasto y también, fundamentalmente, de no adecuado control de los ingresos.

Hemos de hablar, por supuesto, en esta intervención inicial, en líneas generales, por la razón antes señalada del tiempo, de la situación de las prestaciones. Vamos a hablar de las prestaciones económicas y, lógicamente, teniendo en cuenta la significación que para las pensiones comporta el ANE y, para las pensiones como prestaciones, podríamos decir, rígidas, en la medida en que es-

tán comprometidas, es evidente que tampoco resulta, ni siquiera respecto de ellas, adecuado hablar de que se está produciendo una redistribución con cargo al sector público, porque se trata de una redistribución interna de las cotizaciones de los propios trabajadores, que es la expresión de la solidaridad entre los activos presentes y los pasivos pasados. Por tanto, hemos de centrarnos fundamentalmente en aquellas prestaciones económicas sobre las que cabe una acción política de flexibilidad. Esto es, la incapacidad laboral transitoria, la invalidez provisional y, fundamentalmente, sobre la asistencia sanitaria, auténtico pivote, o auténtico elemento sobre el que ha de pivotar la línea de control adecuado del gasto.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Señor De Vicente, procure ir concluyendo su discurso.

El señor DE VICENTE MARTIN: Así lo hago seguidamente, señor Presidente.

Quiero señalar a este propósito que cuando por el Presidente del Gobierno, en la sesión inaugural de este debate, se nos preguntaba qué se debía disminuir, si los subsidios de desempleo o las pensiones, nosotros contestamos diciendo que lo que hay que disminuir es el gasto inútil, que lo hay y mucho; que hay que disminuir la farmacia, que hay que disminuir los conciertos y que han de aumentarse las inversiones. Quiero señalar a este propósito, que en materia de incapacidad laboral transitoria se ha puesto de relieve, según nos dice por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, que ya no se produce un aumento de morbilidad y, consecuentemente, el absentismo ya no se justifica como causa determinante de una política restrictiva. Nos gustaría saber por qué, sin embargo, se mantiene la desprotección correspondiente.

Por otra parte, quiero señalar que hay una materia importante en el terreno de la invalidez, y es la existencia de importantes retrasos como consecuencia de las medidas positivas —y lo decimos claramente— adoptadas por el Ministro para no dar lugar a doble prestación de percepción, pero que, en última instancia, no han sido los problemas resueltos por inacción de los funcionarios.

También sería importante aludir —y es breve y hay que hacerlo— al tema de la asistencia sanitaria. En este tema de la asistencia sanitaria tenemos que decir que la privatización se pone funda-

mentalmente de relieve a través de la farmacia, y hay un importante error en las cifras, y hay que señalarlo —y si hay ocasión tendremos oportunidad de demostrarlo en este debate—, a través de un crecimiento de los conciertos, especialmente de los conciertos con la sanidad privada y a través de otras actuaciones que, en última instancia, se ponen de relieve con el incumplimiento de los propios programas de objetivos marcados por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social para el presente año.

He intentado señalar que la política de contracción del gasto es una política injustificada en la medida que se refiere a contraer prestaciones económicas como las pensiones o como cualquier otra protección, y que lo que no se puede utilizar es el fácil expediente de limitar la cuantía de una prestación económica, renunciando a determinar una política sobre el agente causal de esta prestación, sea la baja por enfermedad o cualquier otra que pueda ocurrir. Pero decía anteriormente, y lo digo claramente, que esta situación de disminución en la valoración de los ingresos o de incapacidad y la recaudación lleva a una línea de reprivatización y sin perjuicio de ampliar lo que haga falta lo dicho en ulterior trámite, quiero señalar a esta Cámara que mientras se estaba negociando el ANE, llegaba una ley, la Ley de Ordenación y Fomento del Seguro Privado, cuyo artículo 1.º excluye de la ley los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social obligatoria siempre que se gestionen por entidades no sometidas a esta ley. Observen ustedes de qué forma tan fina nos están admitiendo tal posibilidad que, finalmente, en la Disposición final, queda explicitado cuando se dice que las entidades sometidas a la presente ley que realicen operaciones dentro de la acción protectora de la Seguridad Social deberán llevar contabilidad separada de las ofertaciones mercantiles con las de la Seguridad Social. Aquí ya se dice claramente, sin que a esta Cámara haya llegado la Ley general de la Seguridad Social, que las entidades privadas mercantiles sometidas a esta Ley de Ordenación y Fomento del Seguro Privado pueden realizar operaciones en la Seguridad Social.

Por tanto, insisto, infravaloración en los ingresos, descontrol en el gasto sanitario y reducción de las prestaciones económicas.

Finalizo diciendo que todo ello genera un presupuesto con desigualdades personales, con desigualdades territoriales, con un presupuesto fun-

damentalmente insolidario, un presupuesto en el que coexisten la austeridad en lo fácil de controlar por el Ministerio, aquello en lo que la relación ciudadano-Ministerio es de supremacía por parte de éste, habida cuenta de que el ciudadano o cobra o no cobra, y cobra lo que le dan, y un despilfarro en aquello que por no tener acreedor individual y moverse en el terreno de las prestaciones en especie es algo a lo que el Gobierno no ha decidido poner fin.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Enmienda número 687, del Grupo Parlamentario Comunista. Al objeto de su defensa, tiene la palabra don Emérito Bono.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Señor Presidente, señorías, una vez más, un año más, el Grupo Parlamentario Comunista presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Seguridad Social.

Esta enmienda a la totalidad, este año tiene un objetivo más concreto —aunque después nos referiremos a otros aspectos—, y es el vinculado al problema del Instituto Social de la Marina, así como también al criterio que, desde nuestro grupo debía de tener en los Presupuestos para el año 1982; el paro en nuestro país. En relación a este tema haremos algunas consideraciones del porqué el tipo de Seguridad Social que hoy tenemos penaliza el empleo y, por tanto, constituye un auténtico obstáculo al desarrollo precisamente de la capacidad de mayor empleo por parte de nuestra economía, por parte de las empresas, etcétera.

Es obvio lo que ha dicho mi predecesor en el uso de la palabra. Nuestro grupo comparte en gran medida todos estos problemas que ha planteado, problemas vinculados al control del gasto de la Seguridad Social, a la privatización de la Seguridad Social, a las transferencias del Estado a la Seguridad Social para la financiación de la misma, que no es un mecanismo redistribuidor por sí mismo, sino en función de su contenido, así como al problema de las prestaciones y los ingresos.

El Grupo Parlamentario Comunista el año pasado hizo una intervención larga sobre estas cuestiones —nos remitimos a ellas—, así como también en gran medida estamos de acuerdo con las propias precisiones que el señor De Vicente ha hecho respecto al tema.

La existencia hasta ahora del Instituto Social de la Marina está justificada por la Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 36/78. El real decreto-ley, como saben SS. SS., ha sido el mecanismo normal, a golpe de decretos-leyes, de ir de alguna forma reajustando nuestro sistema de Seguridad Social. Hoy, por suerte, con el ANE ya se han creado otros mecanismos que esperemos funcionen rápidamente para dar un tipo de salida nueva a este tema tan espinoso.

Pues bien, en ese real decreto-ley, en el artículo 1.º se habla (en función de lo que se dice al principio, en la motivación de este real decreto-ley, de la necesidad de ir a la simplificación al máximo de las entidades gestoras de la Seguridad Social, a la racionalización en sus funciones, etcétera, de las entidades gestoras de la Seguridad Social con sujeción al principio de solidaridad financiera y unidad de caja, y se cita a continuación el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión y administración de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social. En el Instituto Nacional de la Seguridad Social se integrarán las mutualidades y demás entidades gestoras de estructuras mutualistas. Y cita, entre otras, las del mar y, dentro de ellas, su entidad gestora, que es el Instituto Social de la Marina.

Si bien aquí hay un mandato por parte de la ley de que hay que ir a integrar el Instituto Social de la Marina dentro del INSS, dentro de todo el sistema de la Seguridad Social, para, de alguna forma, llevar a cabo ese precepto de racionalización de unidad de caja y prestación de servicios realizados a través de un único organismo; si bien en éste el motivo fundamental de este real decreto-ley, sin embargo, se contempla en un apartado «a posteriori» —concretamente en la Disposición adicional tercera— que el Instituto Social de la Marina, sin perjuicio de la reestructuración que acuerde el Gobierno para acomodar su organización y funciones a las nuevas entidades de gestión de la Seguridad Social, cumplirá las funciones y servicios que actualmente tiene encomendados.

Pues bien, el hecho es que, a juicio de nuestro grupo, este Instituto en este momento debía de estar integrado precisamente dentro de la Seguridad Social. Coherente con lo anteriormente apuntado, nuestro grupo piensa que las prestaciones económicas del Régimen Especial del Mar, que corresponden a las prestaciones de pensiones, incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional, protección a la familia y otras presta-

ciones, deberán incluirse en los presupuestos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En segundo lugar, la red sanitaria que el Instituto Social de la Marina posee en el territorio nacional se integrará en el Insalud y sus presupuestos pasarán a integrarse en los del Insalud.

En tercer lugar, las funciones de los servicios de asistencia a pensionistas, rehabilitación y recuperación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales que dependen del Instituto Social de la Marina, así como sus correspondientes presupuestos, se integrarán en el Insero y su dotación presupuestaria.

En cuarto lugar, las funciones que tiene asignadas el Instituto Social de la Marina que no se correspondan con prestaciones o servicios de estos tres institutos, sean o no de la Seguridad Social, se mantendrán en el presupuesto de dicho Instituto para poder desarrollarlas adecuadamente.

Es evidente que esto es lo que nosotros pretendemos con esta enmienda en esta dirección. El tema fundamental, a nuestro juicio, es un hecho un tanto insólito, y es que mientras el Real Decreto-ley de 1978 intenta racionalizar la Seguridad Social, ahora ya, acordado el ANE, aparece un Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, donde de alguna forma en vez de incorporar este Instituto a la Seguridad Social lo que se hace es todavía consagrar la viabilidad, la marcha del mismo, la independencia del mismo con respecto a la Seguridad Social. Todo eso se hace al margen de la negociación, de la discusión entre los propios sindicatos, lo que, en definitiva, prevé el ANE.

En este sentido nosotros creemos que es una falta grave que por medio de reales decretos ya de alguna forma se hurte la posibilidad de que sea precisamente esta Comisión cuatripartita la que pueda decidir lo que hay que hacer con el Instituto Social de la Marina que, a nuestro juicio, a juicio de Comisiones Obreras y a juicio también de UGT se tienen que incorporar ya directamente el INSS, al Insalud, al Insero, todos estos Institutos que de alguna forma desarrollan la actividad de prestación de servicios de la Seguridad Social.

Es evidente que no solamente es éste el motivo de nuestra enmienda a la totalidad. Nos preocupan también otras cosas; nos preocupa el problema de la financiación de la Seguridad Social y nos preocupa que la financiación de la Seguridad Social no sea un obstáculo precisamente para la creación de empleo, que no penalice la creación

de puestos de trabajo como en este momento pasa.

Ya sé que éste no es un problema fácil, que éste no es un problema sencillo de resolver, pero, a nuestro juicio, no se han dado todos los pasos necesarios en esa dirección. Desde luego, esa Comisión cuatripartita cuando abarque el tema o intente de alguna forma desarrollar los criterios a través de los cuales se tiene que inspirar esa reforma o esa ley básica de la Seguridad Social, tendrá que contar, a nuestro juicio, con una serie de elementos que a continuación voy de alguna forma a explicar.

Nos preocupa, repito, cómo se va a financiar el aumento de las pensiones, la multiplicación de los gastos de asistencia sanitaria y subsidio de desempleo —este último, obviamente, está separado de la Seguridad Social— en los próximos cinco años.

Según estudio reciente, las pensiones crecerán en los próximos cinco años, por un incremento neto de pensionistas y por el aumento de la pensión media anual calculada sobre las pensiones existentes en el año anterior, en porcentajes anuales próximos al 0,4 por ciento del producto interior bruto.

Los gastos de asistencia sanitaria caminan a un ritmo creciente anual situado alrededor del 0,15 por ciento del producto interior bruto, y el subsidio de paro marcha en los últimos ejercicios a tasas anuales del orden de 0,4 puntos de participación en el PIB. Dicho en otros términos, las tres partidas fundamentales de gastos de la Seguridad Social han alcanzado una aceleración tal que atenderlas demandará dedicar cada año el 1 por ciento del producto interior bruto a sus principales partidas.

Aquí se ha dicho que no vamos a crecer en esos términos, pero se supone que la economía española crece en la línea de los últimos ejercicios, 1971-1981, ello significaría que casi el aumento total de la producción de cada ejercicio deberá dedicarse plenamente a atender las tres partidas fundamentales de la Seguridad Social.

Como ha puesto en evidencia en un reciente artículo José Barea, antiguo subsecretario de la Seguridad Social, la caída espectacular en la relación cotizante y suma de pensionistas y desempleados, se pone de relieve por el hecho de que dicha relación estaba situada en el año 1974 en 3,17 y se ha colocado en 1981 en 1,9, lo que significa que cada dos personas en activo que cotizan

en la Seguridad Social sostienen a un pensionista o un parado, mientras en el año 1974 eran tres cotizantes.

Estos datos, aunque sumarios, ponen de manifiesto la necesidad urgentísima de ir a una remodelación global de la Seguridad Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de financiación de la misma, punto este último vinculado a la política de empleo, dado que el sistema de cotizaciones supone más del 80 por ciento del total de ingresos de la Seguridad Social, configurándose en la práctica dicho sistema como un impuesto sobre las nóminas que incide especialmente en la asignación de los recursos capital-trabajo, desincentivando la creación de empleo.

Para tener una idea de cómo ha aumentado en los últimos años esta línea de financiación, basta recordar que mientras las cotizaciones se han multiplicado por diez en la última década, los impuestos lo hacían por seis. Ese crecimiento espectacular de estos ingresos se ha traducido en que el tipo efectivo sobre los sueldos y salarios, según los datos de contabilidad nacional, ha pasado aproximadamente del 16 por ciento en 1970 al 28 por ciento en 1980. Es evidente que este aumento en la presión fiscal sobre los salarios ha tenido unos efectos negativos sobre la generación de empleo, al encarecer notablemente éste.

Por otro lado, si de alguna forma hablamos en serio, claramente, de que hay que integrarnos en la Comunidad Económica Europea, es evidente que tenemos que ver cómo está organizada dentro de la Comunidad Económica Europea la financiación de la Seguridad Social, y haciendo una breve semblanza, podríamos decir que un peso excesivo dentro de las cotizaciones de las aportaciones de los empresarios, mientras en España suponen dos tercios del total, en la Comunidad Económica Europea sólo alcanzan un tercio del total.

Las aportaciones de los trabajadores en España, de un sexto del total, son equivalentes a la media europea. En esto somos exactamente lo mismo.

La aportación del Estado es baja en España, está hoy alrededor del 15 por ciento, para los Presupuestos de 1982, cuando la media europea supone un tercio del total.

También, evidentemente, en este punto es necesario situar el sistema de financiación de la Seguridad Social a la hora europea.

Es más, los estudiosos de este problema de la fi-

nanciación de la Seguridad Social española están de acuerdo en general en admitir que como consecuencia del sistema de bases y topes, la carga está desigualmetne repartida, tanto entre empresas como entre trabajadores, lo que provoca que el tipo nominal sea más elevado que el efectivo. Mientras aquél rondaba en el 34 por ciento (ahora, 1982, será alrededor del 31 por ciento), éste no supera el 30 por ciento, concretamente el 29,4 por ciento para el año 1979 y el 30,7 por ciento en 1980. Esta presión media encubre situaciones muy dispares para sectores y empresas. Así, en los sectores las diferencias se sitúan en seis puntos por encima y debajo de la media, mientras para las empresas el intervalo puede ampliarse hasta quince puntos.

La causa de esa importante diferencia entre presión efectiva y nominal surge al tratar de implantar una red cuadrículada con doce categorías —de las cuales siete están igualadas al salario mínimo— profesional y limitada por una base máxima y mínima. Esta red sólo de alguna forma recoge parcialmente a los salarios reales y por los agujeros reales de esa propia red se escapan la mayoría de ellas.

Sin embargo, la realidad nos muestra que la dispersión actual de categorías es difícil de reflejar en sólo doce, las cuales, por cierto, tal como se ha dicho aquí reiteradamente, unas veces comprende niveles de estudios y otras veces categorías administrativas. El abanico entre la base mínima y máxima dentro de cada una de ellas es reducido —2,2—, así como el abanico intercategorial, por ejemplo, peón/licenciado es de 2. En ambos casos los abanicos son muy inferiores a los de los salarios reales existentes en las empresas.

Por otro lado, aunque podría ser justificable un tope mínimo, a pesar de que hay ciertas dificultades y, en definitiva, algunas implicaciones, sobre todo en relación al problema de los contratos a tiempo parcial, en ningún caso lo sería un tope máximo, que es discutido en casi todos los países donde existe por sus efectos absolutamente negativos.

Estos podrían resumirse en dos fundamentalmente. El primero es que perjudica más a los trabajadores de categorías inferiores, ya que los salarios reales, tal como se ha demostrado empíricamente, están más lejanos a las bases máximas en las categorías superiores. El segundo es que aquellas empresas que tengan salarios altos para todas

las categorías, o tengan un predominio de categorías superiores saldrán claramente beneficiadas.

El resultado, como es obvio, es que el impuesto sobre las nóminas no es neutral ni equitativo, tanto para las empresas como para los trabajadores, provocando, para aquellas empresas más perjudicadas, efectos sobre la competitividad y la productividad.

Por tanto, el actual sistema favorece a las empresas con salarios altos, incrementos salariales elevados, repartos lineales, mayor número de pagas y trabajadores pluriempleados.

En relación a esta última situación, el Gobierno ha urdido dos repuestas: que las presiones nominales y efectivas puedan coincidir y que el aumento de la participación del Estado sea muy elevada para reducir la presión de las cotizaciones sobre los salarios.

Para hacer frente a ello, el Gobierno adquirió sendos compromisos en el Libro Blanco —1977—, Pactos de la Moncloa —1977— y el Programa Económico del Gobierno —PEG 1979—. Del examen de los compromisos en relación a la Seguridad Social se puede colegir su casi total incumplimiento.

Para hablar de esa línea de total incumplimiento me falta tiempo. Paso por ello a propugnar los siguientes puntos que yo creo que son interesantes desde el punto de vista de la reflexión de cuáles tendrían que ser los criterios que tendrían que presidir esa reforma de la Seguridad Social con vistas, precisamente, a evitar que sea un tipo de financiación —el que tenemos en el momento actual— que penaliza precisamente la creación de puestos de trabajo.

A corto plazo se deben subir las bases máximas, quizá entre un 30 y un 40 por ciento, siguiendo la reducción en el tipo de cotización. Debería buscarse un procedimiento para eliminar el tope máximo para el pluriempleo, con lo cual forzaríamos la reducción del mismo, al mismo tiempo que la cotización se acercaría al salario real. Esto en cuanto a corto plazo.

A medio plazo —quizá en tres o cuatro años— es obvio que habría que atemperar todavía más hasta eliminar las bases máximas, cotizando quizá sobre la base de retención sobre la renta. Este indicador es mucho más viable a todos los niveles que todos los que hasta ahora se utilizan y también a medio plazo, acelerar las transferencias del Estado como medio de financiación de la Seguridad Social.

A largo plazo, hay tres alternativas en términos globales: El modelo fiscal consistente en que la financiación de la Seguridad Social se hace a través de las figuras impositivas existentes en el país; el modelo contributivo, consistente en financiar a la Seguridad Social a través de las aportaciones de los afiliados a la misma. La técnica más utilizada es la de la cotización social —impuesto sobre la nómina—, y el modelo mixto, consistente en que la parte del sistema será financiado vía cotizaciones sociales y parte vía fiscal.

A nuestro modo de ver —ya muy sintéticamente—, una solución podría ser la siguiente:

a) Prestaciones sustitutivas del salario. Su financiación debería ser, fundamentalmente, vía contribuciones sociales. Las aportaciones del Estado a través de los Presupuestos Generales deben estar en función de los déficit de determinados regímenes a fin de que éstos no sean cubiertos como hasta ahora por el régimen general, y

b) Que las prestaciones sanitarias y asistenciales en su financiación deben provenir a través de los impuestos generales, o sea, por la vía fiscal.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Señor Bono, le ruego que abrevie su discurso.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Concluyo, señor Presidente. A nuestro juicio, estas líneas serían las que de alguna forma potenciarían, al menos, la posibilidad de que nuestro sistema de financiación de la Seguridad Social, hoy fuertemente penalizador en la creación de empleo, de alguna forma fuera disminuyendo y con ello potenciar precisamente la creación de nuevos puestos de trabajo.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Enmienda número 876, del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, señorías, voy a expresar nuestras discrepancias, discrepancias sustanciales creemos, que justifican la enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del Presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno sobre las bases conceptuales del Presupuesto que nos ha sido presentado en el Parlamento.

El Presupuesto de la Seguridad Social tiene, por sus propias características, una importancia decisiva; decisiva por su carga de interés general, por los grandes volúmenes de medios financieros que ordena, de un alcance con un rango similar a los Presupuestos Generales del Estado, por la cantidad de población a la que afecta, de cerca de un 90 por ciento de la población española; por la función social que viene a realizar protegiendo a la población de los riesgos básicos; por sus efectos de redistribución de rentas, y por la profunda incidencia que tiene sobre la vida económica del país. La agregación de toda esta serie de circunstancias es particularmente importante en el momento presente, no sé si llamarle histórico, vamos a llamarle momento presente simplemente, en el que nos encontramos, en una situación de constitución de un nuevo modelo de Estado, modelo de Estado llamado de las autonomías.

Un segundo aspecto que habría que unir a este momento presente es la necesidad de elegir un modelo social para resolver el problema del cuidado de la salud de la población; modelo social que creemos que todavía está por discutirse, por saberse al menos; modelo social para resolver el problema derivado de la salud que pueda indentificarse con posiciones, actitudes o acciones del Gobierno hasta la fecha.

Un tercer aliciente que se nos ofrece en este momento es la previsible integración en una Comunidad Económica Europea que nos obliga a poner la mirada en modelos en vigor fuera de nuestras fronteras.

Ante las grandes deficiencias fundamentales con que nos hemos encontrado en el contenido de este proyecto, como decía a SS. SS., es por lo que hemos presentado la enmienda a la totalidad que voy a tratar de exponer seguidamente.

La estructura del presupuesto se opone, creemos, al concepto del llamado Estado de las Autonomías preconizado por la Constitución, ya que siguiendo la configuración de los años anteriores, el presupuesto no introduce ninguna referencia al hecho de la existencia de Comunidades Autónomas y de las regiones, de modo que resulta prácticamente imposible la territorialización de sus partidas. Es un presupuesto centralizado. No permite desarrollar ningún análisis que sirva para detectar la incidencia territorial de gastos de personal, de gastos corrientes, asistencia sanitaria con medios ajenos; gastos de farmacia, etcétera,

por citar los aspectos más interesantes, aspectos a nuestro juicio.

Esto creemos que es grave cuando existen diferencias regionales importantes. Por ejemplo, con respecto al consumo farmacéutico, no hay forma de disponer de los datos necesarios para establecer las oportunas políticas correctoras.

Creemos que no se trata sólo de un fallo de forma; el presupuesto sufre un vicio fundamental de fondo, porque en su elaboración no han intervenido ni ha habido ningún tipo de participación de las Comunidades Autónomas existentes hasta el momento presente, a las que ni siquiera se les ha consultado, por supuesto; pero lo curioso es que casi no ha existido consulta alguna a las Direcciones Provinciales de los Institutos, que han tenido, nos consta, una intervención ínfima en la confección de este proyecto de presupuesto.

Todo ello demuestra, incluso, una ausencia de intención, a nuestro modo de ver, de cumplir mínimamente los objetivos presupuestarios. Por una razón, porque la elaboración de programas por organismos que no los van a llevar a la práctica, implica el contrasentido de no permitir intervenir en la planificación de los programas a los que corresponderá la ejecución de los mismos.

Sigue la historia —se puede decir— de la Seguridad Social española, en la que las Administraciones provinciales han dependido totalmente de decisiones centralizadas, imposibilitándoles en cada caso la aplicación de las medidas adecuadas, a nivel local, para resolver los problemas específicos en cada zona.

Las funciones están encuadradas en cuerpos, con una organización jerárquica, rígidamente centralizada, con un mínimo de posibilidades de conexiones horizontales con otros cuerpos colaboradores, lo que las hace ineficaces.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

A pesar de que el hecho autonómico es una realidad, en los presupuestos de la Seguridad Social no se tiene en consideración tal aspecto y esto hará —creemos— en el futuro, por ejemplo, más difícil la valoración de las transferencias que se realicen en futuras transferencias derivadas de Estatutos de Autonomía que se vayan aprobando o ya aprobados.

Se echa de menos el desglose de datos provinciales que permita conocer la situación y planear el futuro de las Comunidades Autónomas que van a tener competencias por los estatutos ya aprobados, como digo, o por Estatutos que sean

aprobados en el futuro, si contemplan dichas facultades.

Ya en el presupuesto de 1980 se hablaba de que en aquella ocasión no había más remedio —era una de las explicaciones que se daban en la Memoria del presupuesto de la Seguridad Social— que prescindir de la distribución geográfica del gasto por las dificultades de obtención de datos, aunque se trataría de incluir esto en información anexa. Sin embargo, la información geográfica que se dio en el presupuesto de 1981 y la que se da en estos Presupuesto de 1982 sigue siendo —creemos— extremadamente pobre, ya que el único dato territorializado es el de las inversiones reales, por cierto que en nuestra opinión muestran un trato —no me gusta utilizar la palabra— discriminatorio, pero un trato en virtud del cual la Comunidad Autónoma del País Vasco precisamente no se ve favorecida, sino todo lo contrario.

No sólo por la información sobre las inversiones se puede considerar, desde el punto de la Comunidad Autónoma Vasca, el contenido de estos Presupuestos como desmoralizador, sino que, además, se contradice con las previsiones del funcionamiento de la Seguridad Social en todo el Estado. De las previsiones iniciales señaladas en este proyecto, si no se modificasen a tiempo, corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca una participación —como decía antes— mínima; así, por ejemplo, en el Insalud, de 43.624 millones de pesetas correspondería un 4,3 por ciento; en el INSS correspondería un 0,9 por ciento, ni se llegaría al uno por ciento; y en el ISM no llegaría al 3 por ciento. En las inversiones del Insalud la partida más voluminosa en la Comunidad Autónoma Vasca creemos que no responde a criterio alguno de asignación lógica de recursos territoriales. Desde luego, no es el índice de población, que supondría, por ejemplo, un 6 por ciento, y evidentemente es totalmente contrario a la participación en las cotizaciones a la Seguridad Social, que alcanza el 8 por ciento, y que viene a causar, precisamente, el excedente que año tras año ha producido la Seguridad Social en el País Vasco y que ya, desgraciadamente, ni siquiera podrá repetirse en el futuro por la desastrosa situación económica en que se encuentran las empresas del ámbito territorial.

Este dato desfavorable en las inversiones de la Comunidad Autónoma Vasca no es nuevo, sino que se repite en uno y otro ejercicio. En 1981, por ejemplo, la participación de las inversiones de In-

salud, después de todas las modificaciones, supuso sólo el 4,17 por ciento. Con todo ello, cada año, lejos de corregirse el déficit, se va aumentando y haciéndose el mal crónico.

Se da la situación paradójica de que al realizarse la descentralización prevista por el Estado de las Autonomías, los distintos Institutos tenderán a ser gestionados desde la periferia, una parte importante de las inversiones de esos organismos desgraciadamente seguirá yendo a los servicios centrales, comprometiendo así el futuro de su funcionamiento. Y así va a ocurrir que así como los puntos de decisión van a descentralizarse, se sigue invirtiendo en el centro.

El ejemplo es el INSS, de cuyas inversiones en 1982, el 23 por ciento se destina a los servicios centrales.

El presupuesto de la Seguridad Social, además de discordar con el Estado de las Autonomías, creemos, puede suponer un freno al proceso económico, y aquí está precisamente el aspecto fundamental de crítica, al menos desde nuestro punto de vista, al presupuesto de la Seguridad Social para el año 1982.

Las consecuencias producidas por el modelo actual de financiación de la Seguridad Social ponen de manifiesto un tema que se recoge como el mayor problema socioeconómico del Estado, un tema que es, incluso, abordado en la Constitución: el problema del paro; la tasa del paro, que ha ido creciendo desgraciadamente año a año y que en el caso de la Comunidad Autónoma vasca ha pasado de casi un 11 por ciento en 1979 a un casi 16 por ciento en el año 1981, solamente superado en este récord desgraciado por Andalucía, Canarias y Extremadura. La situación económica expresada por este índice presenta un futuro sumamente pesimista, y es muy grave que la Seguridad Social venga a agravar el problema, al gravar tan severamente el Régimen General.

Según los datos extraídos de la Memoria que se acompaña al proyecto de Presupuestos para 1982, el saldo por regímenes presenta la siguiente información: El Régimen General presenta un superávit de más de 200.000 millones de pesetas; en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 33.000; régimen agrario, déficit de 434.000; Autónomos, 16.000; etcétera. Es decir, que el Régimen General, que comprende industrias y servicios, está soportando un superávit de más de 200.000 millones de pesetas, lo que supone, de hecho, una sangría al sector, absolutamen-

te improcedente, creemos, en las actuales circunstancias de recesión económica.

Habría que repensar el tema en términos de medidas correctoras de la coyuntura. No se justifica la existencia de un superávit tan grande, un esfuerzo tan costoso para el sector, en una época de depresión económica como la que el sector industrial está pasando. Es incógruo, creemos, esta política, ya que el alto coste de la Seguridad Social está frenando precisamente uno de los grandes objetivos que se pretenden desde la política presupuestaria del Gobierno, y es la creación de empleo, precisamente por el sector industrial fundamentalmente.

¿Por qué la financiación de la Seguridad Social produce toda esta serie de efectos negativos en el empleo? Por varias circunstancias. Algunas se han apuntado por el anterior interviniente, precisamente, y voy a tratar de pasar por ellas lo más rápidamente posible.

Por ejemplo, se penaliza a aquellas empresas que moderan sus incrementos salariales, ya que la variación nominal del tope máximo es siempre menor que el crecimiento medio de los salarios. Así ocurre que aquellas empresas en las que los salarios están dentro de los toques y sus incrementos salariales se sitúan por debajo del crecimiento medio, se verán afectadas plenamente, mientras que, por el contrario, aquellas otras que estimulan crecimientos superiores a la media, colocarán parte de sus retribuciones por encima del tope máximo.

Penaliza también a las empresas que estimulan repartos proporcionales, ya que en las categorías bajas la superación del tope máximo es menor, mientras sucede lo contrario en las categorías superiores.

Penaliza a las empresas que dan menos pagas al año, ya que el actual sistema de cotización de éstas es mucho menor que el del resto de las retribuciones; es decir, cuanto mayor es el número de pagas, menor es la carga de la empresa. Y es consecuencia de que actualmente sólo recomienda, y no se obliga, a su prorrateo.

Penaliza a las empresas con plantillas de trabajadores no pluriempleados, dado que el conjunto de las retribuciones por pluriempleo no puede superar el tope máximo total.

El actual sistema es claramente distorsionador y generador de desempleo. Por tanto, creemos que se debe cambiar, debe cambiar tendiendo a dos objetivos: a una redistribución mejor de la

carga, de forma que las presiones nominal y efectiva puedan coincidir, y a que las cotizaciones deban reducir su presión sobre los salarios, aumentando precisamente las transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado.

En esto voy a ir un poco más allá de donde ha ido el señor interviniente anterior, que ha hecho referencia a incumplimientos de ciertos compromisos del Gobierno, pero que no ha hecho referencia concreta a los mismos. Por ejemplo, en el Libro Blanco que citaba don Emérito Bono, elaborado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social el año 1977, se decía que habría que elevar el tope máximo de las bases de cotización, adecuando los tipos a las nuevas bases —esto como medida a corto plazo—; se decía que a medio plazo había que acudir a una unificación del tipo de cotización sobre el salario real, pasando de un sistema regresivo a otro proporcional.

En los Pactos de la Moncloa, a los que también ha hecho referencia el anterior interviniente, pero no precisando el apartado concreto, en su apartado 6 se decía que las cotizaciones se establecerán en función de los niveles de renta de los cotizantes y se referirán a los salarios reales.

En el PEG, el Programa Económico del Gobierno, dos años, más tarde, se decía que la Seguridad Social debería tener como normas básicas de actuación la neutralidad, la aportación creciente del Estado y el equilibrio presupuestario. La neutralidad se indica en que las cotizaciones no deberían aumentar su ponderación en la estructura de costes de las empresas. La aportación del Estado en el presupuesto de gastos alcanzaría el 17 por ciento en el año 1983, y el 20 por ciento en el año 1984, lo que implicaría, lógicamente, casi la transferencia total de los recursos impositivos que se generarían por los sucesivos incrementos de la presión fiscal.

Lamentablemente, un examen de los compromisos asumidos, y a los que me he referido de forma breve anteriormente, demuestra que no se han cumplido prácticamente en su totalidad los compromisos, tanto del Libro Blanco como de los Pactos de la Moncloa, a los que me he referido, como en el PEG.

En los Pactos de la Moncloa, por ejemplo, cuatro años después no se cotiza sobre los salarios reales; esto es evidente.

Con respecto al Libro Blanco, aun cuando se ha elevado el tope máximo y modificado los tipos

a la baja, no se ha hecho con la profundidad precisa para llegar a cotizar por salarios reales

Con respecto al PEG, tampoco se ha cumplido, porque no se ha ampliado la diferencia entre las bases mínimas y máximas, la ponderación de las cotizaciones, dentro de la estructura de costes, no se ha mantenido, al crecer más las cotizaciones que los salarios, y la evolución de las transferencias del Estado parece demasiado lenta, a pesar de que este año se ha hecho un notable esfuerzo, justo es reconocerlo, pero creemos que no se van a cumplir tampoco los objetivos previstos en los Pactos de la Moncloa.

Todo esto nos lleva a una realidad, y es que las estructuras de coste de las empresas se recargan, y esto produce que dejan de pagar a la Seguridad Social, con el grave porvenir que esto representa —y esto mismo lo dijimos el año pasado, cuando presentamos una enmienda a la totalidad—, y la llamada que hacemos hoy es todavía más grave, porque creemos que esto es una cuesta abajo, en la que, desgraciadamente, no vemos salida, y nos tememos muy mucho que la situación a que se pueda llegar va a ser sumamente caótica, precisamente para las empresas que se van a ver afectadas fundamentalmente por el régimen general.

Otro punto al que quisiera hacer referencia brevemente, y termino, señor Presidente, es que el presupuesto de la Seguridad Social creemos que se contradice con la política social, pero, además, ni siquiera cumple con los enunciados de la política sanitaria.

El artículo 41 del texto constitucional dice lo siguiente: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».

El artículo 43 puntualiza: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud».

Parece claro, señorías, que la Constitución expresa una voluntad de ampliar el campo de cobertura de la Seguridad Social en cuanto a las personas protegidas y a las contingencias cubiertas. El proyecto de presupuestos que se nos ha presentado creemos que no muestra indicios de seguir el camino que se ha señalado. Hay casos que podrían ser claros; en cuanto a ampliación a personas, por ejemplo, se podría incluir a los parados antes del primer trabajo, y, por ejemplo, en

cuanto a contingencia, se podría incluir la asistencia psiquiátrica. Sin embargo, no hay muestras de intentar cubrir estos propósitos, y es cierto que la financiación ha aumentado notablemente, pero creemos que es un objetivo muy corto, está muy lejos del deseo tantas veces formulado, incluso desde esta tribuna, de financiar la sanidad y los servicios sociales a través de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que lleguen a toda la población, cumpliendo el mandato de la Constitución y dejando directamente a cargo del mundo laboral lo que constituye propiamente el campo de la Seguridad Social, es decir, las prestaciones económicas sustitutivas del salario.

Por toda esta serie de circunstancias, y lamentando lo pesado que haya podido resultar, dado lo intempestivo de la hora, solicitamos a SS. SS. el voto favorable para nuestra enmienda a la totalidad.

El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará mañana, a las once de la mañana. Ruego puntualidad a SS. SS.

Se suspende la sesión.

Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961